

# Título: “Usos de la fuerza y ciudadanía: una etnografía de las prácticas policiales en la ciudad de Rosario”

---

LIC. NICOLÁS BARRERA.  
DIRECTORA: DRA. CRISTINA BLOJ.  
CODIRECTORA: DRA. JOSEFINA MARTÍNEZ.

## Índice

AGRADECIMIENTOS.....	3
PREFACIO .....	5
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN .....	8
I.1: “El campo” .....	8
I.2: “Enfoque metodológico” .....	19
CAPÍTULO II: UNA MIRADA CONCEPTUAL SOBRE LA POLICÍA.....	31
II.1: Las prácticas policiales en las ciencias sociales .....	31
II.2: ¿De qué hablamos cuando hablamos de policía? .....	37
CAPÍTULO III: LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE .....	63
III. 1: Historia y cambios.....	63
III. 2: Dependencias y rutinas: un modelo de organización policial .....	84
CAPITULO IV: LA INTERVENCIÓN POLICIAL .....	128
IV. 1: El territorio .....	128
IV. 2: Los casos de violencia policial: 2002 – 2010.....	141
IV. 3: La delimitación normales/anormales.....	149
IV. 4: El uso de la fuerza y las reparticiones policiales. Calle, autonomía y militarización .....	170
CAPÍTULO V. USOS POLICIALES DE LA FUERZA: VERSIONES Y COROLARIOS.....	189
CAPÍTULO VI. LOS FAMILIARES Y LA LUCHA POR EL RECONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA .....	218
CONCLUSIONES.....	247
BIBLIOGRAFÍA.....	256
FUENTES.....	270
ANEXO I: ACRÓNIMOS.....	271
ANEXO II: REGISTROS DE CAMPO. ....	272
ANEXO III: POESÍA POLICIAL .....	278

ANEXO IV: LISTA DE CASOS DE VIOLENCIA POLICIAL LETAL RELEVADOS .....	282
--	-----

## Agradecimientos

El producto final de esta tesis es de mi plena responsabilidad pero no quiero dejar de mencionar y agradecer a todas aquellas personas que, directa o indirectamente, colaboraron y posibilitaron su desarrollo. En especial a las Dras. Cristina Bloj y Josefina Martínez, directora y codirectora respectivamente de esta investigación, por su orientación y apoyo recibido a lo largo de todos estos años de pesquisa.

Especial reconocimiento también para mis compañeros del Área de Antropología Jurídica de la Facultad de Humanidades y Artes, Laura Bianciotto, Daniela Polola, Lorena Narciso y Mauricio Manchado, con quienes compartimos años de interés en estudiar y debatir apasionadamente problemas que suelen quedar fuera de los planes de estudio de las carreras de Antropología, particularmente a Laura con quien transitamos juntos gran parte del trabajo de campo y cuya mirada reflexiva sobre mis propios temas de investigación, de algún modo u otro, está presente a lo largo de toda la tesis. En este mismo sentido, hago extensiva mi gratificación hacia todos los integrantes del Grupo de Estudios sobre Policías y Fuerzas de Seguridad (IDES), cuyas lecturas precisas y rigurosas de mi trabajo me significaron un invaluable aporte.

También quiero dar las gracias al Dr. Horacio Ghirardi, por entonces Secretario de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, sin cuya predisposición nuestro trabajo de campo en la Policía de la Provincia de Santa Fe hubiera resultado imposible y a todos aquellos policías que cedieron su tiempo para ser parte de esta investigación y que nos recibieron muy amablemente en cada uno de sus lugares de trabajo, haciéndonos sentir muy a gusto en todo momento.

Quiero agradecer también muy especialmente a Gladis Gauna, sin cuya referencia constante este trabajo hubiera perdido seguramente lo que de pasión y compromiso tiene.

Asimismo, no puedo dejar de mencionar tampoco en esta instancia a profesores que representaron una referencia imprescindible en mi formación personal

y académica como antropólogo. Va mi afectuoso reconocimiento a mis queridísimos Edgardo Garbulsky, Luis Díaz Molano y Gloria Rodríguez.

Un agradecimiento muy especial también para mi familia, no sólo por su cariño y apoyo constante sino también porque han sabido edificar valores que espero se encuentren presentes a todo lo largo la tesis, y particularmente para mi hermana Florencia, cuya referencia, de muy diferentes maneras, ha despertado mi interés en estos temas.

Aunque sin ser dignos de ello, va mi agradecimiento para mis amigos Mauricio Alonso, Patricio Coronel y Cristian Rossi, sin cuya irracionalidad despiadada y desmedida, las cosas no son posibles.

Por último, mi agradecimiento eterno a Romina, mi compañera de toda la vida. Para ella, por su inspiración cotidiana, va dedicada esta tesis con mucho amor.

A todos y cada uno, muchas gracias.

## Prefacio: “barro tal vez”.

La Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario –en la cual se dicta la carrera de Antropología y de cuyo plantel docente formo parte- está ubicada en pleno centro de la ciudad, a una cuadra de una de las peatonales y a media de la “city” bancaria. Desde allí, llegar a la comisaría más cercana requiere caminar unas seis cuadras mientras que para llegar a otras dos no hace falta caminar más de veinte. En cambio, acceder a la sede del Comando Radio Eléctrico (CRE) implica un viaje de unos 7 kilómetros pero se trata de una distancia que puede ser relativizada a partir de la presencia constante de su personal en la zona céntrica de la ciudad.

Ahora bien, no obstante la cercanía geográfica, transitar estos pocos metros que separan el lugar de trabajo de un investigador formado en Antropología de las distintas sedes policiales, implica un recorrido un poco más arduo. En efecto, el acceso y la permanencia en las mismas, tanto para la mirada propia como para la ajena, puede resultar un elemento abiertamente disonante. La presencia de un antropólogo en una comisaría –algo en gran parte inaudito tanto para los policías como para la misma tradición antropológica- era capaz, por sí misma, de generar una serie de tensiones que surgían tanto del rol –al producirse un encuentro entre instituciones cuyos fines aparecen claramente diferentes, una orientada al “mantenimiento del orden y represión del delito” mientras que la otra pretende “construir conocimiento”- como de cuestiones supuestamente menores como la vestimenta, el uso del cuerpo y el lenguaje, etc.

No obstante ello, la presente investigación refleja un arduo proceso de trabajo de campo que –en forma sistemática- realizamos al interior de distintas dependencias de la Policía Provincial de Santa Fe en la ciudad de Rosario, buscando superar -o, en todo caso, limar- la brecha que inicialmente separaba las instituciones de origen. Un problema típicamente antropológico al fin y al cabo.

De todos modos, mencionar aquí esta brecha resulta pertinente en tanto le otorga sentido a la primera y principal de las opciones metodológicas que cimentó y estructuró esta tesis, elección que surgía en el diseño mismo del plan de trabajo

cuando nos preguntábamos cómo debíamos estudiar esta institución tan cercana y tan distante de la nuestra al mismo tiempo. En ese momento preliminar no dudamos en optar por estudiar a la policía etnográficamente. Dicha opción –además de parecernos creativa y novedosa en tanto no era muy común entre las investigaciones sobre esta institución- aparecía sumamente atractiva ya que la etnografía se nos mostraba como una forma de sensibilidad (Scheper-Hugues, 1997) que permitía incorporar toda nuestra carga de vivencias y valoraciones previas a la investigación, y lo podía hacer sin descartar su problematización (exposición, podríamos decir) que en este caso era posibilitada por el cruce de significaciones que implicaba la misma situación de trabajo etnográfico.

De hecho, muy probablemente sea la conjunción de estas elecciones la que explique el lugar desde dónde elegimos comenzar un recorrido que buscaba, en última instancia, acercarnos a comprender algunas facetas de las prácticas policiales. Un recorrido que, si bien cuestionaba abiertamente muchas de nuestras apreciaciones previas, resultaba imposible de ser escindido de la historia propia, de las trayectorias y experiencias personales. Por esta razón, como un ejercicio de honestidad intelectual y procurando mantener coherencia interna, este camino deliberadamente decidimos iniciarlo por la dimensión más cruda y al mismo tiempo fundante de las prácticas policiales: la utilización de la fuerza y su relación con el problema de la ciudadanía en poblaciones sujetas a un vínculo cotidiano con la policía.

Con estas primeras elecciones ya poníamos en evidencia los pilares del enfoque asumido, pilares que volvían impensable cualquier pretensión de neutralidad que, de hecho, ya no es sostenida en casi ningún campo del conocimiento y mucho menos en la Antropología. En efecto, para esta investigación nos basamos en los datos construidos en el campo, pretendimos elaborar resultados, explicaciones académicamente aceptadas ciertamente, pero de ningún modo ello implicaba permanecer inertes ante prácticas que nos podían llegar a parecer, cuanto menos, cuestionables. La parcialidad del análisis antropológico se nos iba revelando, así, constante y recurrentemente ante vivencias del campo que experimentábamos sin perder nuestra mirada crítica. De aquí que podríamos preguntarnos entonces ¿qué tipo de antropología -se puede decir- que hicimos? Muy probablemente no tenga

sentido definirla en esta instancia. Por el momento, solo cabe adelantar que se trata de una antropología que, muy lejos de los gabinetes del siglo XIX y robándole la expresión a los mismos policías, se hace *con los pies en el barro...*



## Capítulo I: Introducción

### I.1: El campo<sup>1</sup>.

Cuando nos detenemos a pensar en la policía, inmediatamente advertimos “en qué consiste su especificidad”. Este grupo de empleados estatales, además de trabajar para el Estado como tantos otros, portan armas, como casi ningún otro. El Estado, aquel que se arroga y pretende el monopolio de la violencia llamada legítima, delega esta función en un conjunto de funcionarios a los cuales provee de la facultad de portar armas consideradas -a partir de ese momento iniciático- legales y de hacer uso de las mismas siguiendo, en mayor o menor medida, determinados protocolos de actuación y ante determinadas circunstancias que están jurídicamente preestablecidas.

Esta perspectiva forma parte ya de nuestro sentido común. De hecho hoy día, a pesar de que la policía aparece fuertemente cuestionada por determinados sectores -sobre todo y particularmente en la provincia de Santa Fe- son pocos los que dudan acerca de la necesidad de contar con un cuerpo policial. Su misma existencia fue históricamente legitimada y, en el mismo movimiento, naturalizada socialmente. No obstante ello, el ejercicio del poder de policía abre un espectro de prácticas y de relaciones sociales en las que su aplicación nunca resulta tan lineal y simple como lo detallaban los protocolos, reglamentos o manuales de procedimiento, ofreciendo para el investigador formado en humanidades una serie de problemas de diversa índole que, entendemos, pueden resultar pertinentes para una tesis doctoral.

Así fue que a partir de la obtención, en el año 2007, de una beca doctoral provista por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) comenzamos una investigación que, en principio, pretendía estudiar las prácticas policiales a partir de dos dimensiones principales: la violencia y su vinculación con las construcciones de alteridad identificadas en el campo.

La policía en cuestión era la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad de Rosario, Argentina. En Argentina coexisten fuerzas de seguridad nacionales y

---

<sup>1</sup> Ver “Registros de Campo” en Anexo II.

provinciales. Las fuerzas de seguridad nacionales son cuatro: la Policía Federal, cuyo objeto es la prevención y represión de delitos considerados federales de acuerdo al Código Penal así como el cumplimiento de funciones como auxiliar de la justicia federal; la Gendarmería Nacional, con funciones de policía en las fronteras nacionales y rutas federales<sup>2</sup>; la Prefectura Naval Argentina con funciones de policía de navegación y fronteriza y la Policía de Seguridad Aeroportuaria con funciones de control de aeronaves y aeropuertos. En forma complementaria, dado el carácter federal de la Constitución Nacional, cada ejecutivo provincial tiene la facultad de organizar su propia fuerza y ejercer de ese modo la implementación del poder de policía en lo que refiere a delitos considerados ordinarios ocurridos dentro de los límites de su jurisdicción.

En la provincia de Santa Fe esta función se desenvuelve en el marco del recientemente creado Ministerio de Seguridad y de su Secretaría de Seguridad Pública, en el seno de los cuales se inscribe orgánicamente la policía. Para el año 2000 la Policía de la Provincia de Santa Fe contaba con 11.952 integrantes para una población total de 2.949.050 habitantes (Palmieri y otros, 2001) y hacia fines de 2009 esa cifra ascendía a casi 18.000 (Cuenca y Sokol, 2011), sobre una población aproximada de 3.200.000 habitantes.

En Santa Fe, el conjunto de los policías son agrupados y organizados en distintas Unidades Regionales que dependen directamente del Subjefe de Policía de la provincia y en última instancia del Jefe de Policía. Por su parte, cada Unidad Regional reproduce esta estructura y cuentan con un Jefe y Subjefe, de los cuales dependen tres reparticiones: Orden Público, que para el caso del departamento Rosario cuenta con 8 Inspecciones de Zona; Unidades Especiales, que concentra los cuerpos especializados: Homicidios, Explosivos, Investigaciones, Leyes Especiales; y por último

---

<sup>2</sup> La llegada, en los últimos meses, de la Gendarmería Nacional a la ciudad de Rosario para cumplir funciones policiales, redefine este marco. No obstante, se trata de un hecho posterior al período en que realizamos trabajo de campo y no debemos dejar de considerar que su permanencia es transitoria.

Cuerpos, que contempla todo el personal denominado “de calle”<sup>3</sup>: Comando Radioeléctrico, Patrulla Urbana y Guardia de Infantería.

De acuerdo a los datos más recientes que hemos podido relevar (Programa Delito y Sociedad, 2008), la Unidad Regional II correspondiente al Departamento Rosario cuenta con 5064 funcionarios policiales, los cuales aparecen organizacionalmente separados en “destinos” diferentes<sup>4</sup>. Las reparticiones con mayor presencia numérica son Orden Público y Comando Radioeléctrico. Orden Público engloba, a través de las diferentes Inspecciones de Zona, el funcionamiento de todas las comisarías, subcomisarías y destacamentos<sup>5</sup> de la Unidad mientras que el Comando es la repartición que tiene por función principal la prevención, realizando tareas de patrullaje en las distintas seccionales. Los mismos aparecen como las principales instancias cohesivas que agrupan al personal a partir de un doble encuadramiento: por un lado, siguiendo una jerarquía funcional que va desde comisarios hasta suboficiales y, por el otro, a partir de la tarea que efectivamente cumplen en destino (cabo cuarto, guardia, responsable de dotación, etc.), aspectos sobre los que volveremos más adelante.

---

<sup>3</sup> Se entiende que el personal policial realiza tareas “de calle” cuando se encuentra afectado a cumplir funciones de prevención en la vía pública. Generalmente abarca al personal del Comando a través del patrullaje en dotaciones, aunque también contempla a miembros de la Guardia de Infantería interviniendo en espectáculos públicos y a aquellos policías con “destino” en comisaría que, generalmente recién llegados, son enviados a controlar centros comerciales caminando en parejas, actividad por la cual obtienen su denominación de “caminantes”.

<sup>4</sup> A lo largo de la tesis, usamos la categoría nativa de “destino” para hacer referencia a la repartición en la cual se desempeña un funcionario policial.

<sup>5</sup> Pequeñas dependencias administrativas subordinadas a la comisaría que corresponda en su jurisdicción.

GRÁFICO n° 1



(Fuente: Bianciotto, 2012)

De acuerdo al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe (Plan de Acción 2010, 2011), las funciones básicas de la policía provincial son: prevención de delitos, represión de delitos (investigación criminal) y mantenimiento del orden público, que se agregan en el caso santafesino a las funciones que cumple la policía en tanto auxiliar de la justicia provincial. Las mismas se corresponden con las definiciones clásicas de la función policial:

“la especificidad de la intervención protectora del Estado por vía de la policía está dada por el hecho de que esa intervención se orienta fundamentalmente al mantenimiento de la seguridad pública y a la prevención y/o represión de delitos, siempre dentro del marco del respeto del conjunto de derechos que debe proteger” (Sain, 2002a: 22).

En el contexto de estas tareas, la función del orden normativo consiste en fundamentar y brindar un marco de legalidad a las intervenciones estatales

vehiculizadas a través de la agencia policial. Así es que la Ley Orgánica de Policía nº 7395 dispone que la Policía de la Provincia de Santa Fe sea la institución que tenga a su cargo el mantenimiento del orden público y la paz social, que actúe como auxiliar permanente de la Administración de Justicia y que ejerza por sí las funciones que las leyes, decretos y reglamentos establezcan para resguardar la vida, los bienes y otros derechos de la población.

Entre las funciones de policía de seguridad la LOP establece una diversidad de tareas cuyo rasgo común consiste en la defensa de un determinado “orden” ante situaciones o sujetos que puedan llegar a perturbarlo:

Art. 8. La función de policía de seguridad consiste esencialmente en el mantenimiento del orden público, la preservación del delito.

Art. 9. A los fines del artículo anterior, corresponde a la policía provincial:

a) Prevenir y reprimir toda perturbación del orden público, garantizando especialmente la tranquilidad de la población y la seguridad de las personas y la propiedad contra todo ataque o amenaza;

c) Asegurar la plena vigencia de los poderes de la Nación y la Provincia, el orden constitucional y el libre ejercicio de las instituciones políticas, previniendo y reprimiendo todo atentado o movimiento subversivo;

e) Desarrollar toda actividad de observación y vigilancia destinada a prevenir el delito;

f) Intervenir en la realización de las reuniones públicas para mantener el orden y prevenir y reprimir el delito, incidentes, disturbios y manifestaciones prohibidas;

h) Regular y controlar el tránsito público y aplicar las disposiciones que lo rigen. Adoptar disposiciones transitorias cuando circunstancias de orden y seguridad pública lo impongan;

j) Ejercer la policía de seguridad de los menores, especialmente en cuanto se refiere a su protección, impedir su vagancia, apartándolos de los lugares y compañías nocivas y reprimir todo acto atentatorio a su salud física o moral, en la forma que las leyes o edictos determinan;

k) Velar por las buenas costumbres en cuanto puedan ser afectadas por actos de escándalo público. Actuar en la medida de su competencia para impedir actividades que impliquen incitación o ejercicio de la prostitución en los lugares públicos;

ll) Recoger los supuestos dementes que se encuentren en los lugares públicos y entregarlos a sus parientes, curadores o guardadores;

Desde menores en riesgo y dementes, pasando por el orden constitucional, movimientos subversivos y reuniones públicas, todas pasan a constituir actividades que, desde lo que establece la normativa estatal, pueden ser reguladas por la policía. La amplitud de estas atribuciones regulatorias y sus alcances prácticamente universales fundan un tipo de vínculo entre policía y ciudadanía sumamente complejo y multidimensional que se va erigiendo en forma cotidiana sobre la amplitud de posibilidades de control que le son otorgadas a la policía.

En cuando auxiliar de la justicia, la ley prevé entre las atribuciones de la policía:

- a) Investigar los delitos de competencia de los jueces de la Provincia, practicar las diligencias necesarias para asegurar la prueba y determinar sus autores y partícipes, entregándolos a la Justicia;
- b) Prestar el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de las órdenes y resoluciones de la Administración de Justicia;
- c) Cooperar con la Justicia nacional o provincial, para el mejor cumplimiento de la función jurisdiccional;
- ch) Realizar las pericias que soliciten los jueces nacionales y provinciales, en los casos y formas que determinará la reglamentación;
- d) Proceder a la detención de las personas contra las cuales exista auto de prisión u orden de detención o comparendo dictado por autoridad competente y ponerlos inmediatamente a disposición de la misma;
- e) Perseguir y detener a los prófugos de la justicia o de policías nacionales o provinciales que fugaren dentro de su jurisdicción y ponerlos inmediatamente a disposición de la autoridad respectiva.

La institución policial se nos revela así, en una primera mirada, como un objeto de difícil abordaje para la investigación antropológica, inscripta en un denso entramado institucional y normativo y con prácticas amplias, diversas e incluso ambiguas. Por este motivo, en nuestro plan de trabajo inicial, nos planteábamos objetivos específicos articulados alrededor del problema de la violencia policial que nos permitiesen indagar sistemáticamente sobre aspectos recortados del trabajo policial:

- Relevar los casos de muerte de civiles en los que existe responsabilidad policial - obedezca al uso excesivo de la fuerza, a ejecuciones o al uso extra funcional de la fuerza- ocurridos en la ciudad de Rosario durante el período 2002/2010.
- Observar y analizar la distribución geográfica en la ciudad de los casos relevados.
- Reconstruir el contexto social y político en que se producen las muertes según los informes de la policía, testigos y expedientes judiciales.
- Conocer los principales mecanismos y dispositivos internos que posibilitan el ejercicio de la violencia sobre los civiles.
- Identificar prácticas, comunes o no, que aparecen en cada uno de los hechos de violencia policial.
- Analizar las representaciones de los funcionarios policiales acerca del rol, la misión social y los usos de la violencia por parte de la agencia policial, prestando especial atención a las modalidades de construcción de alteridad y de identidad policial.
- Explorar los vínculos entre violencia policial y negación de la ciudadanía a nivel de las prácticas y representaciones de los funcionarios policiales.

Sin embargo, distintas circunstancias fueron redefiniendo de diferente modo ese plan de tesis. Durante los dos primeros años de trabajo de campo, el desarrollo de los primeros tres objetivos no tuvo mayores dificultades a pesar de que el acceso a la policía como institución todavía nos resultaba un obstáculo infranqueable. Así fue que durante este primer período del trabajo de campo, la imposibilidad de acceder a la policía parecía reafirmar las premisas conceptuales que elaboráramos para nuestro plan de trabajo. En esas circunstancias, la policía se nos mostraba como un cuerpo hermético lo cual, aún sin poder ingresar en él, sostenía nuestras hipótesis y perspectivas iniciales: existiría un vínculo estrecho entre las arraigadas construcciones de alteridad propias del mundo representacional policial y el ejercicio discrecional de la violencia. El hecho mismo de no poder acceder a la policía como institución claramente parecía ratificarlo. Durante este período nuestro trabajo de campo estuvo centrado en un acompañamiento de las prácticas de familiares y amigos de víctimas

de violencia policial, conformándose de este modo un material de campo importantísimo para pensar, no solo las formas que asume el uso de la fuerza en la policía de Rosario, sino también, el problema de la ciudadanía, el que poco a poco se iría convirtiendo en uno de los tópicos centrales de nuestra pesquisa.

Más adelante, una vez salvado el obstáculo del acceso (paso del que daremos cuenta con más detenimiento en el siguiente apartado) dichas dimensiones, si bien no desaparecerían completamente del problema de investigación, pasaron a redefinirse en función de una reorientación que la misma permanencia intensiva en el campo nos obligaba a hacer de nuestro plan de tesis: las prácticas policiales cotidianas trascendían por mucho los hechos de violencia al mismo tiempo que las construcciones de alteridad, si bien claramente existentes, no necesariamente tenían vinculación directa con el uso de la fuerza. De hecho, fuimos dando cuenta poco a poco que, para la policía, prácticamente todo aquel que no lo era, pasaba a ser instantánea e inmediatamente considerado como un “otro”, lo cual no necesariamente quería decir que esos “otros” podrían ser blanco del uso de la fuerza sin mayores complicaciones.

Con el transcurso del trabajo de campo fuimos llenando de contenidos esas “prácticas que trascienden los hechos de violencia” a partir de observar constante y recurrentemente a la policía inmersa en una diversidad de actividades que poco tenían que ver con la utilización de la fuerza: trámites administrativos, resolución de problemas familiares, asistencia a vecinos, además de la colaboración con el Poder Judicial. Ahora bien, más arriba decíamos que la inserción en **el campo redefinió ambiguamente nuestro plan de trabajo**, y esto se debió a que estos nuevos elementos no implicaron que pasásemos a considerar a la policía como una agencia estatal más entre otras, con las cuales compartía la intervención sobre problemáticas y poblaciones determinadas. Y ello fue así porque pudimos observar que en la resolución de esta diversidad de problemáticas que se le presentaban a la policía, en todas actuaba –en forma casi indefectible- utilizando la amenaza del uso de la fuerza como fundamento de su intervención, lo cual nos volvía a remitir a los principios básicos que estructuraban a la policía –y que la distinguían- como institución.



Con este replanteo, nuestra hipótesis de investigación se fue orientando a considerar que si bien las actividades que efectivamente desplegaba la policía cotidianamente trascendían por mucho aquellas que habían sido tradicionalmente identificadas con el uso del arma (prevención y represión del delito principalmente), la apelación a la amenaza de su uso subsistía como un recurso legítimo para los funcionarios policiales, aún ante intervenciones cuyo origen no tuviese una vinculación directa con el plano de lo penal. La utilización del arma como recurso fundante de la actividad policial continuaba con plena vigencia. Todo ello nos llevó a reforzar la pregunta sobre aspectos relacionados a la ciudadanía emergentes de la vinculación diaria entre policías y no policías, tanto en actividades de carácter administrativo como en las típicamente policiales ¿Qué lugar ocupa la ciudadanía en este tipo de vínculos? ¿Por qué con la policía? ¿En qué casos? ¿En qué lugares? Preguntas que interpelaban un contexto donde cotidianamente la relación de un gran número de ciudadanos con el Estado pasaba por la vinculación con un funcionario que estaba armado y que ese mismo hecho, esa misma amenaza en tanto posesión del arma, definía en gran medida el carácter y desarrollo del vínculo establecido.

El resultado de ese trabajo de cinco años de investigación es expuesto aquí organizado de la siguiente manera:

En este primer capítulo nos centramos en exponer, a modo de introducción, las características del campo en el que se desarrolló nuestra investigación en forma conjunta con la perspectiva metodológica asumida, especificando los que consideramos son los aportes más significativos de la etnografía al estudio de la policía.

En el capítulo II nos ocupamos de exponer los antecedentes que, desde las ciencias sociales, han tratado temas más o menos similares en la región, a la vez que explicitamos los núcleos conceptuales propios a partir de los cuales fuimos estructurando la tesis.

En el capítulo III realizamos una descripción de la estructura orgánica de la policía de Santa Fe junto con el análisis de sus rutinas y modelos de trabajo, distinguiendo específicamente entre los dos principales agrupamientos presentes en

el interior de la Policía de la Provincia de Santa Fe: Cuerpos y Orden Público. Analizamos también cómo los mismos representan trayectorias alternativas al interior de la institución que implican sentidos de la actividad policial que pueden resultar divergentes.

Por su parte, en el capítulo IV analizamos las formas de intervención policial de cada una de estas dependencias y su variabilidad en función tanto del territorio como de la población objeto de la misma, lo cual nos llevará a dar cuenta de sus vinculaciones con el problema de la ciudadanía tanto en la actividad policial diaria como en rupturas significativas como las representadas por casos de uso letal de la fuerza.

De esta forma, en el capítulo V retomamos el problema de la ciudadanía estudiando en profundidad el devenir administrativo, policial y judicial de hechos de utilización letal de la fuerza por parte de la policía a partir de tres casos que nos permiten, a través de la comparación, dar cuenta de su variabilidad.

Por último, en el capítulo VI nos concentramos principalmente en las prácticas que desarrollan familiares y amigos de víctimas de violencia policial (principalmente los nucleados en la agrupación “Padres del dolor” de la ciudad de Rosario) que, en gran medida, resignifican de distintos modos el concepto mismo de ciudadanía a través de prácticas diversas orientadas principalmente a restituir a la víctima de su condición de sujeto.

Por último, en el anexo presentamos una síntesis expositiva de nuestros registros de campo que posibilitan al lector de la tesis identificar los eventuales interlocutores que son citados a lo largo de la misma así como situar con mayor precisión el contexto en el que fueron realizadas las observaciones a las que hacemos referencia. Asimismo, incorporamos también los datos que respaldan la elaboración de los cuadros y gráficos presentados a lo largo de la tesis así como material literario citado en forma de fragmentos, que circula entre los mismos policías al interior de las dependencias y por las redes sociales y que, por su extensión, no pudimos incluir en el texto mismo de la tesis.

Con esta organización, que va desde la conformación institucional de la policía, pasa por los tipos diferenciales de intervención en función del contexto y de la población en cuestión, enfatizando principalmente lo relativo a la utilización del arma y culmina analizando las trayectorias diferenciales de los casos de utilización letal de la fuerza por parte de la policía en los ámbitos administrativos policiales y judiciales, buscamos integrar y problematizar los dos núcleos problemáticos que sustentan la presente tesis: el estudio etnográfico de las posibilidades de utilización de la fuerza por parte de la policía y cómo ello se vincula con el problema de la ciudadanía.

## I.2 Enfoque Metodológico

¿Por qué estudiar a la institución policial desde enfoques –principalmente- cualitativos y dentro de los enfoques cualitativos, asumiendo una mirada etnográfica? ¿Es eso posible? ¿Cuáles serían sus posibles aportes? ¿Por qué la etnografía, en todo caso, nos brindaría las herramientas más adecuadas para pensar estos procesos en su complejidad?

En primer término, tenemos que señalar que recurrimos a una perspectiva etnográfica por una característica sustancial y básica que señala Elsie Rockwell. Rockwell (1980) plantea que los etnógrafos usualmente desconfiamos de la normatividad explícita y preferimos contrastar el ordenamiento social a partir de la práctica real. Estamos interesados en el ordenamiento jurídico, en lo que disponen los reglamentos, en los objetivos institucionales, por supuesto, pero creemos que hay una dimensión del orden de las relaciones sociales que algo tiene que decir a la hora de pensar en un determinado problema. Este planteo de base expresa las preguntas a partir de las cuales se desenvuelve cualquier etnografía ¿Acaso todo el despliegue de la institución policial puede explicarse a partir de la aplicación de las sucesivas y diferentes normas: reglamentos de la policía, código penal, protocolos, etc.? De ninguna manera, sus vicisitudes, sus ambigüedades y el simple hecho de que quienes forman parte de estas instituciones son hombres y mujeres, nos indica, como bien sugiere Rockwell, que debemos dirigir nuestra mirada a otras dimensiones más allá de las reglamentarias.

Que hayamos partido orientando la mirada hacia otros planos distintos de los normativos o reglamentarios no implicó que nos encontrásemos con discursos sueltos o prácticas anárquicas, sin sentido. Muy por el contrario, con lo que constantemente nos enfrentamos es con una institución policial inscripta en –por más que hayan sido de muy diferentes tipos- un marco de relaciones sociales<sup>6</sup>: no sólo jurídicas sino también políticas, económicas, laborales, algunas de ellas previstas por la normativa y los reglamentos y otras no. Ello nos planteó así un nuevo interrogante: ¿cómo estudiar

---

<sup>6</sup> Cabría aquí retomar la pregunta que se formulara oportunamente Eric Wolf: si por todos lados encontramos conexiones ¿por qué nos empeñamos en convertir fenómenos dinámicos e interconectados en cosas estáticas y desconectadas? (1993).

este marco de relaciones sociales que aparece como nuestra plataforma a la hora de pensar las prácticas policiales?

La opción asumida en esta tesis al momento de observar la estructuración de las prácticas policiales consistió en tomar las herramientas proporcionadas por el “enfoque relacional”. El “enfoque relacional” pasó entonces a significar para nosotros el horizonte y el marco que nos permitió pensar el desarrollo de una perspectiva etnográfica. Eduardo Menéndez distingue como características de este enfoque los siguientes principios:

- cualquier proceso se desarrolla siempre dentro de relaciones sociales de distinto tipo e implica la presencia de dos o más actores sociales en su desarrollo y ejecución. No existen procesos de un solo actor (Menéndez, 2002, 2010; Bourdieu y Wacquant, 1995). En la mayoría de los procesos hay siempre más de un actor significativo (Menéndez, 2010).
- todo sujeto se constituye dentro de relaciones sociales, las cuales asumen diferentes formas y se caracterizan por el cambio y no por la permanencia (Menéndez, 2010).
- los sujetos con los que trabajamos además de constituirse dentro de relaciones sociales, tienen presupuestos culturales e ideológicos respecto de los temas sobre los que nos brindan información (Menéndez, 2010).
- las relaciones sociales operan siempre en situaciones de desigualdad socio-económica y cultural (Menéndez, 2010).

Entendimos que, así, se reactualizaba la especificidad de la etnografía, ya que el “enfoque relacional” sustentaba la posibilidad de observar más allá de la norma pero lo hacía de la mano de una preocupación sistemática y rigurosa por el marco de prácticas y relaciones sociales.

En una línea de análisis cercana es que Diego Iturralde (2008) plantea su idea de antropología jurídica como una estrategia analítica que combina los aportes de las ciencias jurídicas y antropológicas para el tratamiento de fenómenos definidos en la intersección entre la ley y la práctica social. Iturralde considera que:

“...las prácticas sociales, las normas jurídicas y los procedimientos que las vinculan, conforman una red en la cual destacan una serie de intersecciones formadas por la concurrencia de dos tipos de procesos: cambios en el comportamiento de los sujetos sociales, por una parte; y reforma de la normatividad, por la otra” (s/p: 2008).

Siguiendo su planteo, vemos que la antropología jurídica como enfoque –rama de la antropología en la cual progresivamente íbamos enmarcando nuestras reflexiones- se inscribe justamente en esa articulación entre normas y prácticas, a partir de la cual el antropólogo dedicado al estudio de problemáticas relacionadas con el campo de lo jurídico se mueve constantemente entre estas dos interpretaciones de la misma realidad, el imaginario jurídico y el imaginario etnográfico.

En concordancia con los aportes que la perspectiva de la antropología jurídica nos podía brindar, partimos de considerar en primer lugar las relaciones complejas y contradictorias entre el plano de la normatividad y el de las prácticas policiales. En este sentido fue que nos planteamos técnicas de investigación donde, en el marco del trabajo de campo, se articulasen la realización de entrevistas a funcionarios policiales y observación de sus prácticas y lugares de trabajo, el análisis en profundidad de casos paradigmáticos y el trabajo con distintas fuentes secundarias (periódicos, sumarios internos y expedientes judiciales, protocolos y reglamentos) alrededor del trabajo etnográfico.

Las mismas nos permitieron dimensionar las relaciones que estructuran el campo de actividad policial y, en particular, las eventuales tensiones entre el discurso, la normativa y el ejercicio de las prácticas concretas de la agencia policial, en tanto “esfuerzo por relacionar distintas dimensiones de una problemática analizando los procesos que se generan en sus interdependencias” (Achilli, 2005: 3). En este sentido, la construcción de las prácticas policiales como objeto de estudio sintetizaba, para nuestra mirada, una intersección entre normas, prácticas y representaciones, lo cual suponía que uno de los aportes fundamentales, entonces, del enfoque antropológico, iba a estar dado por -además de una “descripción densa” (Geertz, 1992) de los casos a estudiar- permitir la contrastación constante a lo largo del trabajo de campo entre *lo que se dice* (normas, postulados teóricos, institucionales, representaciones) y *lo que se hace* (prácticas), problema clásico de nuestra disciplina planteado ya en estos mismos

términos desde Malinowski (1975), quien justamente pretendía superar esta dicotomía investigando el comportamiento de la población que estudiaba en base a un observación minuciosa y detallada<sup>7</sup>.

En nuestro plan de tesis, la metodología cualitativa propia de la etnografía se complementó con el uso de técnicas cuantitativas orientadas al análisis de determinadas formas de intervención policial, puntualmente de los casos de utilización de la fuerza que culminaron con la muerte de la víctima, lo cual nos permitió dimensionar los alcances de prácticas policiales específicas. Así, buscamos que la investigación se desarrolle sobre la base de una complementariedad de métodos cualitativos y cuantitativos, que buscaba reconocer el carácter complejo, histórico y contradictorio de los procesos sociales (Achilli, 2005) en los cuales se inscribe el problema a investigar.

Con esta perspectiva general fue que entrevistamos a ocho comisarios, tres subcomisarios, cinco oficiales y dieciocho agentes, y que permanecemos durante casi dos años realizando observaciones en siete comisarías de la ciudad de Rosario y en la sede del Comando Radioeléctrico. Se desprende de lo expuesto que los funcionarios policiales en esta investigación representan nuestros “informantes clave” de la etnografía clásica, o bien “interlocutores” en los términos que propone Bartolomé (2004) para desarticular la relación de poder que está en la base de la entrevista etnográfica, por más que en nuestro caso, posesión de arma de fuego mediante, esa relación de poder por momentos parecía invertirse.

A pesar de su importancia, a lo largo de toda la tesis fueron suprimidos los nombres propios, las identificaciones institucionales precisas y las referencias a sitios puntuales con el fin de preservar el anonimato. Exceptuamos solamente los casos donde se trata de figuras públicas o funcionarios policiales de puestos jerárquicos cuya identificación resulta inevitable.

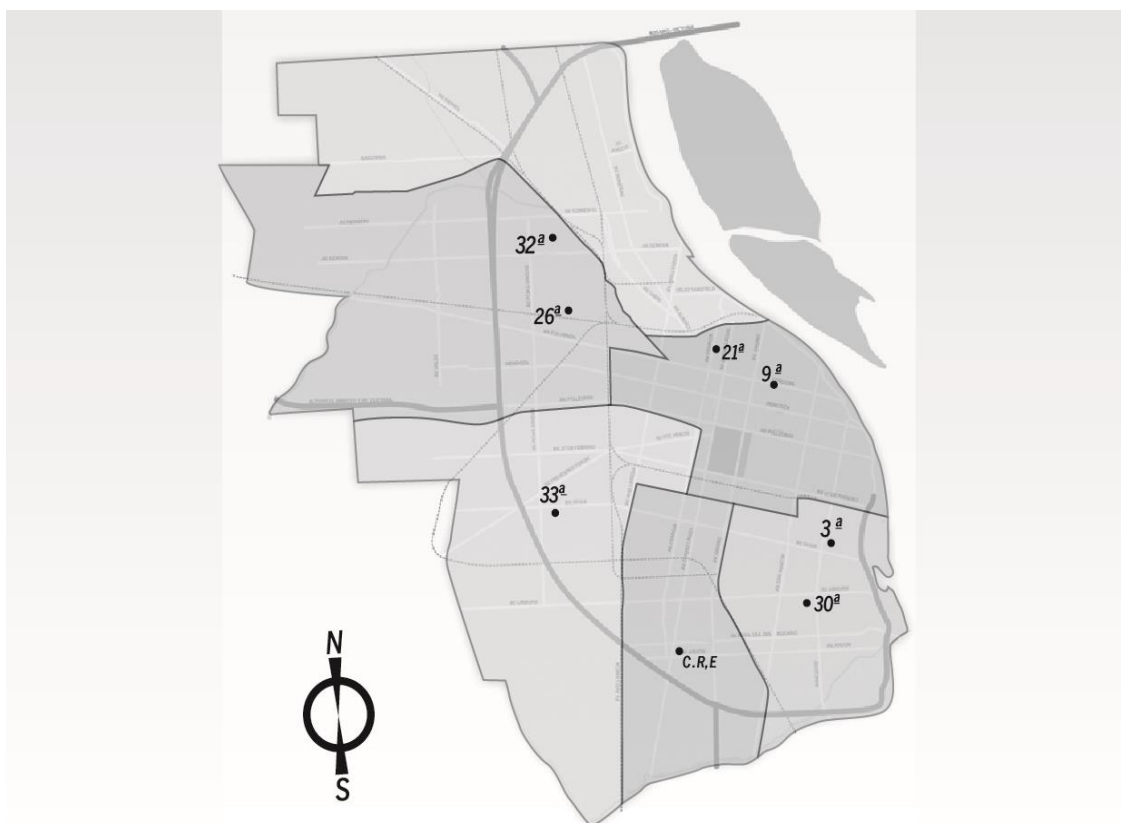
---

<sup>7</sup> Firth (1983) retomaba también esta distinción, recomendando al etnógrafo – como una de las posibles formas de superarla- que se involucre en los asuntos ordinarios de la vida cotidiana del pueblo que estudia.

La muestra seleccionada tanto en lo relativo a “informantes clave” como a dependencias policiales, se elaboró considerando su representatividad de los diferentes distritos que conforman la ciudad y de la variabilidad de la actividad policial en cada uno de ellos, logrando registros de campo que representan una muestra altamente significativa para el contexto de la ciudad de Rosario.

La distribución de las dependencias policiales (cuya numeración también alteramos) en donde realizamos trabajo de campo -más precisamente de las comisarías, ya que el C. R. E. tiene una sola sede que funciona como centro operativo para toda la ciudad- queda expresada en el siguiente gráfico:

**GRÁFICO n° 2**



(Fuente: Bianciotto, 2012)

En un principio, la posibilidad de realizar trabajo de campo en el marco de una institución como la policía aparecía muy lejana. De hecho, el desarrollo de la



investigación social en estas áreas ha resultado generalmente problemático debido principalmente a las limitaciones de inserción que suelen presentarse, lo que termina generando que las prácticas policiales se vayan constituyendo como un objeto de estudio sumamente complejo, que en ciertos momentos fue definido por distintos investigadores como “opaco”<sup>8</sup>.

Así, los primeros intentos de acercamiento al campo resultaron infructuosos. En este sentido fue que diversos contactos con funcionarios policiales no prosperaron en tanto posibilidad de inicio de un trabajo sistemático dentro de la institución. Sin embargo, ante ese contexto, optamos (junto con la Dra. Laura Bianciotto<sup>9</sup>, con quien realicé en forma conjunta las entrevistas a policías que aquí se citan) por vincularnos directamente con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Allí, la predisposición de los funcionarios y su aliento a este tipo de estudios se materializó en una directiva que, previa consulta con los jefes policiales, nos permitía acceder a las distintas dependencias y entrevistar al personal que los distintos jefes nos permitiesen.

La forma que fue asumiendo esta inserción varió. Desde jefes que chequeaban celosamente la autorización recibida (a través de llamados o rastreando comunicaciones escritas como *memorandums*) hasta otros que inmediatamente mostraban predisposición con respecto a nuestro acceso. El único elemento que se repetía era la necesidad de establecer contacto previo con el jefe de la dependencia policial que se tratase. Una vez logrado eso -hecho que se dio en todas las dependencias escogidas- la realización del trabajo de campo no presentó mayores obstáculos por fuera de desencuentros puntuales o imprevistos que la misma actividad policial puede presentar.

---

<sup>8</sup> Sofía Tiscornia (2004) analiza esta situación a partir de concebir la existencia de un centro opaco a la mirada externa que organiza y legitima el poder de policía. En el mismo sentido, Sozzo, González y Montero (2010) indican cómo el escaso desarrollo de este tipo de investigaciones tiene que ver con los **altos niveles de opacidad** de las instituciones policiales argentinas, lo que se traduce en una serie de obstáculos prácticos para la realización del trabajo de campo. La misma opacidad ha sido señalada también por Marcelo Sain (2008) con relación a las investigaciones que provienen del mundo académico en general.

<sup>9</sup> Con quien compartimos, además, nuestro trabajo en el Área de Antropología Jurídica de la Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes, UNR y en el Grupo de Estudios sobre Policías y Fuerzas de Seguridad, IDES.

El hecho de contar con la anuencia de los jefes policiales y los funcionarios políticos generó, de ese modo, un escenario donde los mismos responsables de las distintas dependencias policiales garantizaban -en algunas oportunidades incluso *forzaban*- la situación de entrevista. Así, por ejemplo, en repetidas situaciones, el Jefe del CRE disponía de miembros de su fuerza para una entrevista, del mismo modo que se dispone de una unidad ante un hecho delictivo.

La consulta al *memorandum* de la policía o la constatación telefónica con un superior representó, en todos los casos, la llave que nos abría la posibilidad de realizar el trabajo de campo sin ninguna necesidad de realizar engorrosas explicaciones. No obstante, aún teniendo el permiso de acceso, en muchas oportunidades el mismo debía quedar asentado dentro de la trama burocrática de la institución, reforzando la escrituralidad contenida en el *memorandum*. En esos casos, volcar sobre el *libro de guardia* nuestra presencia en ámbitos policiales era, sin duda, lo que más dificultad generaba. La clasificación de tareas propia del mundo policial no encuentra fácilmente palabras para dar cuenta de una actividad tan extraña como *antropólogos haciendo trabajo de campo*, lo que sumado al hecho de que nuestra procedencia era la Facultad de Humanidades y Artes, reforzaba esas dificultades y creaba ciertas incomodidades generadas por la pertenencia a ámbitos muy diferentes entre sí (problemática que si bien no es ajena a las etnografías que se realizan en otro tipo de ámbitos, en estos encuentros puntualmente se reactualizaba sobre la base de una tensión evidente).

Mucho se ha reflexionado acerca de las vicisitudes de realizar trabajo de campo antropológico en distintos tipos de instituciones. La experiencia de trabajo en la policía, en un primer momento, nos hablaba de una institución prácticamente impermeable y de acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior es evidente que muchas de esas trabas todavía, bajo distintas formas, subsisten. Sin embargo, el haber conseguido la autorización en el Ministerio de Seguridad y contar con el visto bueno de los jefes policiales, hicieron que generalmente el trato sea sumamente cordial y que las puertas (y la voz) de las comisarías y el CRE se abriesen.

A pesar de representar una problemática común a la realización de cualquier etnografía, el tipo de ingreso no deja de estar delineado en gran medida por la lógica

del campo en cuestión. En este sentido, resulta característico de una institución sumamente jerárquica que la obtención de la autorización pertinente por parte de la cúpula destrabe cualquier impedimento que se pudiese presentar en el desarrollo del trabajo de campo, simplemente por tratarse de una orden; mientras que en instituciones un poco más horizontales es muy probable que hubiésemos tenido que ir sorteando distintos escollos a medida que fuésemos accediendo a distintos aspectos del campo. En este caso no era así porque no había lugar para dudas: el campo estaba definido en un documento y nuestros nombres figuraban en un *memorandum* que debía cumplirse y punto.

En cualquier caso, la dinámica del trabajo de campo apareció delimitada desde diferentes ángulos: desde los procedimientos administrativos y burocráticos, desde los grados de confianza que los policías depositaban en nosotros en tanto investigadores y desde la mirada crítica que, también en tanto investigadores, teníamos de la institución. El encuentro de todas estas dimensiones, al mismo tiempo que requirió de una determinada *gimnasia* al momento de la estancia y permanencia en el campo, terminó definiendo y orientando en gran parte las formas que finalmente asume el texto etnográfico, constituyéndose, de ese modo, en el marco obligado que contextualiza la presente tesis.

Los registros etnográficos elaborados con policías se complementan -siguiendo en esto nuevamente los lineamientos del “enfoque relacional” (Menéndez, 2002, 2010; Bourdieu y Wacquant 1995)- con las reiteradas entrevistas realizadas a dos familiares de víctimas de violencia policial nucleados en la agrupación “Padres del Dolor”<sup>10</sup>.

Las entrevistas fueron realizadas en el lugar de trabajo para el caso de los policías y en domicilios particulares cuando los entrevistados eran integrantes de PD, lugares en los que además fueron registradas diversas situaciones de campo que quedaron asentadas en observaciones inscritas en nuestro *diario de campo*.

---

<sup>10</sup> En este caso, el acceso se dio gracias a la gentileza y predisposición de Gladis Gauna, quien era por entonces su presidenta y ofició como contacto y nexo con otras madres organizadas en dicha agrupación.

Su realización contaba con ejes elaborados previamente y con objetivos puntuales relacionados con cada una en particular, lo cual nos alejaba de la imagen tradicional que concibe a la entrevista antropológica como “no estructurada”. A pesar de ello, entendimos, siguiendo en esto a Hammersley y Atkinson, que en última instancia la diferencia fundamental entre las entrevistas hechas por etnógrafos y las entrevistas de cuestionarios radicaba en que “... unas son entrevistas reflexivas y otras son estandarizadas” (1994: 128) y no en su mayor o menor grado de estructuración previa.

Por su parte, las observaciones fueron realizadas exclusivamente en comisarías y en la sede del CRE. Se trata de observaciones participantes que nos permitieron, fundamentalmente, dar cuenta del espacio en que se desenvuelve la actividad policial cotidiana. Durante las mismas no hubo restricciones<sup>11</sup> que, de acuerdo a las características de la institución en cuestión, podrían haberse esperado en relación con la accesibilidad a los distintos espacios que componen una dependencia. De hecho, nuestro recorrido por las distintas instalaciones no encontró ningún tipo de obstáculos.

El hecho de observar diariamente las jornadas policiales de trabajo fue haciendo que las mismas pierdan la linealidad que esperaríamos desde nuestros primeros conceptos. Pierden esa linealidad porque la observación participante – además de “ampliar la mirada” trascendiendo conceptualizaciones previas- genera la suficiente flexibilidad como para que nuevos problemas y nuevas perspectivas puedan ser incorporadas en el horizonte de la investigación, llegando incluso hasta poder redireccionar el rumbo de la misma. Con este sentido Paul Willis afirmaba que la observación participante “...ha orientado a sus seguidores hacia una posibilidad metodológica profundamente importante –aquella de sorprenderse– de alcanzar conocimiento que no había sido pensado en el paradigma inicial” (1985: 8).

Así fue que este espacio que aparecía claramente como ajeno para un *civil* (usamos esta expresión porque así fuimos recurrentemente “etiquetados” en las

---

<sup>11</sup>Sin embargo sí las hubo con respecto a la posibilidad de realizar observaciones en unidades móviles cumpliendo funciones de patrullaje. Dichas restricciones obedecieron a que, en palabras del por entonces jefe del CRE, para ello era necesario gestionar “un permiso especial”.

comisarías) progresivamente a lo largo del trabajo de campo se fue volviendo un poco más familiar. Inclusive, un elemento para destacar es que, por momentos, en determinadas comisarías quedábamos solos en la guardia, una cuestión que resulta sumamente llamativa sobre todo porque en el escritorio además del libro de guardia, que ya de por sí se trata de un documento sumamente importante en términos institucionales, se encuentran guardadas las llaves de la comisaría (incluidas las del penal), que quedaban de ese modo perfectamente dentro de nuestro alcance. En dichas circunstancias –que reflejaban la confianza depositada en nosotros además de la apertura que encontrábamos en determinadas dependencias policiales- el público que concurría a la comisaría nos miraba con cierto desconcierto, muy probablemente porque no respondíamos a la imagen que socialmente se espera encontrar detrás del mostrador de la guardia.

De este modo, la presencia en el campo, llevada al extremo de aparecer como la “cara visible” de la comisaría en determinadas oportunidades, nos resultó valiosa, tal como plantea Rosana Guber, no porque haya garantizado

“...un acceso neutro y una réplica exacta de lo real, sino porque evita algunas mediaciones – de terceros- y ofrece, a un observador crítico bien advertido de su marco explicativo y su reflexividad, lo real en su complejidad” (Guber, 1991: 178).

No se trata de arrogarnos la cualidad de ser observadores críticos bien advertidos de nuestro marco conceptual, sino de destacar en todo caso la posibilidad que brindan los métodos etnográficos como el “estar ahí”, la observación directa, la “documentación de lo no documentado” (Rockwell, 1980: 7), los registros minuciosos, en relación con una rigurosa aproximación a los detalles, a la complejidad, a la cotidianeidad y, sobre todo, a la observación directa de la trama de la lógica burocrática (Martínez, 2002) que sostiene determinadas prácticas policiales. El “estar ahí” posibilitaba de ese modo aproximarnos al contexto cotidiano de trabajo en la policía y, al mismo tiempo, a rutinas, significados, costumbres, etc., que brindaban un soporte a la actividad policial diaria.

Así fue que a lo largo del trabajo de campo, fundamentalmente en comisarías, la policía aparecía abierta, descubierta. Esta apertura no implicaba necesariamente datos de especial relevancia u objetividad (Díaz Polanco, 1999) pero garantizaba, al

menos, el desarrollo de interacciones de muy diferente tipo con policías de distintos grados y jerarquías.

La interacción que presupone la inserción del investigador en el campo tiene la característica, insinuada en los párrafos precedentes, de realizarse a partir de una relación epistemológica sujeto- sujeto, relación que abre el escenario para el desarrollo de grados de reflexividad en la investigación y, en ese sentido, para un “control epistemológico” sobre todo el proceso. En este recorrido se privilegió -siguiendo a Elena Achilli (2005)- antes que una explicitación obsesiva de filtros técnicos y de hipótesis que serían verificadas, el trabajo de construcción de conocimientos y las tareas de interpretación analítica que iban y volvían desde los registros de observación a las propias conceptualizaciones. De esta forma, tanto el sujeto investigador como el sujeto perteneciente a un campo problemático se mediatizaban en el proceso investigativo, siendo los datos que emergían de estas situaciones de campo no “información” extraída de los informantes sino el producto de la interacción humana que se entablaba entre el investigador y los “nativos” (Scheper-Hughes, 1997). Fue esta misma interacción la que, en muchos momentos, volvía necesaria la apelación al carácter artesanal de la investigación (Wright Mills, 1994), en tanto estrategia de investigación que no se funda en reglas preestablecidas, sino que prioriza la creatividad del investigador en su particular forma de inserción en el campo.

Ahora bien, no obstante sus potencialidades, la reflexión etnográfica también ha sido objeto de fundadas advertencias en torno a una posible sobrevaloración tanto del modo de hacer trabajo de campo asentado exclusivamente en la experiencia como de los datos que se desprenden de una autoridad dada por el “haber estado ahí” (Scott, 1992; Díaz Polanco, 1999). Este tipo de advertencias nos previene acerca de la necesidad de definir técnicas precisas de validación de la información. En esta investigación, las mismas se asientan sobre la triangulación de los datos elaborados a partir del trabajo de campo con datos provenientes de otras fuentes. Las fuentes con las que trabajamos son:

- Noticias periodísticas publicadas en “La Capital”, diario de mayor circulación de la ciudad de Rosario.
- Relevamientos e informes realizados por el CELS (2010, 2009, 2005, 2004, 2003, 2002).
- Sumarios internos de la policía y expedientes judiciales.

Con estas estrategias pretendimos dar cuenta de nuestro objetivo general que consistía en analizar las prácticas policiales en la ciudad de Rosario considerando las nociones de ciudadanía puestas en juego en este marco de relaciones, particularmente las derivadas del modo en que en el espacio policial se construyen representaciones y significados relativos al uso de la fuerza y su rol como elemento fundante de la función policial.

## Capítulo II: Una mirada conceptual sobre la policía.

### II. 1: Las prácticas policiales en las ciencias sociales.

Las ciencias sociales en los últimos años se han ocupado con sistematicidad de las prácticas policiales. Significativamente, esta preocupación que aparecía como una característica del mundo anglosajón y francés (L'Heuillet, 2011; Neocleus, 2011; Monjardet, 2010; Garland, 2005), lentamente fue ganando terreno en la producción académica de nuestros países incentivadas, en gran medida, por la actividad y militancia de organismos de derechos humanos.

Un ejemplo de ello está representado por los informes del Centro de Estudios Legales y Sociales<sup>12</sup> (2010, 2009, 2005, 2004, 2003, 2002), los cuales asumen como objeto un análisis centrado en la defensa de los derechos humanos y en los efectos que tienen determinadas prácticas sobre las condiciones de ciudadanía a partir, fundamentalmente, del relevamiento y análisis de casos de violencia policial a través de fuentes periodísticas. Decimos que estos informes han incentivado la investigación científica en la materia ya que si bien su carácter de denuncia trasciende intereses estrictamente académicos, entendemos que estas publicaciones generan un espacio de discusión que ha interpelado no solo a los gobiernos de turno, sino también la producción de las universidades.

Trascendiendo esta marca de origen -y a diferencia de los estudios motorizados por organismos que, más allá de su rigurosidad, asumen generalmente como objeto (y como límite) la elaboración de una crítica sobre los estándares en materia de derechos humanos en el país- las investigaciones que provienen del campo académico han abordado las prácticas policiales integralmente como un problema de investigación.

Las investigaciones sobre la problemática con mayor continuidad en el tiempo provienen del equipo de Antropología Política y Jurídica de la Universidad de Buenos

---

<sup>12</sup> El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una organización no gubernamental que trabaja desde fines de la década del 70 en la promoción y protección de los derechos humanos en Argentina. Desde 1997 publica anualmente informes relativos a la situación de los derechos humanos en el país.



Aires (Martínez y Eilbaum, 1999; Tiscornia 1999, 2000, 2004, 2009; Eilbaum, 2000; Tiscornia y Pita 2005), el que, partiendo de un programa de trabajo que tenía como objetivo desplegar las distintas formas de ejercicio de la violencia que ejercen las policías en la ciudad de Buenos Aires y su conurbano, fue desarrollando trabajos sobre la policía en lo referido a rutinas, formación profesional, socialización y construcción de saberes específicos; destacándose específicamente, por su vinculación con la presente tesis, los trabajos que reflexionan sobre la relación violencia policial/territorialidad (Daich, Pita y Sirimarco: 2007) y sobre la construcción del sujeto policial (Sirimarco: 2009).

En la provincia de Santa Fe, en cambio, las investigaciones sobre el tema fueron desarrolladas fundamentalmente desde el campo de la Criminología (Cozzi, 2012; Sozzo et. al. 2010; Sozzo, 2005; Font, 1999). En su gran mayoría, son expresiones derivadas del Programa de Investigación y Desarrollo llevado a cabo por la sección de Criminología del Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario: “Violencia Policial. Análisis desde una perspectiva realista. Investigación cualitativa sobre los casos de civiles muertos por violencia policial registrados en la ciudad de Rosario en el período 12-95 a 12-99” en el caso de Rosario y del Programa Delito y Sociedad: “Violencia Policial en la Provincia de Santa Fe – 1998/2006 Informe General” para el caso de la ciudad de Santa Fe.

Más allá de estas líneas de investigación pioneras tanto en los ámbitos nacional como provincial, en los últimos años nos encontramos con una diversificación de las perspectivas de trabajo sobre la cuestión, la que aparece ya claramente representada como objeto de estudio de las ciencias sociales en general y de la antropología en particular.

Un ejemplo de ello es el trabajo de Sabina Frederic (2008) “Los usos de la fuerza pública. Debates sobre militares y policías en las ciencias sociales de la democracia” que se plantea como objetivo dar cuenta de las principales tendencias que estructuraron la configuración de las fuerzas militares y policiales durante las últimas décadas, repasando en particular los méritos y deméritos de los enfoques que

en los últimos 25 años construyeron las ciencias sociales sobre las fuerzas armadas y de seguridad en clave de las posibilidades de democratización de la vida social y política.

Otra línea de investigación destacada fue la iniciada por el trabajo que llevaron adelante Alejandro Isla y Daniel Míguez (Isla y Míguez 2003; Isla, 2002) sobre violencia, sociabilidad y cultura política en conglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires, que si bien no tiene como principal objeto de sus análisis a las prácticas policiales, en los mismos encontramos una importante contribución para pensar la dinámica de las relaciones delito/ policía y el contexto en el que las mismas se insertan. En el mismo sentido cabría inscribir el trabajo de Gabriel Kessler (2009), quien, compartiendo en gran medida el foco, se ocupa de explicar el sentimiento de inseguridad en relación con el delito en la Argentina actual.

En suma, en nuestro país, nos encontramos ante un contexto donde son numerosos y diversos los trabajos cuyo rasgo común es posible de rastrear en el estudio de las prácticas policiales desde la antropología sociocultural, los cuales van enfatizando diferentes dimensiones que componen el “mundo policial”: la corporalidad (Daich, Pita y Sirimarco 2007), la formación (Ugolini, 2012, 2011; Sirimarco, 2009), las definiciones morales (Garriga Zucal, 2010), la violencia policial (Pita, 2010), el oficio y la identidad policial (Frederic, 2009a; Galvani, 2007), las prácticas y rutinas policiales (Bianciotto, 2011a, 2011b); solo por mencionar algunos.

Lo mismo ocurre por fuera de la antropología. Allí nos encontramos, por ejemplo, con el proyecto de investigación desarrollado por Gregorio Kaminsky (2005) en el marco de la Universidad Nacional de Lanús, cuyo enfoque está orientado a los tipos de (in)acción de las agencias estatales y los cuestionamientos a los modos de su ejercicio judicial- policial, los estados de exposición delictiva y de gravedad criminal, junto a las acciones, intenciones e ineptitudes para conjurarlos. En consonancia con nuestros objetivos, la cultura institucional policial y las políticas de seguridad son analizadas allí desde el problema de la ciudadanía, retomando distintas miradas sociológicas, jurídicas e inclusive filosóficas.

Asimismo, sobre la policía de la provincia de Buenos Aires se desarrollaron numerosas investigaciones provenientes de la Ciencia Política, como las realizadas por Marcelo Sain -un autor que retomaremos en reiteradas oportunidades a lo largo de la presente tesis- quien se centra en el análisis de las distintas experiencias de reforma policial (2002a) y en el estudio de los vínculos del sistema político y el delito con las prácticas policiales (2004) en territorio bonaerense. En este marco, destacó también – aspecto central para pensar en nuestro problema de investigación- los procesos de estigmatización de sectores sociales vulnerables en base a la selectividad criminalizante del sistema penal expresada en las prácticas policiales (2008).

Por otra parte, el equipo que coordina Alcira Daroqui (2009) ha producido trabajos sobre la institución policial, la institución judicial y la prensa escrita, a partir de reconocer la tensión existente entre el campo de los Derechos Humanos y sistema penal, lo cual los condujo a la interrogación acerca de cuánto, cómo y hasta dónde los diferentes sectores e instituciones sociales están dispuestos a tolerar la violencia estatal, su disposición y su capacidad de dar muerte. En ese marco se plantearon orientar la mirada hacia las prácticas y los discursos policiales haciéndolo, en particular, con relación al ejercicio de la fuerza letal contra personas vinculadas a la comisión de un determinado delito y el abordaje que de tales hechos hacen los medios de comunicación.

Asimismo encontramos acercamientos que, si bien comparten el enfoque de las ciencias sociales, asumen un corte de tipo más periodístico. Entre los mismos podemos mencionar: “No callarás. Historias de gatillo fácil” (Calderaro, 2008), “La policía que supimos conseguir” (Vallespir, 2002) y “La policía: pasado, presente y propuestas para el futuro” (Andersen, 2002).

De toda esta diversidad de enfoques y trabajos, nos resultaron de sumo interés, aquellos que tuvieron la posibilidad de acceder –en términos investigativos- al interior de la institución, ya sea a través de observaciones o bien de entrevistas con sus integrantes. Entendemos que esta nueva y novedosa mirada sobre la policía, que se abre principalmente desde mediados de la primera década de este siglo, representa unos de los quiebres más significativos ocurridos en este campo desde su origen y

desarrollo sobre principios de los años noventa, en tanto –si bien no representa la negación de toda la tradición de estudios que se hicieron desde “fuera” recurriendo a fuentes y vínculos externos sino que en todo caso la continúa y contrasta- se abre la posibilidad de elaborar datos y análisis en una relación directa y cotidiana con el objeto de estudio.

Este quiebre se ha visto reflejado en investigaciones sobre distintas policías de nuestro país, las cuales se pudieron desarrollar bajo un vínculo regular más o menos institucionalizado con la policía o con algunas policías en su caso: la policía de la provincia de Santa Fe (Sozzo et. al 2010; Bianciotto 2012, 2011a, 2001b), la policía de la provincia de Buenos Aires (Garriga Zucal, 2012, 2010; Ugolini 2012) y la Policía Federal (Galvani, 2007) entre otras. Otra expresión de ello es la reciente publicación del Grupo de Estudios sobre Policías y Fuerzas de Seguridad “De armas llevar. Estudios socioantropológicos sobre los quehaceres de policías de las fuerzas de seguridad” (2013) que incluye estudios etnográficos sobre las policías Federal, Bonaerense y Santafesina.

Si bien se trata de investigaciones con distintos intereses y perspectivas, el rasgo distintivo de todos estos trabajos consiste en la incorporación y problematización de la óptica policial en el marco de pesquisas enfocadas sobre diversos problemas que hacen a las prácticas policiales. Incorporar esta nueva dimensión posibilitó, entre otras cosas, conocer en profundidad cuáles son los fundamentos y sentidos que los mismos policías le asignan a sus propias prácticas. Ello ha terminado significando, para este grupo de investigaciones, la posibilidad de romper con ciertos estereotipos acerca de la institución, observando sobre todo la ambivalencia y ambigüedad de sus prácticas y representaciones, además de poder conocer en profundidad las dinámicas particulares de actividad policial de una forma situada y en toda su complejidad.

La constante aparición de la policía ya sea directa o indirectamente en las investigaciones en ciencias sociales y humanas -a partir de sus prácticas (legales e ilegales, de control y regulación, administrativas y/o violentas), sus representaciones, sus valores morales, o bien de su articulación con las diferentes agencias del sistema

penal- da cuenta de su conformación como tópico recurrente en la agenda académica. De hecho, este breve recorrido expresa el caudal de antecedentes e investigaciones realizadas desde la antropología a nivel nacional así como la importante tradición local de estudios sobre violencia policial desde la criminología. Todo ello nos resulta de suma importancia en tanto entendemos que estas investigaciones se constituyen en una plataforma desde la cual es posible realizar aportes a estas líneas de trabajo, especialmente desde nuestra disciplina, refiriéndonos específicamente al contexto local y contribuyendo al desarrollo de la mirada etnográfica sobre la institución.

## II.2: ¿De qué hablamos cuando hablamos de policía?

Muy probablemente la policía trate de la agencia estatal sobre la cual cotidianamente más hablamos, a la cual constantemente observamos -e incluso interactuamos- y de la cual menos conocimiento tenemos al momento de definirla conceptualmente ¿qué es la policía? ¿qué función cumple? ¿cómo se organiza? Para empezar a responder todas estas preguntas –que, en principio pueden parecer hasta obvias- debemos remitirnos a considerar, en primer lugar, sus vínculos primarios con el Estado. Decimos esto porque, además de tratarse de una agencia estatal con la consecuente necesidad de observar la trama institucional que la sustenta, no se tiene conocimiento de la existencia de cuerpos semejantes a la policía en sociedades sin Estado. Este hecho nos conduce a pensar, en una primera mirada extremadamente general, que la policía trata de una particular agencia de ciertas sociedades estatales al mismo tiempo que nos sitúa en un plano en donde es la formación estatal la que funda y sostiene a la policía.

Guillermo O’ Donnell (1990), desde un posicionamiento claramente weberiano, piensa al Estado como el “...componente específicamente político de la dominación en una sociedad territorialmente delimitada” (1990: 200). Por dominación entiende la capacidad, actual y potencial, de imponer regularmente la voluntad sobre otros, incluso pero no necesariamente, contra su resistencia. Dicho ejercicio se hallaría respaldado por “la marcada supremacía en el control de los medios de coerción física en un territorio excluyentemente delimitado” (1990: 200). De acuerdo a este planteo, entonces, la policía como parte analítica del Estado, se constituiría así como una de las principales garantías en el ejercicio de la coerción y, en consecuencia, de la existencia y reproducción misma del Estado.

El control de los medios de coerción y, de hecho, su pretendida monopolización por parte del Estado, ubica a la policía como la dimensión estatal capaz de regular relaciones sociales –conflictivas, contradictorias- que pueden llegar a requerir la utilización –o la amenaza de su utilización al menos, tal como veremos más adelante- de la fuerza, en tanto posibilidad de interferencia física sobre un individuo o grupo de individuos (Ales, et. al. 2011). No obstante, en tanto agencia estatal, y

siguiendo en este punto a Boaventura de Sousa Santos, podemos observar cómo el mismo Estado se constituye como “...una relación social, esto es, condensa una serie de articulaciones (conflictuales unas, no conflictuales otras) de fuerzas sociales” (1999: 186), a partir de lo cual podemos establecer que si bien la posibilidad de utilización de la fuerza funda la existencia misma de la policía y su aplicación o la amenaza de su aplicación le da forma a su accionar cotidiano, la misma no es externa al marco de relaciones en el que el Estado se inscribe.

De esta manera partimos de entender que el Estado no solo va a regular o administrar relaciones sociales contradictorias sino que al mismo tiempo va a formar parte misma de esa relación en las sociedades modernas:

“... la garantía que presta el Estado a ciertas relaciones sociales, incluso las relaciones de producción, que son el corazón de una sociedad capitalista y de su contradictoria articulación en clases sociales, no es una garantía externa ni a posteriori de dicha relación. Es parte intrínseca y constitutiva de la misma” (O’ Donnell, 1990: 204).

Si la garantía que brinda el Estado es constitutiva de las relaciones sociales y el Estado mismo forma parte de esas relaciones, nos vamos a encontrar con que lo que entendemos por Estado (lo cual es válido también para la policía en particular) no trata, siguiendo nuevamente a O’ Donnell, de una cosa, una institución o mismo una estructura; trata, en todo caso, de aspectos contradictorios de una relación social.

De este modo, partimos de un principio primario: el Estado no solamente se funda en relaciones sociales contradictorias e interviene externamente sobre ellas, sino que, principalmente, el Estado en sí mismo se constituye como una relación social (O’ Donnell, 1990; Poulantzas, 1987; de Sousa Santos, 1999), de lo que se desprende que sus instituciones (entre ellas por supuesto la policía) van a estar atravesados por las luchas y las contradicciones de la sociedad (O’ Donnell, 1990), conformándose incluso el campo del derecho y el sistema penal como una relación social y no como simple estado de cosas (Sierra y Chenaut, 2002). De forma tal que el campo en el que se despliega la problemática de las prácticas policiales no nos brinda una imagen estática, predefinida y cerrada, sino que se nos muestra como un campo que se va

erigiendo -a partir de la delimitación que planteamos- sobre la base de tensiones, conflictos y antagonismos.

Considerar la institución policial conformada y atravesada por relaciones sociales que pueden llegar a ser ambiguas y contradictorias implica no solo estudiar los conflictos y tensiones a partir de los cuales se estructura este campo, sino también, consecuentemente, las prácticas de los policías en tanto agentes, considerando cómo van conformando de muy diferentes modos su marco de relaciones en tanto sujetos dentro del mismo. De este manera es que, de acuerdo al enfoque asumido, al momento de pensar en el Estado nos interesó principalmente la estatalidad vista a partir de lo que aquellos que son definidos como funcionarios estatales, decían y hacían.

Este enfoque se nutre de la visión de Michel Foucault, quien postula una lectura del sistema penal que va más allá de la esfera propiamente jurídica -al concebirlo en el marco del despliegue de infinitesimales relaciones de poder, que establecen una serie de prácticas y discursos punitivos que apuntan a ejercer el control social sobre los sujetos- y que implica repensar el Estado no como una realidad trascendente, como una esencia, sino partiendo de lo que los hombres efectivamente hacen y piensan, el estado como “manera de hacer” (Foucault, 2006).

La concepción foucaultiana del Estado resulta coherente con la especificidad del abordaje antropológico en tanto es asumiendo este enfoque que el trabajo etnográfico con funcionarios policiales se va a ir conformando como una herramienta privilegiada que nos permitirá introducirnos en las formas locales y particulares en que se va constituyendo este entramado. Al fundamentar una perspectiva que pone el foco sobre el conjunto de prácticas que constantemente le dan forma, prácticas que pueden incluso ser contradictorias y antagónicas entre sí, tanto la larga estancia en el campo como el seguimiento del devenir puntual de casos particulares -indagando en el modo que se despliegan relaciones cotidianas e informales- posibilitan abordar el problema de las prácticas policiales sin la necesidad de buscar referencias en una noción de Estado abstracta y encapsulada, nociones que son puestas en cuestión abiertamente por la mirada foucaultiana.



Este tipo de abordajes se inscribe, al mismo tiempo, en una tradición de estudios que reconoce su momento fundacional, al menos para nuestra disciplina, en las afirmaciones de Radcliffe-Brown (1949) respecto de las particularidades del análisis antropológico en materia política. En el prefacio a “Sistemas políticos africanos” de Fortes y Evans Pritchard, Radcliffe-Brown ya señalaba que en los escritos sobre instituciones políticas se ha reflexionado mucho sobre la naturaleza y el origen del Estado, presentándolo como si fuera una entidad sobre y por encima de los individuos que conforman una sociedad; como si tuviera una voluntad propia (expresada en la ley) o como si emitiera órdenes por sí misma. Ante ello, Radcliffe-Brown señalaba que fenoménicamente nada de esto existe y atribuía este tipo de conceptualizaciones a ficciones propias de lo que entendía por *los filósofos*. En cambio, lo que los estudios antropológicos vendrían a poner de manifiesto es lo que efectivamente existe, esto es, una organización, un grupo de seres humanos conectados por un complejo sistema de relaciones.

En ese marco, el vínculo establecido entre las prácticas policiales y su referencia en un orden normativo estatal abstracto que las sustenta y organiza a través de leyes y reglamentos, puede no resultar un vínculo lineal. Si bien la policía como institución se nos muestra como un instrumento que actúa cuando las reglas y normas así lo prevén, la iniciativa para la actuación suele estar mediada por el arco de concepciones y valores que le indican al policía cuándo y cómo actuar. De hecho, los policías suelen manifestar, de acuerdo a su propia concepción de la actividad policial, la inexistencia de marco legal que los respalde en su práctica en general y en el uso de la fuerza en particular<sup>13</sup>. En este sentido, un fragmento de la entrevista n° 27,

---

<sup>13</sup> Más allá de que la Ley Orgánica de Policía en su artículo 11 brinda un marco claro en este sentido: dispone que la policía en tanto representante y depositaria de la fuerza pública en su jurisdicción le es privativo: “hacer uso de la fuerza cuando fuese necesario mantener el orden, garantizar la seguridad, impedir la perpetración del delito y en todo acto de legítimo ejercicio”, “asegurar la defensa oportuna de su persona, la de terceros o la de su autoridad, para lo cual el agente esgrimirá sus armas, cuando fuese necesario”, “en las reuniones públicas que deban ser disueltas por perturbar el orden o en las que participen personas con armas u objetos que puedan utilizarse para agredir, la fuerza será empleada después de desobedecidos los avisos reglamentarios”. Inclusive, además de la normativa específica - considerando que desde el retorno de la democracia una de las más frecuentes violaciones a los derechos humanos fueron las ejecuciones sumarias o extralegales cometidas por miembros de la fuerza policial- en nuestro país se incorporaron con rango constitucional los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, que detallan con precisión bajo qué circunstancias un policía puede apelar al uso de su arma y cómo hacerlo de acuerdo a principios internacionales.

realizada a un comisario con antigüedad y mucho recorrido en seccionales barriales, nos resulta sumamente significativo:

*“Vos no sabés el poder de policía cuando lo tenés que empezar y cuando lo tenés que terminar, estas ahí ¿hago, qué hago y qué no hago?” (E. n° 27).*

El poder de policía aparece en este fragmento como algo indefinido. La *ausencia de este marco normativo* (ausencia edificada principalmente a partir del discurso policial) genera que los policías representen su actividad como una actividad rodeada de incertidumbre y desarrollada *a merced de la perspectiva del juez*. Para muchos policías, si algún nivel de determinación existe desde el Estado sobre su actividad, ésta se localiza en el Poder Judicial. La caracterización del Poder Judicial como entidad *impiadosa* con el personal policial nos fue, entre otros, relatada por el oficial entrevistado en la entrevista n° 15:

*“y si **no te tienen piedad** lo que es juzgado con el personal policial para, mi desde mi punto de vista, no tienen piedad para nada, si te tienen que bajar el martillo te lo van a bajar... **yo tengo miedo de venir a trabajar**, no sabés con qué gente te vas a encontrar o no sabés si sale de la puerta qué puede decir o que vaya a decir después, hoy en día un policía por cualquier boludez el juzgado te arruina, te arruina la carrera...” (E. n° 15).*

La posibilidad de que *el juzgado arruine tu carrera* expone una paradoja. Las normas, para la gran mayoría de los policías, resultan vagas en su formulación al mismo tiempo que su aplicación, cuando refiere a su propia actividad como policías, se vuelve implacable. Estas dos características implicarían un nivel problemático mucho mayor cuando se trata de las posibilidades de utilización del arma de fuego. Las siguientes apreciaciones surgieron reiteradamente durante las entrevistas mantenidas con personal del Comando Radioeléctrico:

*“Nosotros tenemos un segundo a veces para resolver algo a lo mejor en un enfrentamiento pasas de ser el mejor policía a un ‘gatillo fácil’<sup>14</sup>” (E. n° 22).*

*“Nosotros tenemos que dar respuesta en segundos de una situación (...) y te podés equivocar como te puede salir bien y si te equivocaste ¿cómo hacés? Acá son la vida de la persona, la, la, la libertad de las personas. Acá te... errás... **te bajan el Código encima**” (E. n° 18).*

---

<sup>14</sup> La expresión popular “gatillo fácil” refiere a situaciones donde funcionarios policiales hacen una utilización excesiva o antirreglamentaria del arma de fuego.

En ese marco, la idea de “bajar el código” – por más abstracto y vago que éste resulte- se terminaría expresando en una observación jurídicamente detallada del accionar policial por parte de los juzgados. En la entrevista n° 28, una suboficial que se desempeña principalmente en la guardia de una comisaría, reforzaba la idea que nos planteaba el entrevistado n° 15:

*“...estamos muy expuestos últimamente, a veces te da miedo trabajar porque no sabés con qué te pueden llegar salir y el juzgado que le da mucha bolilla a las boludeces, lamentablemente es así... el juzgado le da mucha bola a las boludeces”* (E. n° 28).

De este modo, podemos ver que, entre los policías rosarinos, la pertenencia al Estado es vivida contradictoria y paradójicamente (de ahí la importancia de una primera visión abierta y no encapsulada del Estado): representan al Estado, en tanto agencia que expresa y busca garantizar el monopolio estatal de violencia legítima, al mismo tiempo que se perciben como víctimas privilegiadas del Estado, lo cual sería expresado en su faceta más implacable por el accionar del Poder Judicial. Cabría volver a preguntarse entonces ¿Qué lugar ocupa la policía dentro de este entramado complejo y contradictorio de instituciones estatales como para que su misma pertenencia sea experimentada en forma tan ambigua?

En algunas de nuestras afirmaciones previas se dejaba entrever la influencia del concepto weberiano de Estado en nuestras consideraciones acerca de la policía y es retomando ese mismo sentido que podemos afirmar que, en términos generales, no caben dudas respecto de que la policía responde al modelo de organización burocrática previsto por Weber y que, de hecho, se posiciona como una de las agencias de mayor visibilidad dentro de la trama burocrática del Estado. Weber señalaba que en las funciones específicas de la burocracia moderna:

*“...rige el principio de las atribuciones oficiales fijas, ordenadas, por lo general, mediante reglas, leyes o disposiciones del reglamento administrativo. Es decir: 1) Existe una firme distribución de las actividades metódicas –consideradas como deberes oficiales- necesarias para cumplir los fines de la organización burocrática. 2) Los poderes de mando necesarios para el cumplimiento de estos deberes se hallan igualmente determinados de un modo fijo, estando bien delimitados mediante normas los medios coactivos que le son asignados (...). 3) Para el cumplimiento regular y continuo de los deberes así distribuidos y para el ejercicio*

de los derechos correspondientes se toman las medidas necesarias con vistas al nombramiento de personas con aptitudes bien determinadas” (1979: 716, 717).

Por último, concluye Weber, “la administración moderna se basa en documentos (expedientes) conservados en borradores o minutas, y en un cuerpo de empleados subalternos y de escribientes de toda clase” (1979: 717). Todos estos rasgos característicos del aparato burocrático, evidentemente, coexisten y son fundantes de la policía misma en tanto agencia del estado.

No obstante, tratándose de la policía aparecen evidentes particularidades. Creemos que, en principio, la particularidad de esta burocracia radica en dos cuestiones fundamentales: por un lado, en la mencionada condición de agencia estatal armada habilitada para hacer uso de la fuerza considerada legítima, en tanto monopolio del Estado y, por el otro, en un rasgo ya presentado pero no analizado con detenimiento que consiste en el hecho de poseer una estructura que responde a objetivos institucionales que pueden resultar ambiguos, expresados en la posibilidad de asumir funciones tanto de prevención como de investigación, en lo que autores como Marcelo Saín (2008) han denominado “ambivalencia funcional”.

Las definiciones clásicas (sobre las que volveremos más adelante), fundamentalmente las surgidas del planteo de Egon Bittner (2003), enfatizan que el rol distintivo de la policía consiste justamente en el tratamiento de problemas cuya resolución requiera, o pueda requerir, el uso de la fuerza. Dicha distinción irá dando lugar a concepciones que encuentran en la policía a la agencia que encarna y expresa la pretensión estatal de monopolización del uso de la fuerza y la coerción.

Ahora bien, la pretendida monopolización estatal del uso de la fuerza irá cristalizando en formas institucionales diferenciadas. En sus definiciones orgánicas, la “ambivalencia funcional” que caracteriza a la institución policial se expresa en una doble pertenencia: agencia preventiva y represiva que responde al diseño de políticas de seguridad previsto por el Poder Ejecutivo, por una parte, y, por la otra, auxiliar en las investigaciones llevadas adelante por el Poder Judicial. Así, al menos, es contemplado tanto en la ya citada normativa que regula y organiza a la policía

santafesina como en las definiciones clásicas acerca de la función policial en nuestro país, donde:

*“la prevención es, en general, instituida como una labor dependiente del gobierno administrativo del Estado, mientras que la investigación de los delitos lo es como una tarea policial desempeñada bajo la dirección de las autoridades judiciales competentes” (Sain, 2008:88).*

En el organigrama institucional de la provincia de Santa Fe, en el que se destacan dos grandes núcleos de actividad policial, CRE y comisarías, esta distinción traza y define recorridos institucionales claramente escindidos, a pesar de encontrar que ambos asumen como objeto problemas que requieren –o pueden requerir- el uso de la fuerza para su resolución.

El personal del Comando cuando habla de la policía se refiere casi con exclusividad a la representación armada del gobierno administrativo en las calles, en la represión del delito, siguiendo las políticas de seguridad delimitadas por el Ministerio de Seguridad. Así lo definía quien fuera jefe del CRE durante los meses en que realizamos trabajo de campo, en las dos entrevistas que mantuvimos:

*“Mi negocio, mi profesión, es combatir el delito” (E. n° 31).*

*“Nuestro trabajo: prevenir y reprimir el delito” (E. n° 10).*

Mientras que el personal de comisaría, en un plano completamente diferente, suele asociar la función policial con las tareas administrativas del Poder Judicial de la provincia. Los sumariantes de distintas comisarías entrevistados así lo reflejan. Extraemos los siguientes fragmentos de dos entrevistas diferentes:

*“yo tengo que avisarle al juez que acá vino tal persona y denunció tal cosa o llamaron y pasó tal cosa (...). Todas las otras directivas las dan ellos. No manejamos nosotros eso, nosotros somos auxiliares de ellos...” (E. n° 16).*

*“funcionamiento de la comisaría sería principalmente hoy en día, digamos eh... la parte administrativa emm... se hace muy poca la prevención en virtud de que la cantidad... eh... en virtud de que la prevención últimamente la está haciendo cuerpos, cuerpos sería Comando Radioeléctrico... Patrulla urbana e infantería y motorizada que hace la prevención y todo procedimiento que ellas realizan dentro de la jurisdicción nuestra viene todo a la comisaría donde se instruyen las actuaciones correspondiente con la intervención del Juzgado de Faltas o el Juzgado Correccional o de Instrucción... que corresponda” (E. n° 17).*

Estas dinámicas divergentes de trabajo terminan cristalizando en una identificación claramente diferencial de su pertenencia institucional al Estado que expresa, en otro orden, la ambivalencia funcional que delimita la norma. En la práctica, esa ambivalencia, al menos para el caso santafesino, da origen a reparticiones con objetivos y prácticas claramente diferenciadas: las comisarías se presentan principalmente como auxiliares del Poder Judicial mientras que el Comando aparece como agencia armada de patrullaje vinculada a las políticas de seguridad que delinea del Ejecutivo provincial. Entre estos dos núcleos de actividad transita cotidianamente la tarea del policía provincial.

En forma paralela, pertenecer a una agencia armada cuya ubicación dentro de la trama institucional del Estado no es estática ni tampoco del todo transparente, puede resultar para algunos policías algo problemático. El siguiente fragmento de la entrevista a un suboficial resulta ilustrativo de cómo estas funciones diferenciales son vividas por los policías como la pertenencia a un límite que no termina de establecer precisiones acerca de su pertenencia institucional:

*“el policía es una línea muy finita, entre lo que es el pueblo y lo que es la policía. O sea, eh... para el gobierno sos un civil y... para los civiles sos el gobierno. Te movés ahí. O sea, ni chicha ni limonada” (E. n° 25).*

Ante esta sensación de no pertenencia e indeterminación general de la tarea, la función es usualmente recubierta por los propios policías de una serie de atributos alternativos, tanto pragmáticos como trascendentales. Como intentaremos demostrar, se va produciendo de ese modo una identificación con valores generales que fundamentan la propia actividad y le otorgan sentido al lugar un poco difuso en el que la misma se suele ubicar. Se trata de procesos identificatorios que son característicos de todas las burocracias y en los cuales nos detendremos ya que, en gran medida, se constituyen como fundamentaciones de su propia legitimidad. Legitimidades que, para el policía, muchas veces tienen mayor trascendencia que las propias definiciones normativas.

Posicionarnos prestando especial atención a lo que los funcionarios dicen y hacen nos situaba en un plano en el que, más allá de las disposiciones reglamentarias, nos vinculamos con múltiples sentidos acerca de lo que significa la policía y de lo que

representa ser *parte del cuerpo*. Eso no necesariamente resultaba un dato novedoso o un rasgo particular de la policía, ya que en todas las profesiones podríamos observar esta distancia entre lo previsto por los reglamentos y los sentidos que los sujetos le asignan a su tarea. Sin embargo, el dato realmente significativo con el que nos encontramos, ya desde esa instancia inicial, es que estos elementos se presentan como una de las principales dimensiones que fundamentan el sentido de una organización burocrática como la policía, principalmente a partir de que estas concepciones adquieren una importancia notoria ante la indeterminación estructural en la que, según las vivencias de los policías entrevistados, se inserta la actividad. Estos **núcleos identificadorios** suelen elaborarse en una dimensión sumamente abstracta, lo cual se ve reflejado en el siguiente fragmento de entrevista con un comisario:

*“No sé... definirte qué, qué es ser un buen policía.... es tratar de **hacer el bien**, es tratar de ayudar a la gente, es tratar de poner a un... un hombro a una persona con un problema que nosotros tendríamos que haber evitado ¿eh? Pero bueno, que hay veces que nos sobrepasa. Pero bueno... es difícil de definir”* (E. n° 26).

Así, una de las primeras definiciones acerca del significado de *ser policía* con que nos encontramos tiene que ver con una fundamentación genérica acerca de la labor policial contenida en la idea de *hacer el bien*. Esta definición que podría aplicarse a muchas profesiones constituye un basamento general que le otorga sentido a la experiencia del tránsito por la policía. Un sentido que, si consideramos el siguiente fragmento de entrevista con el Jefe del CRE, se manifestaría en la propia subjetividad de los policías:

*“lo nuestro es una profesión romántica, ¿sí? ¿y por qué romántica? Y porque sí, porque nosotros por vocación entramos a un trabajo, una profesión, donde yo y él y los 368 hombres que tenemos atrás están jugándose la vida por vos que no te conocen, no saben quién sos, o por un elemento, una cosa, un bien tuyo que no está en sociedad conmigo...”* (E. n° 31).

El *hacer el bien* tiene como referencia un objeto que es al mismo tiempo ajeno y desconocido. Se *hace el bien* favoreciendo a personas que no se conocen y bienes que no se poseen. La ausencia de un interés directo con respecto al objeto o al fin último del trabajo presupondría como un elemento necesario para formar parte de

esta burocracia lo que los policías entienden como *vocación*. En la entrevista n° 6, un comisario lo planteaba de la siguiente manera:

*“en este trabajo hay que tener **vocación de servicio** como en toda profesión, si no te gusta... lo que pasa es que últimamente, es un opinión personal mía, digamos, lo que pasa es que muchas veces el que ingresa por una necesidad laboral y no por una vocación de servicio”* (E. n° 6).

La *vocación* se va constituyendo, de ese modo, en una noción general alrededor de la cual se articula la labor policial y a la que se debe ir acercando por más que, como es fácilmente comprobable, las razones estrictas del ingreso suelen relacionarse exclusivamente con una perspectiva laboral<sup>15</sup>. Sin embargo, en entrevistas con suboficiales incluso la misma noción de *vocación* también es problematizada. El siguiente fragmento es representativo de ello:

*“¿qué trabajo más seguro que el de policía?, yo entré por vocación, pero hoy por hoy...”* (E. n° 14).

Ya se trate de un trayecto que va de la vocación al trabajo o del trabajo a la vocación, son muchos los elementos que hacen a esta predisposición a formar parte del cuerpo de la policía aún antes de conocerla. Entre estos muchos elementos queremos detenernos y reproducir en extenso los que se relacionan con el principal rasgo identificador que, desde un registro general, caracteriza a la policía. Nos estamos refiriendo a su carácter armado. La posesión del arma aparece recurrentemente, tanto en personal de comisaría como de comando, como uno de los principales incentivos que motivan el ingreso a la policía. Así nos quedaba reflejado en distintas entrevistas:

*“... no bueno, el tema del policía, como le digo, eh a mi siempre me gustó lo que sería, eh a lo mejor no se si la policía en sí pero lo que se trataría de... lo que sería la fuerza armada siempre me gustó, eh, bueno, terminé siendo policía”* (E. n° 15).

*“yo entré porque me gustaba, me gustaba lo que era ser policía, pero hay mucha gente que entra y después se quiere quedar acá adentro porque ve lo que es... eh... porque nadie entró sabiendo lo que es la policía, yo tampoco, yo estuve en el ejército antes de entrar acá y me gustaba lo que era fuerzas de seguridad”* (E. n° 17).

---

<sup>15</sup> Para un análisis etnográfico acerca de la categoría de “vocación policial” en la policía de la provincia de Buenos Aires, ver Frederic (2009).



Las posibilidades laborales que presenta la policía, en tanto agencia, la posicionan como la fuerza armada estatal con mayor grado de accesibilidad para todos aquellos que tienen inquietudes e intereses relacionados con este campo. Dentro de estos intereses, no encontramos solamente valores y apelaciones morales relacionadas con el sentido de pertenencia a una fuerza armada estatal, sino también principios mucho más concretos y existenciales como la simple posesión del arma. Así resulta que, al mismo tiempo que la policía se presenta como la agencia armada que brinda mayores posibilidades de ingreso, representa también una posibilidad concreta de acceder y poseer un arma en forma legal y reglamentaria, lo cual en la visión de policías con extenso recorrido al interior de la institución, termina actuando como un principio que reemplaza lo que ellos entienden por *vocación policial*. Esta visión queda expresada en los siguientes extractos de entrevistas con comisarios:

*"...los chicos de ahora, los chicos de 16, 17 años, ya no ven a la policía como un... ¿cómo te puedo decir?... como una necesidad de servicio, de vocación o de poder represivo sino lo ven como una cosa de libertad, ellos vienen, son policías, tienen una pistola, una credencial, un trabajo fijo 30 años" (E. n° 33).*

*"¿Qué es lo primero que cuando... que uno cuando ve un policía qué es lo que quiere...? aooo... el arma ¿me entendés? Entonces vos te sentís que porque te pusiste el arma sos el muchachito de los libros y no es así, no es así..." (E. n° 26).*

La **posesión de un arma de fuego** aparece no solo como la facultad de portar una herramienta necesaria de trabajo sino también asociada con el prestigio que brinda el hecho de que el Estado deposite en determinados sujetos la facultad de poder portarla e inclusive utilizarla llegado el caso. La portación del arma, la resignificación de su condición de sujeto en la posibilidad de ser *el muchachito de los libros*, representa uno de los principales incentivos al momento de pensar el ingreso a la policía. Policías con distinta antigüedad, jerarquía y *destino*, dan cuenta de ello, con mayor o menor énfasis, en nuestros registros de campo:

*"...te dan una credencial, un uniforme y una pistola para proteger los bienes y la vida de los terceros, nada más, tenés facultades que no tiene el ciudadano" (E. n° 17).*

*"**somos ciudadanos armados** que tienen ciertas facultades que no las tiene el ciudadano común, es decir, vos por un tiempo vas a ser policía, tomá" (E. n° 21).*

¿Qué significa entonces ser un *ciudadano armado*? Es evidente, en primer lugar, que la portación del arma otorga estatus de ciudadanía diferenciales para los policías. Ya no se trata del *ciudadano común*. Nos encontramos ahora con un ciudadano que el Estado eligió y formó para la protección de bienes y vidas. Ahora bien, este nuevo estatus de ciudadanía va asociado no solo a la condición de fuerza armada sino también al objeto mismo de trabajo: se forma un sujeto especializado en cuestiones policiales. Decimos estos a partir de que, en forma paralela, se va construyendo -sobre todo entre los funcionarios más jerarquizados- un cuerpo de valores que le dan sentido a la actividad policial y que buscan trascender la mera función armada: el ***servicio a la comunidad***. Así se desprende de otro tramo de la entrevista n° 26:

*“... yo siempre les digo a ellos, siempre les digo ‘nosotros estamos al servicio de la gente, la gente no al servicio nuestro’. Es decir, que si viene una persona que realmente acá que sufrió un delito y nosotros tenemos un problema, porque nosotros también somos seres humanos, los problemas acá se dejan en la puerta, ¿por qué? Porque a esa persona que viene acá hay que ponerle el hombro, hay que entenderle que fue víctima de un hecho. Entonces ¿cuál es la mejor manera? Escucharla. Tratar de... de hacerle, de hacerle entender y de que acá vamos a tratar de darle una respuesta ¿mmm?”*

En torno a las referencias relativas al concepto de *servicio a la comunidad* se va cimentando un modelo ideal de policía que es definido como un *policía de alma*. Este modelo generalmente contempla situaciones –que problematizan algunas de las reformas promovidas por el gobierno provincial en la última etapa, tal como veremos más adelante- en las que se ven involucrados policías de baja jerarquía o sin reconocimiento institucional y de hecho circula preponderantemente entre los policías menos calificados. El siguiente registro lo obtuvimos en entrevista con una suboficial de una comisaría barrial. En el mismo es posible observar la categoría *policía de alma* en pleno funcionamiento:

*“tenemos un caso de un chico que dejó el servicio, una señora con un bebé, Chiara. Eh, estaban intentando asaltarla, eh, robarle la cartera, bueno, intercedió, bueno, la defendió, hizo lo que debía hacer, lo corrió al vago, le quitó la cartera, la señora (...) a dios gracias que no salió lastimada sobre todo porque tenía el bebé en brazos, esa mujer se tomó la molestia de mandar una carta escrita al diario La Capital haciendo mención a lo que había pasado y solicitando que, que se lo felicite por... de última si él iba de civil tampoco tenía porque meterse, porque es*

*más fácil hacer de cuenta que uno no vio nada y seguir como la ley del mejor no meterse de hoy en día ¿no? pero, **él es policía de alma...***" (E. n° 14).

No resulta fácil cruzarse con *policías de alma*. De hecho, son pocos los policías que pueden entrar dentro de esa categoría. No obstante ello, la imagen misma del *policía de alma* está presente en las representaciones cotidianas de todos los policías. Así es que este "**policía ideal**" también es representado y cristalizado en diferentes tipos de manifestaciones artísticas.

La poesía en particular, así como la música y otras expresiones estéticas, aparece como un espacio donde los valores que fundamentan y otorgan sentido a la actividad son mostrados, problematizados y difundidos bajo ribetes pretendidamente artísticos. Eso ocurre, particularmente, con las poesías que elaboran o reproducen los policías rosarinos en las paredes de sus ámbitos de trabajo y en las redes sociales en las que se vinculan (Disponibles en Anexo III). En ellas se reproducen principalmente los sentidos expresados anteriormente que configuran un abnegado "policía ideal". Al mismo tiempo, es posible identificar diferentes núcleos problemáticos que lo determinan (los cuales también se reproducirán en los discursos de los policías entrevistados), entre los cuales se destaca un primer gran núcleo temático que se relaciona con las condiciones de trabajo: la soledad del policía, el arrojo, la mala paga y toda una serie de factores que hacen a la precariedad laboral y a una especie (casi) de martirización diaria.

"Nos sacrificamos reventándonos con adicionales todos los días para poder llegar a fin de mes y no ceder a caer en las tentaciones".

"Solo nosotros conocemos el terrible dolor que nos produce ver crecer a nuestros hijos en 'forma horizontal'".

"Y, por supuesto, tiene que ser un genio porque tiene que alimentar y vestir a la familia con el sueldo de un policía"

"Porque soy masoquista, y me gusta que la gente me falte el respeto..."

"Porque me gusta desayunar cuando los demás comen, comer cuando cenan y cenar mientras duermen..."

"Porque cuando la gente disfruta en un partido de fútbol, nosotros estamos formados al sol con 20 kg. de equipo anti-tumulto en nuestras espaldas..."

“Porque en un recital estamos parados 9 horas y nos pagan 4; porque la mayoría de los cánticos de ese recital son en nuestra contra...”.

“Porque puedo comer lo incomible y no me hará daño...”.

“Porque necesitaba saber cuánto café puedo soportar, cuánto tiempo puedo aguantar sin comer, dormir, tomar agua, evacuar y orinar...”.

“Porque cuando te despedís de los tuyos para tomar servicio nunca sabrás si los volverás a ver...”.

Un segundo núcleo claramente identificable en este tipo de discursos, que se desprende en gran medida del anterior, expresa la inserción de ese “policía ideal” en el marco de relaciones sociales a partir de la denuncia de los problemáticos vínculos que mantiene la policía con la sociedad: sus demandas, su incompreensión, etc. Se sigue fundamentando la integración a una organización burocrática como la policía pero la misma se va volviendo cada vez más sinuosa y problemática:

“Señor Dios, muchas veces me sentí abandonado por mis superiores, y atacado sin fundamentos y motivos por la gente”.

“Entre todos los hombres él es, a la vez, el más requerido y el más rechazado”.

Se trata de dos conjuntos de preocupaciones expresados en formaciones discursivas que, ya desde el mismo momento en que se ingresa a la fuerza, favorecen el desarrollo de un núcleo identificador general en el que se observa a la institución desligada del conjunto de la sociedad. Ingresar a la policía, acercarse a ese policía ideal martirizado, implica dar ese paso<sup>16</sup>. Este distanciamiento entre los modelos ideales de policía y la percepción que tiene la sociedad sobre ellos se expresa recurrentemente en nuestros registros. Un ejemplo de ello lo encontramos en el siguiente párrafo extraído de nuestro diario de campo:

*“En charla con dos jóvenes agentes del CRE se nos relata que además de la falta de respeto generalizada hacia la autoridad, **la sociedad siempre los mira mal** a ellos. En el centro si ellos reducen a alguien enseguida se junta gente para decirles que no lo maltraten. Por ejemplo, en una oportunidad un delincuente había robado a una trasplantada y uno de los entrevistados lo redujo a la vuelta de la esquina y la gente enseguida lo rodeó para ‘putearlo’<sup>17</sup> a él pero no sabían lo que había*

<sup>16</sup> Sobre el debate en torno a las implicancias del tránsito y la transformación de un sujeto “civil” en uno “policial”, ver Sirimarco (2009) y Melotto (2012).

<sup>17</sup> Insultarlo.

*pasado. El otro pone el ejemplo de una mujer que había sido robada en el colectivo<sup>18</sup> sin que ella lo notase, y él, que estaba de civil, pudo darse cuenta, intervino (porque así lo siente, porque si no directamente podía no intervenir) y se trenzó en una pelea con el delincuente. La mujer que había sido robada en vez de denunciar al ladrón, le daba puntapiés a él, gritándole que lo suelte” (D. C. n° 14).*

Un tercer núcleo nos habla de una situación de liminaridad erigida sobre la base de la particular forma en que se inserta la propia actividad en los porosos márgenes que delimitan entre lo ilegal y lo legal, inserción característica de las prácticas policiales diarias que se terminaría expresando en las tentaciones que esos mundos presentan:

“Tiene que saber dónde se oculta todo el delito y no participar”.

“Nos sacrificamos reventándonos con adicionales todos los días para poder llegar a fin de mes y no ceder a caer en las tentaciones”.

A pesar de tratarse de una fuerza primariamente encargada de intervenir para dar cumplimiento a la ley (tal lo previsto por la normativa y desarrollado en el apartado anterior), las tensiones entre prácticas consideradas legales y prácticas ilegales representan una constante en el desarrollo cotidiano de la actividad policial. Ya que este aspecto está presente en casi todos los niveles de análisis propuestos en esta tesis, profundizaremos sobre el mismo en sucesivas oportunidades de aquí en adelante.

Por último, encontramos también, en este tipo de relatos pretendidamente poéticos y de gran circulación entre los policías, un último núcleo de problemas en donde lo que aparece, con fuerza, son apelaciones a valores morales que terminan solidificando al “policía ideal” más allá de estas condiciones adversas o posibles *tentaciones*. Principalmente se trata de dos: *dios y la patria*.

“Si he de caer no tengo problemas, caeré como muchos de mis camaradas, pero será altivo, sin renunciar a la **lucha contra las fuerzas del mal** y con tu nombre en mis labios, **mi Dios, la Bandera de mi Patria cubriéndome** y mi testimonio será el legado a mis hijos”.

“Gracias mi Señor por permitirme ser alguien con uniforme”.

---

<sup>18</sup> Medio de transporte urbano de pasajeros.

“Porque para quienes creemos en un Ser Superior, tenemos el privilegio que EL ha podido guiar tus manos en algún momento difícil...”.

En esta misma línea, durante nuestro trabajo de campo tuvimos oportunidad de conocer, en diversas oportunidades, el desarrollo (limitado, sin gran alcance, pero con expresión en la jerarquía) de un tipo de fundamentación de la actividad policial al que podríamos denominar como “concepción católica de la función policial”. Significativamente, encontramos esta concepción en dos comisarios jefes de seccionales consideradas entre las más importantes de Rosario:

*“.... soy agente pastoral penitenciario. **Yo soy católico. Los que hay acá son evangelistas.** Yo hice un curso en el Arzobispado de recuperación de detenidos. A recuperar detenidos. Yo soy Agente Pastoral Penitenciario. Es decir, son cosas que, somos todos seres humanos, todos nos equivocamos ¿cuáles son las causas? Sociales, las drogas (...) por algo de eso, igual a mí no me conviene que el tipo este me caiga pasado mañana de vuelta. Ni a mí ni a nadie ¿me entendés? Yo... hay tipos que salieron en libertad, me ven en la calle ‘¿cómo va jefe? Que esto, que lo otro... que tal... estoy trabajando’, se ponen a hablar conmigo, yo no tengo problema. Mirá si me tienen que odiar todos los que metí en 30 años... eh... es crítico... yo no tengo problema ¿eh? Es medio raro que a mí un preso me odie... aparte por la forma en que soy yo no... yo no golpeo... ni me interesa golpearlos ni nada ¿para qué? Me comprometo yo porque me pueden llegar a denunciar, me arruinan la carrera, tengo una causa abierta, tengo que poner abogado, gastar en abogado... noooo... dejá de joder. Es lo que yo siempre les explico a los vigis ‘no ganan nada, una vez que lo tenés en cana, lo metés en el calabozo y listo’. A ellos los tenés que matar con la máquina, con lo que escribís” (E. n° 8).*

*“Y cuando uno, yo me metí en la policía y juré dar mi vida, sin embargo yo amo la vida. Es decir, yo tengo **un arma no para matar**. Tengo un arma para defender la vida mía y la de terceros pero no para matar. Ojalá que nunca la utilice, nunca la use. He detenido, he entrado en lucha, un montón de cosas. He tenido enfrentamientos también pero, gracias a dios, nunca, nunca ni me han pegado ni yo he pegado. Entonces, apoyás la cabeza distinto, porque aparte **yo soy católico y soy creyente...** y.... qué se yo... yo por eso te vuelvo a decir... es mi vocación de ayudar. Y en la x (comisaría de la zona Sudoeste) era un penal desastroso, se lo convirtió en evangélico y yo soy católico no tiene nada que ver... pero todo... todos vamos ahí arriba y hay un dios para todo el mundo y, sin embargo, ellos cambiaron su mentalidad. Era un modelo el penal ese y creo que lo debe seguir siendo y bueno y era importante, y entraba yo y me sentía un dios dentro del penal... porque como... como ellos me gratificaban lo que yo les daba ¿me entendés? O por ahí me ponía a hablar y se quedaban los treinta y pico, cuarenta presos, no sesenta tenía en esa época, sesenta, se callaban la boca ¿eh? Y se ponían todos a escucharme, dos por tres hablaba, les encantaba” (E. n° 26).*

A pesar de las diferencias entre un “nosotros católico” y un “otro evangelista”, éstos dos comisarios refuerzan una visión clara de lo que significa para ellos la actividad policial, en la que se destaca una resignificación misma del *arma* que pasa a ser concebida como un *arma para no matar*. La misma se encuentra inscrita en el desarrollo de diferentes modos de fundamentación en un ideal trascendente que, al mismo tiempo, van forjando un concepto del deber ser policial estrechamente asociado con la idea de *dios*. Ahora bien, ya se trate de *dios* o de *la patria*, el caso es que nos encontramos con distintas variantes de una argumentación que sitúa en un mismo plano -en un mismo sistema de creencias podríamos decir- deidades y sentidos patrióticos, conceptos de familia y honor, en relación directa con las vicisitudes concretas que surgen del servicio que brinda la policía.

El desarrollo y la convivencia de este tipo de valores no resulta contradictorio con las formas históricas que manifiestan otras burocracias. De hecho, ya Max Weber en su caracterización del funcionario burocrático moderno señalaba que:

"para el carácter específico de la lealtad moderna al cargo, es decisivo el hecho de que, cuando se trata de un tipo puro, no se subordina (...) a una persona a modo de señor o patriarca, sino que se pone al servicio de una finalidad objetiva impersonal. Ciertamente es que, aureolándola ideológicamente y como sucedáneo de los soberanos personales terrenales o divinos, suele haber tras esa finalidad objetiva una serie de 'valores culturales' realizados en una comunidad: 'Estado', 'Iglesia', 'Municipio', 'Partido', 'Empresa'" (1984: 719).

Para el caso de la policía, el apego a identificaciones generales como base de su estructuración burocrática va adquiriendo múltiples sentidos superando la referencia primaria a la posesión de un arma. Así es que nos encontramos, fundamentando en gran medida el sentido del ingreso a la institución, con apelaciones a *dios*, la *patria*, el *orden*, los *niños* (nacidos y por nacer). No obstante, se trata de valores que por más que aparezcan revestidos de un aura de impersonalidad y trascendencia, no dejan de inscribirse en un espacio de *combate*. Existe indefectiblemente un enemigo que busca combatirlos:

“Seré altivo, sin renunciar a la lucha contra las fuerzas del mal”.

“Toda esa fuerza mi Señor, me hace seguir adelante y pedir un round más”.

Así, las apelaciones a valores morales, humanos, éticos, no pueden entenderse desligadamente del contexto de lucha en el que se inscriben. De este modo, podemos observar cómo la burocracia policial va adquiriendo su propia apariencia –tanto a partir de su encuadre institucional como de los valores que portan, construyen y reproducen sus propios funcionarios- definida, en gran medida, por oposición a un “otro” indeterminado que se ve representado en gran medida –tal como lo iremos viendo a lo largo de la tesis- en las distintas categorías de ciudadanos que no son policías.

El contexto de disputa o tensión con ese “otro” indeterminado al que la policía está facultada para combatir, sumado a los valores morales –trascendentes o no- asociados a la función policial, despliegan en torno a todo lo relativo a la policía una “especie de aura de poder”. Se trata de una característica que no es peculiar de esta institución y que, por eso mismo, comparte con otros modos de acción del Estado. Michael Taussig (1995) ha denominado a este fenómeno como “fetichismo del estado”. El mismo sostiene una representación social del Estado como un gran objeto abstracto que, a su vez, tiene todo el derecho, e incluso la exigencia social, de decidir y accionar en la sociedad a través de metodologías violentas que, al ser de su procedencia, toman carácter de “racionales” y legítimas.

El desarrollo de una “especie de aura de poder” por la cual el Estado sustenta el derecho de accionar en la sociedad, incluso apelando a la violencia, ya había sido de algún modo previsto por Weber al poner en descubierto la pretensión característica de todo Estado de legitimar su uso de la coacción física.

Precisamente recordemos que para Weber el estado consiste en “... aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio (...) reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima” (1984: 1056). De esta manera, el Estado en Weber “... es una relación de *dominio* de hombres sobre hombres basada en el medio de la coacción legítima (es decir: considerada legítima)” (1984: 1057). La fuerza se convierte, no en el único, pero sí en un medio y una atribución específica del Estado. Violencia y Estado aparecen en Weber bajo una relación íntima e instituyente. En el marco de esta relación, la policía ocupará el rol de



instrumento orientado a garantizar y sostener esta pretensión que en principio es necesariamente potencial.

Así, una definición clásica de aquello que define a la policía nos llevaría a considerar su utilización como instrumento del monopolio de la fuerza pública reivindicado por el Estado. No obstante, autores como J. P. Brodeur (1994) alertarán que, en un sentido estricto, hasta el momento no se conoce ningún lugar en el que la policía haya detentado el monopolio absoluto en el uso de la coacción física, poniendo como ejemplos las posibilidades regladas que tienen de recurrir al uso de la fuerza los penitenciarios, los vigilantes privados e incluso los mismos ciudadanos cuando se actúa en legítima defensa.

Estos cuestionamientos son reconsiderados por Dominique Monjardet (2010) quien, sin invalidar la tradición weberiana, va a señalar que en realidad la policía puede definirse específicamente a partir de representar la única agencia habilitada para hacer uso de la fuerza física con relación al mantenimiento del orden público y el control del delito.

El constituirse en la única agencia del Estado habilitada para hacer uso de la fuerza confiere a la policía de una potencialidad de coacción física que, en los hechos, la define como institución. No se trata del ejercicio bruto de la fuerza lo que nos permitirá distinguir la especificidad de la policía sino esta facultad de poder recurrir a dicho ejercicio ante circunstancias determinadas. En este sentido, Sabina Frederic y Marcelo Saín (2008) han señalado que, a diferencia de otras instituciones estatales, la competencia exclusiva de la policía está dada por la autorización social que recae sobre ella para hacer uso de la fuerza física, real o potencial, razón por la cual entienden que lo que efectivamente distingue a la policía de otras instituciones estatales no es el uso real de la fuerza, sino el hecho de ser recipiendaria de la autorización del Estado para poder usarla internamente<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Saín planteará además que: “en las sociedades modernas, la función policial es atribuida a determinados miembros del conjunto con el fin de prevenir y reprimir, en nombre de la colectividad, la violación de ciertas reglas que rigen la vida social. A tal fin, ese grupo específico podría hacer uso de la fuerza cuando ello fuera necesario. Esto no significa, por cierto, que la función policial se reduzca solamente al empleo de la fuerza y que no suponga el uso de otros medios de acción asentados en el

Apele a ella o no según las circunstancias, permaneciendo expuesta u oculta, desde Max Weber sabemos que el Estado como institución existe en la búsqueda del monopolio en la utilización de la fuerza. Al ser revestida por el “aura estatal”, ese ejercicio cobra legitimidad y hablamos entonces del uso legítimo de la fuerza cuando nos encontramos con que son funcionarios policiales quienes recurren a ella real o potencialmente. No obstante ello, existen determinados quiebres (en esta tesis focalizamos sobre los casos en donde el ejercicio de la fuerza resulta letal) donde dicha legitimidad puede ser puesta en cuestión. Así es que en numerosos casos de utilización letal de la fuerza por parte de la policía emergen actores (familiares y amigos de las víctimas principalmente) que denuncian esas prácticas como casos de *gatillo fácil* y reclaman por su ciudadanía. En esos casos la utilización de la fuerza por parte de agentes estatales, en principio legítima, pasa a ser definida como “violencia”. Allí nos encontramos con un concepto de “violencia” que es expresión de una encrucijada de significaciones que recorre un campo semántico – atravesado por valores morales en disputa- que transita desde el *uso legítimo de la fuerza* hasta el *gatillo fácil*. Lo que está en juego aquí, antes de considerar si responden al ordenamiento legal o no, es su legitimidad, ya que en un principio, precisamente, las prácticas violentas tienen sustento en significaciones que las reconocen como legítimas y esa legitimidad es la que busca deconstruirse a través de la batalla por la significación que inician los familiares.

Ese problema -típicamente inspirado en los planteos de Walter Benjamin que asocian el problema de la violencia a su definición moral- nos condujo a trabajar con un concepto de violencia que nos posibilitase dar cuenta de ese tránsito y de las disputas que iban surgiendo en torno a su misma definición. Usualmente el término violencia abarca una infinidad de situaciones que van desde -refiriéndonos siempre a nuestro ámbito de estudio- discusiones menores, pequeñas resistencias hasta toma de rehenes en el penal de una comisaría o enfrentamientos en la vía pública. De hecho, la manifestación del concepto de violencia en diferentes ámbitos, en diferentes tiempos y en diferentes lugares, sumada a su presencia cotidiana en el *discurso de la calle*

---

ejercicio de ciertas modalidades de disuasión o influencia. Sin embargo, la posibilidad *última* de la utilización del recurso a la coacción física es donde se manifiesta la especificidad de la función policial dentro del espectro de labores institucionales inscritas en el control social” (2002a: 21).

donde las apelaciones a este término son usuales, desde su aparición en los medios de comunicación hasta en las mismas interacciones cotidianas, hace que el término violencia difícilmente pueda volverse un concepto<sup>20</sup> (Isla y Míguez, 2003).

Ante esta situación, en distintas investigaciones, sobre todo los informes del CELS y trabajos que provienen desde la Sociología, el problema de la violencia policial ha sido abordado en su dimensión cuantitativa (Marteau, 2002; Gabaldón, 2002). En estos trabajos se suele tomar una definición precisa de lo que engloba el concepto de violencia y a partir de ella son analizados determinados fenómenos sociales asociados con la misma. Fue con esta modalidad que pensamos nuestro acercamiento a ese campo en particular, donde el modo de dimensionar la problemática consistió en definir criterios que delimitasen y permitiesen visualizar a través de diversos gráficos (ver cuadros 1 y 2) la presencia del problema de la violencia en las prácticas policiales, fundamentalmente a través de hechos que pudieran ser cuantificables.

Sin embargo –como adelantamos más arriba y acorde con la propia definición de Estado que brindamos anteriormente- fue necesario considerar la violencia asumiendo también la perspectiva de los actores involucrados, que definían un mismo hecho categorizándolo desde “uso legítimo de la fuerza” hasta “gatillo fácil”. Dicha perspectiva tiene la cualidad de poner de manifiesto que “la definición de lo violento es una disputa entre las partes implicadas en un hecho o una representación. Estas disputas por la significación engarzan a los actores imbricados en la violencia y a los testigos quienes desde distintas ópticas disputan sentidos y significados” (Garriga, 2008: 4). Asumir las distintas significaciones que construyen quienes vivencian distintas formas de violencia, cobra sentido en tanto la misma emerge siempre, en última instancia, en la interacción humana (Hernández, 2002). En este mismo sentido es que David Riches (1988) identifica distintos actores significativos en el espacio relacional del que emerge la violencia, brindándonos una mirada que posibilita poner de manifiesto las intersecciones discursivas que definen cuándo se trata de una práctica violenta.

---

<sup>20</sup> Isla y Míguez (2003) han dado cuenta de estas dificultades, de lo escurridiza de la noción de violencia y de la impronta que en ella tienen los valores morales, con las consecuentes dificultades de definirla en términos conceptuales.

Riches (1988) se concentra en la relación existente entre él o los perpetradores de la acción violenta, la o las víctimas de tal acción, y él o los testigos del acto. Este modelo tripartito nos resulta de suma importancia porque nos permite visualizar las tensiones y disputas que emergen de un acto en el que hay empleo de la fuerza y pensar la violencia no solo desde los hechos sino también desde las interpretaciones que le dan entidad como tal. Así es que la definición de violencia, en palabras de José Garriga y Gabriel Noel (2010), va a formar parte inequívoca de un juego de poder entre actores que entablan una batalla por la significación desde sus diversas posiciones sociales y a través de diversos repertorios culturales a su disposición, con grados variables de autoridad y performatividad. De este modo, por más que pueda establecerse un núcleo mínimo objetivizable alrededor de lo que es definido como acción violenta, la definición de violencia va a implicar siempre un acto que es contestado y constituido como objeto de disputa entre los actores involucrados.

En suma, sean definidos como violentos o no, lo que los policías suponemos que hacen es administrar conflictos apelando real o potencialmente a la utilización de la fuerza. Lo hacen, en tanto agencia del sistema penal, a partir de determinadas facultades que el Estado delega en ellos y de construcciones conceptuales que le otorgan sentidos y fundamentos a su accionar. Accionar que, dentro del entramado de agencias que conforman el sistema penal (Policía, Servicio Penitenciario, Poder Judicial), irá asumiendo un rol preponderante en tanto se posiciona como el principal agente que incorpora conflictos al sistema penal (Sain, 2002 a).

En este sentido, al momento de pensar integralmente la constitución de un campo como el penal consideramos tanto las tensiones entre sus postulados teóricos (aspectos normativos o reglamentarios) y las prácticas concretas de las agencias que lo ejecutan como las relaciones contradictorias de sus componentes (judicial, policial y penitenciario) sobre la base de una concepción del derecho que no se limite a su cuerpo normativo, sentido que nuestra disciplina fue forjando al incorporar la forma en que los hechos considerados jurídicos en general son representados<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> En el mismo sentido, Martínez y Eilbaum (1999) han puesto de relieve que la violencia policial debe ser analizada en relación con los criterios de legalidad imperantes en cada sociedad.

fundamentalmente a través del concepto de “sensibilidades legales” (Geertz, 1992, Kant de Lima, 2004).

Dentro del conjunto de formulaciones que pueden ser comprendidas al interior del concepto de “sensibilidad legal”, nos interesan particularmente aquellas que como expresión tanto de aspectos normativos internos, de formación profesional y de sus propias prácticas y pautas de funcionamiento, van conformando criterios de legalidad propios de la policía. Benjamin (1996) ya observaba que la policía era un poder con fines jurídicos (poder para disponer) pero con la posibilidad de establecer para sí misma tales fines (poder para ordenar). Así, para Benjamin la policía no solo representa un poder que conserva el derecho sino que también se constituye como un poder que lo funda. Este “derecho” de la policía, según Benjamin, indica el punto en el que el Estado “... se siente incapaz de garantizar por medio de ese orden, los propios fines empíricos que persigue a todo precio” (1996: 32). De este modo, muchas de las prácticas policiales que analizamos se inscriben en ese terreno donde no existe una clara situación de derecho a partir de la imposibilidad que manifiestan en ser ajustados a fines jurídicos predeterminados. Esta situación de ambigüedad demarca un tránsito constante en la débil frontera que distingue entre lo legal y lo ilegal –tal como lo señalaban algunas de las poesías citadas más arriba- no solo respecto del objeto de control policial sino también en relación con las mismas formas que asume su proceso de trabajo. Esto lo hace explícito un comisario a punto del retiro, quien a pesar de sostener una *concepción católica de la policía*, enuncia los problemas vinculados a la actividad policial diaria producto del contexto en el que la misma se inscribe:

*“Y la calle es... te enseña un montón de cosas, buenas y malas. Lo malo... es... lo más lindo, lo más hermoso es como... el que... persona que... vos fijate que todo lo más rico es lo que engorda y todo lo más sano es lo feo. Entonces es... como Adán cuando mordió la manzana, cuando le decían ‘no la muerdas’. Y bueno, está el pelig... y el policía... está en una línea donde está lo bueno y lo malo. Te desviaste un poquito y te fuiste a lo malo, te desviaste del otro lado y te fuiste a lo muuuyyy bueno. Entonces, por ahí, uno tiene que caminar bien derecho y es jodido a veces. Es jodido porque vos estás de los dos lados” (E. n° 8).*

Las trayectorias relacionadas con la labor policial aparecen, de ese modo, asediadas por dos flancos, uno legal y otro ilegal. La habilidad del policía consistiría

entonces en *caminar derecho*, sin volcarse excesivamente sobre uno u otro flanco, ni siquiera sobre el legal. Con el mismo sentido, un joven suboficial de una comisaría de la zona oeste denominaba a esta habilidad como *picardía*. Así quedó registrado en los apuntes tomados durante una observación:

*“Los policías tienen que tener su ‘picardía’ porque constantemente están en el límite entre lo legal y lo ilegal, hay que saber hacer las cosas (indicando que para ‘hacer’ muchas veces se cae en la ilegalidad). Plantea además que si uno se queda solo con la ley no podría hacer nada pero que tampoco se puede vivir en la ilegalidad absoluta. Por eso la ‘picardía’ del policía está en saber sobrevivir dentro de ese límite” (O. n° 3).*

Tanto *caminar bien derecho* como la *picardía* constituyen representaciones - que se definen en torno a qué es legal y qué no lo es, qué es legítimo y qué no lo es- construidas por los propios funcionarios policiales en su práctica cotidiana y en su formación profesional<sup>22</sup>. Estudiar las prácticas policiales considerando especialmente las representaciones que construyen los policías acerca de su propia labor se emparenta con los planteos de Elbert (1998) acerca de la “ideología policial”, la que entiende como una concepción unilateral de la sociedad, obtenida a través de un factor de análisis determinante: el mantenimiento del orden. Aspecto que también es tomado por investigadores de nuestra región como Máximo Sozzo (2000) quien considera que las reglas informales que conforman la “cultura policial” constituyen la fuente primaria de la sensibilidad que le da origen al accionar policial. También Gabriel Ganón (1999) aporta a esta línea a partir de lo que denomina como “sub- cultura policial”. Ganón plantea que para poder pensar la agenda para la reforma de la función policial es necesario tener en cuenta los cambios en la cultura policial, la forma en que la policía ve el mundo social e inserta su rol en él, así como las categorías, valores, distinciones y creencias que utiliza la policía para distinguir su rol social. La cercanía de nuestro plan de tesis con este grupo de trabajos es notoria. Sin embargo, en relación con esta línea de investigación, consideramos que existían

---

<sup>22</sup> Tomamos el concepto de representaciones en el sentido que le da Pierre Bourdieu (2005) al mismo, como actos de percepción y apreciación, de conocimiento y reconocimiento, esquemas perceptuales y valorativos que los agentes invierten en sus vidas todos los días. Así, las representaciones son entendidas como formas de percibir y significar los procesos sociales que contextualizan y otorgan sentidos a las prácticas sociales cotidianas. Con un sentido similar Irene Vasilachis de Gialdino (2005) las definirá como construcciones simbólicas individuales y/o colectivas a las que los sujetos apelan o las que crean para interpretar el mundo, para reflexionar sobre su propia situación y la de los demás y para determinar el alcance y la posibilidad de su acción histórica

diferencias sustanciales (las cuales esperamos que se puedan ir visualizando a lo largo de todo el texto) acerca de cómo pensar la dimensión cultural de las prácticas policiales. En este conjunto de trabajos se parte de observar la “cultura policial” como un cuerpo de valores homogéneos y cerrado. Este punto de partida desemboca en una utilización implícita -en algunos casos es directamente explícita- del concepto de “subcultura”<sup>23</sup>, al que pensamos como un obstáculo teórico en nuestra pretensión de poder pensar en forma abierta y no encapsulada el entramado de relaciones que constituyen el espacio policial.

Por este motivo, descartamos hablar de “subcultura policial” en tanto forma cerrada que se manifestaría ya sea a través de los modos en que la policía ve el mundo social e inserta su rol en él, de las categorías, valores, distinciones y creencias que utiliza para distinguir su rol social (Ganon, 1999) o bien como “conjunto de comportamientos, significaciones, usos y costumbres producidas y reproducidas por la propia institución por fuera de lo que los reglamentos y leyes prescriben” (Sain, 2002b: 55). Todas estas nociones, a pesar de sus diferentes variantes, nos están hablando de una homogeneidad que, al menos en la policía rosarina, no es tal<sup>24</sup>. Sobre esta variabilidad profundizaremos en el próximo capítulo.

---

<sup>23</sup> Para una crítica exhaustiva del concepto de subcultura policial, ver Bianciotto (2008).

<sup>24</sup> Los trabajos de Sabina Frederic (2009) contribuyen en gran medida a cuestionar la imagen de la policía como institución perteneciente a un mundo moral homogéneo y encapsulado.

## Capítulo III: La policía de la provincia de Santa Fe

### III. 1: Historia y cambios

Las investigaciones antropológicas que ponen el foco sobre las prácticas cotidianas suelen prestarle (en general) poca atención a la historicidad de los problemas investigados, presentándose casi como expresiones contemporáneas de los enfoques sincrónicos que caracterizaron las monografías clásicas de nuestra disciplina. Esta manera de abordar una problemática supone pensar que el marco de cotidianidades no está determinado históricamente, dando lugar a investigaciones que, privilegiando las prácticas que efectivamente se están observando, descuidan su inscripción en los procesos históricos que las contienen. En este trabajo, muy por el contrario y a pesar de compartir en gran medida el mismo tipo de preocupaciones, concebimos el marco de relaciones en el cual se inserta la actividad policial como expresión de diferentes rupturas históricas; las que buscaremos analizar, para el caso de la policía de Santa Fe, considerando tanto fuentes secundarias y literatura académica como el relato elaborado por los propios policías.

En principio nos topamos con una ruptura cuasi fundacional: siguiendo lo expresado anteriormente, podemos observar cómo las policías modernas se presentan en una hegemonía históricamente edificada como las encargadas -a través de su potencialidad en el uso de la fuerza- de mantener el orden público, ya sea reprimiendo y previniendo tanto el delito como cualquier otro tipo de desórdenes y, en algunos casos como el santafesino, de auxiliar al Poder Judicial en la investigación de delitos ya cometidos.

Pero esto no siempre fue así. El origen de la institución en el contexto europeo es graficado fundamentalmente por los análisis genealógicos de Michel Foucault acerca de su desarrollo entre los siglos XVII y XVIII en el marco del antiguo régimen (2006) en tanto técnica de gobierno propia del Estado.

En realidad, Foucault parte de rastrear el origen de la palabra unos siglos antes -hacia los siglos XV y XVI- donde se designa, de acuerdo a su investigación, cosas muy



diferentes a las que, desde fines del XVIII, entendemos englobadas dentro del concepto de policía.

Foucault entiende que en el curso de estos siglos, la policía connota tres acepciones principales: una forma de comunidad desde el momento en que el poder político o alguna autoridad pública se ejerce sobre ella; los actos que se rigen dentro de esa comunidad bajo esa determinada autoridad y, por último, los resultados del gobierno. Sin embargo, muestra con claridad cómo a partir del siglo XVII se empieza a llamar policía al “conjunto de los medios a través de los cuales se pueden incrementar las fuerzas del Estado a la vez que se mantiene el buen orden de éste” (2006, 357). Así, en tanto preocupación por la grandeza del Estado, la policía se ocupará y tendrá como objeto los hombres que habitan ese Estado, sus necesidades, su salud, su disposición para el trabajo, el combate de la ociosidad, en suma dirá Foucault, la policía se ocupa de la “sociedad”. “La policía se ocupa de todo” enfatizará H. L’Heuillet (2011).

Este proyecto global de la policía, típico de los siglos XVII y XVIII se desarticulará a lo largo de los siglos XIX y XX, corporizándose en distintos mecanismos e instituciones, entre los cuales la policía irá progresivamente asumiendo un sentido negativo a partir de limitar sus atribuciones a las de un instrumento por medio del cual se impedirá la aparición de cierta cantidad de desórdenes (Foucault, 2006: 404). Al compás de la configuración de los Estados modernos, las policías como técnicas de gobierno van perdiendo su carácter holístico concentrándose específicamente en la función represiva.

Tal cosa ocurre en nuestro país donde, dado el carácter federal de la República Argentina, cada una de las provincias puede organizar su propia policía con el objeto de llevar adelante tareas preventivas y de investigación criminal. Así en 1864, la provincia de Santa Fe sanciona el Reglamento de Policía Urbana y Rural. Este reglamento fue el primero en determinar jurisdicción y competencia para la policía en funciones preventivas y represivas. La importancia y el crecimiento de la institución se verá reflejado más tarde, en 1896, cuando se crea la Inspección General de Policía, que pasa a depender en forma directa del Ministerio de Gobierno. Entre sus atributos figuraban las facultades de: inspeccionar a cada policía departamental, revistar el

personal en cumplimiento de sus deberes, controlar el estado del armamento, uniformes, racionamiento para la tropa y el forraje de sus caballos.

Esta organización primaria se mantuvo –con variantes en cuanto a la incorporación de nuevas dependencias como la creación de la Escuela de Policía en el año 1942, de la Policía Rural y de Isla en el año 1961 y del Comando Radioeléctrico en el año 1967- vigente hasta la sanción de la Ley Orgánica de Policía en el año 1972. Con la Ley Orgánica, la policía pasa a organizarse en distintas unidades regionales que abarcan uno o más departamentos provinciales y funcionan bajo la dirección de la Jefatura de Policía con asiento en la ciudad de Santa Fe. Es en ese momento cuando se crea la Unidad Regional II, que incluye a la ciudad de Rosario.

En ese marco, con funciones meramente “negativas” orientadas a la aplicación de la ley criminal en el combate contra el delito ya desde su misma conformación, distintos autores han definido dos posibles modelos de policía para el caso argentino. Uno en tanto instrumento del poder político y otro ligado a su actuación como garante de los derechos ciudadanos (Sain, 2008, Andersen, 2002). Muy lejos de lograr un equilibrio entre estas dos grandes tendencias, la moderna y breve historia del Estado argentino muestra que la policía como institución tendió siempre a vincularse estrechamente con el poder del Estado<sup>25</sup> antes que a la protección de la ciudadanía (Andersen, 2002). Marcelo Sain identifica que la institución policial, en nuestro país, históricamente se conformó como un organismo al servicio de los gobiernos de turno, “en el marco de una concepción de la seguridad asentada en el deber de protección del Estado y no de los derechos y libertades ciudadanas” (2008: 129). En este sentido, para este autor, esta característica no obedece solamente a la influencia ejercida por las distintas dictaduras militares sobre las fuerzas de seguridad, sino que dichos parámetros institucionales se encuentran presentes desde la misma conformación del Estado Nacional y fueron reproduciéndose a lo largo de todo el siglo XX. En suma, los tres autores citados en este párrafo coinciden en que las distintas policías argentinas fueron adquiriendo históricamente una orientación ligada antes a la defensa del

---

<sup>25</sup> En la formación de la policía argentina, ligada al modelo francés, los valores y prácticas militares resultaron cruciales, ya que la policía era considerada ante todo un instrumento del Estado antes que un servicio a la defensa de los derechos de los ciudadanos (Kalmanowiczki: 1998).

Estado y al control social que a la protección y garantía de los derechos de las personas y la ley.

Ahora bien, trazar –como proponemos complementariamente– una visión histórica de la institución recuperando también la mirada y los saberes de los propios policías al momento de dimensionar las diferentes rupturas que determinan la forma que asume el espacio policial hoy, suma otro nivel de complejidad a este abordaje. Que sean los propios policías quienes hablen de la institución y su historia, representa un punto de partida para comenzar a problematizar las concepciones meramente instrumentales de la policía (Monjardet, 2010) donde se la puede observar objetivizada ya sea como herramienta del Estado, del orden jurídico o bien de la burguesía en tanto clase dominante.

Por el contrario, en el relato de los policías encontramos variadas formas de pensar la historia de la institución y los hitos que la constituyen –las que, de algún modo, van conformándose también en diferentes “sensibilidades legales” (Geertz, 1992)–. No obstante ello, más allá de su alto grado de heterogeneidad, el elemento en común que tienen todas estas visiones divergentes consiste en sostener una primera mirada general que distingue entre un *antes* indiferenciado y cuasi mítico, y un *presente* en descomposición. Esta mirada es recurrente y atraviesa los distintos grados. En la misma, se añora románticamente un pasado mejor en el que la policía podía *trabajar libremente* y sobre la base de un cuerpo de trabajo unificado por oposición a un presente decadente. Ahora bien, cuando se indaga con mayor profundidad es posible observar la definición de distintos hitos históricos constituyentes de esa diferenciación radical.

Así por ejemplo, un hito frecuentemente mencionado, con una valoración muy positiva, es el acuartelamiento del año 1987<sup>26</sup>. En el relato de los policías este hecho se revela como un signo de unidad. Como contraparte, el presente asoma como un tiempo en donde resulta imposible pensar en el desarrollo de ese tipo de lazos. Este tipo de discursos es común en policías con antigüedad suficiente como para haber

---

<sup>26</sup> Sobre finales del año pasado se produjo un importante acuartelamiento en la Jefatura de Policía en reclamo por salario y condiciones de trabajo. No obstante este hecho quedó por fuera del período en el que realizamos trabajo de campo.

vivido ese hecho histórico pero que, aún dentro de la jerarquía que implica la antigüedad que se posee, no ocupan lugares centrales dentro de la estructura de poder de la policía. Por ejemplo, comisarios jefes de seccionales marginales, tal como lo grafica el siguiente extracto de una observación:

*“El comisario interviene para decir que antes eran más unidos todavía. Curiosamente pone como ejemplo de esta unidad que se ha ido perdiendo, el último acuartelamiento que se dio en 1987 por un pedido de aumento de sueldos, donde se cerraron las puertas y la policía no salió a la calle. Este hecho para el comisario es un signo claro de unidad” (O. n° 15).*

Además de esta falta de cohesión interna, en la diferenciación entre ese pasado idílico y un presente incierto, vuelve a tener un papel ciertamente importante lo que los policías entienden como falta de respaldo político y judicial a su tarea, lo cual se traduciría en una imposibilidad para *trabajar libremente*. Esta mirada trasciende a todas las generaciones y jerarquías. En la entrevista n° 21 encontramos planteos en ese sentido en policías que actualmente cumplen funciones de disponible<sup>27</sup>:

*“yo trabajaba en lo que se llamaba las unidades especiales, muchas cosas, como en las películas, como por ejemplo qué se yo, ir con un compañero mucho más grande que yo, simulando que era el amante que quedó embarazada con análisis de embarazo, eh, que necesitaba un turno para el aborto, me entendés, porque sabíamos que ella estaba haciendo abortos ilegales y estar ahí a punto de que te pongan la sonda y los otros que no entraban con la orden de allanamiento, eh, trepar los techos porque la gente no te quiere abrir y tenés la orden de allanamiento, todo ese tipo de cosas me encantaban, me encantaban antes, no ahora, que antes teníamos como otro tipo de apoyo a nivel judicial...”*

El respaldo judicial –recordemos que muchos policías encuentran aquí la principal instancia de determinación de su propia tarea- es leído en clave de las posibilidades que tendrían los policías para *hacer su trabajo*, en donde se suele destacar el recurso a la utilización de la fuerza por supuesto. Este margen es definido a partir del concepto de *libertad para trabajar*, el cual expresa la manera contradictoria en la que, en los últimos años, los policías viven su pertenencia al Estado. Dos policías

---

<sup>27</sup> Personal abocado a la recepción, tránsito y archivo de todos los documentos que ingresan y egresan de la comisaría.

con destino en el CRE y con más de diez años de antigüedad lo planteaban de ese modo en la entrevista grupal n° 22:

*“lo que era antes la policía y lo que es ahora, cambió, cambió para mal, las leyes cambiaron para mal...”.*

*“**teníamos un poco más de libertad de acción** como que se nos tenía un poco más en cuenta, no como ahora, que o sea, ya te digo primero son los derechos de los otros, después nosotros...”.*

*“prefiero tener que estar pensando en lo que dice la ley antes de proceder, para no hacer lo contrario a lo que te dice un código porque si hiciste lo contrario ya te desvaloriza todo lo que hiciste, por eso que se sacaron los grupos así por ejemplo que se infiltraban en festivales, por eso que se sacó todo eso, ahora es esperar la orden de un juzgado y esperar ‘hacé esto, hacé lo otro’...”.*

Extractos en el mismo sentido podemos tomar de entrevistas realizadas con policías de comisarías. Todos coinciden en que el contexto actual presenta obstáculos para el desenvolvimiento de la iniciativa policial. Por ejemplo, la siguiente con un policía recién ingresado con destino en una comisaría de la zona noroeste:

*“... me dicen algunos que yo tendría que haber sido policía de 20 años atrás... por mi actitud y por mí... qué sé yo... yo soy así... porque **la policía antes trabajaba más libremente**” (E. n° 16).*

De los relatos citados se desprende que las diferenciaciones entre ese pasado *donde se podía trabajar* y un presente *atado de pies y manos* obtienen expresión a su vez en la tensión legalidad/ilegalidad –que, como habíamos dicho más arriba, atraviesa todas las instancias de actividad policial- que marca, en gran medida, la cotidianidad policial al presentar límites y contornos a lo que se entiende por *iniciativa policial*. El Estado, sus múltiples dimensiones, la ley y el derecho, son comúnmente pensados en y desde márgenes que incorporan prácticas legales y prácticas ilegales, tales como las anteriormente mencionadas de *caminar derecho* y la *picardía*, lo que, de algún modo, vuelve infructuoso distinguir entre legalismos e ilegalismos ya que tanto unos como otros estructuran y se confunden en la actividad policial. Así es que, en el contexto actual, en muchos casos los márgenes previstos por la ley son vistos como claras limitaciones de la *iniciativa policial*, la que correría por márgenes paralelos a lo que dictan protocolos y manuales de procedimiento.

Presentamos otro fragmento de la entrevista n° 21 con la *disponible* de una comisaría céntrica que argumenta en este sentido:

*“si no lo hacés en el ámbito de la ley no se puede investigar nada, no se puede investigar nada, antes sin ir más lejos, veías alguien de una casa, te parecía sospechoso y lo traías para averiguación de antecedentes, y ahora es muy limitado eso, es muy limitado...”*.

La iniciativa policial, ya bien lejos de una concepción instrumental de la institución, representa (o más bien, siendo fiel a la entrevista citada, representaba) una pauta de funcionamiento que no necesariamente se corresponde o restringe a la aplicación de la ley, la que es definida claramente bajo una relación de exterioridad respecto de la labor típicamente policial, llegando inclusive a representar un claro obstáculo, tal como se desprende de las entrevistas 16, 21 y 22. La tarea policial puede llegar a ser una cosa y la ley otra distinta, desfasaje que se habría pronunciado en la última etapa. Volvemos a encontrar este argumento en la entrevista n° 19:

*“esta semana mirá, un ejemplo así qué se yo, buscan a alguien y vos sabés que esa persona sabe exactamente donde está, o sea, vos tenés identificado, por, por, por, al autor del hecho, y vos sabés tenés dos, él mató a alguien yo sé que vos sabés dónde está, y hace veinte años atrás te hubiese hecho decirme donde está, hoy no podés... ¿me entendés, en qué cambió?”*.

Veinte años atrás la policía podía “interrogar”. Veinte años atrás la policía era otra. Hoy la policía cambió. ¿Qué pasó en el medio? Situar el tránsito entre ese *antes* mitificado y un *presente* crítico implica la identificación de determinadas rupturas históricas que otorgan sentido a la orientación finalmente asumida por esta transición. Si bien la memoria va construyendo un pasado donde los fragmentos se superponen casi anárquicamente, los mismos son presentados claramente como elementos explicativos de un *presente* problemático. Sin dudas, la primera y más fuerte referencia histórica que surge es la de la última dictadura militar. En forma secundaria, se mencionan otras rupturas como los gobiernos provinciales de Jorge Obeid (1995/1999; 2003/2007) y Hermes Binner (2007/2011) y sus intentos de reformas.

El hito, entonces, que surge en forma constante y que marca preponderantemente la historia reciente de la institución, es la última dictadura militar. Con respecto a la dictadura se da un doble movimiento, se parte de reconocer

que *“la policía es otra... que la gente que está no es la misma que hace 30 años atrás, que dejemos de mirar el pasado”*, al mismo tiempo, que se reconocen las que son consideradas como virtudes del modelo organizativo de la policía característico de períodos militares. Esto se vería, por ejemplo, en la disciplina. En la entrevista con un comisario -ex instructor- este punto se volvía explícito:

*“ahora no se puede usar la disciplina y que eso era bueno, porque **forjaba el temperamento** para las situaciones futuras en donde podía recibir agresiones verbales, etc. y que esa formación del carácter hacía que el policía no actuara impulsivamente, que manejara su carácter y que ahora eso no está...”* (E. n° 8).

El carácter militarizado de la instrucción expresaba, en última instancia, una identificación –tanto para una mirada externa como para la propia de los policías- entre las fuerzas armadas y la policía. Este reconocimiento puede ser leído en varios fragmentos de la entrevista n° 25:

*“Hoy por hoy, un pibe, vos para un pibe de 16 años... le preguntás qué es la policía y dice ‘sí... porque la policía metía los desaparecidos’ pero es una generación que ya no existe”*.

Ahora bien, lo que nos resultaba significativo al momento de realizar trabajo de campo e indagar sobre estas cuestiones a los policías entrevistados era que el hecho de que se identificase el accionar de la policía con las fuerzas armadas, generaba asimismo una simpatía (casi una vinculación mágica, podríamos decir) con el gobierno militar, construida sobre la base del mismo proceso de identificación que se daba entre las fuerzas armadas y de seguridad. Y, sobre todo, que esto resultaba válido también para las jóvenes generaciones de policías. Otro tramo de la entrevista n° 25 aporta en ese sentido:

*“... en tu mundo actual, lo primero que relacionás con la policía... cuando el policía.... mmm... 19 años que está parado en la esquina que, a lo mejor, nada que ver. Lo mismo creo que pasa con esto. Lo mismo creo que pasa con esto. En ese sentido también... ‘sí, porque acá, porque esto, porque lo otro’. Son todos trascendidos. O sea, acá si vos no te sentás, estudiás y te cuentan y te dicen, no te podés quedar ni con una historia ni con la otra. O sea, eh... lo que es por parte de derechos humanos, ellos tienen sus desaparecidos y por lo que, por lo que es parte de la policía, nosotros tenemos nuestros muertos, los del colectivo<sup>28</sup> y todo eso y...*

---

<sup>28</sup> Se refiere a los policías víctimas de un atentado cuando regresaban de cumplir funciones adicionales en el estadio de Rosario Central en Setiembre de 1976.

*pero queda todo mezclado ahí...”.*

Como supuesto efecto de las reivindicaciones de organismos de derechos humanos que afectarían a la policía en relación con su rol durante la dictadura, se desarrollaría, según la visión de los mismos policías, una trama confusa en la que la sociedad construiría una imagen sobre la responsabilidad de la policía que sería errónea. No obstante, al interior de la propia policía, esta oposición dictadura/derechos humanos, en actores que directamente no tuvieron vinculación alguna con el terrorismo de Estado, también termina generando una identificación estrecha con las fuerzas armadas. Muy probablemente esta identificación exprese políticas institucionales, ya que difícilmente resulte casual la apelación al “colectivo” en entrevistas con jóvenes suboficiales recientemente egresados, símbolo que posiciona a la policía claramente en un entramado que en principio era confuso y que, por otra parte, es conmemorado anualmente en uno de los actos más importantes que desarrolla la institución en el espacio público de la ciudad de Rosario.

Sin embargo, a lo largo del trabajo de campo también pudimos relevar posiciones divergentes. Dos extractos de la entrevista mantenida con un policía con más de diez años de antigüedad, muestran una distancia con esta visión, refiriendo de la siguiente manera a las percepciones que tienen sus compañeros acerca de este período:

*“...esa separación, a veces, se confunde también acá adentro. O sea... para muchos de mis compañeros todos los desaparecidos son todos delincuentes y son cosas totalmente distintas” (E. n° 27).*

*“tienen... tienen todavía esta confusión de lo que es derechos humanos, de lo que son desaparecidos con lo que son delincuentes, que son dos cosas totalmente distintas. Esa separación no la tienen” (E. n° 27).*

Así, con mayor o menos simpatía, la policía habría sufrido sucesivos impactos determinados por la forma en que la sociedad argentina *salió* de la dictadura militar. Los mismos surgieron con recurrencia en las entrevistas mantenidas con miembros del CRE:

*“...no fuimos parte, porque nosotros no fuimos parte del ejército, de la fuerza aérea o de la marina, nosotros fuimos también usados por ellos, porque nosotros*



*no tomamos decisiones porque no se hizo nada por decisión propia, por motu proprio, fue órdenes emanadas de un gobierno que, mal, bien, le guste a quien le guste, era el poder, y nosotros debíamos obedecer esas ordenes pero a raíz de eso nunca se reorganizó el diálogo con la sociedad y a raíz de los sistemas políticos, que bueno todos sabemos, que ideológicamente no comparten las fuerzas armadas como parte del poder, erradamente, porque las fuerzas armadas cumplen una función dentro del gobierno, pero la policía, pienso que, por supuesto, el ejército y las demás fuerzas armadas también, hoy están totalmente destrozadas y vapuleadas” (E. n° 18).*

Todo ello va decantando en una visión que, más allá de los matices, sitúa a la policía en una posición de *juzgada, perseguida y martirizada* en el contexto de recuperación de la democracia. El desarrollo de este tipo de nociones consolida, al interior de la policía, una visión global de la sociedad bajo la cual la relación que mantiene la policía con la misma es sumamente conflictiva (reforzando la siempre presente noción de exterioridad de la policía con respecto a la sociedad). Así, encontramos en los apuntes tomados del Diario de Campo n° 16 que la mencionada *herencia* que reciben de la dictadura continúa generando una serie de malestares aún entre las camadas más jóvenes:

*“En una charla con agentes del Comando en el casino de la Jefatura, ellos nos manifestaban un posicionamiento ambiguo. Mientras uno intentaba desprenderse de lo actuado por la policía en la última dictadura militar diciendo que ellos pertenecen a otra generación y que es la presidenta<sup>29</sup> la que insistentemente vuelve a insistir sobre el tema, cuando ni a ellos ni a la sociedad les importa, sino que, como ‘los judíos’ o como Chile, todo el mundo quiere mirar para adelante; el otro ensaya una justificación apelando al hecho de que las órdenes de combate a la guerrilla les fueron dadas a las fuerzas armadas por un gobierno democrático, y pone el énfasis en enfocar los años previos a 1976. Dice no estar de un lado ni del otro, pero que le gusta que se considere todo el proceso. El otro, en cambio, sostiene solamente que le da bronca cuando le dicen ‘policía represor’ y él apenas había nacido en 1976”.*

Posteriormente a la ruptura que implicaría la transición a la democracia, asistimos, siguiendo el relato de los policías, a largos años de amesetamiento que se ven alterados por un nuevo quiebre recién en el **2001**, quiebre que es asociado a los distintos ensayos de **reforma policial**<sup>30</sup> en la provincia de Santa Fe. Esta ruptura es enfatizada sobre todo por policías menores de 40 años pero que ya llevan, por lo

<sup>29</sup> Se refiere a la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.

<sup>30</sup> Para un análisis detallado de los intentos de reforma policial en la provincia de Santa Fe, ver Cuenca y Sokol, 2011.

menos, más de 10 años en la institución. Encontramos esta mirada en la entrevista que realizáramos a un oficial con destino en una comisaría de la zona sur nos decía:

*“En el 2001 también hubo un quiebre, eh, cambia prácticamente todo lo que es la estructura de la policía vieja. Dentro, o sea, pero fue algo así, fue un clic, no fue una decisión política ni nada. Fue un clic, en el 2001 la policía hace así (indica con las manos un vuelco total) y se va ya directamente de un extremo al otro, de lo que era ultraconservador a ultrademocrático” (E. n° 27).*

Del mismo modo que la relación con la sociedad es vista como una relación de exterioridad, todos estos cambios son vividos como efectos del accionar de fuerzas externas a la propia policía que la institución va, como puede, absorbiendo. En esa absorción, el mismo perfil de los policías se va transformando. El oficial recién citado ampliaba en este sentido:

*“...tenemos el síndrome de la nena castrada: cumplió 18 años y cuando salió se fue al otro extremo. Bueno, con la policía pasó eso. En el 2001 hubo un quiebre. O sea, hubo un quiebre muy fuerte de lo que el ‘policía autoritario’, el ‘policía de calle’, el ‘policía firme’ a lo que es el ‘policía cualquier cosa’. Ese quiebre se dio en todos los niveles. En comisaría y todos. Vos, hoy, le preguntás a un policía que como era 10 años atrás y te va a decir ‘hace 10 años atrás esto era otra cosa’...”.*

Las interferencias producidas desde afuera, tanto las representadas por gobiernos militares como por gobiernos democráticos, generan reacomodamientos que no serían los buscados por la propia institución, cuya “dinámica natural” se vería de ese modo obstaculizada. Encontramos claramente expuesta esta visión en el siguiente fragmento de entrevista:

*“Fue el año 2001... 2000/2001 tuvo, hubo ese quiebre en la policía. No hubo ni cambio de gobierno ni nada. Fue, digamos, directamente un quiebre institucional que se dio, no sé si por una camada que entró o la verdad que no me acuerdo. Pero sí... hubo un cambio muy... y se sintió. Se sintió porque mucha gente, eh... digamos... que siempre estaba en los mismos lugares, se ha ido a otros lados. Gente muy tradicional de Comando, de otros lados... se iban, se iban” (E. n° 23).*

Con mayores o menores precisiones, el 2001 es señalado recurrentemente como un punto de inflexión. Ahora bien, lo que sí resulta claro es que del quiebre que es representado como un hito en el año 2001 emergen las rupturas representadas por los gobiernos del justicialista **Jorge Obeid** y del socialista **Hermes Binner**. A partir de estos gobiernos se comenzarían a decantar distintas formas de ser policía que muchos

funcionarios entienden como el *policía cualquier cosa*. Lo que en la memoria de los policías más jóvenes aparecía como un *antes* idílico y un *después* desarticulado, se carga de sentidos cuando los comisarios, sobre todo, encuentran referencias y coyunturas históricas en cada una de estas etapas. Valen los siguientes apuntes tomados durante una observación en una comisaría barrial como ejemplo de ello:

*“El ‘antes y después’ que establece un comisario de la zona noroeste es un ‘antes y después’ marcado por la gobernación del ‘maldito Obeid’. Antes de Obeid y sus reformas, la policía funcionaba bien. Con estas medidas, se fue perdiendo la esencia del ‘ser policía’. Como característica de esta esencia afirma que para ser policía se necesitaba tener un carácter fuerte (la escuela podía funcionar como filtro para aquellos que no poseyesen ese carácter). Otra diferencia con el ‘antes’: pequeñas faltas (no ir a un servicio, volver con el móvil sucio) eran penalizadas con la cárcel. Plantea que eso en algunos casos podía ser exagerado (‘porque no van los choros y vas a meter preso a tu gente que es poca porque tiene la oficina sucia!?!?!’, se pregunta). Ahora, en cambio, no hay sanciones. Las faltas únicamente van a tu legajo pero nada más. Con la nueva ley, no hay más puntaje a fin de año, no está más la calificación que hacía el comisario de tu desempeño. Entonces esto hace, según el comisario, que nadie haga nada y que la disciplina en la fuerza sea mala. ‘Antes era otra cosa la policía. No me gustan los excesos pero sí el respeto a la autoridad y la ley’, concluye el comisario (O. n° 15).*

Los procesos enunciados por el comisario en este registro (al margen de las caracterizaciones políticas) se expresaron en diferentes intentos de reforma policial iniciados desde el Estado provincial, principalmente durante estas dos últimas administraciones, los cuales se inscriben en el marco de una serie de reformas que apuntaron a la transformación del sistema penal integralmente. La más significativa y global es, sin dudas, la modificación del Código Procesal Penal a la que estamos asistiendo y que implica el fin del sistema inquisitorial. En el sistema inquisitivo el proceso judicial representa una suma de pasos (cuya etapa central es el sumario escrito y secreto) tendiente a confirmar la hipótesis de la responsabilidad penal original del acusado. En ese modelo, el juez concentra las funciones de investigar, acusar y condenar, siendo característico del sistema que durante el proceso no se incorpore a la víctima. En nuestra provincia, con el comienzo del proceso de reforma procesal penal –asentado sobre la instauración del juicio oral, la consagración de los fiscales como instructores de las causas y la introducción de la figura del querellante– se modificaría esta situación. El mismo se encuentra al momento de escritura de esta tesis todavía en fase de implementación.

Ahora, si hay que buscar un origen del discurso de la reforma en lo que respecta a la policía en particular, podemos encontrarlo en la primera gobernación del justicialista Jorge Obeid (1995/1999), donde la plasmación central de su política reformista se dio con la creación de la Dirección Provincial de Asuntos Internos<sup>31</sup> y las Juntas Barriales de Seguridad Comunitaria. Este impulso primigenio no tuvo continuidad en el tiempo ya que la administración de su sucesor, el también justicialista Carlos Reutemann (1999/2003), tuvo una impronta claramente antirreformista a partir de la cual los impulsos reformadores fueron frenados, por más que ambos gobernadores perteneciesen al mismo espacio político.

En esta línea, Máximo Sozzo (et al. 2010) señala que si bien el primer gobierno de Obeid es tímidamente reformista, mientras que el posterior de Reutemann es definidamente contrarreformista, es recién con el segundo gobierno de Obeid cuando se da una profundización del reformismo producto de otro clima político y cultural. Entre las iniciativas de este nuevo período figuran la creación del Instituto Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe y la sanción de una nueva Ley de Personal Policial.

Por nuestra parte, preferimos ubicar el proceso de transformación al que estamos haciendo referencia en una única etapa con sus inicios en la gestión del gobernador Jorge Obeid (2003/2007) y continuado durante la gobernación de Hermes Binner (2007/2011). Decimos esto porque entendemos que Binner continúa la incipiente política reformista implementando las medidas previstas por Obeid (Creación del Instituto de Seguridad Pública, Ley de Personal Policial), llevando a cabo la mencionada reforma del Código Procesal Penal y creando en el 2007 el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad en el año 2009.

Entre las estrategias reformistas a nivel policial correspondientes a este segundo período, que de acuerdo a nuestra lectura abarca el segundo gobierno de Obeid y el de Binner, se destacan en principio dos tendientes fundamentalmente a la profesionalización de los miembros de la institución y a una morigeración de las implicancias del denominado “estado policial”.

---

<sup>31</sup> Para un análisis de la creación y funcionamiento de la Dirección Provincial de Asuntos Internos, ver el trabajo de Armas et. al, 2011.

Por un lado, la Ley 12.333, promulgada en el 2004, de **creación del Instituto de Seguridad Pública Provincial (ISEP)**<sup>32</sup> que estipula que todo aspirante a ingresar a la policía debe realizar una carrera terciaria de 2 años vinculada con el área de seguridad. El ISEP concentra y reemplaza a la Escuela Superior de Policía, la Escuela de Cadetes de la policía de la provincia y los Centros de Instrucción en Destino, que venían funcionando bajo distintas denominaciones desde el año 1942.

Esta ley, de acuerdo a la encuesta realizada por el Programa Delito y Sociedad, tiene un alto nivel de conocimiento, 7 de cada 10 policías santafesinos manifiestan conocerla, siendo las valoraciones negativas solamente de 4 cada 10. Estos datos se contraponen con la percepción que tenemos a partir de la experiencia de campo, donde esta reforma aparece como el principal elemento explicativo de una serie de hechos que son considerados claramente negativos: así, la falta de preparación técnica, la pérdida del sentido de la disciplina, una formación exclusiva en derechos humanos -elementos todos que serían característicos de la formación post-ley- explicarían, en gran medida, la situación de mal funcionamiento por la que atraviesan tanto las comisarías como el CRE. En los apuntes tomados de nuestro diario de campo que recolectaban una conversación informal con un comisario y un oficial pertenecientes a la misma comisaría de zona norte encontramos expuesta esta hipótesis:

*“Entre las falencias que menciona el comisario pone fuerte énfasis en la formación. Marca que **en la actualidad se ve solamente derechos humanos y nada de ‘academia’**. En este sentido es que se hablaría mucho de que la policía reprime pero, en realidad, no tienen formación en artes marciales, por ejemplo. Estos quiebres implican que no se tenga la preparación física que tenían antes. Cuando plantea estas posiciones reiteradamente se justifica diciendo ‘ojo que yo no estoy con la represión ni nada de eso, ni con los abusos ni nada, me gusta el derecho, me gusta la democracia’”.*

*“Por su parte, el agente marca que antes los vigilantes te enseñaban las cosas con las que te ibas a enfrentar, que aunque en la realidad siempre eran diferentes, ellos ya iban preparados. En cambio, ahora quienes dictan los cursos no saben nada, más allá de que puedan saber sobre seguridad, sobre el trabajo del policía no saben nada. Ellos no saben lo que es tratar con choros o cagarse a tiros o meterse en una villa” (D. C. n° 9).*

---

<sup>32</sup> Para un análisis detallado de este proceso de reformas en particular y del grado de avance en su implementación véase Ugolini, 2011 y Bianciotto, 2006.

La etapa previa a la puesta en funcionamiento del ISEP es vista como una etapa donde se privilegia el entrenamiento físico y técnico, en lo que en forma nativa se denomina *academia*. Las reformas, por el contrario, habrían puesto un énfasis excesivo en la formación en derechos humanos: *“en la actualidad se ve solamente derechos humanos, derechos humanos y derechos humanos y nada de ‘academia’”*. Reforzando esta concepción, encontramos el siguiente fragmento expresado por el comisario -ex instructor- citado anteriormente:

*“No, no... te explico y... lo entiendo... Lo entiendo yo trabajé 5 años en la Escuela de Policía, de instructor. O sea, formé policías. Hace un par de años... no los de ahora, porque los de ahora no me aguantaban, era bastante cargoso”* (E. nº 8).

El quiebre al que hacíamos referencia anteriormente aparece ahora claramente visualizado en la creación del ISEP, lo cual en la óptica de algunos comisarios, explica principalmente las graves falencias en disciplina que hoy atraviesan a la institución. Lo que resulta además un elemento común en todos los relatos que reproducimos, es que la formación aparece como un “saber técnico” de cuyas posibilidades de reproducción, la policía fue expropiada, reactualizando una visión que entiende los cambios como efectos del accionar de fuerzas externas a la propia policía que la institución debe, de algún modo, absorber. En la entrevista nº 6 así aparece fundamentado por otro comisario:

*“La formación del policía tiene que estar en manos de policías, de los que conozcan el oficio. Si la formación de médicos está a cargo de médicos y la de bomberos a cargo de bomberos ¿por qué la formación de policías está a cargo de civiles?”*.

En la misma sintonía, otro comisario nos dirá que:

*“No quiere que vuelvan los militares, prefiere la peor de las democracias antes, pero cada cosa tiene que estar en su lugar: el policía hacer de policía y el antropólogo de antropólogo”* (O. nº 15).

Por otra parte, la **Ley del Personal Policial nº 12.521**, promulgada en el 2006, realiza modificaciones en la jerarquía policial, agrupando al personal en un cuadro único. Esta reforma rompe con el modelo militarista tradicional donde los oficiales y suboficiales aparecían en compartimentos estancos y separados. La nueva ley pretende profesionalizar el modo de hacer carrera en la fuerza e introducir variables

de ascenso que vayan más allá de la antigüedad y la ausencia de sumarios internos, como ser por ejemplo la formación profesional.

La nueva ley prevé que los grados que integran la escala jerárquica policial se agrupen en un cuadro único, con las denominaciones siguientes:

**GRÁFICO n° 3: Estructura jerárquica policía de la provincia de Santa Fe**

- 1.- Suboficial de Policía
- 2.- Oficial de Policía
- 3.- Subinspector
- 4.- Inspector
- 5.- Subcomisario
- 6.- Comisario
- 7.- Comisario Supervisor
- 8.- Subdirector de Policía
- 9.- Director de Policía
- 10.- Director General de Policía

Al igual que lo acontecido con la creación del ISEP, para la mayor parte de los policías la nueva ley también representa un quiebre en tanto unifica el escalafón policial en una sola carrera. En este contexto, durante una observación (O. n° 15) en una seccional de la zona noroeste, su jefe nos planteaba que *“con estas medidas también se fue perdiendo la esencia del ser policía”*. Afirma, así, que una condición básica es tener *“alma de policía”*. En este aspecto, el comisario vuelve a insistir: *“Obeid destruyó a la policía con sus reformas”*. En su discurso, la policía representaría una realidad en la cual *“no cualquiera puede ser oficial, tal como lo propone la nueva ley”*, dando a entender que no todas las personas que ingresan a la institución tienen las cualidades como para trabajar de oficiales. En nuestro diario de campo, encontramos expresiones de policías del CRE con menor antigüedad y rango que refuerzan esta posición:

*“En entrevista con dos agentes del Comando, enfatizan al igual que la mayoría de los policías entrevistados, un ‘antes’ y un ‘después’ ubicable en los últimos años. Afirman que ‘antes’ se respetaban las jerarquías y ahora ya no. Ambos coinciden en añorar aquellos años. Ahora los que entran, entran con otra autoridad. Marcan la importancia de la disciplina. Los dos coinciden en añorar los momentos en que existía la distinción entre ‘personal de tropa’, ‘suboficiales’ y ‘oficiales’, ya que hoy con la nueva ley eso está más confuso y pocas veces se respetarían las jerarquías...” (D. C. n° 16).*

Es así que para muchos policías directamente se ha entrado en un terreno confuso, en el que no existen mayores precisiones o certezas. Siguiendo lo ya dicho, en la entrevista n° 25, el suboficial con destino en una comisaría de la zona sur decía al respecto:

*“...la Ley Orgánica Policial era del 72, la que teníamos nosotros, que era militar. Esa... se estuvo... se retractó en lo que fue la administración de Obeid, con la Reforma Policial, la reforma en los reglamentos... y... estuvo en un 70% aprobada. O sea, la policía, hoy por hoy, no tiene reglamento. Está entre el reglamento viejo y el reglamento nuevo. No son ni agentes de policía ni suboficiales de policía. No se sabe dónde están parados”.*

Esta última cita nos da el pie para -más allá de los efectos que tuvo sobre la percepción de los policías, y en particular sobre aquellos que, como los comisarios, ocupan puestos jerárquicos- relativizar los alcances de este plan de reformas. En efecto, para muchos policías estos cambios no se reflejan en la práctica y, de acuerdo a los datos brindados por la encuesta implementada por el Programa Delito y Sociedad (Primer Informe de la Encuesta Policial 2007 “Experiencias, representaciones y opiniones de los policías de la Provincia de Santa Fe”), más de la mitad de los funcionarios policiales directamente desconocen los alcances de la reforma. En dicha encuesta, dentro de los que manifestaron conocimiento, casi un 60% entre los suboficiales y un 53% de los oficiales respondieron que sus consecuencias han sido negativas. Más allá del lugar que, institucionalmente, se le busca dar al mérito y la formación profesional, en la visión de la gran mayoría de los policías aflora con recurrencia que *algunos entran para suboficiales y otros para oficiales*, por lo que la supervivencia de esta distinción podría ubicarse como otra más de las manifestaciones de añoranza de un pasado ya superado.



Ahora bien, otro punto significativo de la nueva ley radica en su artículo 29 donde se relativiza la obligación de portar arma reglamentaria las 24 horas (principio estructurador del “estado policial”<sup>33</sup>), disponiendo que el personal con autoridad policial está obligado a portar arma de fuego durante el tiempo de prestación del servicio, sin especificar qué debe hacerse cuando el funcionario se encuentra de franco y si el mismo está obligado o no a intervenir en tales circunstancias. Si bien dicha modificación significa un cambio importante en las prácticas policiales, en la encuesta recién citada se muestra claramente cómo a pesar de los cambios, una proporción muy significativa –casi seis de cada diez– de los funcionarios policiales se manifestó de acuerdo con la obligación de intervenir las 24 horas del día, aún encontrándose de franco; mientras que en lo referido a las intervenciones efectivas estando franco de servicio, la proporción de funcionarios que manifestaron haber intervenido al menos una vez para evitar un delito en su carrera es también importante: 64,8%; mientras aquellos que a pesar de la reforma afirmaron continuar portando el arma las 24 horas representan el 64,1%.

Los datos que brinda esta encuesta se corresponden con el relato de los policías donde la vigencia del “estado policial” es vivida –aun en un contexto post-reformas– de diferentes y ambiguos modos. Ante la comisión de un delito cuando se está franco de servicio, la primera opción para el policía es no intervenir. Los siguientes fragmentos representativos de esta idea fueron extraídos de la entrevista n° 21:

*“nosotros tenemos una ley, que es nuestro reglamento, una ley, no, nos autoriza a realizar ciertas cosas, como también estamos, eh, nos rige el código procesal de la provincia, en una de nosotros tenemos ciertas funciones que las rectifica, sea, y cualquiera siendo policía, de seguridad, que porte arma, o algún ciudadano que pide ayuda tiene que proceder, eh, hoy por hoy con la reforma tenemos que, si estamos de civil y no nos conocen no tenemos la obligación, antes sí, vos sos*

---

<sup>33</sup> La Ley de Personal Policial define al “estado policial” como “... la situación jurídica que resulta del conjunto de deberes y derechos establecidos por las leyes y decretos, para el personal policial de todos los escalafones”. Dentro de este conjunto de derechos y obligaciones, Tiscornia y Olivera destacan que el estado policial y su consecuente obligación de portar armas constituyen “otra de las normas que favorecen el exceso en el uso de la fuerza. Este mandato legal, que obliga a arriesgar su vida y su integridad física durante las veinticuatro horas del día, si bien puede ser explicado por motivos operativos (...) ha derivado, en la práctica, en una obligación irracional de enfrentar el delito usando fuerza letal, en cualquier circunstancia, provocando muchas muertes en los casos en los que intervienen policías de franco” (CELS, HRW/A, 1998: 9).

*policía tenés que proceder sí o sí, porque sino tenés un incumplimiento como funcionario público...”.*

No obstante, en la misma entrevista paradójicamente son resaltadas aquellas acciones donde efectivamente se interviene sin que sea imperativo hacerlo dado el nuevo ordenamiento jurídico:

*“y si eso depende del coraje que tiene cada uno y cómo va a reaccionar cada uno, no todos reaccionan cuando te dicen, vos estás parado en la esquina, quizás esperando el colectivo para irte a trabajar, te dicen están robando allá en la otra esquina, hay algunos que reaccionan, lo primero que hacen agarran y llaman y esperan que llegue alguien para dar colaboración y si no salen corriendo y que sea lo que dios quiera, eso depende la reacción de cada uno...”.*

Entre estas reacciones anteriormente citábamos el ejemplo de un policía de civil que había intervenido ante un arrebato sufrido por una mujer que se encontraba con su bebé, Chiara, en brazos. Dicha reacción había motivado que las policías que nos relataban el hecho definiesen a este funcionario como *policía de alma*. Retomando este ejemplo, podemos observar cómo, a partir de los relatos transcritos, nos encontramos con que muchas veces la trasgresión de la normativa que desestructura el “estado policial” es revestida de la categoría de heroico por parte del personal de la fuerza. Más allá de las reformas, los relatos que dan cuenta de acciones que no necesariamente son contempladas en este tipo de reformas aparecen asociados con un alto componente identitario. En ellos la acción transcurre en situaciones de comisión de delitos donde los policías se encontraban de franco, sin la obligación reglamentaria de intervenir en su represión y en las que sin embargo un alto grado de arrojo y compromiso generó que intervenga aún a riesgo de perder su propia vida. Este tipo de relatos buscan impregnar y graficar el desinterés del policía, del *policía de alma* más específicamente, cuando se trata de defender al ciudadano.

No obstante, estas intervenciones tratan, evidentemente, de hechos aislados, lo cual relativizaría asimismo los alcances de las trasgresiones a la nueva norma. De hecho, la nueva normativa, lejos de ser pensada como el quite de una prerrogativa, es vivida también con cierto alivio por parte de los policías, inclusive entre el personal del CRE:

*“...si podés evitarlos, mucho mejor. Ahora, si vos vas en un móvil donde yo estoy expuesto, donde ven un móvil, bueno, que sea lo que dios quiera, llamás por... desde tu celular, pedís gente, que estoy y que lo otro y hacemos lo que tengamos que hacer. Pero... si se puede evitar... y más cuando vas así que... en tu... en tu auto particular... todo eso, si lo puedo evitar, lo evito” (E. n° 23).*

En los hechos, estos cambios normativos son referenciados como un reconocimiento a la seguridad del policía, en tanto el mismo no se encuentra obligado a participar cuando, ante la comisión de un ilícito, ve que las condiciones para su intervención son marcadamente desfavorables. Aparece, de hecho, como un reconocimiento a su integridad: *“se supone que somos personas”*, se suele afirmar.

Por último, completa este ciclo de reformas, la creación en el año 2007 del Ministerio de Seguridad -que establece que la policía, que durante todo el siglo XX había formado parte del Ministerio de Gobierno, pase a depender orgánicamente de este nuevo ministerio a través de la Secretaría de Seguridad Pública- y en el 2009 de la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad.

La conformación del Ministerio de Seguridad generaría un lazo mucho más próximo entre el Poder Ejecutivo y la agencia policial. En este sentido, el nexo entre los jefes policiales y los funcionarios políticos tendería, de acuerdo a esta visión institucional, a acercarse. Por su parte, con la creación de la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad, cuya dirección estaba significativamente a cargo de un civil, el gobierno de Binner buscó generar una estructura dentro del Ministerio de Seguridad que se encargue de monitorear los procesos de investigación y dilucidación de los casos de corrupción que se producen dentro de la fuerza, agrupando bajo esta secretaría a las distintas direcciones de Asuntos Internos. Así, esta nueva secretaría se encargaría en términos generales del diseño, control, fiscalización y acompañamiento de la investigación de los casos de corrupción que se producen en las fuerzas de seguridad. Las investigaciones que desarrolla actualmente el Poder Judicial en torno a la connivencia entre funcionarios policiales de rango alto y grupos de narcotraficantes, evidencian los limitados alcances de estas dos nuevas iniciativas.

En la coyuntura en la cual realizamos trabajo de campo (más allá de todos los cuestionamientos que desde otros sectores políticos y desde la sociedad en general se

venían haciendo sobre la institución y muy lejos de pensar en reformas radicales) el plan de acción del Ministerio de Seguridad ponía un fuerte énfasis en la adquisición de estándares de calidad en la atención del público. Encontramos que esto era replicado sobre todo en el discurso de los comisarios: por ejemplo, en las comisarías céntricas recurrentemente se ponían como ejemplos de la pedagogía implementada por los comisarios a los *retos que les pegan a los empleados que han atendido mal al público*, aparentando ser el principal elemento de conflicto en la cotidianeidad laboral. Así se vio reflejado en importantes fragmentos de la entrevista mantenida con el jefe de una de las comisarías más importantes de la ciudad, cuando hacía referencia a las demandas y necesidades del público:

*“...a veces es imposible esa respuesta pero por lo menos que vean y digan: ‘uy, la pucha, vine a una comisaría, me atendieron bien, me escucharon el problema’ eh?”* (E. n° 26).

Este elemento va definiendo gran parte de las preocupaciones de los comisarios en su relación con el colectivo de policías que tiene bajo su mando y posiblemente explique la apertura que encontramos a la hora de programar nuestro trabajo de campo en cada una de las dependencias policiales seleccionadas. Sobre éstas últimas indagaremos en los próximos apartados.

### III. 2: Dependencias y rutinas: un modelo de organización policial.

#### El Comando Radioeléctrico

La división identificada como “Comando Radioeléctrico” refiere específicamente a las unidades policiales móviles que patrullan las distintas jurisdicciones en que se divide la ciudad. El CRE depende de la agrupación “Cuerpos” y tiene como tarea principal la prevención en la vía pública. Puede actuar de oficio o a partir de las comunicaciones recepcionadas a través del servicio del “911”. De este modo, la totalidad de sus tareas se enmarcarían en lo que Saín denomina como “policiamiento preventivo”. El “policiamiento preventivo” abarca:

*“el conjunto de tareas y actividades tendientes a evitar u obstaculizar la posibilidad o la decisión de cometer un delito, o a identificar la realización de hechos o actos que, dadas determinadas circunstancias y elementos objetivos y concurrentes, pudieran resultar delictivos”* (Saín, 2008: 92).

El personal se organiza en *dotaciones* (mayormente de dos miembros, aunque en ocasiones también pueden ser tres) que se trasladan en un móvil policial. Estas *dotaciones* se agrupan asimismo en franjas horarias o *tercios*. Aproximadamente 20 móviles patrullan durante cada *tercio*. Para cada uno de estos turnos se cumple una jornada de 8 horas con períodos de descanso de 24 horas<sup>34</sup>. Las franjas horarias rotan diariamente –de 06 a 14 hs., 14 a 22 hs. y de 22 a 06 hs. respectivamente– por lo que los agentes no tienen horario laboral fijo.

Tampoco tienen una jurisdicción previamente asignada, ya que el *destino* de cada *dotación* varía jornada tras jornada de acuerdo a lo diagramado por el jefe de tercio. El jefe de tercio además debe ocuparse de asuntos administrativos del personal, como francos y licencias, y constituir el nexo con el jefe del CRE. Según éste último, al momento de realizar trabajo de campo, el total del personal a su cargo era

---

<sup>34</sup> En el año 2012, el Ministerio de Seguridad buscó implementar un cambio en los turnos de trabajo que pasarían de ser de 8 por 24 a 9 por 31, lo cual generó una importante resistencia de los miembros del Comando (los que adujeron que esta modificación afectaría sus posibilidades de realizar servicios adicionales) que incluyó una movilización hasta la sede del gobierno de la provincia en la ciudad de Rosario y el acuartelamiento en la Unidad Regional por más de 20 horas. Disponible: <http://www.lacapital.com.ar/policiales/Como-se-destrabo-la-protesta-de-los-agentes-del-Comando-Radioelectrico-20120929-0028.html> (fuente consultada el 05/11/2012).

de 370 agentes y se trataba de “los 370 hombres que le dan la seguridad a la ciudad de Rosario”.

La descripción que estamos realizando empieza a evidenciar lo que expresaba su jefe ya desde los primeros contactos: “el CRE es una policía dentro de la policía”. En su sede, dentro de la Jefatura Regional ubicada en la zona sur de la ciudad, posee oficina de *disponible* para el manejo de expedientes y citaciones judiciales; la sección interna de *policía adicional* que gestiona los servicios por fuera del horario estipulado; la oficina para el procesamiento de la información estadística, que es –citando textualmente a su jefe– “lo que nos lleva a nosotros a hacer el mapa del delito”, el oficial escribiente del libro de guardia y el sector de la central del 911 para el cual el CRE cuenta con un equipo de policías que ofician como *telefonistas*<sup>35</sup>.

Al interior de esta *policía dentro de la policía* la figura que resalta sin lugar a dudas es la del *operador radial* quien, para los agentes en tareas de patrullaje, representa su contacto con la sede a través del sistema de radiollamada. El *operador radial* es aquel oficial que va contactando a cada dotación e informando sobre los hechos policiales que acontecen, solicitando que se lleguen a determinado lugar o presten apoyo a otro móvil. Es también el que va orientando a los agentes sobre la situación que deben atender a través de los datos que van surgiendo a partir del llamado al servicio de emergencias. Así, si la llamada es originada por un hecho de robo, se van enumerando vestimenta, color de piel y/o algún rasgo físico distintivo de los supuestos delincuentes, el dominio y modelo en el caso de que se transportasen en algún vehículo, todo a fin de que los agentes puedan reconocerlos con rapidez y lograr su detención.

Esta comunicación directa del operador con el móvil sustenta y respalda las posibilidades de acción de cada una de las dotaciones intervinientes. Eso puede desprenderse de las entrevistas que mantuvimos con el por entonces Jefe del Comando:

---

<sup>35</sup> Al momento de realización del trabajo de campo, la sede del 911 se encontraba efectivamente en el edificio del CRE. En la actualidad, la misma ha sido trasladada a la sede del gobierno provincial ubicada en el centro de la ciudad de Rosario.

*“Lo que el operador demanda es un cúmulo de información que necesita el móvil antes de llegar a un hecho, al hombre de calle le llegan los hechos ya filtrados... y no puede ir ciego, necesita saber cómo están vestidos, si tienen barba...”* (E. n° 10).

*“Si el operador brinda pocos datos, a lo mejor llega el móvil, se cruza con los delincuentes y se escapan, pero si se demora en gestionar la llamada, a lo mejor directamente llega el móvil cuando los delincuentes ya se retiraron...”* (E. n° 31).

Así, el *operador* es el encargado de garantizar y filtrar la circulación de información clave sobre el procedimiento en cuestión. El *operador*, mediante la radio, va indicando el proceder pertinente. Esto fue destacado constantemente por los agentes de calle del Comando durante la realización de nuestro trabajo de campo:

*“la radio nos manda el procedimiento, si es un hecho de robo... dónde se robó... la vestimenta como están vestidos, qué armas utilizaron, en qué se fueron y en qué llegaron”* (E. n° 18)

*“él nos tira el procedimiento y amplía y después nosotros trabajamos...”* (E. n° 23).

Lo central de esta tarea radica, entonces, en que el operador va dando determinadas características del hecho en cuestión que resultan fundamentales para proceder y para una representación de la peligrosidad a enfrentar, *“tiene que ser bicho”* –escuchamos recurrentemente- porque hace a la seguridad del móvil. El operador, además, ante un determinado hecho, es quien tiene la posibilidad de disponer de los recursos. Así lo explicitaba el jefe del CRE:

*“Si se mandan uno o más móviles depende del hecho, y eso lo decide el operador”* (E. n° 10).

*“La operatividad depende del operador, tiene que disponer de un orden de prioridades y en función de eso disponer de los móviles que tiene”* (E. n° 10).

Por todas estas características, el puesto de *operador* generalmente es ocupado por un oficial con mucha trayectoria y con lo que los policías denominan como *mucha calle*. Esto era resaltado por el mismo *operador* en funciones, quien fuera entrevistado durante el trabajo de campo:

*“Tenés que tener en la cabeza el mapa de la ciudad, donde están ubicados los móviles, qué móviles ya están abocados a algún procedimiento, dónde hay cortes”* (E. n° 12).

Todos los hechos en que intervienen los agentes de Comando Radioeléctrico son llamados “procedimientos”, los cuales deben quedar registrados a su vez en las “actas de procedimiento” que se labran dando cuenta de los hechos de carácter policial realizados. Estas quedan asentadas, a su vez, en una planilla que se va completando a lo largo de la jornada de trabajo, la “hoja de ruta”. La misma responde a la orientación prevista por el *jefe de tercio*, quien antes de cada jornada, indica ciertos lugares donde indefectiblemente deben patrullar y vigilar. Así, si bien la “hoja de ruta” sufre variaciones todas las jornadas, las mismas no son arbitrarias en tanto responden a patrones definidos. Dentro de estos patrones ya definidos, el patrullaje se orienta casi con exclusividad a las zonas comerciales. A esa conclusión llegamos luego de entrevistar a distintos miembros del CRE:

*“Sí, comercios también hacemos control de estaciones de servicios, es como una cuadrícula que sí o sí tenemos que pasar, dos o tres veces” (E. n° 18).*

*“Sí, hay algunos puntos de referencia que tenemos que pasar sí o sí. Es una cuadrícula que le llamamos, recorrerla sí o sí” “Zonas comerciales. Zonas comerciales sobre todo” (E. n° 18).*

Esto que otrora representaba un problema laboral significativo, parcialmente fue subsanado con la reciente aplicación del monitoreo satelital de las unidades, el que ejerce un control más ajustado del despliegue cada unidad policial en la jurisdicción asignada, según se desprende una de las entrevistas con el Jefe del CRE:

*“ellos saben que están siendo monitoreados, testeados constantemente, ese móvil que cumple la función de la 22 nunca se le va a ocurrir aparecer en función de la 6” (E. n° 31).*

Cada una de las *dotaciones* –unidades de trabajo mínimas en la organización del CRE- cuenta con un *chofer responsable* y un *refuerzo*. El primero, siempre con mayor trayectoria dentro del CRE, está a cargo del móvil policial para su conducción y orientación en la tarea preventiva; mientras que el segundo, con menos antigüedad, asiste, en lo formal, a su compañero, debiendo seguir sus directivas. Las *dotaciones* son mayormente estables, aunque pueden también ser eventuales. Así era este hecho relatado por dos agentes de una misma dotación:



*“... se trabaja siempre con la misma dotación, siempre y cuando el ‘señor’ no esté de vacaciones o no tenga ningún permiso, porque ya el reforzante tendría salir con otro, me entendés, y trabajamos así... siempre, hay algunos que salen con dotación fija y otros que no...” (E. n° 18).*

Pero el CRE es una **“policía dentro de la policía”** no solo por su estructura organizativa interna sino porque, además, sus propios miembros asumen un sentido de pertenencia particular muy diferenciado ya desde los mismos símbolos que lo identifican como parte del CRE, tal como se desprende del siguiente fragmento de nuestro diario de campo:

*“Como el jefe iba a demorar, el subjefe nos invita a esperarlo en el casino, tomando un café. El casino es una habitación amplia, donde hay una barra de bar y mesas no muy numerosas con sus sillas. Allí se encuentran para las comidas o bien para citas ocasionales como ésta. Llama la atención una parrilla en el hogar, el santuario a la virgen rodeado de trofeos deportivos, una mesa oval que preside el amplio salón y los manteles llamativamente azules con el característico leopardo enmarcada en dos rayos, logo del CRE. Este emblema aparece reiteradamente, inclusive en la oficina del jefe al lado de la bandera argentina, aparece una bandera azul con el mismo” (D. C. n° 14).*

No resulta casual la aparición recurrente de este símbolo. Llevar su insignia implica para el personal del Comando cierta responsabilidad diferencial. En la ya citada entrevista n° 25 se nos planteaba:

*“... tener un escudo del Comando era... no sé... era lo máximo. Fue el referente de lo que era la, la policía en Rosario (...). Cuando yo entré también, o sea... perdé cualquier cosa pero no... como me decían mis compañeros, que no vas a querer perder el escudo del Comando porque te mataban. Era como un... símbolo”.*

El escudo que representa el Comando es un símbolo que no solo expresa el prestigio que goza al interior de la policía sino que, además, sintetiza para los policías un modo particular de serlo. Este hecho es resaltado por su jefe:

*“... mucha gente solicita que el personal que va a cubrir ese (...) sea del CRE, te lo da la experiencia, te lo da esa marca registrada, te lo da que la gente entiende que el personal que va a estar en ese patrullero es gente que tiene una experiencia diferenciada al resto (...) y por un respeto que existe que se fue creando con el tiempo, del mismo delincuente que cuando ve un patrullero del CRE sabe que es del CRE, con lo que lleva aparejado eso ¿no cierto?” (E. n° 31).*

El prestigio del que nos habla su jefe tiene dos aristas diferenciadas pero complementarias. Una, la experiencia de trabajo -que como podremos contrastarlo

más adelante, va a ir forjando un tipo de policía muy diferente con respecto al policía con *destino* en comisaría- y la otra, la mirada sobre la misma división que reproducen aquellos a los que le toca “enfrentarse” con el Comando. Así nos era relatado por un suboficial que, entre otras tareas, cumplía funciones en la custodia de detenidos:

*“...el delincuente se jacta de que se enfrentó con el comando o que lo detuvo el comando, ellos mismos lo hacen ver ¿mmm? Es la chapa que tiene el delincuente, ‘me cago, me cagué a tiros con el Comando’ dicen...”* (E. n° 9).

Lo mismo se desprende de nuestros registros, donde el constituirse en una *policía dentro de la policía* con un sentido de pertenencia sumamente arraigado en todos sus miembros, se funda en la percepción de que es el Comando “*el que brinda seguridad a la ciudad de Rosario*” sobre la base de una interacción cotidiana con los *delinquentes*. La forma de esa interacción, en la visión de quien por entonces era su jefe, sigue una lógica estrictamente de *choque*:

*“...son personal directamente eh que van al choque con la gente, o sea, hablando mal así, con la gente, o sea el que va y el que pone primero el, el pecho es el personal más que todo de Comando, son lo primero que llaman y llegan al lugar...”* (E. n° 10)

Son esas veinte dotaciones patrullando las calles las que garantizan el “orden y la seguridad” en todo el tejido urbano. No se trata del prestigio de una repartición virtuosa por la calidad profesional de sus propios miembros, sino del prestigio ganado a fuerza de constituirse en la “punta de lanza” de la policía: “*somos la fuerza de choque, la punta de lanza de la policía*”, “*el Comando actúa en la primera línea...*”, repiten insistentemente sus miembros en cada entrevista. Dicha insistencia nos está hablando de algo más que de una mera descripción de las tareas.

#### El Comando y la “condición policial”: exposición y riesgo

Actuar en la *primera línea* y ser la *punta de lanza de la policía* hacen que la exposición propia de ese posicionamiento resulte constitutiva de la actividad policial en el CRE de una manera muy especial. Si bien se trata de elementos que pueden ser compartidos con otras profesiones (condiciones de trabajo riesgosas no representan

un atributo exclusivo de la policía), en el caso de la policía nos encontramos con que el hecho específico de portar arma y uniforme los ubica como objeto mismo del riesgo. No se trata de eventuales accidentes, como ocurre cotidianamente por ejemplo en la construcción, sino de hechos en los que la policía es deliberadamente blanco de agresiones. A esto Dominique Monjardet (2010) denomina como “**condición policial**”. Una condición que, al igual que lo que ocurre con la clase obrera, es impuesta desde afuera al policía a partir de vestir un uniforme y estar identificado en la vía pública como tal.

En las entrevistas con el personal del CRE, cuando solicitábamos una descripción de la organización y las tareas características de ese *destino* notábamos que dichas descripciones -además de destacar el hecho de que el Comando está en *la calle* y que por tanto se constituyen como *punta de lanza de la policía*- usual y recurrentemente iban asociadas a ciertas nociones fuertemente identificadas con la exposición que la misma situación genera:

*“vos te bajás a identificar y vos no sabés con qué te vas a encontrar... estamos expuestos las 24 horas al día...”* (E. n° 23).

*“estás expuesto a todo, vos no sabés cómo... o te metés en una villa de emergencia, con qué te podés encontrar. Venís sentado adentro del móvil y en el pasillo vos no sabés que... si te van a mat....a disparar, o con qué te van a salir. O si vas a identificar a alguien, vos no sabés si... si está armado o no está armado. Vos no sabés lo que te vas a encontrar en la calle...”* (E. n° 18).

A partir de estos registros empezamos a observar cómo el riesgo físico – lesiones o muerte- es ubicado como contraparte de la tarea de patrullaje en la vía pública y asociado con una de las percepciones más fuertes que pudimos relevar a lo largo del trabajo de campo: la incertidumbre. Así se veía reflejado en fragmentos de la entrevista n° 23:

*“Pero, ya le digo, es, por ahí es bajar un poquito los decibeles, porque ya le digo es vivir muy acelerado, muy acelerado porque vos, uno sabe que sale pero, sale uno de su casa, y sube a un patrullero y está 8 horas o 12 horas arriba de un patrullero y no sabe qué te va a pasar en ese, en ese momento...”*.

“No saber qué te va a pasar”. Era a partir de ese núcleo identificador que muchos de los agentes entendían que el personal abocado al CRE debía poseer

indefectiblemente ciertos atributos específicos vinculados al *arrojo*<sup>36</sup>, el *coraje*, la destreza física y la *temeridad*, por lo que si bien enfatizaban que “*policía somos todos*”, “*todos llevamos el mismo uniforme*”; la experiencia y las tareas que el Comando realiza hace que sean necesarias ciertas cualidades diferenciales. Tal como lo expresaba un ex –miembro del CRE: “*para estar en Comando tenés que ser salvaje... si tenés que subir esa pared, alambrados, no tenés que pensar, tenés que hacerlo... el Comando va de frente*” (E. n° 16).

Las nociones de *riesgo*, *arrojo* e *incertidumbre* emergen entrelazadas y estrechamente relacionadas con esta particular organización de los procesos de trabajo. Se trata de sentidos que se asientan y reproducen sobre la base de un funcionamiento que va definiendo la dinámica policial propia del Comando como *fuerza de choque*, como *punta de lanza* de la policía. Su materialización más radical - de acuerdo a lo que pudimos relevar mediante entrevistas y también, tal como observaremos en capítulos posteriores, observando sus efectos sobre la dinámica cotidiana de trabajo policial- se da en los eventuales enfrentamientos. Esto nos relataba un oficial del Comando que además era responsable de su dotación:

*“nosotros tenemos un segundo, a veces, para resolver algo, a lo mejor en un enfrentamiento pasas de ser el mejor policía a un gatillo fácil, porque a veces, que se yo, un enfrentamiento, un fuego cruzado, al delincuente no le importa si al lado tuyo hay una abuela, una criatura ... (...) entonces me tengo que salvar yo, a él (se refiere a su compañero de dotación) a un compañero, a lo mejor al nene que pasa en bicicleta por atrás y eso todo en segundos, sino estás preparado”* (E. n° 23).

Esta organización diferencial del trabajo policial –que obtiene su momento de materialización más radical en los eventuales enfrentamientos- es retomada por los agentes del CRE para sostener, como estamos viendo, rasgos diferenciadores, especificidades que serían propias de la *dotación* en tareas de patrullaje y que refuerzan el carácter riesgoso de su actividad. En éste último registro, el oficial entrevistado -el cual había expresamente elegido ese destino- nos volvía a plantear en ese sentido:

---

<sup>36</sup> El arrojo no solo expresa valores que circulan entre los policías, sino que también es un elemento valorado por los funcionarios políticos ante el nuevo sistema de ascensos previsto por la ley de personal policial. Fuente disponible en: <http://www.lacapital.com.ar/policiales/No-solo-se-valor-a-el-esfuerzo-intelectual-importa-ser-buen-policia-y-tener-actos-de-arrojo-20130729-0049.html> (consultado el Lunes 29 de Julio de 2013)

*“... lo que sería la parte de Cuerpo eh **está muy expuesto**, muy expuesto a que a, a, a tener un enfrentamiento, a salir herido, a salir con un pedrazo, vivís muy expuesto o sea vos sabés cuando salís pero no sabés cuando llegás...”*

A pesar de estas condiciones en principio adversas, los agentes del CRE entrevistados parecen identificarse fuertemente con las tareas que realizan:

*“por eso, te digo el que está en Comando el que está acá en Comando es porque le gusta... a veces vos no te pones a pensar, vos tenés en un procedimiento y después te cae la ficha de lo que hiciste... yo de noche en la oscuridad interna del pasillo donde no se ve qué te puede pasar del otro lado de la puerta...” (E. n° 22).*

Quienes integran el Comando están allí *“porque les gusta”*. Todo ello hace también al prestigio que tiene el Comando al interior de la policía: *“El comando es el que se caga a tiros siempre”*. *“El comando entra a la villa, pateo puertas, salta tapiales”*. *“En el comando te hacés policía. No hay preparación previa. El comando te hace”*. Relatos como los transcritos representan rasgos diferenciadores considerados como positivos al interior de la policía. No obstante, el choque, el enfrentamiento, y el uso de la fuerza que ello puede implicar hace que también sea habitual la existencia de sumarios internos al personal del Comando. Esta situación obstruye sus posibilidades regulares de ascenso pero refuerza al mismo tiempo un prestigio en el interior de la institución del que carecería el personal de comisaría.

*“Es mejor si no hacés... O cuando te enfrentás con alguien, si te enfrentás a lo mejor se te abre un sumario administrativo, hay que ver cómo le metiste el balazo, si él disparó, si no disparó, un montón de cosas que a lo mejor te terminan perjudicando...” (E. n° 16).*

La experiencia de trabajo de campo dista grandemente de constituirse en una secuencia de hechos de este tipo. No obstante, a partir de la permanencia en un campo cuya cotidianeidad se nos presentaba muy lejana con respecto a posibles situaciones de *riesgo* y mucho menos de *arroyo*, fuimos significando que cuando los policías nos estaban contando acerca de lo riesgoso e incierto de sus tareas, no nos estaban describiendo el proceso de trabajo cotidiano (aunque el mismo puede corresponderse con ello, ciertamente) sino que nos estaban presentando un modelo, una imagen de la tarea policial.

Un modelo ideal de policía que se construye principalmente en base a las nociones de *exposición* y *riesgo* como valores fundantes de la actividad policial. Valores que son asociados tanto a técnicas y saberes específicos del hacer policial como a condiciones de trabajo particulares del sector que refuerzan la **“condición policial”**. El siguiente fragmento de la entrevista mantenida con un cabo con *destino* en una comisaría de la zona sur, resulta gráfico en ese sentido:

*“Uno es policía, uno tiene que cumplir con todas las funciones, para eso uno eligió ser policía y el riesgo que uno corre, sabe el riesgo que uno corre ¿cuál es el riesgo? Que esto no es un trabajo como cualquier otro trabajo, acá uno... o pierde la vida o si, si, quien dice, se porta mal... termina preso, esto no es un trabajo donde te equivocás y el patrón te dice no vengas por dos días, acá uno va preso o pierde la vida”* (E. n° 19).

En suma, lo que pretendemos indicar es que mediante estos relatos lo que los policías nos quisieron transmitir fue la misma **“condición policial”**, la que -en tanto investigadores ajenos al quehacer policial- fuimos orientados a buscar en la calle, con el Comando, y no detrás de escritorios o en el penal de una comisaría.

Así fue, por ejemplo, que en la entrevista con el subjefe de una comisaría de la zona sur, los aspectos de su trayectoria como policía enfatizados eran aquellos vinculados con su paso por el Comando, respondiendo de ese modo al ideal que estamos planteando. En efecto, el siguiente extracto no grabado de dicha entrevista grafica y sintetiza con precisión cómo el personal del Comando entiende su **“condición policial”**:

*“Él tiene vocación de policía y ser parte del CRE es lo que hace a esa vocación. Dice que no se puede comparar la adrenalina que se siente al participar de un operativo. Por ejemplo, él era jefe de tercio y tenía 80 hombres a su cargo, y tenía que tener el temple para manejarlos. Porque en un operativo si a él que era el jefe la sangre le fluye a mil, a un policía que viene detrás, todavía más. Reafirma que nada se puede comparar con estar al mando de 80 hombres, entrar a una villa a realizar una detención, donde los vecinos te arrojan piedras pero uno entra con la determinación de realizar su trabajo. Lo mismo se siente en los enfrentamientos. Allí se demuestra esta entrega a los ideales de la institución, que es lo que él profundamente siente, esta comunión con los objetivos de la institución. No hay situación donde se puedan concretar más que al exponer su propio cuerpo a la balas en el cumplimiento de un operativo. Esto es ser policía, concluye”* (O. n° 5).

Las tareas propias del Comando responden a la vocación del policía y reactualizan el vínculo existente entre el policía individual y los objetivos de la institución. Vocación, adrenalina, entrega, exposición del propio cuerpo a las balas, todo ello resume una forma de ser policía. La conjunción de este conjunto de matices va decantando en un policía que se asume distinto al que conoceremos luego con *destino* en comisaría y en otros sentidos de la función policial<sup>37</sup>. Así lo planteaba el suboficial de la entrevista n° 25:

*“... de lo que se llama grupos de calle, es un policía más duro, está más acostumbrado al choque, más rígido. Inclusive, más apegado a los reglamentos, en la calle a vos te dicen ‘hacé tal cosa’ y vos no te podés poner a discutir, porque son segundos en los que vos tenés que decidir. El policía de comisaría es otra cosa, trabaja a otro nivel. Agarra el procedimiento ese y ya es más... más vago, más... jaaaa.... más mañero pero es más hábil, a lo mejor, en el trato con la gente, porque tiene trato con los detenidos, que... el policía de calle no lo tiene”.*

De los fragmentos transcritos de esta última entrevista, podemos empezar a entrever concepciones divergentes acerca de la función policial que emergen y al mismo tiempo cristalizan en dinámicas diferenciales de trabajo<sup>38</sup>, las cuales van generando una serie de tensiones producto de su mismo desarrollo. Particularmente hay una que se destaca: la mayor productividad de unos intercede en la dinámica de trabajo de otros. En este punto la ambivalencia funcional de la policía como institución –a la que venimos haciendo referencia desde los primeros capítulos- se termina traduciendo en un conflicto de intereses concreto y cotidiano. Vale la extensión del relato de una empleada de la guardia de una comisaría de zona oeste en tanto refleja acabadamente muchas de las tensiones que pudimos observar diariamente en comisarías.

*“....lo del comando es sencillo, por eso el otro día tuvieron conflictos, porque trajeron una señora que no sabían dónde vivía ni como se llamaba, lo de ellos es sencillo, es subirla a un móvil, es traerla acá, hacer un actita y listo, se fueron, pero para vos el trabajo empieza acá y como por ahí que nos traen a los menores, que no estaban haciendo nada, pero como por ahí ellos tienen que hacer número con*

<sup>37</sup> Estamos trabajando sobre construcciones que funcionan al modo de “tipos ideales”. Los matices, las particularidades, son obviadas en función de construir una imagen del modelo de policía característico de cada una de estas dependencias

<sup>38</sup> Uno de los miembros del Comando entrevistados en la E. n° 22 profundizaba en estas diferencias: “En comisarías como que es más ‘me quedo sentado acá, no me muevo a ningún lado’. En Comando no. En Comando lo mantenés encerrado y hacé de cuenta que encerraste a un lobo”.

*la gente que llevan 'si vos tenés que hacer número, tráeme un mayor, porque un menor es mucho conflicto el que nos genera acá', le digo, tenés que citar a los padres, lo tenés que resguardar, lo tenés que, que no le pase nada, es mucha responsabilidad, y bueno, ellos, **es más sencillo levantar a cualquiera en la calle porque por portación de cara, decimos, acá tenés que llevar a todo E. (su barrio)*** (E. n° 14).

Como se desprende de este relato, el **choque de estas lógicas de trabajo** se abre claramente con la detención de personas: el Comando debe “generar” presos para favorecer su productividad -la que es medida en términos cuantitativos, tal como pudimos observarlo en nuestro recorrido por la Oficina de Estadística del CRE (D. C. n° 13), lo cual presionaría para que cada dotación genere operativos inclusive innecesariamente<sup>39</sup>- mientras que por el contrario, en las comisarías esta dinámica de trabajo es cuestionada por cuanto genera ingreso de mayor cantidad de trabajo. El origen de esta antinomia radica entonces en que la lógica que estructura cada una de estas dinámicas de trabajo es claramente contrapuesta: por un lado tenemos ciertos requisitos de productividad meramente cuantitativos que orientan al policía de Comando, en tanto empleado o trabajador, a producir determinada cantidad de detenciones, mientras que la lógica de quienes deben procesar esas detenciones -el “poder trabajar lo menos posible”- confronta con este modelo de trabajo, lo que da origen a una serie de rispideces que son cotidianas en cualquier dependencia policial y que así se vieron reflejadas en nuestras entrevistas cuando preguntábamos acerca de las mismas:

*“lo que pasa es que siempre está ‘sí, ustedes los de comisaría son unos vagos porque no salen nunca a patrullar’, ‘y ustedes son todos unos ladrones’”* (E. n° 22).

Este modelo ideal de funcionamiento (con sus tensiones y contradicciones) está atravesado no por la imposición abstracta del reglamento sino por los vínculos establecidos a partir de relaciones informales, vínculos a partir de los cuales se estructura cotidianamente lo que entendemos como **“condición policial”**. Son muchísimas las instancias -y nuestras observaciones dan cuenta de ello- donde el tipo

---

<sup>39</sup> Durante la visita al departamento de estadística del CRE, su responsable nos decía que las estadísticas de productividad le sirven al jefe para determinar “*quienes trabajan y quienes salen a pasear: haciendo una búsqueda del personal y las actas realizadas, el jefe puede darse cuenta quiénes laburan y felicitarlos en ese caso (con muchas actas uno se gana una felicitación y puede ganar posiciones en un posible ascenso)*” (D. C. n° 13).



de relación entre miembros del Comando y personal de comisaría está determinado no por la jerarquía o por preceptos orgánicos o de funcionalidad, sino por el desarrollo de vínculos informales, tales como el *“si vos tenés que hacer número, tráeme un mayor, porque un menor es mucho conflicto el que nos genera acá”*.

No obstante lo cual, estas diferencias terminarían ratificando, al menos para el personal del Comando, que la verdadera vocación y el verdadero “ser policía” es el policía que se desempeña en Cuerpos. En esta instancia, el trabajo en comisarías aparece ligado a una serie de valores peyorativos, entre los que se destaca el carácter administrativo, rutinario y principalmente el mote de *niñera de presos* asociado al hecho de que todas las comisarías tienen un pequeño penal en el interior de su dependencia. En el registro n° 16 del Diario de Campo nos encontramos con la visión de un joven policía de Comando que ejemplificaba con claridad esta concepción:

*“Le gusta su trabajo en el Comando. Plantea que él es policía para atrapar cacos y no para cuidar cacos (dice esto en el marco de su rechazo a la idea de trabajar en comisarías). Yo estoy para atraparlos, no quiero después estar sirviéndoles...”*.

La función policial característica del trabajo administrativo propio de las comisarías aparecía de ese modo abiertamente problematizada por los integrantes del CRE. Nos detendremos, entonces, en el próximo apartado, en observar qué es lo que efectivamente acontece al interior de las comisarías de la ciudad de Rosario.

### Orden Público: las comisarías

La Ley Orgánica de Policía n° 7395 dispone que la Policía de la Provincia de Santa Fe es la institución que, además de actuar como auxiliar de la administración de justicia provincial y ejercer por sí las funciones que las leyes, decretos y reglamentos establecen para resguardar la vida, los bienes y otros derechos de la población, tiene a su cargo el mantenimiento del orden público y la paz social.

La misma denominación “orden público” representa ya un primer elemento para el análisis. Las visiones articuladas alrededor de la idea de “orden público” forman parte de una tradición conceptual que las distingue de las corrientes asociadas

a la noción de “seguridad ciudadana”. Mientras que éstas últimas orientan la acción del Estado hacia la garantización de los derechos y libertades de los ciudadanos, en el primer modelo el bien que el Estado pretende asegurar y proteger es el orden establecido y las normas que lo sostienen (Tiscornia, 1998). De allí que podamos observar que el mantenimiento de la denominación “orden público” enraíza conceptualmente y resulta coherente con los perfiles que fue asumiendo históricamente la institución (Sain, 2008; Andersen, 2002; Kalmanowiecki, 1998). No obstante, es de resaltar que en el caso santafesino, el arco conceptual que la denominación “orden público” establece, paradójicamente, sirve de marco para concentrar aquellas dependencias abocadas a las tareas administrativas y de auxiliar de la justicia (además de penitenciarias, ya que la gran mayoría tiene un pequeño *penal* en su interior), como lo son las comisarías, subcomisarías y destacamentos.

Al igual que ocurría en el Comando, las jornadas de trabajo para los policías que se desempeñan en Orden Público suelen ser agobiantes. El sistema es llamado de *12 por 36*, lo cual quiere significar en este caso que se trabajan 12 horas en forma continua con un descanso de 36 hasta la próxima jornada, conformando los funcionarios que se desempeñan en cada bloque horario un *tercio*. En este caso el funcionamiento por *tercios* va a ir definiendo algunas particularidades del trabajo policial, según nos era relatado por el sumariante de una comisaría céntrica:

*“¿el ‘tercio’ qué pasa? Puede estar 12 horas y, qué sé yo, hay 5 o 6 citaciones para hacer y, a lo mejor, no te la hacen, ellos cumplen su horario y se van. Hay un... hay un traslado de detenidos a las 22 horas, que te lo aplazan a las 3 de la tarde, a las 20 horas ellos se van. Se lo dejan todo para el otro tercio y así se le van pasando. El tercio que no lo pudo hacer se lo deja para el otro ‘tercio’” (E. n° 20).*

Como vemos, la lógica de funcionamiento por *tercios* en el caso de las comisarías -por bloques de trabajadores juntos e inamovibles- sustenta un régimen de trabajo que cohesiona un conjunto de trabajadores promoviendo relaciones de lealtad y compañerismo entre ellos. En su aspecto más cotidiano, esa lógica se manifiesta -tal como se deja entrever tanto en los relatos citados sobre el final del apartado anterior como en éste último- en la aplicación de la “ley del menor esfuerzo”, procurando dejar la mayor cantidad de trabajo posible ya sea al CRE o al *tercio* que efectúa el relevo. No obstante, este modo de organización del trabajo favorece al mismo tiempo el

desarrollo de lo que William Westley (1970) llamó “**espíritu de cuerpo**”. Así es usual que los principios identificatorios para los policías de comisarías pasen principalmente por su *tercio*, habiendo muy pocas referencias más generales ya sea a la policía como institución o bien a su propia comisaría. De hecho, los mismos contactos con miembros de otros *tercios* suelen limitarse a los momentos de traspaso de funciones.

Mientras que los turnos en el Comando van cambiando constantemente afectando al personal a tareas ora diurnas ora nocturnas, los turnos en comisarías son estables, razón por lo cual lo que sufre un cambio no es la dinámica laboral de los policías sino la comisaría en sí misma. Las comisarías se transforman del día a la noche a partir de que el perfil de los policías en cada uno de los turnos de trabajo difiere notablemente. El turno del día es ocupado generalmente por personal que tiene hijos a su cargo o que tiene buenos servicios adicionales mientras que el turno de la noche, por ser el más tranquilo, da lugar a que sea ocupado por personal con muy poco interés en la actividad, tal como se vio reflejado, por ejemplo, en la Observación n° 9:

*“De fondo, los detenidos no dejan de orar, gritar, hablar entre ellos, además de tener la TV a todo lo que da, primero en Telenoche y después muy probablemente en una película, por la música que se escuchaba de fondo. Aquí la empleada controla el penal desde un circuito cerrado de televisión. Igualmente, la empleada nos dice que se trata de una jurisdicción tranquila, que ella ha trabajado como ‘caminante’ en otras jurisdicciones pero siempre dentro de la misma Inspección de Zona (Avenida Alberdi, la Florida, Empalme Graneros) pero que, dentro de todo, ésta le parece una jurisdicción tranquila. Manifiesta que escogió el turno de la noche, justamente, por su tranquilidad”.*

Sobre la base de esta organización en tres *tercios* –con marcadas diferencias entre cada uno de ellos- es que son desarrolladas un cúmulo de tareas administrativas que deben desempeñar -muy a su pesar en algunos casos- los policías con *destino* en comisarías. El peso de las rutinas administrativas quedó registrado en numerosas observaciones a lo largo del trabajo de campo:

*“Alrededor de las 10 hs. la guardia de la comisaría se asemeja a cualquier oficina estatal. Colas de 5 a 6 personas que se acercan fundamentalmente a realizar trámites. Certificaciones y denuncias de extravíos se entremezclan con los vecinos que llegan para realizar denuncias: accidentes de tránsito, hurtos, etc” (O. n° 11).*

*“El ambiente no difiere del de cualquier oficina del Estado: expedientes acumulados, público, mucho público siempre, mates, facturas... la tele de fondo” (O. n° 9).*

Para afrontar estas tareas cada comisaría cuenta con personal que, atendiendo en mayor o menor medida a la estructura jerárquica de la carrera policial, cumple funciones que son consideradas como básicas para el sostenimiento de la dependencia:

#### **GRÁFICO n° 4: Funciones que cumplen los policías con destino en comisarías**

**- FUNCIONES DIRECTIVAS:**

Comisario

Subcomisario

Superior de servicio

**- FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN y DE COLABORACIÓN CON EL PODER JUDICIAL:**

Sumariante

**- ATENCIÓN AL PÚBLICO:**

Oficial de Guardia

**- FUNCIONES “PENITENCIARIAS”**

Cabo cuarto

**- FUNCIONES ADMINISTRATIVAS:**

Disponible

**- FUNCIONES “DE CALLE”:**

Brigada<sup>40</sup>

Caminantes

Ahora bien, en los hechos, las regulaciones generales de los reglamentos dan lugar a una variedad de formas institucionales que no son inmutables y en las cuales, los actores que en ellas se inscriben, van asumiendo constantemente diferentes roles. “Jefe”, “subjefe”, “superior de servicio”, “sumariante”, “oficial de guardia”, “cabo cuarto” y “disponible” van conformándose como roles cuya función –aunque casi siempre dentro de los parámetros de un perfil preponderantemente administrativo– se encuentra en constante redefinición.

---

<sup>40</sup> Mantenemos las funciones relacionadas con la *brigada* entre comillas porque no todas las comisarías ratificaron su existencia.

Así, en un contexto donde los objetivos de la función policial aparecen contenidos y delimitados por una serie de procedimientos administrativos, el “comisario” en tanto jefe, antes que delinear políticas de seguridad, se preocupa fundamentalmente por ubicar, organizar y administrar al personal. Este papel se ve reflejado en otro tramo de la entrevista mantenida con el jefe de una seccional de la zona sur:

*“En este caso yo como jefe de la comisaría, vamos viendo la voluntad de trabajo del personal que uno tiene. Esto es como... no digamos una empresa... pero vos si un gerente de una empresa ve que un muchacho, ve que anda mal en una cosa, lo va corriendo. Si uno quiere que funcione bien tiene que ir moviendo, es como un tablero de ajedrez, vos vas moviendo las piezas donde mejor van” (E. n° 6).*

Tal como se desprende de la cita anterior, podemos observar que dentro de la administración de personal -además de disponer los servicios, y funciones- uno de los aspectos que mayor relevancia asume son los traslados y reubicaciones del personal. La importancia de esta facultad fue resaltada por el jefe de una comisaría de la zona noroeste durante la entrevista mantenida:

*“De confianza uno siempre te llevás, que sabés que cuando no estás vos, el tipo está ahí atrás, que tiene... voz después de vos. Voz con zeta después de vos con ese. Pero... en una empresa privada vos decís... ‘este no me sirve’, lo echás. Acá no podés decir eso. Acá lo podés echar a otra comisaría” (E. n° 29).*

En este sentido, un atributo esencial del comisario consiste en la facultad que tiene de favorecer u obstaculizar determinados traslados, lo cual le brinda la posibilidad de ir incidiendo sobre el perfil de comisaría buscado. El resto del personal permanece al margen de dicha decisión. De este modo, una vez que un comisario se hace cargo de una dependencia, gran parte de su “éxito” consiste en el desarrollo de lo que se considera como una “administración eficaz”. El éxito en la administración, sobre todo de sus “recursos humanos”, se hace visible cuando el comisario logra consolidar un equipo, al que consigue sostener más allá de los eventuales traslados. En otra parte de la entrevista, el último comisario citado detallaba cómo funciona normalmente este proceso:

*“Es así: te llevás vos tu ‘secretario’, tu ‘instructor de sumario’. Entonces vos ya tenés un equipo de trabajo. Después, las funciones de ‘disponible’, atención al público, ‘oficial de guardia’, ‘cabo cuarto’, vas viendo si el que tenés... depende de*

*la exigencia de uno, vos vas viendo si te sirve o no... todo eso si vos no tenés tu gente de confianza, llevan a tu fracaso” (E. n° 29).*

Los traslados de personal obedecen en gran parte a esta delineación, orientada a sostener el tipo de trabajo que perfila el comisario, “si le sirve o no” en otras palabras. Este mismo comisario ampliaba:

*“Los empleados nuestros los medimos nosotros. Voy y hablo con el Inspector de Zona ‘mirá, yo necesito ese hombre allá, te doy este’. Es decir, lo ubicamos, personal que creemos que está en condiciones de reunir... cada uno está hecho para determinado lugar. Es decir, el que está para cuidar presos, el que está para hacer el despacho, el que está para atender al público. A veces tenés que manejarte con los que tenés porque yo estoy en esta comisaría, no me puedo llevar todo de la comisaría de otro lado... tenés que... reorganizar los medios que vos tenés para que te rinda la comisaría, sino no servís como jefe” (E. n° 29).*

Como es posible observar, detrás de estos corrimientos, antes que una estructura meritocrática o simples escalafones (instancias previstas ya sea por la vieja o la nueva legislación), lo que encontramos son **instancias permanentes de negociación**. Precisamente son las instancias de negociación desplegadas por el jefe a cargo una comisaría, las que terminan haciendo que el mismo aparezca claramente como una figura semejante a lo que en el ambiente empresarial se conocería como “administrador de recursos humanos”. Las mismas afectan no solo a la conformación de su equipo de trabajo, sino también, una vez ya en funcionamiento, a la organización de los procesos de trabajo al interior de la dependencia.

Todo ello implica para el comisario, el despliegue de constantes **dinámicas transaccionales** (Menéndez, 1981) con respecto al personal subalterno que integra su dependencia. En la entrevista mantenida con un suboficial encontramos fragmentos significativos que grafican las formas que asumen estas instancias de negociación:

*“en cuanto a la policía como institución, se sacaron todo lo que era los... castigos o sanciones que teníamos dentro de la policía, que era lo que permitía, digamos, llevar una estructura verticalista. Que dentro de esa estructura había abusos, pero, en vez de regularlos, directamente los sacaron (...). no tenés cómo dominarla, porque yo hoy puedo decir ‘no, yo no quiero ir al penal’ y no quiero ir, y no quiero ir y ¿quién me cuida los presos?. Y yo lo digo... lo dice mi compañero, lo dice el otro ¿y? Y mi jefe dice ‘yo tampoco quiero ir... o sea, ahora se trabaja con una relación ‘yo te doy, vos me das’ o... ‘me parece simpático que me mandés a hacer esto’ o ‘me gusta hacerlo, lo hago’ y si no me gusta... ‘no sé, que lo haga otro’” (E. n° 19).*

Retomando los registros citados en este apartado podemos observar cómo, sobre la base de la conformación de grupos más o menos identificados con el jefe, se despliega un escenario donde determinados bienes que son considerados como valiosos (licencias sobre todo) son puestos en negociación. Durante una entrevista realizada en el marco de una observación en una comisaría de la zona noroeste –en la que no nos fue permitido utilizar el grabador- el comisario y un suboficial daban cuenta de este tipo de vínculos:

*“El suboficial vino a este destino porque no le servían los horarios. Antes estaba en Infantería pero mucho no le gustaba y no le interesaba la ‘cancha’<sup>41</sup>. Acá se siente cómodo y tiene un buen diálogo con el jefe. En Infantería, manifiesta, tenés horarios rotativos y que trabajar en todos los espectáculos públicos obligatoriamente. Seguidamente, el comisario interviene diciendo ‘hoy me pidieron cinco para el partido y yo tengo que conseguirlos, pero yo sé que muchos no quieren pero hacen el esfuerzo para cumplir con papá’” (O. n° 15).*

El diseño de una comisaría está reglamentariamente determinado, pero su funcionamiento y su organización dependen en gran medida de estas instancias de negociación e intercambio, en la que se ponen en juego objetos considerados valiosos como francos o la concurrencia a servicios en espectáculos públicos, principalmente deportivos. En el marco de este diseño diario, las tensiones entre lo legal y lo ilegal vuelven a aparecer en forma recurrente. En una breve entrevista mantenida con el jefe de una comisaría pequeña y barrial en el marco de la Observación n° 7, el mismo nos comentaba:

*“La comisaría tiene una estructura base que no puede modificarse: dos ‘guardias’, un ‘cabo cuarto’ y un ‘escopetero’. Ese es el personal que nunca puede faltar. El resto del personal sí puede moverlo como para patrullar, pero siempre limitado. El comisario dice que igualmente, muchas veces, mueve ese personal para que haga patrullaje pero bajo su responsabilidad. A veces manda al ‘cabo cuarto’ a patrullar, para hacerlo hay que ‘transgredir la ley’, sino ‘no funciona’, ‘tapa huecos como puede’, termina afirmando”.*

En este caso, las fronteras entre lo legal y lo ilegal (Das y Poole, 2008) transcurren cotidianamente en las mismas oficinas e instituciones que representan al Estado y pueden hasta resultar fundantes de la forma que asume la misma actividad

---

<sup>41</sup> Una de las actividades características y de mayor regularidad de la Infantería pasa por desplegar los dispositivos de seguridad en los estadios de fútbol de la ciudad.

policial. La falta de personal se termina traduciendo, en este caso, en una suma de situaciones en las cuales el margen que distingue lo legal y lo ilegal se vuelve borroso, en un conjunto de prácticas que no pueden ser comprendidas en términos de ley y transgresión sino que se encuentran al mismo tiempo dentro y fuera de la ley (Das y Poole, 2008) o bien, en transgresiones proyectadas para “cumplir la ley”: funcionarios que cumplen distintas tareas, el abandono de las tareas de prevención y en otros casos -de acuerdo a relatos escuchados durante nuestro trabajo de campo- comisarías que directamente cierran por las noches por temor a ser *copadas*<sup>42</sup>. Dicha situación se ve reflejada en el relato del oficial a cargo de un destacamento dependiente de una comisaría de la zona sur:

*“En el destacamento están, un solo efectivo por guardia, porque se fueron yendo, los fueron sacando, qué se yo, por equis motivo, poniendo en otro lado, se van por carpeta médica, y bueno, hoy en día tenemos un solo personal que está, tenemos siete efectivos, trabajando en el destacamento, es muy poco a lo que sería la jurisdicción (...) por ahí es imposible atender otra, otra necesidades...”* (E. n° 32).

Todas estas falencias terminan acentuando el perfil administrativo y penitenciario de la comisaría y profundizando la ausencia de funciones relativas a la implementación de dispositivos de seguridad que no sean recorridos ocasionales y circunstanciales por algunas zonas específicas de la jurisdicción. Así, progresivamente, las comisarías, sobre todo las barriales, van ocupando una posición cada vez más marginal dentro del gobierno de la seguridad. Numerosos registros de encuentros y entrevistas con comisarios dan cuenta de esta posición:

*“En el primer contacto con un comisario, éste nos aclara que si le vamos a preguntar por falencias o necesidades él va a responder que está todo bien, en óptimas condiciones. No obstante lo cual, afirma que su dotación de personal es escasa para la zona que les corresponde, que están destinados a tareas administrativas contando solamente con un móvil para el patrullaje y que las comisarías terminan siendo unidades administrativas de la policía”* (D. C. n° 2).

*“...prevención es muy poco lo que podemos hacer, si tuviéramos personal, hasta justificaría que yo me pase todo el día en la comisaría, pero si me quedo de ocho a ocho es para estar atento a lo que pueda pasar en el penal...”* (E. n° 8).

---

<sup>42</sup> Si bien claramente ilegales, a los fines de nuestro plan de trabajo no representó un objetivo central el análisis de la serie de vínculos locales que le posibilitan a cada comisaría obtener recursos de los enclaves de economía delictiva que operan en su jurisdicción.



*“... digamos la función específica que es la prevención del delito, la falta, sinceramente prácticamente... poco y nada...”* (E. n° 6).

Más allá de estas condiciones y de los recursos escasos, el comisario –con una incidencia secundaria del subjefe y del superior de servicio- va conformando un modelo de funcionamiento, aparentando, y así debe constar en los libros de guardia, el correcto funcionamiento de la comisaría. De ese modo es que en el plano formal la estructura básica de una comisaría siempre es respetada por más que en las actividades cotidianas existan roles que pueden estar no representados. Un ejemplo recurrente en este sentido son los empleados que firman el libro de guardia como *cabos cuarto* (porque el reglamento exige obligatoriamente que haya un *cabo* por turno) cuando en realidad están desempeñando cualquier otra tarea. Estos márgenes de transgresión a la norma son administrados por el comisario en el marco de una estrategia de funcionamiento y sostenimiento de la dependencia, en donde ante determinados escenarios se apela a recursos previstos por la normativa mientras que en otros no<sup>43</sup>.

Por su parte, el **subjefe** (generalmente un subcomisario) acompaña esta tarea a partir de constituirse en el nexo directo con el resto de los empleados. Es quien implementa las políticas que define el comisario y quien, al mismo tiempo, tiene una comunicación estrecha con el personal subordinado. Este vínculo aparece graficado durante la entrevista con una suboficial:

*“El subjefe siempre es más “piola”<sup>44</sup> porque es más con el tema de personal el jefe por ahí es muy raro que lo trates... a no ser que sea algo muy... esto es muy... bien jerárquico primero el subjefe y después el jefe...”* (E. n° 14).

Así, el subjefe –que generalmente trabaja a contraturno con respecto al comisario- aparece como el encargado de organizar el trabajo en cada dependencia, diagramando el servicio, la guardia, traslados, la división del personal y el control del penal, tareas que realizaría junto con el comisario pero de las cuales aparece como responsable por ser quien directamente está a cargo de su control.

---

<sup>43</sup> Lo mismo ocurre con cierto tipo de delitos y en el tratamiento mismo del delito, aunque dichos temas quedaron por fuera de los objetivos de la presente tesis.

<sup>44</sup> Expresión que hace referencia al trato más amable por parte del subcomisario.

El tercer grado en importancia luego del jefe y del subjefe en una comisaría es el **“superior de servicio”**. El “superior de servicio” es generalmente un oficial que tiene a cargo la dependencia durante el turno de la noche. Es el responsable administrativo de la comisaría y al mismo tiempo quien cumple las funciones de sumariante durante ese turno: toma las denuncias, inicia el expediente, pero, a diferencia de las responsabilidades que asume el “sumariante” -tal como las veremos más adelante- no lo continúa. Además, es quien dispone del personal con que cuenta la comisaría durante ese turno. En general este personal no va más allá de un “empleado de guardia” y un “cabo cuarto”.

Dentro de este modelo de comisaría, al “superior de servicio” le continúa en jerarquía –aunque sin cumplir tareas en la organización del trabajo en la dependencia, función que es un atributo del comisario, el subcomisario y el “superior de servicio”- el **“sumariante”**.

En primer lugar hay que aclarar que la denominación de sumariantes opera como categoría nativa. Se trata de una categoría que es tomada por la policía teniendo como referencia la organización del Poder Judicial. Los mismos “sumariantes” así lo reconocen:

*“el término ‘sumariante’ es un término que usamos, o sea, se usa en la jerga policial, eh... y que proviene de los sumarios de los juzgados. En realidad, nosotros no somos ‘sumariantes’, en lo que define la palabra ‘sumariante’, somos secretarios de actuaciones” (E. n° 17).*

*“sumariante como palabra no existe ni en el diccionario, pero el uso y la costumbre llevó a que se diga que el que hace sumarios es ‘sumariante’. Es una función que de un hecho en particular, tratás de recabar toda la información suficiente, y ponerla en manos del juzgado que intervenga sobre ese hecho en particular y después el juzgado resuelve...” (E. n° 20).*

Como se desprende de este último relato, si bien se trata también de una función administrativa, el “sumariante” cumple un rol destacado en tanto representa el primer eslabón en lo que podríamos denominar, siguiendo a Roberto Kant de Lima, el sistema de producción de la verdad impulsado por la policía. Kant de Lima da cuenta de esta importancia al plantear que “el interrogatorio policial es un procedimiento en el cual quien detenta la iniciativa es un Estado imaginario, todopoderoso,

omnipresente y onnisciente, siempre a la búsqueda incansable de la verdad, representado por la autoridad policial” (2005: 101). El **“sumariante”** representa, en los hechos, la figura que sostiene ese engranaje y quien lo viabiliza al estar, su papel administrativo, definido por iniciar la instrucción. La instrucción representa una instancia previa del juicio, donde la policía debe comprobar la existencia del hecho, reunir los elementos pertinentes que así lo fundamenten e identificar a los posibles implicados. Para esto el “sumariante” recoge y organiza pruebas, toma declaración en sede policial a testigos, víctimas y posibles implicados.

Dadas las características administrativas (y limitadas) del trabajo en comisarías, la función del “sumariante” aparece como central, mientras que el resto suelen ser pensadas como subsidiarias o complementarias de la misma. Entre ellas, complementan esta estructura básica y necesaria de una comisaría el “oficial de guardia”, el “disponible” y el “cabo cuarto”.

El **“oficial de guardia”** es el encargado de responder el teléfono, expedir certificaciones, atender al público y, lo más importante, llevar el “libro de guardia”. Durante la observación n° 14, la empleada de la guardia nos detallaba sus funciones del siguiente modo:

*“llevar el ‘libro de guardia’ (y) atención al público, cuando una persona viene a denunciar primeramente me tiene que explicar a mí qué va a denunciar, por ahí te vienen con esos problemas de familia, que la mamá le pega al papá o el hijo que se fue de la casa y vos tenés que escucharlo y decirle y bueno, eso, los problemas familiares, no sé la gente viene a descargarse y nosotros tenemos que escucharlo”.*

Sin embargo, nos encontramos también con que -si bien el “oficial de guardia” representa la “cara visible” de la comisaría y quien da inicio a todas las actuaciones que tienen un origen presencial- su dinámica de trabajo no deja de ser sumamente rutinaria. Ello se ve reflejado en fragmentos de la entrevista n° 28:

*“es un trabajo bastante rutinario, siempre lo mismo, viene el jefe, le da presente en el libro, y eso, eso se hace, el libro de guardia se lleva a cabo, por si hay alguna denuncia, por si hay alguna, ponele una evasión, quién estaba en la comisaría, quién estaba, ahí te figura eh, a qué hora vino el jefe, a qué hora entró la guardia, a qué hora vino tal persona, quién se hizo cargo del penal y a qué hora...”.*

Los ejemplos que proponía esta empleada de la guardia no eran fortuitos. El control del penal representa una de las principales cuestiones a atender en el trabajo en comisaría. En este sentido, el responsable directo del penal es el “**cabo cuarto**”, quien tiene trato directo con los detenidos. El “cabo cuarto” de una comisaría de la zona sur definía su función del siguiente modo:

*“Mi función es cabo de cuarto, viene a ser el puesto de celador, mi función es atender a los detenidos, durante 12 horas” (E. n° 34).*

*“Exclusivamente atender los detenidos. Prioridad número uno: resguardar el orden, que no se escapen, que no corten ni garroteen la puerta, mantener la paz de la población del que está detenido” (E. n° 34).*

El trabajo característico de esta función consiste generalmente en la custodia de los detenidos pero, ocasionalmente, aquellos policías que cumplen funciones como *cabos cuartos*, pueden participar de la custodia de detenidos en centros médicos de la ciudad o de algún procedimiento cuando fuese necesario. Se trata del ejemplo que vimos anteriormente donde, ante algún procedimiento, el comisario puede disponer que se levante el servicio de *cabo cuarto*, a partir de lo cual queda sin custodia el penal.

No obstante, en general el servicio se mantiene excepto casos extremos. Lo que ocurre es que se pone especial atención en este aspecto ya que cualquier evasión le “cuesta el puesto a todos, caen todos”, de acuerdo a expresiones de los mismos policías. En conversaciones no grabadas con comisarios, en el marco de la realización del trabajo de campo, reconocían la aplicación de este tipo de criterios:

*“Las evasiones son ‘el grano en el culo que tienen los comisarios’. Es la principal preocupación. Pueden fallar los procedimientos, puede aumentar el número de delitos y no pasar nada. Ahora, si hay algún evadido, enseguida el comisario y su gente son removidos<sup>45</sup>” (D. C. n° 7).*

---

<sup>45</sup> Podemos encontrar el ejemplo de un hecho semejante disponible en: [http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2010/05/06/noticia\\_0057.html](http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2010/05/06/noticia_0057.html) (fuente consultada en 25 de Junio de 2010).

El único hecho policial relevante como para poder disponer el pase a disponibilidad de todo el personal involucrado en forma automática es la evasión<sup>46</sup>. De allí que sean pocos los dispuestos a quedar como responsables de esta función cuando la misma queda vacante. Sin embargo, en relación inversa con la importancia que le es adjudicada a esta función -por el hecho de ser la más monótona de todas- es considerada al mismo tiempo la menos calificada<sup>47</sup>. De allí que nos encontramos con personal que, si bien puede tener mucha antigüedad, posee un grado poco jerarquizado. En diferentes situaciones de campo nos topamos con estas características. En una comisaría de la zona sur:

*Llega el ‘cabo cuarto’ del turno de la noche. Apenas saluda, lleva las llaves (que no se encontraban y se dirige al fondo). La ‘oficial de guardia’ dice irónicamente ‘nuestro mejor oficial’, remarcando después que se trata de un ‘vago que no quiere hacer nunca nada’” (O. n° 11).*

En una comisaría de la zona oeste:

*“el ‘cabo cuarto’ suele ser el personaje más “oscuro” de una comisaría. El ‘cabo cuarto’ llega, da cuenta de su ingreso, y hasta su egreso, pasa sus horas entre las demandas de los detenidos y la televisión, entre mates, facturas y una soledad abrumante” (O. n° 3).*

Paralelamente, esta función no solo es denigrada por los propios policías sino también por los presos, quienes se dirigen constantemente a los “cabos” bajo el mote de *empleado*, en una designación que pretende descalificarlos por su función.

Por último, la oficina de **“disponible”** se ocupa del tránsito de todos los documentos que ingresan y egresan de la comisaría. Lleva para ello tres libros, los que son operados manualmente, ya que exceptuando las *comisaría del centro*, muy pocas se encuentran informatizadas. Así nos era relatado este proceso por la “disponible” de una comisaría de la zona noroeste:

*“la oficina de ‘disponible’, para mí, es la principal de todas, porque por acá te pasan todos los oficios que vienen de todos lados, todas las notas que te piden.*

---

<sup>46</sup> Este elemento resulta indicativo de la complejidad de funciones que asume una comisaría que solo en forma tangencial afectan a políticas de seguridad: por un lado el perfil administrativo, pero por el otro el marcadamente penitenciario.

<sup>47</sup> Durante una observación en una comisaría del macrocentro, el cabo cuarto nos comentaba que: “no tiene que pensar mucho en esta tarea, solo que no se te escape ninguno y pasarle el racionamiento todos los mediodías” (O. n° 8).

*Nosotros tenemos un libro que se llama entrada y salida de expedientes, que es este, donde hay un personal que ingresa todos los oficios que vienen del Juzgado, del Tribunal y de Orden Público” (E. n° 14).*

Curiosamente en todos los casos conocidos, esta función es desempeñada por personal femenino. Hecho que muy probablemente obedece a la caracterización que, sobre la base de ciertas representaciones que trascienden el mundo policial, reproducen los jefes como encargados de la dependencia.

*“Durante una de las primeras visitas a una comisaría barrial, el jefe de la dependencia nos lleva a hablar con el ‘disponible’. Paradójicamente el ‘disponible’ es siempre una mujer. Generalmente se trata de una mujer por ser considerado el trabajo más administrativo de todos los posibles. Trabaja en una oficina de pequeña dimensiones, en donde se encuentra un archivo con el legajo de los funcionarios policiales que cumplen tareas en la comisaría y los detenidos que se encuentran en el penal de la comisaría” (D. C. n° 3).*

Generalmente, este personal orienta su carrera policial exclusivamente hacia el cumplimiento de este tipo de tareas. Al menos las “disponibles” entrevistadas se habían limitado a cumplir ese rol dentro del organigrama de trabajo de las comisarías durante la mayor parte de su trayectoria laboral. Tal es el caso, por ejemplo, de la “disponible” de una dependencia de la zona norte, que al momento de repasar su recorrido por la policía, destacaba la importancia que tiene para ella realizar exclusivamente tareas administrativas:

*“Su historial la liga siempre con tareas administrativas (antes estuvo en Personal y en Ficheros), condensando ahora la mayor parte de las actividades administrativas de la comisaría. Destaca en varias oportunidades que su turno de trabajo finaliza a las 13 hs., lo que ve como un gran incentivo” (D. C. n° 9).*

Bajo estas condiciones, el carácter burocrático de la función termina identificando en gran medida a este conjunto de policías como una parte del aparato burocrático sin vinculación directa con las especificidades de la agencia policial, como un sector más de **empleados estatales** aunque de **baja calificación**. Las funciones administrativas pasan a representar el horizonte de expectativas laborales para una gran cantidad de policías que se niegan expresamente a la posibilidad de “salir a la patrullar”. Las trayectorias laborales de estos empleados muestran, en efecto, que la gran mayoría del personal de comisaría ingresa a la policía pensando puntualmente en

cumplir tareas administrativas. Los relatos relevados durante el trabajo de campo en ese sentido son muy recurrentes:

*“Y... este, sí, lo que pasa que cuando, todo lo seres humanos somos de costumbre, o sea, cuando nos acostumbramos acá (...) es más cómodo estar sentado en un escritorio, delante de una computadora, haciendo notas, trabajando...”* (E. n° 21).

*“No me gusta no sé si no me gusta, nunca estuve en la calle, nunca trabajé en la calle, no sé cómo será, es como volver a empezar, nada que ver trabajar en la calle con trabajar en la comisaría nada que ver...”* (E. n° 14).

Las comisarías aparecen, así, como **espacios relacionales** donde se articulan una serie de categorías orientadas casi exclusivamente al cumplimiento de funciones preeminentemente administrativas y burocráticas. Dicha posición, dentro del esquema de **“policiamiento preventivo”** (Sain, 2008) que despliega la Unidad Regional las ubica en un **lugar marginal** en relación con las dinámicas policiales de aquellas dependencias agrupadas en Cuerpos.

¿Por qué, entonces, la denominación “orden público” es mantenida y reforzada a pesar de la marginalidad que evidencian las comisarías dentro de las actividades de regulación y control? Consideramos, y en ello centraremos nuestro análisis en el próximo apartado, que el hecho de que las comisarías permanezcan asociadas a la idea de orden público puede implicar para estas agencias un posicionamiento particular en su forma específica de integración al Estado, en tanto formas posibles de producir y reproducir su existencia misma, sobre todo en un contexto donde su relación con las políticas de seguridad no es clara. Ello nos obliga a indagar con mayor profundidad en estas nuevas formas de concebir el “orden público” que se asientan sobre una resignificación de los lazos establecidos entre las tareas que son desempeñadas en comisarías y las que tradicionalmente formaron parte de lo que se entiende comúnmente por función policial.

### Los fundamentos de la función policial en comisarías

En la última etapa, una de las principales demandas sociales que el Estado ha debido canalizar fueron los llamados “reclamos por seguridad”. En esta interpelación

abierta que ciertos sectores de la sociedad hacían con respecto al accionar del Estado, la policía ocupaba un tópico central a partir de fuertes cuestionamientos vinculados con su efectividad y operatividad. A pesar de ello, las dinámicas del Estado en cuanto a políticas de seguridad no fueron otorgando centralidad a la policía como institución en su totalidad. Así fue que, dentro del gobierno de la seguridad, las policías de comisarías progresivamente terminaron –a pesar del fuerte reclamo de importantes sectores de la sociedad- ocupando un lugar marcadamente marginal.

En ese sentido, si pensamos ciertos aspectos del Estado como un conjunto de prácticas y regulaciones (muchas de las cuales, además de ser contradictorias, disputan lugares y posiciones entre sí) al poner el foco sobre las comisarías tenemos en claro que nos situamos en una visión del Estado desde sus márgenes (Das y Poole, 2008). Si bien ante el debate instalado socialmente en torno a los estándares de seguridad/inseguridad puede resultar una mirada objetable, se trata de una línea de investigación sumamente sugestiva que podemos rastrear desde los planteos de Michel Foucault, quien en “Genealogía del Racismo” ya proponía:

“no analizar las formas reguladas y legítimas del poder a partir de su centro (es decir en sus mecanismos generales y en sus efectos constantes), (sino) captar en cambio el poder en sus extremidades, en sus terminaciones, ahí donde se hace capilar; tomar el poder en sus formas más regionales, más locales...” (1996: 30).

El hecho de situarse en los “márgenes” del Estado -márgenes pensados como periferias (Das y Poole, 2008)- hace que el personal de comisarías deba apelar a otros recursos que justifiquen –ante ellos mismos y ante la “sociedad”- su misma existencia, más allá de los que tradicionalmente le otorgaron sentido a la institución policial desde la modernidad, tal como pudimos observarlos a partir de Foucault en capítulos anteriores.

En este contexto, la preeminencia del trabajo administrativo requiere de la resignificación de valores que fundamenten el sentido y la necesidad de estas dependencias. Así, de la mano de la faz administrativa y ya lejos de su asociación con la represión del delito, en nuestra experiencia de campo nos encontramos con que ese lugar es llenado de muy diferentes modos que posibilitaban volver a reconstruir el concepto de la función policial como una actividad positiva, o al menos no



estrictamente negativa<sup>48</sup>. En comisarías, dichas resignificaciones no surgen de las actividades relacionadas con la custodia de detenidos, las cuales aparecen con un claro sentido penitenciario y no policial. Dichas resignificaciones se van construyendo sobre la base de la articulación con las demandas del público (demanda que, en realidad, se restringe a específicamente a ciertos sectores de la ciudad) que ven en la policía un actor que medie en su conflicto, por más que este no sea en sus orígenes estrictamente de índole penal.

A lo largo de la experiencia de campo en comisarías barriales fundamentalmente, eran constantes las situaciones en las que nos topábamos con sujetos que veían en la policía uno de los principales agentes del Estado a los cuales acudir en procura de resolver diferentes demandas, por más que las mismas no hayan tenido originalmente relación directa con los fines institucionales específicos de la policía. Desde maestras que llegaban a la comisaría para denunciar situaciones escolares, pasando por madres que presentaban problemas varios con sus hijos, conflictos menores entre vecinos o familiares, hasta las siempre presentes filas de vecinos esperando por realizar algunos de los innumerables trámites que, al momento de realizar trabajo de campo, recepcionaba<sup>49</sup> la comisaría (vecindad, supervivencia, etc.) y que se encontraban relacionados con documentación necesaria para la asistencia social u otras instancias del Estado no penales. En base a estas situaciones – que nos remitían a la enumeración de incumbencias policiales que Foucault (2006) identificaba para la policía del “antiguo régimen”- que se repitieron recurrentemente a lo largo del trabajo de campo, consideramos que se estaba evidenciando la apertura de una nueva (para este contexto) función policial:

---

<sup>48</sup> Todas estas construcciones son características, mayormente, del personal de comisaría. Entre el personal del CRE la forma de resignificar el sentido negativo de su actividad es diferente. Ello es así porque entre sus miembros -donde las funciones sociales de la policía resultan más lejanas- existe una identificación mucho más directa con los rasgos que tradicionalmente han caracterizado a la función policial, esto es, con las posibilidades de utilización la fuerza. En ese contexto, es el concepto mismo de *represión* el que aparece resignificado y dotado de valoraciones positivas. Con este sentido fue que durante una entrevista el Jefe del Comando nos decía: “la palabra *represión*, en el sentido lógico de la palabra, la *represión policial* es hacer cesar el delito, no bajarse con un palo, una escopeta, no, no, no, ese es el sentido de la palabra, tengo que interrumpir el acto delictivo que vos estás cometiendo”.

<sup>49</sup> Algunas de estas funciones, como por ejemplo, la elaboración de certificados de vecindad, fueron derivados a los centros distritales municipales.

*“Durante la visita, el comisario nos plantea que, muchas veces, llega gente no para realizar una denuncia concreta sino que viene con distintos tipos de demandas y que ellos como policías lo que hacen es escucharlo y tratar de alentarlos y tratar de brindar una respuesta (...) que, a lo mejor, otras dependencias no dan. Manifiesta el comisario que se trata de temas que, en realidad, corresponden a otras dependencias del Estado, pero que las mismas no funcionan. La función policial es sumamente compleja, concluye el comisario” (O. n° 7).*

La percepción que tienen otros policías entrevistados le asigna un lugar mucho más preciso a esta **“nueva función policial”**. Citamos la entrevista con uno de los dos jefes de comisarías de la zona sur entrevistados, donde encontramos párrafos representativos de este tipo de miradas acerca de la función policial:

***“La policía es nada más que un agente más de asistencia social. La policía no es un ente represivo. La organización tiene que estar militarizada para que las órdenes se puedan cumplir y para que el servicio sea efectivo pero no tiene absolutamente nada que ver el organigrama de aplicación policial militarizada con que la policía sea militar. La policía es una herramienta del sistema del Estado para ayudar a la gente, para la sociedad. Nosotros no entramos para reprimir a la gente, no entramos para matar delincuentes, entramos para asistir a la gente y nuestra función es una función social, somos auxiliares de la justicia, pero antes cumplimos una función social”** (E. n° 30).*

En comisarías vimos aparecer recurrentemente, a diferencia del Comando, este tipo de significados que resaltaban aquellas nuevas facetas del “quehacer policial”. De este fragmento se desprenden varias de ellas: “la policía es un agente de asistencia social”, “una herramienta del Estado para ayudar a la gente”, “nosotros no entramos para reprimir a la gente”. Es en ese contexto que, entendemos, las comisarías (obsérvese que no decimos la “policía”) buscan situarse en situación predominante por sobre posiciones que ocupan otras agencias del Estado. Lo hacen sus funcionarios resaltando, entre las dimensiones que conforman el amplio campo de actividades asumidas por la policía en las últimas décadas, aquellos aspectos que buscan deconstruir el sentido negativo que históricamente le fue asignado a la institución policial en la modernidad. En el discurso policial se produce una resignificación de la propia posición social en la que, poniendo de manifiesto la pluralidad de situaciones que abordaría la policía actualmente, se procura vincular la función policial a otras funciones del Estado, generalmente a aquellas abocadas a la cuestión social. De este modo, interpretamos que las comisarías buscan hegemonizar, de algún modo, la

representación del Estado en sus márgenes -forjándose en articuladores de relaciones de poder asentadas sobre el vínculo con distintas poblaciones- sobre las que se fundamenta la existencia del Estado en estos territorios, a través de prácticas y signos que expresan reiteradamente una definición de las propias tareas que trasciende las funciones meramente represivas, como ser traslados de enfermos, asesoramiento, alojamiento de personas perdidas, etc., etc. Este relato es recurrente entre el personal de comisarías barriales:

*“Hacer una función, dos funciones, tenés que ser profesional en el área de salud, tenés que ser psicólogo, atender a la gente, qué se yo, primeros auxilios, no lo soy porque no estudié para eso, tengo que hacer profesional en el área de abogado asesorando a la gente...”* (E. n° 16).

Así, al intervenir sobre demandas variadas se empiezan a construir como una referencia central las ideas de la “multiplicidad de tareas” y del “rol social” que debe afrontar la policía. Esta diversificación va generando un mito fundante, construido históricamente y que es repetido constantemente bajo los mismos signos: “tenés que ser profesional en el área de salud”, “tenés que ser psicólogo”, “tenés que ser asistente social”:

*“El policía tiene que ser psicólogo, abogado, juez, doctor en un segundo. Vos en la calle te podés cruzar un montón de cosas”* (E. n° 26).

*“Porque a lo mejor después de acá tengo que auxiliar a una abuela que se cayó y al rato tenés que hacer de cura por un problema familiar y al rato tenemos que agarrar algún choro<sup>50</sup>... no sabemos que nos puede pasar...”* (E. n° 27).

Este último párrafo está extraído de la entrevista con el sumariante de una comisaría de la zona sur. En la misma, asociadas a las típicas funciones penales, el entrevistado agrega otras que claramente no lo son: auxiliar a una abuela y “hacer de cura” por un problema familiar. Entendemos, a partir de expresiones como ésta, que limitadas en las posibilidades de diseñar o aplicar políticas (o planes, estrategias) de seguridad, las comisarías van encontrando su *raison d’être* en lo social. Este hecho toma forma al ser la policía la única dependencia del Estado abierta todo el año y a todo hora o bien la más cercana geográfica y socialmente, razón por la cual se

---

<sup>50</sup> Forma nativa de denominar a un “ladrón”. Se utiliza sobre todo en el área de Rosario y ciertas zonas del interior del país, por oposición a la más conocida de “chorro”, propia de la ciudad de Buenos Aires.

constituye para el barrio en una referencia estatal privilegiada. Esto lo señalaba claramente el mismo sumariante en un párrafo posterior de la entrevista:

*“Claro la gente lo primero que hace es venir a la comisaría, porque no tiene movilidad, no entra nadie en la zona, ni la ambulancia quiere... entonces hay un herido a la comisaría, hay chicos que están perdidos... hay padre que ¿cómo hacés? tenés que mover todo el sistema para colaborar con ellos... el móvil hace de remisse, de ambulancia, un montón de cosas...”* (E. n° 27).

Podemos observar que los problemas que terminan llegando a la comisaría cotidianamente son problemas por demás de variados. En esos lugares (resaltamos, se trata principalmente de comisarías de barrio, en las comisarías céntricas esta característica no se repite necesariamente así) la función policial se ve resignificada, requiriendo otro tipo de orientación e intervención. Eso mismo nos planteaba, en una de las dos entrevistas que mantuvimos, el comisario de una dependencia cuya jurisdicción abarcaba una de las comunidades tobas<sup>51</sup> de la ciudad:

*“Se ve mucha la pobreza, la realidad... los chicos comen tierra, la Comunidad Toba es terrible... yo he visto, no lo podés creer, a esta altura de la vida estoy viendo un pibe de dos años, entonces todo lleva a que tenés que dejar de lado la prevención del delito y la contravención y dedicarte a la parte social...”* (E. n° 33).

Bajo la faz de su función social –la cual, como vemos a través de los registros citados, se trata de un elemento resaltado constante e insistentemente por los policías- la policía vuelve de algún modo a recuperar la impronta de intervención universal que la había caracterizado en sus orígenes monárquicos. No obstante, si bien ante este nuevo contexto interviene ante una diversidad de situaciones que trascienden por mucho la mera aplicación de la ley penal, en la gran mayoría de los casos lo hace apelando a herramientas que son propias del sistema penal. **La policía opera, en esas situaciones, con recursos que son característicos de su pertenencia estatal**, a partir de lo cual si bien se trabajan nuevas problemáticas en la búsqueda de legitimación de su pertenencia al Estado, las mismas son incorporadas apelando a las prácticas y saberes ya conocidos. En nuestro diario de campo encontramos ejemplos representativos de esta idea:

---

<sup>51</sup> Grupo étnico originario de la región del Chaco (argentino y paraguayo), cuyas migraciones a la ciudad de Rosario se acentuaron a comienzos de la década del noventa.

*“Durante una charla informal con un comisario de la zona oeste, al momento de repasar la actividad durante los últimos días en que no estuvimos allí haciendo campo, menciona particularmente el caso de un hombre perdido hace un par de noches, al que tuvieron en la comisaría sin saber qué hacer. Esta situación le sirve para señalar que no hay otras agencias del Estado que los atiendan. Marca sobre todo cómo, después del mediodía del Viernes, no hay dependencia del Estado en lo social o en lo relativo a la salud que esté disponible para atender a situaciones como ésta y que termina siendo la comisaría el lugar donde se aloja a éstas personas, por ser la comisaría una institución del Estado que permanece constantemente abierta. Cuando le preguntamos dónde habían alojado a esa persona nos responde que el hombre terminó alojado en el calabozo” (D. C. n° 2).*

Los funcionarios del Estado en determinadas zonas son principalmente policías. La policía es el Estado en determinados sectores de la ciudad, un Estado que no solo se ocupa de problemáticas cuyo origen es penal sino que hace frente a una diversidad de situaciones que resignifican, sin desterrarlos, los vínculos desarrollados entre las prácticas policiales y la defensa del “orden público”. Como ya dijimos, es asumiendo estas prácticas que las comisarías refuerzan su posición como agentes del Estado pese a su carácter marginal en materia de seguridad. Al hacerlo, moldean la forma preponderante en que el Estado aparece en estos territorios. No se trata, siguiendo en este aspecto a Das y Poole (2008), de un Estado que por situarse en sus márgenes tiende a debilitarse o desarticularse, sino de prácticas que para estos márgenes territoriales y sociales, dan forma preponderante a las políticas de regulación y disciplinamiento de las poblaciones que allí habitan o circulan. En esta aparición del Estado a través de la policía, y frente a una diversidad de situaciones, las resoluciones que se encuentran son resoluciones típicamente penales: una persona perdida va al calabozo, una discusión familiar culmina con la amenaza del calabozo, etc., etc.

De la mano de un Estado que, en un contexto post-neoliberal, intenta recuperar lugares que durante la década del noventa había abandonado, nos encontramos con una policía cuyas incumbencias abarcan una serie de funciones que van mucho más allá de la mera función represiva en tanto “brazo armado del estado”. Debemos dejar en claro que ello no implica que la policía se sitúe en el paradigma contrario, en función de una hipotética estructuración de su práctica orientada a garantizar los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, resulta evidente en el escenario actual que la policía se relaciona con los ciudadanos a partir de una

multiplicidad de dimensiones que van mucho más allá de la simple aplicación de la ley penal. Paradójicamente, en este contexto la policía que surge de la mano de lo que Foucault denomina “estados de policía” –que, como vimos anteriormente, estaba asociada a garantizar el orden y el crecimiento de estos Estados- reaparece en Rosario pero sobre la base de constituirse en la principal agencia política del Estado para determinados territorios de la ciudad. Un Estado que se ausentó en los noventa y al que le cuesta reinsertarse en aquellos dominios que había abandonado, existe y esta existencia es garantizada por y a partir de la policía. La misma policía que, en sus conceptualizaciones clásicas, aparecía como un espectro, como una amenaza latente, que garantizaba la existencia última del Estado<sup>52</sup>, poco a poco se va conformando en su cara visible. De este modo, podemos observar cómo la policía garantiza el funcionamiento del Estado en algunos barrios pero al mismo tiempo *es* el Estado en otros. La cara visible del Estado vuelve a estar asociada a la policía en un contexto donde la “razón de estado”, en términos foucaultianos, pasa nuevamente y varios siglos después, por la policía. **La policía vuelve a ocuparse así, en un sentido amplio, de la sociedad.**

En este “ocuparse en un sentido amplio de la sociedad” -en lo que va del capítulo- dimos cuenta de un tipo de vínculo con los ciudadanos que adquiere un carácter que denominamos (por no encontrar una expresión más precisa) “asistencial” y que forman parte de las tareas policiales cotidianas en un sentido amplio. Ahora bien, junto con esta dimensión de la actividad, la comisaría desarrolla también relaciones que pueden ser categorizadas como económicas.

En este sentido, podemos identificar que la comisaría en tanto unidad despliega distintas redes económicas: las cooperadoras, la reciprocidad con vecinos del barrio que fueron beneficiados por el accionar de la policía, el vínculo directo con comerciantes prósperos de la zona sobre la base de actividades que están en el borde entre lo legal y lo ilegal, y como una variante de esta última, la no persecución de determinadas actividades ilegales que son consideradas como infracciones menores (la quiniela ilegal por ejemplo).

---

<sup>52</sup> Ver Benjamin, 1996.

La más informal y circunstancial de todas es la “**propina**” que deja el público que asiste a realizar determinados trámites en la comisaría. La misma, a pesar de su eventualidad, es recurrente en distintas comisarías, sobre todos en las barriales. Citamos tres situaciones, las cuales ocurrieron en las dos comisarías de la zona sur seleccionadas:

*-“Una persona mayor que al retirarse, luego de solicitar un certificado de vecindad, deja una propina de 20 pesos. El empleado que ayudaba a la oficial de guardia le alcanza el billete pero ésta lo toma y lo deja directamente en un escritorio que está detrás del mostrador” (O. n° 5).*

*-“Nos ofrecen mate, van a prepararlo y ahí ocurre una situación particular con la yerba, mientras uno de los policías está emitiendo un certificado a una pareja de vecinos. No sé qué tipo de certificados. A este mismo policía, la empleada de la guardia le pregunta si tiene yerba, el policía le contesta abiertamente que no, que se le acabó, que vaya a comprar, que él le da la plata. La empleada contesta que no hace falta, que va a pedir atrás, situación ante la cual la pareja que había ido a realizar el certificado, quiere dejarle una especie de propina a lo que, en este caso, el oficial –quizás debido a nuestra presencia- se niega a aceptar” (D. C. n° 5).*

*-“Llega una mujer para buscar un certificado de supervivencia. Agrega que lo tiene que presentar en el consulado español. Ella es española, según se desprende de su relato cobra algún tipo de pensión y se queda hablando de España. Dice además que se iría pero tiene miedo de ir y querer quedarse allá en España. El que estaba arreglando la puerta le dice ‘lléveme a mí señora’. La empleada de la guardia agrega que ‘se los lleve a todos’. Charlan muy amablemente y la mujer antes de irse le deja un billete diciendo ‘esto es para que te compres algo’” (O. n° 11).*

Un vínculo económico entre policías y ciudadanos un poco más institucionalizado lo encontramos en las **cooperadoras policiales**. Las mismas funcionan en el marco de cada comisaría en particular, siendo su desarrollo diferencial de acuerdo al grado de actividad económica de la jurisdicción en cuestión. Al menos, eso se desprende de las entrevistas que mantuvimos con dos jefes de comisarías céntricas:

*“Esta es una de las comisarías de... de... de importancia, es la mejor comisaría de la provincia de Santa Fe, por la contextura, por, por, por todo lo que es la comisaría en sí. Tiene una cooperadora que... es la más fuerte, en el sentido de que acá, fijate vos, de que acá todas las oficinas tienen aire acondicionado, calefacción, los móviles, hay móviles provistos por la provincia y hay móviles comprados por la cooperadora. Esta comisaría tiene seis móviles. Con los aportes de los comerciantes se compró también un coche eléctrico, un autito eléctrico para que, para que patrulle peatonal Córdoba y San Martín. Es decir, como estructura*

*de funcionamiento es una de las mejores comisaría para la función policial, porque una trabaja con la, es decir, con las comodidades al cien por ciento” (E. n° 8).*

*“Lo que pasa es que por ahí puede estar un poco más cómodo acá, por el gran apoyo de la Cooperadora. Bah, yo creo que las otras comisarías también tienen. Yo, por ejemplo, vengo de la Y. La Y también tiene una Cooperadora, pero bueno, lo que pasa es que estamos hablando de ésta, que es una Cooperadora muy fuerte... ¿por qué? Porque la mayoría de los... de las personas que tienen un poder económico, tienen act... viven... tienen sus comercios acá. Entonces... el, ellos tratan de que sus comercios, lo, l, l, los ingresos que entran, estén cuidados, protegidos. Entonces... mmm.... vuelcan a la dependencia, se vuelcan y bueno, gracias a dios, creo que... hasta esta hora no hay muchas quejas, la dependencia también les vuelca un servicio a ellos...” (E. n° 26).*

La presencia o ausencia de cooperadoras, motivada en gran medida por el grado de actividad comercial de la seccional en cuestión, cristaliza en dependencias policiales muy disímiles entre sí:

*“La comisaría X es ‘otro mundo’. El mismo comisario hace referencia a esto. En primer lugar, tienen oficina de atención al público. La atención en las comisarías en general se da en la guardia, hecho que para alguien no habituado a estos espacios, puede resultar chocante. En cambio en esta seccional ubicada en pleno centro de la ciudad, tenemos una oficina muy bien equipada, con aire acondicionado, calefacción y televisión (Los Simpsons en el televisor es un buen modo de romper el frío reinante en una comisaría), donde el público espera ser atendido detrás de una ventanilla para realizar su denuncia o, como ocurre mayoritariamente, para realizar distintos trámites administrativos. Creemos que por primera vez no sentimos estar dentro de una comisaría rosarina (y eso parece ser una política deliberada), hecho que se ratifica cuando el comisario nos hace pasar a su despacho, que recuerda más a una casona antigua, que a una oficina estatal. La habitación es amplia y los muebles ordenados, con el infaltable televisor encendido (y con su propio altar a la virgen). Esta realidad (esta ‘otra realidad’, en palabras del comisario) obedece a la acción de la cooperadora, que los atienden a la perfección” (O. n° 4).*

Los dos relatos anteriores corresponden a comisarías centrales, comisarías que forman parte de esa “otra realidad”. La presencia de la cooperadora se va perdiendo a medida que nos alejamos del centro a pesar de que subsiste, con menos peso, en los barrios que cuentan con centro comercial propio.

*“Como todo comisario, comienza señalando las falencias estructurales (falta de provisión de ropa, armamento, chalecos; fallas edilicias, móviles, etc.). Éstas son subsanadas con el aporte de la cooperadora. Desde que él tomó la comisaría, estos aportes aumentaron de 300 a 1200 pesos mensuales. Igual no alcanzaría*



*porque los comerciantes pueden poner entre 10 y 15 pesos mensuales (al parecer el sujeto que aporta a la cooperadora es siempre el comerciante)” (O. n° 3).*

En un plano formal, la principal fuente de recursos que se menciona, además del presupuesto que proviene del Estado provincial por supuesto, es la cooperadora. Ahora, detrás de esta fuente de recursos ingresan otros que no necesariamente son ilegales pero que no provienen de esta entidad integrada fundamentalmente por comerciantes. En esta sentido es que aparecen las relaciones de reciprocidad (el “mangazo”<sup>53</sup>) con comerciantes comunes en forma particular. En comisarías barriales esta situación parece repetirse:

*“La comisaría tiene un móvil y una chata descompuesta. El móvil se sostiene (nafta, arreglos, etc.) gracias al aporte de la cooperadora (esta lógica se entiende porque los comerciantes ponen plata y el móvil circula exclusivamente por la zona comercial) y los favores de mecánicos conocidos (el comisario plantea que es el típico ‘mangazo’ de la policía pero que no lo pueden evitar por la escasez de recursos que poseen)” (O. n° 5).*

*“El comisario nos hace pasar a su oficina (en el camino vemos que están pintando, lo que llama nuestra atención). El comisario afirma que se lo están haciendo los dueños de los boliches de la zona. Resalta su habilidad para el ‘mangazo’, le pagan la pintura y la mano de obra” (O. n° 8).*

Lejos de ser reprimidas por la superioridad, estas actitudes y aptitudes son valoradas al momento de establecer los ascensos. El jefe de esta última comisaría, que se encuentra en una zona cercana a la Terminal de Ómnibus y de amplia actividad nocturna, nos decía que:

*“Él siempre se ha preocupado por recaudar plata. Anteriormente había sido designado jefe de la Comisaría X, que era un desastre. Él se ocupó personalmente de recaudar plata ( nombra lugares formales donde lo hacía –supermercados, casino, etc.-) y toda esa plata la invirtió en pintar y remodelar la comisaría. Nos muestra un álbum de fotos que grafica cómo quedó la comisaría (pintada, con muebles nuevos, un móvil en condiciones, un bicicletero –que ordena el depósito de bicicletas que en otras comisarías se apilan una sobre otras). Por esta actitud de ‘saber juntar plata’ para refaccionar la comisaría, estuvo solo 6 meses en ese destino y fue premiado con su traslado a este nuevo destino” (O. n° 8).*

Ahora bien, este tipo de relaciones en particular también se despliegan con aquellos que desarrollan actividades en el límite entre lo legal y lo ilegal, como por

---

<sup>53</sup> Forma local y coloquial de denominar al “pedido de dinero o colaboración”.

ejemplo, el vínculo citado por este comisario entre los jefes de las seccionales y los dueños de boliches y también prostíbulos<sup>54</sup>:

*“Cuando nos retiramos, vemos que está esperando el indio, dueño de Willie Dixon (un bar de rock n’ roll) y La Rosa (un prostíbulo<sup>55</sup>), un ejemplo de la buena relación que mantienen con los dueños de los boliches...” (O. n° 8)*

Lo mismo acontece con aquellos que desarrollan actividades definidamente ilegales como, por ejemplo, los “quinieleros ilegales”<sup>56</sup>:

*“El comisario pide una pausa en la grabación y plantea el ejemplo de los ‘quinieleros’. Se pregunta ¿qué debería hacer con esa gente? Responde que nada, porque cada uno elige en qué quiniela jugar y los quinieleros no le hacen mal a nadie. Además, con la plata que recaudan de ellos pueden comprar resmas, nafta, etc....” (O. n° 8)*

Sin dudas que el despliegue de relaciones económicas en las comisarías debe trascender las registradas en nuestro trabajo de campo, sin embargo, los hallazgos realizados en esta instancia permiten, al menos, poder conceptualizar a las distintas comisarías también como unidades económico administrativas. Así, en tanto unidad con relativa autonomía de los controles políticos y de la normativa que regula su funcionamiento, cada comisaría va desplegando una serie de vínculos, sobre la base de un poder policial más o menos consolidado, que le permiten seguir reproduciéndose como tal financieramente. Y dentro de ese esquema, es considerado exitoso aquel que logra solidificar vínculos con distintos sectores, sin importar su origen, proveedores de recursos. Para ello, para obtener recursos de los actores económicos que operan en la jurisdicción (sean éstos legales o ilegales), resulta fundamental el sostenimiento de la representación (en gran medida ficticia dado su carácter eminentemente administrativo) de la comisaría como garante de la seguridad en la jurisdicción, ya sea por su potencialidad de reprimir el delito o bien de prevenirlo; lo cual en todos estos casos se limita a circunstanciales rondas por los centros comerciales. En el mantenimiento de esta imagen radica la condición de posibilidad –ya sea a través del patrullaje o control sobre la actividad en sí- que

<sup>54</sup> Desde fines de 2012, a nivel municipal se ha iniciado un proceso de discusión en torno de esta actividad que motivó el surgimiento de una normativa que la prohíbe.

<sup>55</sup> En Mayo de 2013 el prostíbulo fue clausurado, luego de una investigación de la secretaria de Prevención e Investigación de Delitos Complejos, por proxenetismo.

<sup>56</sup> Personas que se dedican a promover apuestas en forma ilegal.

permite el desarrollo de vínculos de reciprocidad con los distintos actores de la jurisdicción<sup>57</sup>.

### Interacciones cotidianas de la policía

Los distintos aspectos que conforman la dinámica policial cotidiana vuelven manifiesto que la policía como institución global no interactúa solo con supuestos *delinquentes* sino que lo hace con distintas poblaciones<sup>58</sup>. Sobre ellas –tal como iremos demostrando– se despliegan relaciones de alteridad a pesar de que el vínculo puede asentarse sobre funciones sociales, asistenciales o simplemente administrativas. Se trata invariablemente de un “otro”, un otro ajeno a la “condición policial”, en términos de Monjardet.

Si bien en líneas generales la definición del “otro” no implica necesariamente una connotación negativa, en ella nos encontramos indefectiblemente con algún tipo de clasificación o en todo caso de identificación a partir de su pertenencia a una determinada comunidad o población:

“... un ser humano reconocido en el sentido descrito como otro no es considerado con respecto a sus particularidades altamente individuales y mucho menos con respecto a sus propiedades “naturales” como tal, sino como miembro de una sociedad, como portador de una cultura, como heredero de una tradición, como representante de una colectividad...” (Krotz, 2004: 20).

El asunto radica en qué características asume esa relación de alteridad. En un trabajo ya clásico, Tzvetan Todorov (1996) analiza la relación con el “otro” en varias

---

<sup>57</sup> En *Miller's Crossing*, una película dirigida por Joel Coen cuyo título fue traducido al español como *De paseo con la muerte*, Tom Reagan, el personaje encarnado por Gabriel Byrne se dirige a Leo, jefe de su mafia, después de un ataque de un grupo rival. Allí, intenta convencerlo de la paridad de fuerzas y la necesidad de una negociación luego de que dicha situación lo hiciera verse vulnerable planteándole: “diriges una ciudad porque la gente lo cree”. La creencia en la eficacia del control policial sostiene simbólicamente la cuestionada hegemonía de la policía en el control del territorio. De ahí que nunca la comisaría se va a plantear abiertamente como unidad administrativa y va a seguir reclamando su lugar dentro del diseño de la función preventiva y de seguridad. Sus posibilidades de reproducción dependen en gran medida del mantenimiento de esta apariencia.

<sup>58</sup> Aquí entendemos a las poblaciones como aquella “multiplicidad de individuos que están y sólo existen profunda, esencial, biológicamente ligados a la materialidad dentro de la cual existen” (Foucault, 2007: 42). Referirnos a la población nos evita hablar en términos de clase sin perder su materialidad, ya que si bien en distintos territorios existen configuraciones de clase bien definidas, esto no necesariamente es siempre así.

dimensiones. Todorov parte de pensar que se puede concebir al “otro” como una abstracción, como una instancia de la configuración psíquica de todo individuo, como el Otro y otro en relación con el yo; o bien como grupo social concreto al que *nosotros* no pertenecemos. En su análisis, la relación con el “otro” asume varias dimensiones: en el plano axiológico, el “otro” puede ser bueno o malo, igual o inferior a mí; en el plano praxeológico, puedo adoptar los valores del “otro”, identificarme con él, imponer mi imagen o ser neutro al respecto; mientras que en el plano epistémico, existiría una graduación infinita entre los estados de conocimiento más o menos elevados.

En tanto grupo social al que los policías no pertenecen, los “otros” expresan una gama de relaciones de alteridad. En primer lugar, mencionaremos las más significativas por fuera de la representación de la figura del *delincuente*, sobre la que ahondaremos más adelante:

La principal interacción, en términos policiales, se da con el público (los ciudadanos) que asiste a una comisaría:

*La empleada de la guardia de una comisaría barrial se queja de la gente que llega malhumorada diciendo ‘uds. acá se la pasan tomando mates’, ‘uds. acá no hacen nada’, cuando en realidad cumplirían un ‘montón’ de funciones. Uno lo que puede observar estando en el lugar alrededor de dos horas es que, prácticamente, no tienen tareas, y la hipótesis de que se la pasan simplemente tomando mates parece ser una hipótesis bastante cierta. Igualmente el hecho que venga el público y demande que ‘uds. no hacen nada’ le genera unas ‘ganas de reventarlaaaaa’ pero, evidentemente, esto no puede hacerlo (D. C. n° 9).*

Todos aquellos que asisten diariamente a una comisaría son vistos por la policía como alguien extraño, como aquellos que no pertenecen, que no vivieron “la experiencia”, que no siguieron el “camino azul” y que por tanto no lo pueden comprender. Van desde vecinos a comerciantes, de madres a chicos desvariados, todos ellos tienen en común una sola cosa: no ser policías.

Ahora, dentro del universo del público que concurre a una comisaría, la relación de extrañeza se tensa con una figura en particular: los profesionales. Esa tensión emerge de dos circunstancias bien claras. El profesional (abogado) pertenece al mismo mundo simbólico que el policía, pero esa pertenencia se ve legitimada

académicamente por un reconocimiento institucional representado en el título de abogado. Dicha diferenciación genera una serie de incomodidades porque ese capital cultural generalmente es puesto en juego a la hora de entablar relaciones con los policías. Vale para representar estas tensiones la observación que citamos a continuación:

*“Dentro de la comisaría hay gente esperando, entre la que se encuentra una abogada junto a dos clientes. El trato de la abogada con el personal policial es bien frontal (se deja entrever una relación de superioridad). El caso que los ocupa es un desalojo ordenado por un juez. La abogada y sus clientes se presentan en la comisaría (con la orden de desalojo) para que el comisario disponga personal para hacerlo efectivo. El policía de la guardia le dice que espere (el contacto que ya tenían era con el oficial P. y justo ahora el oficial P. estaba tomando declaración reemplazando a un sumariante que no se sabe dónde estaba). El caso es que el policía vuelve al rato y le dice que no pueden hacer el desalojo porque el Juez había dejado la orden sin efecto. La abogada intenta alardear un rato acerca de lo ridículo de esta medida (que ya había sido comunicada a los usurpadores días antes) pero lo hace ante la impasible mirada del policía de la guardia que se limita a decir... ‘es lo que comunicó el juez’. La abogada pregunta cómo se dio esa comunicación... el policía responde que puede haber sido por teléfono o fax. La abogada se queja de esa informalidad. El policía plantea que quedó asentado en el libro de guardia y le asegura, ahora (para que no insista más) que vino a través de un oficio que llegó a las 11: 45, que cualquier duda vaya al Tribunal” (O. n° 11).*

En este párrafo se pueden observar tanto la posición desde la cual la abogada busca llegar a la comisaría, fundada en un saber académicamente legitimado y los recursos de los que se valen los policías ante este tipo de relación. Los mismos se ven también en el siguiente extracto de nuestras observaciones en la misma comisaría:

*“Llega a la guardia una abogada que viene en representación de un cliente al cual le robaron la moto pero en la denuncia aparecen intercambiados el número de motor y el número de dominio. La abogada en principio llega con buen tono aunque marcando su posición sobre todo al decir que viene en representación de su cliente. La atiende el sumariante que no le da una respuesta positiva al decirle que tiene que venir su cliente directamente con la documentación. Ahora, la abogada le enfatiza que ella tiene toda la documentación allí pero el sumariante afirma que, igualmente, tiene que venir el cliente en persona. No sabemos si lo hace porque el procedimiento es así o, un poco también, para molestar a la abogada. La abogada señala que ella ya había pasado por esto en otras comisarías y que, en general, salvaban el error haciendo una llamada pero el sumariante insiste en que tiene que venir el denunciante para hacer eso. Cuando se retira la abogada, lo hace bastante inconforme y con tono irónico saluda a los policías (O. n° 11).*

Este tipo de relaciones son reproducidas en el discurso de los policías y relatados con una fuerte carga de extrañeza. En toda la jerarquía policial encontramos expresiones de este vínculo problemático.

Para un sumariante:

*"... por suerte no me tocó nunca en las del centro. Porque yo estando en la X, vos sabés que muchas veces yo... una de por sí, ya, con esta gente, con la gente de... de acá, del barrio es completamente distinto a gente del centro. Yo estando en la X, hemos llegado a tener casos que, que te digo que se yo... un abogado o cualquiera... viene a las 8 de la mañana decía 'atendeme, tengo una denuncia para hacerte pero tengo que abrir el consultorio' y, a lo mejor, había gente ¿entendés? que estaba haciendo un certificado... eh... cómo decir... a mí no me importa si vos sos abogado, si vos sos juez, si vos tenés que abrir el consultorio ¿entendés? tengo a estas dos personas antes que vos ¿me entendés?" (E. n° 16).*

Según una suboficial:

*"... a mí me pasó un día, no viene al caso la circunstancia, había una seis personas, yo estaba allá adelante y viene el abogado, necesitaba un certificado de extravío, tampoco era un caso de vida o muerte, yo se la hago corta, 'toma asiento que ya lo voy a atender', 'no atendeme, porque soy el doctor', 'está bien, pero esta gente, esta gente estaba antes que usted', 'no pero me vas a atender', 'no' le digo 'usted va a tomar asiento' (...) porque encima vos te tenés que bancar que ellos te prepoteen, ¿entendés?..." (E. n° 28).*

De acuerdo al jefe de comisaría céntrica:

*"... yo creo que hay más respeto pero por miedo hacia la autoridad policial, cosa que acá en el centro, yo te voy a ser honesto y es algo personal mío, que lo he visto, eh... mientras más alta sea tu clase social, eh... más te llevás el mundo por delante. Y eso es una gran verdad. Entonces la persona humilde, todavía sigue respetando o el miedo... quizás el miedo hace que haya más respeto hacia el policía, cosa que acá... eh... te vuelvo a decir... vos ves que por que... eh... y es más.... el mal trato que recibimos a veces, son gente profesionales ¿eh? Que... se creen que por... por tener un título o por tener una... por tener una clase social alta hace de que vos tengas que ser un felpudo ante ellos..." (E. n° 26).*

La supuesta arrogancia de los profesionales tiene una base clara de clase. La pertenencia a lo que socialmente se entiende como sectores medios -un sector social ubicado por encima de los lugares de donde provienen comúnmente los policías- genera y refuerza estas situaciones de tensión. Dos tramos de la entrevista con un suboficial resultan ilustrativos al respecto:

*“sí, por el nivel de gente, porque si vos vas a una comisaría que está más en un barrio marginal eh, por ahí la gente te entiende más y respeta más, porque sabe cómo es el tema, pero, este tipo de gente ya te digo, que, que, entiende, título y honores, que son gente bien que no se puede hacer nada...” (E. n° 25).*

*“... entonces, sí, se da, y es mucho más común que incluso ellos no te entiendan, porque ¿qué pasa? Le tenés que explicar con toda la formalidad, con las mejores palabras y no te entienden, en una comisaría de barrio marginal vos le hablás con todas las letras como uno habla (se ríe) y te entienden...” (E. n° 25).*

El mismo transitar de los policías por estos barrios, es vivido con tensión. Ellos mismos sienten que están transitando por un lugar al que no pertenecen y en donde su presencia puede ser descalificada por quienes sí tienen el derecho de vivir allí. En la entrevista con la última suboficial citada encontramos un fragmento significativo al respecto:

*“... qué sé yo, no sé, nunca he trabajado en una ‘comisaría de centro’. No me gustaría tampoco porque creo que tener... ya, ya de por sí que estamos bastante maltratados, pisoteados y, y, y mucha falta de respeto, creo que... sabiendo con que, que te cruzás con algún abogado o con alguien también ¿me entendés? que te implica su lenguaje, creo que sería no... no me la bancaría” (E. n° 28).*

El mismo jefe de una comisaría de la zona sudoeste -con quien logramos cierta continuidad y vínculo directo durante nuestro trabajo de campo- la segunda vez que fue entrevistado llegó a afirmar que:

*“...yo el jefe de comisaría me sentía medio... cabecita negra y acá no... es distinto tratás bien a la gente, te trata bien, lógicamente vos no estas... por ahí vos no todos son iguales, los tratás bien a la gente te tratan bien... pero hay zonas... un caso tonto vos vas a la casa de una persona que fue víctima de La Florida (zona residencial de sectores medios altos sobre la ribera norte del Río Paraná) y vos te dabas cuenta que te miraban de una forma discriminándote...” (E. n° 33).*

Evidentemente, los policías no entablan un vínculo con la ciudadanía en abstracto. Cada seccional y cada grupo social tiene sus particularidades. Los policías las reconocen. Los policías construyen su propia visión de ellas y actúan en consecuencia. De hecho, a partir de los registros citados hasta el momento se desprende que la misma actividad policial no puede pensarse por fuera de la seccional que la contextualiza. En cada jurisdicción la lógica de las interacciones difiere. Así lo reflejaba el subjefe de una comisaría de la zona sur cuando le preguntábamos en qué tipo de jurisdicciones prefería trabajar:

*“preferencia... todo tiene su problema, todo, todo tiene su inconveniente, eh... hablando de lo que es el centro, es muy, como le digo, muy comercial, es otro tipo de gente, otro tipo de persona donde por ahí te excediste un poquito el trato o calculo que si hablaste un poquito mal eh, ya te están tratando de... de como que vos no vas a andar en la comisaría, eh, acá venís a un lugar de asentamiento precario y hablando bien no entienden, por eso te digo, en los dos, en todos lados tenés que cuidarte un montón cómo hacer, cómo actuar, porque tenés que adaptarte al ritmo o a la gente que está en cada posición, entonces no, mucha preferencia no, es lógico, trabajar en una segunda, que es todo centro, no hay tanto choque con esta gente, por ahí sería un poquito mejor, pero también tenés los problemas que es la parte comercial...” (E. n° 7).*

Si bien las alusiones más inmediatas al concepto de “ciudadanía” remiten a un estatus jurídico igualitario y a la pertenencia a una comunidad política sobre la base de derechos y obligaciones proyectados como universales, al momento de enfocar su desarrollo con el foco puesto en las prácticas policiales difícilmente podamos llegar a reproducir ese proyecto igualador y universal. El tipo de vínculo que desarrolla la policía cotidianamente no se entabla con un ciudadano abstracto sino con un ciudadano particularizado, localizado. La “ciudadanía” se va conformando, de ese modo, como una experiencia multidimensional que involucra, además de las dimensiones señaladas, un conjunto amplio de identificaciones, acciones e ideas que se construyen en la vida cotidiana y que posicionan a los sujetos sociales frente a sí mismos, frente a otros y de cara al Estado (Bloj, 2008). El posicionamiento de sujetos sociales frente al Estado a través de la policía (ya sea en su faz “asistencial”, económica, laboral, administrativa o típicamente policial) está expresando formas particulares de ciudadanía que, en amplios sectores sociales, se construye cotidianamente a través de una vinculación primaria con la agencia policial. Esa interacción resulta diferencial de acuerdo con la conceptualización que la propia policía hace de la calidad del ciudadano con el que interactúa en un vínculo personalizado y, fundamentalmente, situado. Es así que fuimos entendiendo que toda la actividad policial tiene, en primer término, una base territorial precisa.



## Capítulo IV: La intervención policial

En este capítulo analizaremos las formas diferenciales de intervención policial de acuerdo al territorio y el contexto en el que la misma se ejerce y reflexionaremos acerca de cómo ello culmina problematizando concepciones tradicionales de ciudadanía al fundamentar usos del poder de policía en general y de la fuerza en particular que asumen un carácter fuertemente discrecional.

### IV. 1: El territorio.

Desde la clásica monografía de Evans Pritchard sobre los Nuer (1992) cuya primera edición en inglés data de 1940, en el campo de la antropología se ha reflexionado sobre el problema del espacio y el territorio sin limitarse a las características que emergen del ambiente físico. En dicho texto, Evans Pritchard distinguía entre la distancia ecológica que está basada en una relación entre comunidades definida en función de la densidad y de la distribución, y en relación con el agua, la vegetación, la vida animal, los insectos, etc. y la distancia estructural que va a definir la distancia entre grupos de personas en un sistema social y que es expresada en función de los valores.

Más tarde, Pierre Bourdieu (1999) retomará esta distinción con el objetivo de problematizar el pensamiento sustancialista acerca de determinados lugares. Así, al momento de analizar el “gueto” o los “suburbios problemáticos”, Bourdieu distingue entre el espacio físico y el espacio social. En el planteo de Bourdieu, la incorporación de las estructuras del orden social se hace efectiva, en gran medida, a través de la experiencia prolongada e indefinidamente repetida de las distancias espaciales sobre las cuales se afirman determinadas distancias sociales. Bourdieu nos está planteando, de esta manera, una trayectoria en la que las estructuras sociales convertidas en estructuras espaciales, y con ello naturalizadas, vuelven evidente al espacio como uno de los lugares donde se afirma y ejerce el poder.

Esta mirada sobre el espacio y el territorio vino a empalmar, en el contexto de la antropología, con los desarrollos propios de lo que desde los años 50 y 60 en Estados Unidos se ha conocido como Antropología Urbana y principalmente con los aportes de la Escuela de Manchester (Signorelli, 1999), que fueron los primeros en tematizar sobre la cuestión urbana como objeto de estudio de la antropología. En ese marco, las investigaciones desarrolladas específicamente en el contexto latinoamericano han puesto de relieve la importancia de las prácticas y recorridos de los habitantes sobre la configuración urbana de las ciudades, a través, principalmente, de estudiar el significado de las formas de residencia en relación con comportamientos laborales, familiares y formas de participación (García Canclini, 1997).

Sobre esta base, gran parte de los trabajos actuales que desde nuestra disciplina se van a plantear el problema de las configuraciones espaciales y territoriales, sobre todo en contextos urbanos (Reguillo, 2008, 2006; Marrero Guillamón, 2008; Lacarrieu, 2007; Barabas, 2005), parten de entenderlas en forma directamente relacionada con el modo en que los sujetos conciben, significan y clasifican un espacio determinado, en el marco de prácticas y luchas por su apropiación tanto material como simbólica. En este sentido es que, por ejemplo, Rosana Reguillo (2006) va a distinguir entre la “ciudad imaginada” y la “ciudad practicada” y que Rita Segato (2007) va a entender al territorio como espacio representado y apropiado:

“territorio es siempre representación social del espacio, espacio fijado y espacio de fijación vinculado a entidades sociológicas, unidades políticas, órganos de administración, y a la acción, y existencia de sujetos individuales y colectivos (...) territorio es espacio apropiado, trazado, recorrido, delimitado” (2007: 72).

Entre los policías rosarinos, las estrechas imbricaciones entre el espacio físico y el espacio representado forman parte de la dinámica de trabajo cotidiana. Ello se expresa, en primer término, en la representación misma de las jurisdicciones policiales y las dependencias administrativas correspondientes, donde emerge recurrentemente una primera y gran oposición entre **comisarías del centro** y **comisarías barriales o de trabajo**. Los funcionarios policiales entrevistados a todo lo largo del trabajo de campo

tenían bien en claro que los recorridos laborales que implican las diferentes comisarías difieren notablemente.

Esta distinción se manifestó por primera vez, abiertamente, durante una observación en una comisaría ubicada en la zona sudoeste de la ciudad, cuando la empleada de la guardia nos planteó que ella también había trabajado en una comisaría céntrica y que se trataba de “otro tipo de persona”, “otro tipo de ambiente”, para pasar a reírse junto con otro policía que estaba al fondo afirmando que en su jurisdicción “no hay residencias, sino reincidencias... la gente es diferente” (O. n° 3).

Así, pudimos empezar a observar que estas distinciones se materializaban, antes que nada, en el trato cotidiano con el público. En este sentido, queremos recuperar un fragmento de la -ya varias veces citada- entrevista n° 26. En ella, el suboficial nos planteaba:

*“no es lo mismo una denuncia que te pueda llegar a tomar en una comisaría del centro o de zona norte que lo que te puede llegar a tomar acá. Y si vos no conocés los códigos... no te entendés ni la mitad, te puedo asegurar, ni la mitad de lo que te quieren venir a decir...”*.

Se nos planteaba así una primera gran diferenciación que no emergía necesariamente de las condiciones ambientales de trabajo (si bien éstas podían influir claramente) sino más bien del arco de relaciones sociales que cada jurisdicción implicaba para la policía. Tal sentido era reproducido por otro oficial entrevistado, con más antigüedad, perteneciente a una comisaría de la zona noroeste:

*“Las comisarías, inclusive dentro de lo que es mismo la organización, el organigrama de una comisaría o el desempeño de una comisaría es distinto, de una ‘comisaría de centro’ a una ‘comisaría de villa’, como decimos nosotros o... ‘comisaría de trabajo’ como se le dice. Las ‘comisarías de centro’ trabajan otras cosas, trabajan con jueces, con abogados y eso mismo te... vos, digamos, como que te apropiás ese trato y con tus mismos compañeros. En una comisaría de acá, donde estamos constantemente ocupados, constantemente (...), constantemente en laburo, es otra cosa...”* (E. n° 16).

En esta última cita aparecen los términos claramente delimitados. Por un lado tenemos *comisarías de centro* y por el otro *comisarías de trabajo*. Inclusive, del mismo

párrafo también se desprende un elemento –pretendidamente objetivo- que serviría como parámetro para clasificar a una jurisdicción ya sea como *céntrica* o bien como *de trabajo*, que consiste básicamente en la presencia o ausencia de *villas de emergencia* al interior de su perímetro. En la entrevista n° 9, con el subjefe de una dependencia de la zona sur, estos parámetros aparecían puestos en juego cuando le preguntábamos acerca de las particularidades de su jurisdicción:

*“Sí, hay particularidades, porque por ejemplo, la comisaría X es muy escaso los asentamientos precarios que tenemos, tenemos lo parte, parte de lo que sería eh... la Villa L, que dentro de todo lo fueron remodelando, fueron sacando gente y quedó un poco menos, o sea estando en la Y nos encontrábamos con un 50 o 60% de asentamiento, entonces son otras, otros modos de trabajar, o sea todo, todo tiene un modo de trabajar, para todo hay que usar criterios, porque no podemos usar un criterio para trabajar por ahí lo que sería una comisaría X con la gente que se encuentra ahí, o con la persona que se encuentra ahí, con trabajar con las personas que están en el asentamiento”.*

La recurrencia de este tipo de conceptualizaciones nos fue indicando que se trataba de sentidos -a partir de los cuales se conceptualizaba el territorio- que trascendían los límites de una jurisdicción particular y que caracterizaban la forma de discriminar el trabajo y clasificar en consecuencia el carácter mismo de una comisaría, dejando en un segundo plano cualquier organigrama institucional. En el siguiente fragmento de entrevista ello aparece claramente expuesto:

*“Esta zona es muy particular, es un barrio difícil. Vos tenés una zona céntrica terrible, como lo es JP, es una zona comercial bárbara, tenés industrias, tenés ‘villas de emergencia’, tenés ‘barrio toba’, es una zona bastante, es un barrio digamos... jodido... digamos... sin embargo esta comisaría no tiene todo el trabajo, por ejemplo, que tiene la X, la X tiene más trabajo, tiene más ‘villa’...” (E. n° 29).*

En la mirada de este comisario cercano al retiro –a pesar de lo cual continuaba en una trayectoria laboral ligada a comisarías consideradas marginales- tener más *villa* significaba tener más trabajo. Ahora bien, esa representación negativa del territorio asociada a la presencia de *villas* no era el producto de la conceptualización particular de una persona aislada cuya trayectoria laboral se desarrolló siempre “en el barro”, sino que era compartida también en otras dependencias, como, por ejemplo, funcionarios que tenían como *destino* el Comando Radioeléctrico. En este caso, la misma se daba, principalmente, con referencia a una característica en particular de las

villas: los *pasillos*<sup>59</sup>. El *pasillo* aparecía indisociablemente ligado a la idea de *acción*. En la entrevista con el sumariante –de larga trayectoria en el CRE- de la misma comisaría de zona noroeste se nos planteaba:

*“Me gusta lo que sería la parte de acción, me gusta así, y acá estás un poquito más encerrado (en comisarías) y basándote a lo, a lo que es la investigación, ya el cuerpo es otra cosa eh... llega un móvil, llega un móvil, llegan dos móviles, bueno, se, se trata de, de localizar al, al autor del hecho, nos metemos, o sea, se meten, hablo porque yo estaba, nos metíamos en los ‘pasillos’, si teníamos salíamos, qué se yo algo, peleando con todo el mundo porque se nos colgaban todo el mundo las mujeres, chicos, porque peleabas hasta con los perros...” (E. n° 16).*

Las villas como localización de la *acción* aparecían, consecuentemente, como el lugar propio y distintivo del personal del CRE<sup>60</sup>. En esa construcción de lugar, el riesgo que caracterizaba antes abstractamente la función policial encontraba su localización natural. Todo era escenificado en los *pasillos*. En la entrevista con un joven agente del Comando encontramos claramente expresada esta visión:

*“Estás expuesto a todo, vos no sabés cómo... o te metés en una ‘villa de emergencia’, con qué te podés encontrar. Venís sentado adentro del móvil y **en el ‘pasillo’ vos no sabés que... si te van a mat....a disparar, o con qué te van a salir.** O si vas a identificar a alguien, vos no sabés si... si está armado o no está armado. Vos no sabés lo que te vas a encontrar en la calle...” (E. n° 18).*

De esta última referencia se desprende que los *pasillos* aparecen, para el personal de ambas dependencias, no solo como territorios físicos sino como espacios cargados de imágenes que semejan un “campo de batalla”. A este respecto resulta elocuente lo dicho por un agente entrevistado con trayectoria de 12 años al interior de la agrupación cuerpos:

*“Entonces suponete te largás vos, o se larga tu compañero a correr a alguno, pero por la noche no te podés largar, podés caer en las trampas, pisar un alambre, que te están esperando atrás de las paredes o detrás de las puertas, te esperan mismo detrás y te, te, te disparan de... por la espalda. Muchas veces hemos entrado a los ‘pasillos’ y nos han, nos hemos encontrado con alambres de púas cruzados en los ‘pasillos’, vos venís corriendo de noche y no lo ves (...) sacaste el arma, sacaste el arma y te matan...” (E. n° 22).*

<sup>59</sup> Angostas vías de tránsito al interior de este tipo de urbanizaciones.

<sup>60</sup> Además de diferenciar entre “espacio físico” y “espacio social”, Bourdieu (1999) entiende por “lugar” al espacio físico en que un agente o cosa están situados.

El “mundo de los pasillos” -ese territorio que iba representándose cada vez más sobre una relación de exterioridad con respecto al radio de acción de la policía- aparecía también como un territorio donde la violencia emerge transparente, sin mediaciones. El sumariante de zona noroeste que citábamos anteriormente -el que a pesar de su función administrativa manifestaba vocación por la función policial preventiva y de investigación- relataba en ese sentido: *“se complica mucho patrullar... estábamos y siento chiflidos así... saco el arma y no sabía para donde disparar... porque más siendo en una villa te sale gente de todos lados...”*; para contextualizar más adelante dichas escenas en territorios precisos: *“en esas zonas conflictivas que te marqué ahí, hay ‘pasillos’ por todos lados, no sabés lo que te puede salir”* (E. n° 16).

Ahora bien, las formas de representación del territorio son, al mismo tiempo, atravesadas y ratificadas por una mirada institucional. Planteamos esto ya que el modo de concebir el espacio ocupado por asentamientos irregulares se expresa también en el mapa de la ciudad con el que trabaja el GPS de la central del CRE y 911. En el mismo, estos territorios aparecen remarcados con color amarillo. En este sentido, uno de los operadores más experimentados nos señalaba que el mapa:

*“Te permite mapear ciertas cuestiones, nosotros vamos cargando información, por ejemplo el espacio que dejo en verde es sector parquizado, **el sector en amarillo son ‘villas de emergencia’**. Tenés las comisarías marcadas, después si vos querés seguir entrando en el programa te permite ver donde están todas las escuelas, los hospitales, donde están todos los bancos, o sea, es toda información que vos podés ir mapeando sobre algo ya preestablecido que es el mapa de la ciudad de Rosario (...). Lo que sí tenemos fijo es eso, lo que son espacios verdes, más allá de todo lo que sean las calles, calles, avenidas, y el ferrocarril porque ya aparecen en el mapa y después en amarillo todo lo que es villas de emergencia...”* (E. n° 12).

Tanto las lecturas del territorio institucionalizadas en el GPS del Comando como las representaciones sociales que los policías reproducen, representan una plataforma desde la cual los policías “van” a la ciudad, operando de ese modo como un “mapa que precede al territorio, un mapa que proyecta el espacio y que está orientado por las pertenencias sociales y culturales de los actores” (Reguillo, 2008: 72). El territorio se va conformando, de esta manera, como un espacio geográfico culturalmente modelado (Barabas, 2005), presuponiendo la modelación cultural del mismo, la constitución de límites y fronteras espaciales. De hecho, tal como estamos

viendo, las formas de simbolización que los policías hacen del territorio suponen la existencia de márgenes que no necesariamente se corresponden con las jurisdicciones policiales establecidas. Así es que la acentuación de la presencia o no de *villas* como elemento que referencia a la jurisdicción, llevaba a muchos policías a caracterizar dentro del abanico de *comisaría de trabajo*, determinadas zonas puntuales de su jurisdicción como *zona de guerra*. Sin ir más lejos, uno de los comisarios de zona noroeste entrevistados, para referirse a su jurisdicción, reiteraba constantemente: “*esto es Saigón*”.

La clasificación general de una jurisdicción como *céntrica* o bien como *de trabajo* -marcada por la presencia de *villas* fundamentalmente- sobre la base de representaciones sociales y también en algún punto de miradas institucionales, trasciende las pertenencias organizacionales que caracterizan a la policía en la provincia de Santa Fe, conformando de ese modo un núcleo de sentido que implica y fundamenta formas diferenciales del hacer en el trabajo policial en general.

Existe, así, un nivel donde las diferentes formas de representar y significar la propia jurisdicción no resultan indiferentes, diferentes territorios pueden implicar diferentes formas de trabajo. Esto nos relataba un suboficial sin perder la referencia en torno a la presencia de *villas*:

*“Por eso te digo, distintos, **distintos lugares tienen su manera**, o sea uno tiene que adoptar una manera de trabajo en cada lugar que va o sea, no es el mismo en todos lados, porque son todos lados diferentes, o sea eh, qué se yo, una comisaría A que es similar a ésta, una comisaría B que creo que hay más asentamientos todavía que en acá, es la mayoría, o sea son... eh la C que son todos comerciantes, o la E y la D que es pleno centro, entonces, **tenés que tener otro trato**, otra forma de hablar, todo, es todo diferente, entonces te tenés que ir adaptando a los lugares que, a los lugares que va ...”* (E. n° 19).

Cada jurisdicción tiene “su manera”, “su trato”. “Hay que usar criterios”, se nos decía en un registro citado más arriba. La forma que termina asumiendo el patrullaje también va a diferir. Todos los funcionarios del Comando entrevistados fueron claros al respecto. Por ejemplo, durante una charla con dos agentes de una misma dotación, ambos coincidieron en plantear que el patrullaje “es distinto” en el centro con respecto a los barrios de la ciudad. Uno de los ejemplos que proponían estaba

representado por el acto de detener un coche para su identificación a raíz de denuncias realizadas al 911. Los agentes afirmaban que *“si era una persona ‘bien’ y algo del procedimiento le cayó mal, esta persona puede ir a la comisaría y denunciar al policía por malos tratos”*. Esto hacía que deban tener consideración en este tipo de tratos. Sin embargo, afirmaban que la relación con *“la gente en los barrios es distinta.... no se puede tener el mismo trato, no se les puede solicitar que se acerquen al móvil”*. En este sentido, concluían que cuando patrullaban en barrios había que *“meterle más presión. No se trataría de estar más atento sino de tener otra firmeza en el trato con la gente”* (D. C. n° 16).

De este modo, podemos observar cómo –sobre la base de una profunda dicotomía entre jurisdicciones *céntricas* y jurisdicciones *de trabajo*- el territorio pensado se empieza a sobreponer sobre el espacio físico erigiendo fronteras que van definiendo formas particulares en la dinámica cotidiana de trabajo policial<sup>61</sup>. En tramos no grabados de la entrevista con el sumariante de una de las comisarías de zona noroeste seleccionadas, por ejemplo, reiteradamente se hizo referencia a lo extenso de la jurisdicción y al hecho de que había muchas zonas con *villas de emergencia*. Sobre un mapa de la zona, nos fue marcando los distintos sectores donde había *villa*, afirmando lo vital que resultaba el conocimiento del recorrido de los *pasillos*. Sin embargo, el dato más significativo fue que durante todo su relato el énfasis estuvo puesto en una manzana en particular donde había *villa*, se trataba de un “refugio de choros”, pero que llamativamente se encontraba ubicado en una zona residencial: *“si esa manzana estaría, la trasladarían, del otro lado de la avenida sería más fácil la cosa porque tendrían todas las ‘villas’ juntas y ya sabrían dónde están”* (E. n° 16).

El concepto de “frontera” no implica necesariamente una delimitación rigurosa sino, antes que eso, un margen permeable y cambiante. No obstante, en la mirada que los policías hacen sobre el territorio aparece esta diferenciación incluso como un

---

<sup>61</sup> A este respecto, resulta elocuente lo planteado por un policía entrevistado: *“son zonas totalmente distintas, lo que es, la, la, la, digamos, en una, una zona es mayormente mucha cantidad de robo, en otra no tanto, y en otras ya tienen otro tipo de modalidades, (...) digamos, en el centro es más que nada es el carterista, lo mecheras, las mecheras, digamos pero, en otras zonas ya hay eh, este robos ya por parte de, con, con tipos de, con otros tipos de armas, depende de las circunstancias, por eso no todas las zonas se trabajan de la misma manera...”* (E. n° 15).



límite físico bien definido. Así es que resulta un problema, en la representación del territorio, la existencia del lado no previsto de un pequeño “manchón de villa”. Si esa media cuadra de asentamientos estuviera “del otro lado”, las tareas de control serían mucho más simples y lineales. Rosario nunca llegó a ser un pueblo, como esos tantos de la pampa húmeda, atravesados por vías de ferrocarril que dividen mundos sociales, sin embargo cada seccional construye su propia vía de ferrocarril -avenidas, centros comerciales, arterias principales de ingreso a zonas carenciadas, etc.- que para los policías se constituye en un elemento que orienta en gran medida su propia práctica y las formas de intervención requeridas.

Ahora bien, junto con el peso de esta clasificación del territorio empezamos a entrever que, paralelamente a la delimitación de una territorialidad asentada sobre bases tanto físicas como sociales, se comenzaban a delinear fronteras simbólicas que discriminaban entre quienes formaban parte de la “sociedad normal” a defender y quiénes no. Se trata de lo que Bourdieu (1999) denominaría como “efectos de lugar”, en donde nos encontramos inmersos en una dinámica circular en la que las distancias sociales expresadas en el espacio son incorporadas a su vez como categorías de percepción y clasificación de poblaciones por los actores en cuestión. Así fue que durante el primer acercamiento a una comisaría de la zona sur -situada en una de las jurisdicciones con mayor índice de homicidios de la ciudad-, una vez resuelto todo lo relativo a los permisos para la realización de nuestro trabajo de campo, el comisario nos pasa a señalar que además *“tenemos que saltar otro escollo”*. Ese “otro escollo” refería a la “brecha cultural” que existiría entre nosotros y los agentes de policía. Planteaba también que ellos mismos tienen, a su vez, una “brecha cultural” muy grande con la gente que tratan en esa jurisdicción, que *“no son de la sociedad normal”*: *“sin discriminar”*, afirma, *“pero es en las ‘villas’ donde se encuentran los focos más importantes de violencia”* (D. C. n° 2).

Semanas después, en ocasión de la entrevista grabada que mantuvimos, volvía sobre sus consideraciones respecto de la jurisdicción:

*“Yo desde el día en que llegué acá, junto con el otro muchacho que es el subjefe mío, salimos en forma personal, caminando a pie, recorriendo los negocios y casas particulares ¿tá? Golpeamos la puerta, nos presentamos como el jefe, como el*

*subjefe y tratamos de tener una relación de... directa. Sabemos que no voy a dar ninguna solución, que no voy a dar ningún paliativo a la situación que me pueden llegar a plantear pero mi idea no es dar una solución porque sé que no la tengo y no le voy a ir a mentir, pero sí que la persona pueda romper esa desconfianza que se ha generado y saber que el comisario está, que el comisario fue a su casa, que le dejé el teléfono, que me conoce personalmente y que estoy dispuesto a atenderlo si viene y me plantea algo y yo sé que la gente nos va a comprender, porque la gente no es ajena... **hablamos de la gente que ya te digo, la gente bien del barrio** ¿tá?, es gente que es totalmente instruida” (E. n° 7).*

Profundizando en este sentido y relacionándolo claramente con la existencia de límites físicos definidos, la disponible de esa misma comisaría de la zona sur nos manifestaba:

*“Un poco de todo tenemos. Media jurisdicción dividida por la ‘villa de emergencia’... me entendés. Después tenés, ponele, de la calle A para, para... el oeste, tenés un pueblo medianamente de gente... este... de gente normal, como si te digo... y sí, tenés de todo un poco. En otra jurisdicción, por ahí, tenés la F que tenés... eh... gente de... estudio, abogados... por eso, son, según las jurisdicciones es la comisaría que... **nosotros acá tenemos las dos cosas (...), Tenemos gente de... no sé cómo decirlo... de ‘villa de emergencia’ y gente medianamente... trabajadora...**” (E. n° 24).*

De los registros recién citados se desprende que las dinámicas de trabajo cotidianas no expresan solamente una conceptualización del territorio en cuestión, sino también, íntimamente relacionada, una clara caracterización de las poblaciones que lo habitan. Dicha caracterización no se limita a distinguir entre distintos “otros” - tal como pudimos observarlo en el capítulo anterior- sino que ahora pasa a clasificarlos entre “normales” y “anormales”, aspecto sobre el que profundizaremos en próximos capítulos. Por el momento, traemos valoraciones de un entrevistado que ponía un fuerte énfasis en este aspecto y en su vinculación con los procesos de trabajo policiales:

*“Para explicarte sin discriminar a nadie, pero **de acuerdo a la brecha social vos tenés delitos que se incrementan y tenés trámites administrativos que también se incrementan o bajan** o sea... vos donde tenés FONAVIs<sup>62</sup> o ‘villas de emergencia’, tenés doscientos mil expedientes más de juzgados de familia, de situaciones de amparo, de un montón de cosas que en jurisdicciones de gente de clase media o media alta y lo mismo ello te implica trabajo de citaciones o*

---

<sup>62</sup> Refiriéndose a las viviendas sociales construidas mediante el Fondo Nacional de la Vivienda. En la ciudad de Rosario, las mismas tuvieron un desarrollo significativo en casi todos los barrios periféricos de la ciudad entre las décadas de 1970 y 1980.

*despacho judicial, para que vayas al tribunal por distintos trámites, y ni hablar de la parte penal, de los delitos comunes, **entre gente normal de determinado nivel cultural, los delitos comunes de llamarle del puterío de familia, bajan** y eso queda relegado a los niveles más bajos y de acuerdo a que tan más bajo sean se incrementa el homicidio ¿por qué? En determinados lugares se dialoga o se llega a un acuerdo o se callan la boca y se va cada uno por su lado, en otros ya se pelean y terminan en un hecho de lesiones y en otros directamente no se pelean, van y se matan y eso lo marca la brecha social” (E. n° 15).*

A este respecto, el por entonces jefe del Comando nos relataba:

*“Por más que el territorio sea el mismo una jurisdicción de la comisaría A ¿sí? Por lo que es el nivel socio-económico cultural, a lo que es una X que vos tenés en el mismo espacio del territorio infinidad de FONAVI donde la cantidad de población supera o está al nivel de lo que es una comisaría A, pero tenés otra idiosincrasia, la A es otro nivel comparado con la X, sí es la misma población, 300.000 habitantes a lo mejor por cada una, pero **la calidad de los habitantes no es lo mismo que en la primera...**” (E. n° 31).*

En las jurisdicciones ubicadas por fuera del centro y del radio que comprende los barrios tradicionalmente habitados por sectores medios y altos “la calidad de los habitantes no es la misma”. Dichas conceptualizaciones hechas por los funcionarios policiales –que implican una noción tanto del territorio como de sus poblaciones- se termina sintetizando en criterios definidos de actuación policial. Los relatos del personal del comando son recurrentes en este sentido: *“buscamos siempre en los lados marginales”, “sabemos adónde pueden salir, buscamos a veces no encontramos”. “Siempre son los mismos aparte” (D. C. n° 14).*

La localización es precisa. Se busca siempre en los mismos sectores. No existe lugar para la duda. Esta orientación definida que circula entre los integrantes del CRE es compartida también por aquellos que tienen como destino comisarías. Un oficial de una comisaría céntrica profundizaba también en este sentido: *“Por ahí uno en un barrio o en un barrio donde tiene ‘villas de emergencia’ o FONAVIs, uno sabe que la... que la mayor cantidad de los delincuentes está ahí” (E. n° 20).*

En esta última cita podemos observar cómo la presencia de villas o barrios de viviendas sociales incide directamente sobre la orientación del trabajo policial. El viejo comisario de zona noroeste, con larga trayectoria en comisarías de los suburbios, ahondaba sobre este vínculo:

*“A mí me mandaron a la X porque consideran que yo soy una persona que me desenvuelvo bien en el sector éste, me refiero a que yo en mi jurisdicción tengo seis ‘villas’ **yo estoy considerado un ‘comisario barrero’**, que le gusta renegar con lugares conflictivos” (E. n° 29).*

Para trabajar en el “barro” hacen falta policías “barreros”. La estrechez del vínculo entre el territorio y el modo de actuación policial se vuelve ahora evidente. En estos diferentes registros nos encontramos con que -desde funcionarios con trayectoria y grados jerárquicos hasta jóvenes recién ingresados en la fuerza- la institución policial toda parecía leer no solo enclaves territoriales sino también -y constantemente- idiosincrasias, “niveles culturales”. Dentro del gran universo de “otros” representado por aquellos que no son policías, iban surgiendo distintos niveles y clasificaciones -sobre las que profundizaremos más adelante- entre las que “normales” y “anormales” parecía destacarse.

Precisamente, a lo largo de nuestra experiencia en el campo nos encontramos con que la recurrencia y extensión de dichas lecturas permeaba los distintos ámbitos de actividad policial. En las distintas dependencias, las conceptualizaciones en torno tanto del territorio como de la población que lo caracterizaba operaban como marco situacional que le imponía al policía un modo de actuar, un modo de actuar que necesariamente debía corresponderse con el marco de relaciones en el que su práctica se desplegaba (Barrera, 2013). Cada jurisdicción (del latín, *iuris dictio*, decir la ley) implicaba un modo particular de “decir la ley”, de “aplicar el derecho”.

Entre estos modos particulares de aplicar la ley, los que asumían una significación radical en relación con el problema de la ciudadanía y con la especificidad de la intervención policial en tanto agencia fundada sobre la posibilidad de utilizar la fuerza, eran aquellos que terminan con la vida de un ciudadano. Este tipo de casos ha sido tradicionalmente cuantificado por investigaciones enmarcadas en programas de organismos de defensa de los derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional<sup>63</sup>. A esa tarea nos abocaremos en el próximo apartado, sobre la base de una elaboración de datos propia

---

<sup>63</sup> Bases de datos disponibles en: <http://www.cels.org.ar/home/index.php> y <http://www.correpi.lahaine.org/>

y preguntándonos específicamente cuáles son los territorios que habilitan el recurso de la fuerza a través de un acercamiento de tipo cuantitativo.

## IV. 2: Los casos de violencia policial: 2002 – 2010

En ciencias sociales la tradición de estudios en torno a la utilización de la fuerza por parte de funcionarios policiales es relativamente reciente, consolidándose en nuestro país en la década del '90 del siglo pasado. Esta particularidad, sumada a la ausencia de datos oficiales<sup>64</sup>, da por resultado que contemos con muy pocos elementos empíricos para afrontar el estudio de esta problemática. Esta situación ha motivado que numerosas investigaciones (CELS, 2001, 2002; Tiscornia, 1999; Programa Delito y Sociedad Informe General período 1998/ 2006) se orienten hacia la construcción del dato a partir de otro tipo de fuentes. Es en este marco que la información que proviene de las crónicas policiales publicadas en los diarios se presenta como la base más sólida desde donde comenzar a pensar las reales dimensiones de este problema.

La primacía de la fuente periodística en la investigación en ciencias sociales plantea un primer problema que es claramente expuesto por Irene Vasilachis de Gialdino. Vasilachis de Gialdino (2005) sugiere que, ante cualquier tipo de texto, nos encontramos con modelos interpretativos de la realidad social que no siempre figuran de manera explícita. Por supuesto que las crónicas policiales no van a ser ajenas a la construcción de interpretaciones de los hechos y, en general, nos vamos a encontrar con que retoman sin variaciones los discursos del sistema penal, sobre todo el discurso policial (Gómez, 1996)<sup>65</sup>. Dada, entonces, una gravitación diferencial de los distintos discursos implicados, suele ser recurrente observar una importante incidencia del modo de representar e interpretar los hechos por parte de la agencia

---

<sup>64</sup> En este mismo sentido en el Informe General del Programa Delito y Sociedad se señala que el uso de la fuerza física por parte de los agentes policiales constituye un objeto negado no solo para las prácticas de producción de conocimiento sino también para las prácticas de gobierno de los actores estatales en la Argentina.

<sup>65</sup> Máximo Sozzo (2005) también observa que la noticia policial articula una descripción del hecho acorde con la “versión policial”. Entre las limitaciones que tiene trabajar con este tipo de fuente señala que, por un lado, la crónica policial se elabora, en un número importante de casos, sobre la base del “parte policial” (que condensa la información producida por la institución policial acerca del hecho en cuestión) y que, además, los diarios no son espejos donde se reflejan los hechos de violencia policial sino que brindan *fotografías* de ciertos usos de la violencia, *filtrados* por la propia decisión de las autoridades policiales o bien por las decisiones editoriales de los diarios, quedando, por lo tanto, una parte de la violencia policial *oculta* al análisis.

policial -expresada tanto en partes de prensa como en la opinión de voceros policiales- en la forma de construcción del discurso periodístico propio de la crónica policial<sup>66</sup>.

La situación se complejiza aún más con la actual concentración de los medios<sup>67</sup>, tal como lo expone la periodista Alicia Salinas en una entrevista<sup>68</sup>:

“...hay limitaciones, hay censuras, hay campañas de desinformación... porque cada vez es peor los niveles de censura, al tiempo que aumenta la concentración de los medios, hay menos pluralidad, y la posibilidad de competir, entonces los medios son más permeables a las presiones, de grupos policiales o de grupos empresarios”.

Este contexto plantea la dificultad y los límites de trabajar con la crónica policial como única fuente. Para nuestra región, la misma ya había sido señalada también por Font (1999), Sozzo (2005) y Motto (2009), entre otros. Sin embargo, ante la ausencia de datos oficiales, el relevamiento textual de los hechos por la crónica policial se presenta como una fuente de información privilegiada que permite, por lo menos, dimensionar el cuadro de situación y proyectar distintas perspectivas de análisis.

Las muchas limitaciones que presenta la crónica policial de los diarios en tanto fuente de datos nos llevó a considerar como único criterio a relevar -dentro de la diversidad de intervenciones policiales que problematizan el ideal de “ciudadanía”- a la muerte de la víctima -más allá de la situación o el contexto en que la misma se produce- fundamentados en que la dinámica de producción de la noticia periodística lleva a recoger ineludiblemente, dentro del amplio arco de usos de la fuerza por parte de funcionarios policiales, los hechos que culminan con la muerte de la víctima; mientras que suele asumir posiciones ambiguas respecto de otras situaciones tales como apremios, abusos, lesiones, etc. Consideramos entonces que tomar la letalidad

---

<sup>66</sup> La novela de Osvaldo Aguirre (2006) “Notas en un diario” ofrece, a partir de su experiencia de trabajo en la sección Policiales del diario La Capital de la ciudad de Rosario, un pormenorizado relato acerca de la estrecha relación que suele existir entre la agencia policial y los periodistas que cubren hechos policiales.

<sup>67</sup> En la ciudad de Rosario, durante el período analizado –si consideramos a Rosario/12 como un suplemento del porteño Página/ 12- salieron a la venta solamente dos periódicos, La Capital y El Ciudadano, éste último con intermitencias.

<sup>68</sup> Entrevista grupal realizada en clase del Seminario de Criminología en la Facultad de Derecho, UNR.

en el uso de la fuerza -hecho que en general es noticiable cuando no hay presiones en otro sentido- nos brinda de esa manera una mayor precisión en los datos construidos.

En nuestro caso, la fuente analizada fue el diario La Capital, el periódico de mayor circulación en la ciudad de Rosario y el único que tuvo continuidad en su publicación durante todo el período analizado (2002/2010<sup>69</sup>). En la misma son rastreados y registrados hechos de violencia que culminan en muerte de civiles y que pueden tratarse ya sea de enfrentamientos, ejecuciones, muertes provocadas en operativos de control, en el marco de protestas sociales o uso de la fuerza por motivos particulares, quedando por fuera de este relevamiento solamente las muertes ocurridas bajo custodia. Dentro del mismo nos resulta irrelevante si el hecho en cuestión fue posteriormente considerado legal o ilegal ya que la pregunta que funda este punto de la investigación no se vincula con la legalidad o ilegalidad de determinadas prácticas policiales sino por las condiciones que hacen posible la utilización de la fuerza por parte de la policía. Cabe aclarar también que tomamos las muertes en donde están involucrados funcionarios o ex funcionarios de la policía provincial, ya sea personal afectado a comisarías, del CRE, Patrulla Urbana o retirados, buscando considerar las continuidades entre las distintas etapas (formación, alta, retiro o separación del cuerpo) de una trayectoria policial.

Siguiendo estos criterios el relevamiento arrojó los siguientes datos.

---

<sup>69</sup> Comenzamos nuestro recorte a partir del año 2002 descartando incorporar el año 2001 en tanto el mismo representa un año marcado por significativos movimientos de protesta social y represión estatal (articulación que bien podría haber sido objeto de una investigación con objetivos específicos relacionados con esa problemática). Con el mismo, pretendimos aprehender las prácticas policiales rutinarias en su relación con la violencia, suponiendo que las mismas pueden ser analizadas como una práctica habitual y cotidiana que las considera herramientas necesarias para el control de personas y grupos en contextos particulares (Martínez, 1999, 2002).



**CUADRO n° 1<sup>70</sup>****Cantidad de personas muertas por año en hechos de violencia con participación de funcionarios o ex funcionarios de la policía provincia**

Año	Número de Víctimas
2002	6
2003	7
2004	8
2005	10
2006	11
2007	7
2008	7
2009	7
2010	9

(Fuente: Elaboración propia sobre datos del Diario La Capital)

Recurrir a la cuantificación de casos nos brindaba la posibilidad de que la perspectiva “microscópica” de la etnografía se complementase con otra “macroscópica” provista por los datos cuantitativos, mirada que nos permitía dimensionar las formas que, en los números, asumía esta problemática. Ciertamente, los mismos empleados con quienes tomábamos mate (en realidad una infusión a base de edulcorante que en las comisarías llaman *mate*), con quienes hablábamos de política, deportes, quienes se interesaban por esa cosa extraña llamada antropología,

---

<sup>70</sup> No incluimos en este informe los casos relevados por la Coordinadora contra la Represión Institucional que no fueron noticia en el diario La Capital, ya que en dichos relevamientos –que superan en cantidad el número relevado por nosotros- no son explicitadas sus fuentes ni su metodología. Para observar la importancia cuantitativa de estos casos en general, basta compararlos con el número global de homicidios dolosos acontecidos en la totalidad de la provincia. Para el año 2002: 250, 2003: 269, 2004: 251, 2005: 235, 2008: 274. Fuente: Dirección Nacional de Política Criminal. No obtuvimos información, en dicha fuente, acerca de los años 2006, 2007, 2009 y 2010.

aquellos que trasladaban enfermos, que asistían a las vecinas ancianas, también mataban. Ante eso fue que nos preguntamos ¿cuáles son las condiciones para que un policía, ese mismo policía que conocimos en nuestra estancia en el campo, se decida a utilizar su arma? ¿en qué contexto? ¿contra quiénes? ¿cuál es, concretamente, el espacio relacional (Hernández, 2002) en el que se manifiesta con mayor regularidad la violencia en el caso rosarino? ¿la utilización de la fuerza representa un “efecto de lugar” que las configuraciones sociales expresadas en el espacio constituyen en el arco de percepciones policiales? Al momento de dimensionar, siguiendo estos interrogantes, una problemática como el uso de la fuerza en el marco de las prácticas policiales, el relato de sus propios actores podía resultar limitado e insuficiente ya que, a pesar de la continuidad y extensión del trabajo de campo, no siempre se logra llegar a un grado de implicación con la investigación que permita hablar abiertamente acerca de estos temas. Así fue que, profundizando en esta misma línea de investigación, se nos hizo necesario contrastar el discurso con la elaboración y análisis de datos cuantitativos que expresasen un determinado estado de cosas. Elaboramos para ello cuadros y mapas que buscan graficar:

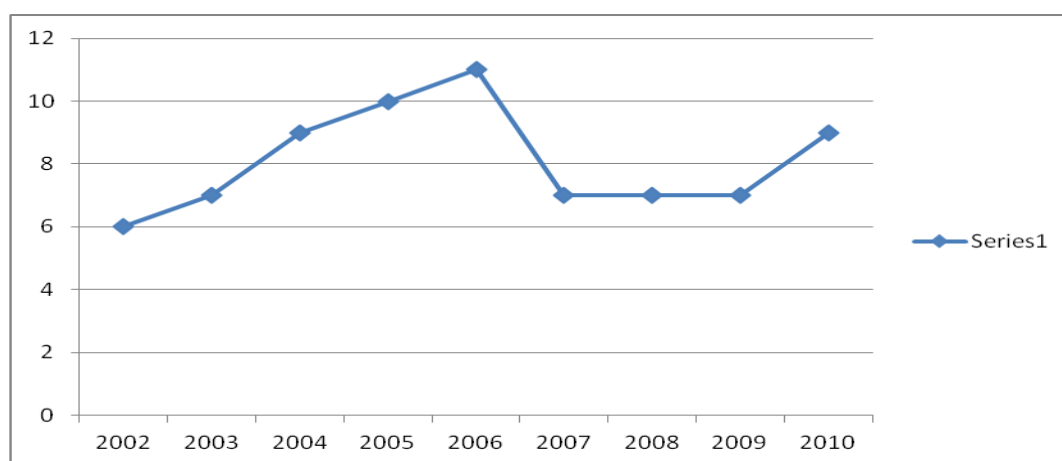
- Evolución de la cantidad de casos para el período 2002 – 2010.
- Distribución de las víctimas por edad, período 2002- 2010.
- Distribución de los casos relevados según Jurisdicción Policial.

Como es posible inferir de los datos anteriormente presentados (ver cuadro n° 1), a partir del año 2002 observamos una tendencia estable y sostenida en el número de casos de violencia con participación de funcionarios o ex funcionarios de la Policía de la Provincia de Santa Fe que culminan con la muerte de civiles. Los datos que marcan la estabilidad de esta tendencia se oponen al excepcional número que había caracterizado al 2001. De hecho se trata de datos, si se quiere, previsibles, en tanto el año 2001 marcaba el punto más álgido de violencia policial en particular con epicentro

en la represión de la protesta social de Diciembre<sup>71</sup>. La tendencia mencionada se visualiza en forma más clara en el siguiente gráfico:

## CUADRO n° 2

### Evolución de la cantidad de casos para el período 2002 – 2010:



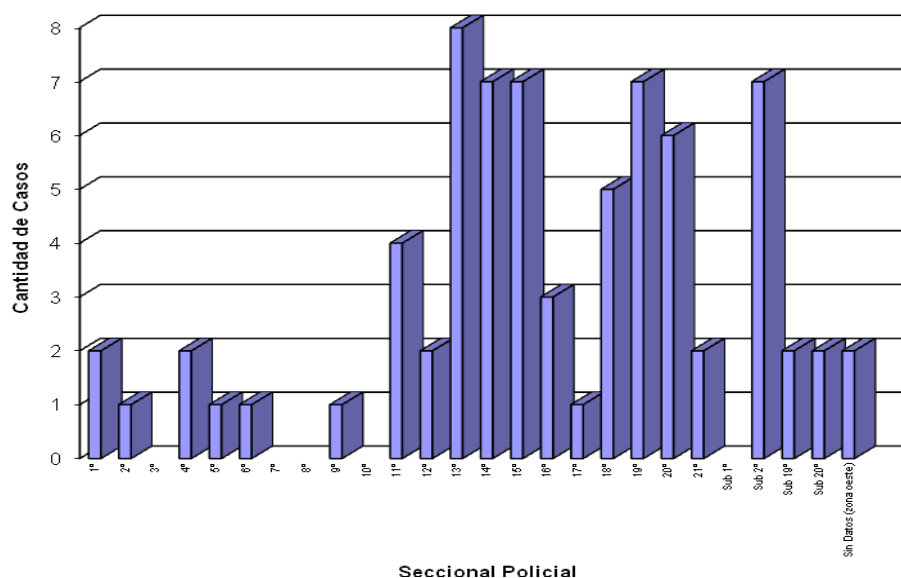
(Fuente: Elaboración propia sobre datos del Diario La Capital)

La información que contiene la crónica policial como fuente, tal como vimos anteriormente, usualmente es limitada. Sin embargo, en la misma aparecen siempre los datos, de vital interés para nuestra investigación, referentes a la seccional policial en el que tales casos ocurren. Las seccionales que van de la 1ª a la 10ª corresponden a jurisdicciones donde habitan sectores medios y altos, ya sea zonas céntricas, barrios residenciales o tradicionales de sectores medios como Parque, Alberdi y Echesortu por ejemplo, mientras que de la 11ª en adelante ya se abarca barrios populares, sean estos tradicionales como por ejemplo Ludueña, Empalme Graneros, Tiro Suizo o Saladillo, o nuevas urbanizaciones ya sea de asentamientos o viviendas sociales. Del análisis de esos datos, se desprende que la distribución de los casos de acuerdo a la jurisdicción en que ocurren es la siguiente:

<sup>71</sup> Recordemos que en el marco de la protesta social de diciembre de 2001, nomás en la ciudad de Rosario, murieron 7 personas producto de la represión policial.

### CUADRO n° 3

#### Distribución de los casos relevados según Jurisdicción Policial.



(Fuente: Elaboración propia sobre datos del Diario La Capital)

Los datos cuantitativos relevados no contradicen lo que, según nuestra experiencia de campo, representaba la forma habitual de proceder y la predisposición para actuar por parte de la policía, definida en gran parte de acuerdo al territorio en cuestión. De hecho, tomando en consideración tanto este relevamiento como los relatos de los propios policías, empezamos a inferir **amplios márgenes de discrecionalidad en torno a las posibilidades de utilización de la fuerza de acuerdo al contexto geográfico.**

Los grados de discrecionalidad en las prácticas policiales desarmaron la lógica que fundaba, según las concepciones clásicas que pensaban el Estado burocrático, la relación que se da entre el funcionario y la norma, las cuales presuponían que:

“en base a una organización dispuesta en juzgados u oficinas, la vinculación al reglamento está tan perfectamente determinada que la moderna teoría científica, por ejemplo, admite que la competencia atribuida legalmente a cualquier funcionario para establecer ordenanzas no le autoriza a decretar normas especiales para cada caso particular, sino que le obliga a limitarse a una reglamentación abstracta” (Weber, 1984: 718).

El agente policial, en estas nuevas formas de burocracia, no se limita a una aplicación de normas abstractas, sino que ante cada situación debe *leer* el escenario y, en muchos casos, esa *lectura* implica traspasar los límites fijados por la norma. A este respecto resulta elocuente lo dicho por un suboficial de una comisaría de la zona oeste durante la realización del trabajo de campo:

*“Estando en la calle aprendió a no darle oportunidad al ‘delincuente’. Pone el ejemplo de cómo reaccionaría un ‘delincuente’ armado que es encerrado por la policía (casi como un animal acorralado). Seguramente va a apelar a su arma. En esos casos, él aprendió que primero está su propia vida y tiene que actuar primero él” (O. n° 3).*

Esta conversación informal mantenida en la puerta de una comisaría enclavada en un populoso barrio de calles mayormente de tierra –junto con todos los registros citados anteriormente- nos está indicando que, en relación con los usos de la fuerza por parte de la agencia policial, las posibilidades de traspasar el límite impuesto por la normativa varían de acuerdo al contexto geográfico. Esto mismo se manifiesta, de acuerdo a los datos por nosotros elaborados, en el hecho de que estas prácticas –tal como queda graficado en el cuadro precedente- se suceden fundamentalmente por fuera del radio del macrocentro rosarino (comisaría 1ª, 2ª y 3ª) y de barrios tradicionales de sectores medios y altos (comisaría 4ª a 10ª), concentrándose en los siempre problemáticos barrios –para la policía- con asentamientos o viviendas sociales FONAVI.

En este marco, el próximo apartado analizaremos distintas formas de selectividad y discrecionalidad presentes en las prácticas policiales, observando particularmente cuáles son las condiciones –relacionadas con el contexto territorial y con las construcciones de alteridad propias del espacio policial- que promueven o posibilitan el efectivo uso de la fuerza por parte de policías.

#### IV. 3: La delimitación normales/anormales

La policía interactúa diariamente con lo que son consideradas distintas categorías de ciudadanos. Esa interacción, como vimos en capítulos anteriores, aparece en gran parte delimitada por su localización, la que unida a la caracterización que se hace de las poblaciones que habitan un determinado territorio, decanta en prácticas policiales sumamente discrecionales.

Así resulta que en los territorios característicos de la “gente que no es normal” habitan poblaciones que compartirían características esencializadas que van desde la informalidad, pasan por la desprolijidad y terminan en la *delincuencia*. No obstante, una característica los define y ubica completamente en el terreno del “otro”: se entiende que en estas zonas viven todos “choros”. El comisario de la zona noroeste era concluyente respecto de su barrio: “*E. es bravo... hay zonas en donde 9 de cada 10 son choros...*” (E. n° 29).

Dentro del amplio arco de “gente anormal” que habita estas jurisdicciones, en la literatura sobre la problemática generalmente se remarca **la estigmatización que sufren los jóvenes de los sectores populares en su relación con el hostigamiento policial**. La misma es trabajada, por ejemplo, por Kessler (2009) en su investigación sobre el sentimiento de inseguridad. Allí, recoge distintos relatos de jóvenes que señalan que el hecho de vestirse de determinadas maneras o la misma pertenencia de clase, implica un trato distinto por parte del personal policial, el que se acentúa cuando salen de su lugar de pertenencia. Del mismo modo, son numerosos los estudios (CELS: 2005, 2001; Vallespir, 2002, Tiscornia, 1999, entre otros) que remarcan cómo la violencia policial se centra sobre todo en una determinada franja etárea.

En igual sentido, de acuerdo a los datos surgidos de nuestro relevamiento, podemos observar que la discrecionalidad general -que afecta a todos los “anormales” en su trato con la policía pero que no siempre termina en forma letal- culmina sintetizándose en una focalización<sup>72</sup> de las prácticas policiales violentas sobre

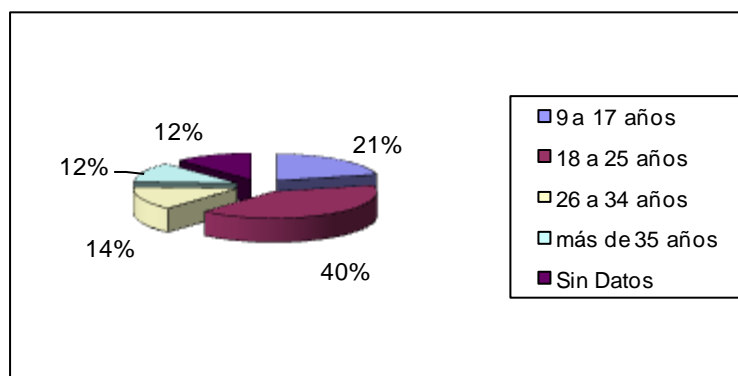
---

<sup>72</sup> En nuestra región, en el Primer Informe del proyecto “Policía, Democracia y Ciudadanía” se muestra claramente cómo el objeto de las prácticas policiales se centra en determinados sectores ciudadanos. En base a una sistematización de los conocimientos que tenían los ciudadanos de una zona de la ciudad de

determinadas poblaciones, siendo víctimas de las mismas fundamentalmente jóvenes que habitan en barrios periféricos de la ciudad:

#### CUADRO n° 4

##### Distribución de las víctimas por edad -período 2002- 2010



(Fuente: Elaboración propia sobre base de datos obtenidos del diario La Capital)

Entonces, más allá de que en la dinámica de trabajo policial pueden ser percibidos diferentes “otros”, la distribución de los casos de violencia policial relevados revela una **focalización de la letalidad sobre poblaciones determinadas** (principalmente jóvenes) y en jurisdicciones no céntricas, en forma coherente con la representación del territorio y de quienes allí habitan que permea las distintas dependencias de la policía. Si para la policía todos aquellos que no lo somos formamos parte de un gran *otro* en tanto no experimentamos la “condición policial”, solamente determinados grupos dentro de ese conjunto representado por la sociedad toda son pasibles de ser objeto de la utilización abierta y letal de la fuerza. Se trata de aquellos que María Victoria Pita (2010) ha denominado como “seres matables”.

---

Santa Fe sobre el funcionamiento policial, se determinó que en “...los contactos iniciados por los funcionarios policiales –a diferencia de aquellos iniciados por los ciudadanos- tienen peso las variables de sexo y edad del ciudadano; en dichos encuentros los funcionarios policiales tienen tendencialmente como interlocutor preferencial a varones y jóvenes” y que “los contactos para solicitar documentación predominan entre quienes tienen entre 21 y 40 años, constituyendo el 45,8% de los contactos iniciados por la policía en esa franja etaria”. De este modo, en dicho informe se arriba a la conclusión de que “...estas diferencias de las variables de sexo y edad con respecto a los contactos iniciados por los funcionarios policiales en lo que se refiere a los motivos vinculados a la seguridad frente al delito, podrían ser interpretadas como indicadores del estereotipo de sospechoso/delincuente con el que se guía la actividad policial, especialmente vinculada a la “prevención del delito” –esencialmente, joven y masculino” (Programa Delito y Sociedad, 2008).

De esta manera, podemos observar cómo lo que anteriormente era solamente el territorio pensado ahora empieza a verse imbricado con categorías sociales específicas. La íntima asociación entre espacio y grupos sociales va mucho más allá de las características físicas del lugar (tal como anteriormente podían ser los *pasillos*) para hacer referencia casi con exclusividad a poblaciones concretas que lo habitan.

En este sentido fue que entendimos que los casos de violencia policial se podían enmarcar en lo que Wacquant (2001)<sup>73</sup> denomina como la “estigmatización territorial” que experimentan los habitantes de territorios que han sufrido un proceso de “guetificación” de su espacio público. La inexistencia de guetos con un componente étnico definido en el caso argentino no impide que los pobladores de zonas que son caracterizadas como críticas por la sociedad en general, vean alteradas las dinámicas de interacción con distintos agentes que no pertenecen a su mismo territorio, ya sean privados o estatales. En este último caso la relación con la policía se ve claramente modificada. Los ciudadanos de estas jurisdicciones sufren un proceso de estigmatización que asume diversas manifestaciones, no solo generacionales. Dos relatos de personal policial abocado a la realización de todos los trámites administrativos relacionados con el ingreso y egreso de detenidos en los penales de las comisarías, grafican las formas cotidianas que asume esta estigmatización.

Desde una estigmatización burocrática o administrativa:

*“Cuando se van los detenidos, esa carpeta la archivo, la voy archivando en otro cajoncito, las voy guardando porque... **siempre vuelven**, entonces cuando vuelven ya tengo todo, le cambio la fecha nada más” (E. n° 14).*

Hasta fenotípica:

*“La carpeta de detenidos tiene una carátula, donde está el nombre de los detenidos, el prontuario, la causa de la detención y el juzgado que la tiene a cargo, después vienen todos los datos, padre, madre, todos los datos filiatorios, (...) acá tendrían que tener una foto, algunos la tienen éste no, la ficha y la filiación física, muscular, que tampoco no lo ví así que no sé, pero **yo a todos les pongo más o menos las mismas características, son todos iguales para mí**, entonces les pongo*

---

<sup>73</sup> Sain (2008) también lo retoma en los mismos términos, señalando la estigmatización creciente en la vida cotidiana de esos espacios y una policía que cumple un rol de control y disciplinamiento social y político de los sectores vulnerables a través de su criminalización.



*cutis trigueño, cabellos cortos, boca mediana, bigote afeitado, nariz mediana, 1 70, siempre les pongo eso” (E. n° 24).*

Estos dos últimos relatos nos remiten a Erving Goffman (1963)<sup>74</sup>, quien definía al estigma como la identificación que un grupo social crea sobre una persona o grupo de personas, a partir de algún rasgo físico, conductual o social que se percibe como divergente del grupo que se trate. En este sentido, no caben dudas que **la policía produce y reproduce estigmas sociales** fundados en expresiones recurrentes tales como “son siempre los mismos”, “buscamos en los mismos lugares” y “son todos iguales”. A este respecto resulte significativo retomar otro párrafo de la entrevista con el comisario de zona sur que distinguía claramente los sectores de su jurisdicción en los que la policía podía establecer un vínculo con los ciudadanos:

*“En las zonas críticas es más complejo. Yo no voy directamente a las zonas críticas a hacer un diálogo con los vecinos porque a veces cada jurisdicción es particular, por supuesto que existe gente buenísima y que no tiene nada que ver con la delincuencia pero en barrios particulares como éste, la gente que vive en esas zonas generalmente que son familias de familias, de generaciones y que **quizás es una excelente persona pero seguramente un hijo, un hermano, un primo, un tío está en la delincuencia.** Entonces yo voy a hablar con esa persona y el delincuente se entera de cuál es mi función o tal vez termino quedando como un payaso de ir a hablar con un delincuente porque yo tampoco tengo forma de conocer a todos... pero **yo sé que ahí están, entonces el trato con esa gente es distinto al del resto de barrio**” (E. n° 7).*

Los procesos de estigmatización tratan, como el mismo Goffman aclara, de relaciones sociales y no de un “atributo” que se adquiere o posee, al tiempo que expresan una teoría del estigma para dar cuenta del peligro que representa una persona o grupo, racionalizando muchas veces una animosidad que se basa en otras diferencias tales como, por ejemplo, la clase social. Los mismos, refiriéndonos puntualmente a la policía, se despliegan en el contexto de relaciones sociales, de prácticas institucionales y estrategias de control conformadas sobre la base de formas de construcción de alteridad que implican la construcción de una noción de

---

<sup>74</sup> Desde Goffman (2008) sabemos que la sociedad establece medios para categorizar a las personas y que en el intercambio social rutinario, a partir de las primeras apariencias, nos encontremos con que tratamos con “otros” que ya están previstos dentro de estas categorías. En ese marco Goffman entiende por estigma a la referencia a un atributo profundamente desacreditador, que estigmatiza a su poseedor y, en el contexto de esa relación, confirma la anormalidad del otro. Así, se construye un estigma en tanto ideología para explicar su inferioridad y el peligro que representa esa persona.

peligrosidad, amenaza, etc., con un fuerte anclaje territorial: “yo sé que están ahí”. Eso resulta válido tanto para el vínculo que establecen las comisarías con los habitantes de su jurisdicción como para el modo de intervención del personal del CRE. En este último caso -si antes decíamos que la actuación policial preventiva se efectivizaba principalmente en tareas de patrullaje- ahora claramente podemos ver que ese patrullaje no se realiza sobre un territorio neutro sino sobre uno cargado de símbolos y de clasificaciones de los sujetos que por allí transitan. Así, **el policiamiento preventivo no puede resultar de otro modo que no sea parcial y selectivo**<sup>75</sup>:

“parcial porque no abarca el conjunto de eventos o problemáticas delictivas registrables. Y selectiv(o) porque, sobre la base de ciertas prácticas estigmatizantes proclives a construir un delincuente modelo y/o delitos atendibles, recae sólo sobre ciertas personas, sectores o estratos sociales específicos o sobre ciertos tipos de hechos delictivos” (Sain, 2008: 94, 95).

En este mismo sentido, Enrique Font –criminólogo rosarino de amplio trayectoria en el análisis de las fuerzas de seguridad y la dinámica del delito- señala al respecto que:

“los delincuentes exitosamente etiquetados como tales en este proceso, tienden a ser individuos altamente vulnerables debido a su posición en las relaciones de poder y en la estructura social: los poderosos resisten fácilmente estos procesos de definición: no así ‘los sospechosos de siempre’. El resultado de estas estigmatizaciones negativas exitosas, convierte a los sujetos así definidos en sujetos potencial e hipotéticamente controlables. Estos sujetos etiquetados como delincuentes, devienen ‘extraños’, se convierten en un ‘otro’ mitificado, desconocido y amenazante” (1998: 102).

El desenvolvimiento cotidiano de este tipo de asociaciones es potenciado por la forma en que se inserta la policía dentro del proceso de criminalización que despliegan las agencias del sistema penal sobre determinadas poblaciones. Marcelo Sain (2002a) distingue dos etapas del proceso de criminalización. La primera, y primaria, tiene que ver con la punición que establecen las agencias políticas del Estado sobre un conjunto de conductas que se entiende deben ser punibles, y que se realiza, formalmente, a través de la sanción de una ley penal, mientras que la criminalización secundaria se concreta:

---

<sup>75</sup> Lo mismo plantea Monjardet (2010), quien señala que el proceso de trabajo policial es necesariamente un proceso de selección porque, evidentemente, no se puede aplicar, en toda su gama, la ley.

“...por medio de la acción punitiva formalmente programada en la sanción de la ley penal, y posteriormente ejercida sobre las personas concretas que son objeto de la incriminación efectuada por las agencias policiales cuando hallan una persona a la que se le atribuye la comisión de un acto criminalizado primariamente, se la investiga y se la somete a la agencia judicial, para que ésta desarrolle un proceso que permita establecer si esa persona ha cometido o no aquel acto y, en caso afirmativo, le imponga una pena que será ejecutada por la institución penitenciaria” (2002: 18).

Por su papel en este proceso, las agencias policiales desempeñan un papel selectivo (Neuman, 1985) sustentado en su rol de primera y principal instancia del proceso de selección criminalizante, conformándose de ese modo en la agencia que normalmente incorpora personas al sistema penal. En dicha incorporación el margen existente entre la abstracción de la ley y las situaciones concretas, puede volverse problemático, ya que se configura un margen de discrecionalidad donde el agente (siempre en un plano del *deber ser*) tiene que analizar el hecho ante el que se encuentra tomando como referencia marcos normativos cuyo grado de abstracción les suelen resultar significativos<sup>76</sup>. Así lo señalaba durante una entrevista un oficial:

*“No es como otras profesiones que vos te sentás en un escritorio, diagramás, hacés bosquejos, sacás cálculos... acá nooo, acá tenés que actuar en el momento como vos creés que te parece bien y como está permitido y está legislado. A veces hay un exceso, cosas pero... no es como otras profesiones porque vos... capaz que vos creés que estás laburando bien y hiciste una macana”* (E. n° 15).

En este sentido, la distancia que existe entre el campo normativo y la pluralidad de situaciones a las que se enfrenta el agente en su actividad cotidiana,

---

<sup>76</sup> En este sentido, Sain explica que la discrecionalidad policial surge de tres factores principales: “en primer lugar, las leyes y normas que regulan el sistema penal y la seguridad pública de una sociedad conforman preceptos y disposiciones de carácter general que no reflejan ni contemplan la enorme diversidad y complejidad de situaciones, hechos y casos concretos que se producen en la vida social cotidiana y sobre los que esos preceptos y disposiciones deben aplicarse diariamente, tanto en el presente como en el futuro. Esos preceptos generales no prevén todas las hipótesis y soluciones que plantean y exigen los problemas sociales relacionados con la acción policial. Sin embargo, la necesidad de que la policía aplique cotidianamente las disposiciones legales de carácter general a diversas situaciones concretas de la vida real obliga, en ese acto, a interpretar esas normas y regular su actuación sobre la base de esa apreciación puntual. En segundo término, existe una enorme multiplicidad de leyes, normas y reglamentos referidos regulatorios de la seguridad pública y de los diferentes aspectos que hacen a ésta y al accionar policial. No obstante, esa multiplicidad normativa no engloba todas las situaciones concretas frente a las cuales la policía está obligada a actuar cotidianamente (...). Y, por último, habitualmente se dan condiciones concretas en las intervenciones policiales, casi siempre desenvueltas en situaciones de crisis que requieren respuestas urgentes e inmediatas sobre el mismo terreno, que le imponen a la policía actuante tomar decisiones rápidas que implican la puesta en práctica de ciertas competencias de enjuiciamiento y de iniciativas específicas de la acción policial” (Sain 2002a: 28, 29).

constituye, desde una mirada centrada en los aspectos normativos de las intervenciones policiales, uno de los principales elementos explicativos de los amplios márgenes de discrecionalidad que podemos encontrar en las prácticas policiales, explicación que en gran parte es asumida y reproducida entre los propios policías.

No obstante, en nuestra experiencia de campo pudimos observar que en **el margen que queda abierto entre la generalidad de la ley y el hecho de su aplicación, los parámetros de elección de posibilidades de acción que el policía construye están atravesados principalmente por la conceptualización del territorio en la delimitación de las posibilidades de utilización de la fuerza y por el proceso de estigmatización que sufren determinadas poblaciones claramente identificables**. Uno de los comisarios entrevistados, refiriéndose a las tareas de patrullaje que desarrolla el Comando, nos decía:

*“Puede parecer discrecional, pero no pueden esperar que se cometa un delito, tienen que actuar antes, por más que parezca que no es lo correcto. Y ellos ya conocen y **se dan cuenta por las apariencias de quiénes son los que pueden llegar a cometer delitos**”* (E. n° 26).

El comisario estaba haciendo referencia a la intervención policial sobre los que son considerados transeúntes “sospechosos” en zonas comerciales. Este tipo de selectividad –que bajo diferentes formas se muestra en todas las rutinas policiales– aparece institucionalizada con el “artículo 10 bis”<sup>77</sup>:

*“En diálogo con el subjefe de una comisaría céntrica, nos comentaba que la relación tan estrecha con los comerciantes de la zona va delineando una serie de particularidades en su labor policial. Por un lado, señalaba el hecho de que el vínculo es directo, con lo cual cualquier comerciante que llama es inmediatamente*

---

<sup>77</sup> Artículo 10 bis: Salvo los casos previstos por el Código de Procedimiento Penal, la Policía no podrá detener o restringir la libertad corporal de las personas sino por orden de autoridad competente. Sólo cuando hubiere sospecha o indicios ciertos respecto de personas, que pudieran relacionarse con la preparación o comisión de un hecho ilícito, podrán ser demorados en el lugar o en dependencia policial hasta tanto se constate su identidad. En este caso, la demora no podrá exceder las seis (6) horas corridas y en el transcurso de las cuales, los que sean trasladados a dependencias policiales, no podrán ser alojados en lugares destinados a los detenidos por delitos o contravenciones y tendrán derecho a hacer una llamada telefónica tendiente a plantear su situación y a los fines de colaborar en su individualización e identidad personal. En la primera actuación policial se impondrá a la persona demorada de sus derechos y garantías, no será incomunicada y se labrará de inmediato, acta individual o colectiva, en la que constará la causa de la demora, fecha y hora de la medida, debiendo ser firmada por el funcionario actuante, por el demorado y dos (2) testigos que hubieren presenciado el procedimiento si los hubiere, con entrega de las copias respectivas a los interesados.

*atendido y asistido en caso de ser necesario. El subcomisario menciona además que ellos no esperan a que se cometa un delito para intervenir, sino que por su experiencia, van detectando a sospechosos que están por cometer un delito. Sabe de la discrecionalidad de esta afirmación, por lo cual la mediatiza afirmando que seguramente nosotros pensaremos distinto quizás por nuestra formación o por nuestra forma de entender las cosas, pero que el oficial de calle cuando ve alguien que ya ha estado detenido y deambula sin rumbo fijo, llegando a una esquina y volviendo o eludiendo la mirada policial, esa persona está por cometer un delito, ya sea robar un auto o un comercio. Entonces ante esas situaciones el personal policial actúa aplicando el “artículo 10 bis”, que sería el que reemplaza al de averiguación por antecedentes. Esas personas son alojadas durante seis horas en un pequeño calabozo<sup>78</sup>. Esta detención la pueden realizar una vez por día, de modo que si detuvieron a una persona a la mañana, y a la tarde sigue merodeando una vez liberado, ellos no pueden hacer nada por más que los comerciantes se quejen por ya conocerlos. No obstante, al otro día pueden volver a detenerla fundamentados en que no conocen las actuaciones que pudieron haber librado los juzgados durante esa jornada. Justifica este hacer sosteniendo que la presión que reciben de los comerciantes es muy importante” (O. n° 4).*

Como podemos observar, el “artículo 10 bis” representa un recurso del cual los policías pueden disponer discrecionalmente impulsados por la necesidad de sostenimiento de las dependencias policiales en términos administrativos y económicos a partir del vínculo estrecho establecido con los comerciantes de la jurisdicción, especialmente en las seccionales céntricas. El mismo formaría parte de lo que Michel Misse (2005) denomina como proceso de “sujeción criminal”. Este autor, partiendo de considerar el delito no como un acto individual sino como una relación social y en el marco de estudiar algunos operadores analíticos que especifican los procesos sociales que materializan la criminalización, elabora el concepto de “sujeción criminal” para dar cuenta del proceso a través del cual son seleccionados preventivamente los supuestos sujetos que compondrán un *tipo social* cuyo carácter es socialmente considerado como propenso a cometer delitos. Es en ese marco que se inserta el “artículo 10 bis”. El “artículo 10 bis” aparece como un recurso al cual la policía puede apelar anticipando la adecuación de la incriminación a un individuo determinado a partir de que el mismo se constituye como *sospechoso* en tanto posee determinados atributos que lo posicionan como tal. En este sentido, Misse va a decir que el proceso de sujeción criminal contempla potencialmente a “todos los individuos

---

<sup>78</sup> En esas celdas transitorias dos días después se suicidaba un joven. Información disponible en: [http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2010/04/29/noticia\\_0075.html](http://www.lacapital.com.ar/contenidos/2010/04/29/noticia_0075.html). (fuente consultada el 05/05/2010).

que posean atributos próximos o afines al tipo social acusado” (Misse, 2005: 125), todos aquellos que, de acuerdo a la “forma de entender las cosas propia de la policía”, “deambulan sin rumbo fijo” en territorios que no son los naturales.

Esta situación asume otra dimensión cuando tomamos en consideración la limitada capacidad de esas agencias, a partir de la cual nos encontramos en la práctica con que:

“...el número de casos y personas criminalizadas por las agencias de criminalización secundaria es socialmente limitado, y casi siempre se reduce a un conjunto acotado de personas altamente vulnerables y sujetas a la *estigmatización* criminalizante de dichas agencias” (Sain, 2002a: 20).

Paso a paso se va conformando el sistema penal, recuperando una metáfora tomada del Martín Fierro, como *tela de araña*, *tela de araña* que únicamente es capaz de retener a los *bichos chicos*:

*“La empleada mira en Crónica TV<sup>79</sup> muy atentamente los resultados de la lotería, mientras nos comenta su trayectoria. Se detiene para narrarnos su experiencia como ‘caminante’, la que ‘se limitaba a eso, a la prevención... pero de vez en cuando vos ves ciertas caritas’, ‘entonces vos los detenés, les pedís los documentos... le preguntás que están haciendo’”* (O. n° 6).

Es poco lo que la policía puede hacer y ese “poco que hace” tiene que ver con el control sobre determinadas *caritas*. Ocurre entonces que, como bien señala Sain, el poder discrecional de la policía termina expresando cotidiana y rutinariamente el “conjunto de prácticas y marcos de referencia simbólicos que se reproducen históricamente en el interior de dichas instituciones y que tienen como itinerario estructurante esa selectividad” (2008: 117). Con esto queremos decir que **la selectividad no responde a políticas deliberadas de las cúpulas necesariamente sino que, antes que eso, se (re)produce en sentidos que atraviesan toda la estructura, toda la jerarquía policial, expresándose en cada pequeña decisión que asume diariamente cada agente en particular**, tal como pretendemos quede evidenciado con las entrevistas reproducidas.

---

<sup>79</sup> Canal de televisión por cable orientado a una programación basada en noticias consideradas propias del “periodismo amarillo” o “sensacionalista”.

La selectividad que atraviesa a todas las dependencias policiales, y que se funda sobre la misma forma en que son representados los sectores sociales objeto de procesos de construcción de alteridad sobre la base de distinciones operadas en torno a la categoría de “normalidad”, constituye de este modo una de las principales herramientas para su posterior criminalización. La misma se repite recurrentemente en innumerables actividades policiales:

*“Veo alguien que no me gustó, voy lo requiso, le pregunto de dónde es, qué anda haciendo por acá si no es de la zona, todo. Vehículo que no, no, no me gustó... las apariencias o los que estaban arriba, lo paro. Veo alguno arriba del colectivo que no me gustó, paro el colectivo, voy lo identifico”* (E. n° 23).

*“...la marginalidad de la sociedad, nosotros trabajamos con eso...”* (E. n° 18).

*“nosotros no, nos llaman siempre por problemas familiares y después el robo es siempre en torno a la ‘villa’, nosotros sabemos perfecto donde roban no sé... Necochea y Ayolas sabemos que vamos a doblar para Tablada porque sabemos que son de ahí”* (E. n° 18).

La asociación entre alteridad y territorialidad toma un carácter cada vez más sólido. La misma, como se desprende del último registro citado, sustenta una idea muy común entre los policías que sostiene que en las jurisdicciones *de trabajo* siempre se sabe dónde buscar a los delincuentes, mientras que, por el contrario, en las *de centro* no se contaría con esa *ventaja* ya que se presupone que allí no vivirían delincuentes:

*“En la primera conversación con el jefe de una comisaría del macrocentro, el eje de su discurso parece basarse en el hecho de que su jurisdicción constituye un espacio problemático ya que, partiendo del hecho de que transitan aproximadamente 40.000 personas diariamente por la terminal de ómnibus que queda comprendida en su jurisdicción, se reúnen al mismo tiempo diversos tipos de gente en un mismo espacio, con los distintos problemas que ello ‘naturalmente’ acarrearía. Unas semanas más tarde, en otra conversación nos planteará también una serie de características adicionales acerca de su seccional: en primer lugar, **los delincuentes no viven dentro de los límites de la seccional sino que provienen de seccionales vecinas**. Esto implicaría una dificultad grande a la hora de resolver hechos delictivos, los que casi nunca se resuelven, excepto los casos en que el delincuente es descubierto in fraganti. Esto se enfatiza en esta seccional por el hecho de que existen además determinadas instituciones que obligan al paso de estas poblaciones, como ser el Hospital Centenario, donde se atienden aquellos que no poseen obra social (‘cada gente viene a atenderse’) proveniente de los*

*barrios más carenciados, gente que aprovecharía esta circunstancia para cometer algún delito en su trayecto” (D. C. n° 2).*

En la otra comisaría céntrica seleccionada, esta perspectiva se repite. Su jefe afirmaba durante la entrevista:

*“y... por ejemplo, acá en esta comisaría, por ahí uno en un barrio o en un barrio donde tiene villas de emergencia o FONAVIs, uno sabe que la... que la mayor cantidad de los delincuentes está ahí, entonces por ahí... ante cierto tipo de robo o modus operandi... eh... de acuerdo siempre a, a lo que sabe cada uno... no se... cosas que no se pueden contar en un papel pero uno sabe, más o menos, por dónde puede estar el... por dónde puede venir la mano. Acá no... acá, los que vienen a robar acá, son gente que vive afuera de esta jurisdicción. O sea, nosotros no podemos presumir ‘ah... sí, este fue fulanito que vive en tal lado’, porque no sabemos. No sabemos porque no viven acá en esta jurisdicción. No son gente que tengamos acá todos los días acá detenidos porque... andan robando carteras o por tal cosa” (E. n° 26).*

La heterogeneidad social en los barrios populares implica una idea de proximidad física y social –aunque muchas veces delimitada por límites precisos- con la *amenaza*, al mismo tiempo que un conocimiento de los modos de actuar de dicha *amenaza*<sup>80</sup>. En cambio, como bien señala Kessler para los barrios porteños pero que también es aplicable para los barrios que en esta tesis identificamos como *tradicionales*<sup>81</sup> de sectores medios y altos, el distanciamiento con el delito en esas zonas es social y físico y “no es raro escuchar<sup>82</sup> que en el barrio hay delitos, pero protagonizados por sujetos que no forman parte de la misma comunidad, sino que vienen de otra parte, llegan y se van: el peligro no está instalado, no es constante” (2009: 144).

Las prácticas policiales que aquí estamos exponiendo evidencian el rol que -de diferentes modos, burocráticos en algunos casos y violentos en otros- juega la policía en relación con la administración y control de los recorridos y trayectorias de distintas poblaciones. Dicha tarea contextualiza en gran medida los datos elaborados en estas tesis, al mismo tiempo que enraíza con los resultados de distintas investigaciones. Así

---

<sup>80</sup> Bourdieu (1999) en “Efectos de lugar” ha analizado también los rasgos de intolerabilidad que se expresan en situaciones de cercanía física entre agentes socialmente muy distantes.

<sup>81</sup> La idea de que sean *tradicionales* implica una homogeneidad que en el resto de los barrios, donde también puede haber sectores medios y altos, no existe

<sup>82</sup> Como pasa usualmente con los policías entrevistados y que se desempeñan en las jurisdicciones que van de la 1° a la 10°.



es que en coincidencia con los patrones aquí expresados, Marcelo Sain (2008) señala cómo el proceso de selección criminalizante está determinado por el grado de vulnerabilidad social de las personas sobre las que recae dicha selección. Selección que es concebida sobre la base del estereotipo de delincuente socialmente predominante y que en general cometen ilícitos de menor complejidad, muy lejos de los delitos denominados como de “cuello blanco”. En el mismo sentido Paulo Pinheiro (2002) señala que la policía tiende a actuar como guardias fronterizas protegiendo a las *élites* de los pobres, mientras que la violencia policial aparecería amparada en la impunidad, precisamente, porque se dirige hacia las *clases peligrosas*, en el marco de un accionar policial orientado a reprimir los delitos característicos de los pobres y no los de sectores medios o altos.

Hemos visto cómo, en la última etapa, la función policial se ha complejizado y que, en este nuevo contexto, los policías se posicionan de diferentes y ambiguos modos en la trama de relaciones sociales de su jurisdicción. Ahora bien, la dinámica particular de esa inserción en las relaciones sociales no niega un rasgo característico (y tradicional) de la función policial: la administración del tránsito de distintas poblaciones por su territorio, la cual aparece como un objeto claro de la policía tanto en la representación de cada una de las jurisdicciones como en la aplicación de la normativa, en particular con relación al “artículo 10 bis”, sobre determinados sujetos considerados peligrosos. Existe, en palabras de Alcira Daroqui, “la necesidad de gestionar el espacio social de manera que cada vez menos aquellos considerados malvivientes y delincuentes traspasen las barreras securitarias levantadas por quienes se encuentran del otro lado” (2009: 18)<sup>83</sup>.

---

<sup>83</sup> En este mismo sentido, el informe del PNUD sobre políticas de seguridad en barrios periféricos de Santa Fe señala claramente cómo “salir por fuera de los límites del barrio no consiste en una acción cotidiana y trivial, ya que abre un espectro especulativo de encuentros o tránsitos conflictivos y/o incómodos por otras zonas de la ciudad: con la policía, con integrantes de otros grupos...” (Narciso, 2011: 3). Así, “a la cuadrícula geográfica y urbana de la ciudad se van superponiendo cuadrículas simbólicas que definen tránsitos posibles, espacios prohibidos y refugios seguros” (Narciso, 2011: 8). Como resultado, “para los jóvenes que participaron del proyecto de intervención, la salida del barrio en muchos casos se convirtió en un acontecimiento prohibitivo, o por lo menos engorroso, teniendo en cuenta el alto nivel de probabilidades de ser objeto de detenciones arbitrarias por parte de la policía, por el sólo hecho de trascender los límites de su espacio cotidiano” (Narciso, 2011: 8).

La aplicación del código penal matizada por los saberes policiales que construyen estereotipos de los “delincuentes” pone en evidencia que la policía no opera simplemente con individuos (o ciudadanos) sino que lo hace preferentemente con “personas morales” (Maus, 2009; Eilbaum 2005), con categorías de sujetos que por las características que los definen, sean éstas sociales, culturales, fenotípicas o de clase, integran el gran grupo de los “otros” en general o bien de los “delincuentes” en particular.

De este modo podemos ver que no se trata de un simple determinismo geográfico. El uso de la fuerza en forma discrecional no obedece exclusivamente al hecho de que en determinadas jurisdicciones la violencia se vuelva menos visible social o políticamente, sino que al mismo tiempo nos encontramos con que están incidiendo las construcciones de alteridad que proveen de sentido a este tipo de prácticas y que le asignan rasgos diferenciadores a los territorios en cuestión.

Planteos similares han llevado a autores como Edgardo Manero (2003) a afirmar que, si bien las policías en nuestro país se originaron siguiendo estructuras militares articuladas en base a una alteridad política- ideológica, en los años ‘90 se consolida un tipo de representación criminológica de la alteridad que asume un carácter marcadamente social siguiendo una lógica que presenta al delincuente como intrínsecamente diferente al “nosotros”.

Es justamente en ese contexto donde Sozzo (2007) observa la emergencia en nuestro país de un “populismo punitivo” que constituiría la base desde la que se desarrolla una representación del delincuente que estructura lo que David Garland (2005) ha llamado una “criminología del otro”<sup>84</sup>. Una criminología que construye

---

<sup>84</sup> Del mismo modo, algunos autores muestran cómo en procesos sociales contemporáneos, esta conformación de un *otro*, ha permitido a los sectores dominantes no solo reprimir, combatir, corregir, disciplinar y normalizar a determinados grupos poblacionales, sino también, por oposición, la construcción de una idea de comunidad –un *nosotros*– a través de la cual se intenta generar en la sociedad el consenso necesario para ello. En este marco, se insertan los postulados de lo que Pegoraro (2001) denomina como “derecha criminológica” (dentro de la que podríamos fácilmente incluir a la “criminología del otro”) que conciben al delincuente como un enemigo social al que hay que combatir, basándose en un discurso bélico, de guerra contra la delincuencia a costa de la violación de derechos y garantías. Se intenta fundar de esta manera una relación de alteridad pensada en términos de “desviación” y estructurada en base a discursos que discriminan entre *buenos* y *malos*, clasificación que tiene su origen no en prácticas sociales concretas sino en procesos de estigmatización política de ciertos grupos sociales.

estereotipos e intenta restablecer una asociación entre el delincuente y la idea de un *otro extraño*, al tiempo que encuadra al delito en un lenguaje de guerra y defensa social<sup>85</sup>. En este sentido, las implicancias ontológicas y epistemológicas de este tipo de perspectivas serían claras: los delincuentes constituyen *otros peligrosos* que amenazan nuestra seguridad. Esta diferenciación posiciona al delincuente en el extremo opuesto de nociones tales como *ciudadano* o *sujeto*, por lo que cabría cuestionarse hasta qué punto este tipo de representaciones no serían posibilitadoras, por sí mismas, de la violencia. Las mismas atraviesan todos los destinos policiales:

*“A veces hasta me da bronca cuando yo veo una noticia en un diario que dice ‘mataron a un pibe de 16 años’ y después dice que fue a robar en tal lugar, no, **para mí mataron a un choro y punto**, porque esa es la realidad que yo veo, porque esa persona puede matar a cualquier otra persona, pero esa vez le tocó a él”* (E. n° 16).

*“Si yo policía en un enfrentamiento real mato a ese chico, la sociedad me va a condenar porque maté a una criatura, pero **esa criatura es un asesino** y no se ve esa parte, no se dice”* (E. n° 15).

*“Por ahí dice un chico fue a robar, no, no, no, **ya dejó de ser un chico, es un delincuente**, que tenía 10 años, 14 o 20 años y eso es la otra cosa, o sea, para una persona normal le sería, mirá, algo imposible entender que yo te diga que un chico de 11 años es un delincuente, pero es así, se dan casos, yo tengo chicos de 8, 9, 10 años, que son delincuentes con 15, 20 antecedentes penales y que se han agarrado a tiros y que han herido a otras personas”* (E. n° 7).

Aquellos que están cometiendo o han cometido algún tipo de delito pierden su condición de persona para pasar a ser integrados dentro de la categoría abarcadora de

---

<sup>85</sup> Esta distinción entre *ellos* y *nosotros* aparece claramente reflejada en un evento relatado por la madre de una víctima de violencia policial en una entrevista: “El domingo cuando O. me va a buscar, volvemos. Claro, él sale, el está de novio con una chica de allá, del fondo y... se va a llevar a uno de los amigos a la farmacia. Llega, para el auto, y para ahí en la puerta. Justo yo me iba a acostar y siento que dicen: ‘bueno, bueno, revise...’, y salgo y me encuentro todo el auto abierto, el capó levantado y digo ahí ‘¿qué pasó?’. Hacía un rato que habíamos llegado, digo ‘¿qué pasó?’. Era el comando que buscaba a tres masculinos armados. ‘¿Armados?’, digo yo. ‘Revisalos... ¿qué vas a encontrar?’, no aguante y les dije ‘¿qué querés inventar ahora?’, y me dice: ‘mire señora, si usted tuvo su desgracia, que le mataron a un familiar...’ y ahí me di cuenta, digo ‘¿cómo?’, dice ‘sí... si a vos te mataron a un familiar, yo tengo un amigo que también lo mataron’. Y le digo: ‘¿vos como sabés que esta es la casa de un chico que mataron?’, le digo ‘¿qué querés?, ¿qué venís a buscar? ¿qué querés hacer, comprometerlo a mi hijo?, me mataron como vos dijiste a uno y ahora qué querés hacer con este otro varón que tengo?’. Y empezó a hablar por la radio. Y por esto hará una semana tuve que ir a Jefatura a declarar porque me había acusado de que yo lo amenacé. Yo le conté, el juez mandó a decir que no me.... ni nada que correspondía supuestamente pero me tomaron declaración a mí. Entonces ahí yo dije la verdad, yo. Dije ‘¿cómo vino y sabían que habían matado a mi hijo?’. Buscaban a tres masculinos en un auto y se le dio que estaba caliente el auto, el capó, lo revisó y ya agredió diciendo ‘yo también tengo un amigo preso’...” (E. n° 3).

*choros* o *delincuentes*: “dejó de ser un chico, es un delincuente”, “no es una criatura, es un asesino”. En este sentido Mariana Galvani señala que “la idea que tiene la fuerza respecto del otro está teñida por un discurso de tipo castrense que construye a la alteridad como ‘enemigo’. Por lo tanto, se enfrentan a un ‘otro’ al que hay que combatir” (2007:56). Se trata para la autora de un otro que aparece estigmatizado y que, siguiendo a Goffman, piensa que la persona que tiene un estigma no es totalmente humana, a partir de lo cual se plantea que, partiendo de lo cosificado del estigmatizado, puede producir hechos de extrema violencia: “mataron a un choro y punto”. En igual sentido es que Alcira Daroqui plantea que “en nuestro presente, el sujeto excluido es portador de una peligrosidad que le confiere el lugar social del enemigo” (2009: 17) perdiendo su condición de ciudadano y, por tanto, combatidos en tanto enemigos.

Esta idea generalmente va asociada a una ya propuesta a comienzos de la década del 70’ por Stanley Cohen (2003). Cohen para pensar los procesos sociales en los que se concibe un hecho como amenazante y un enemigo que lo representa, constituyéndose en un peligro para la *gente común*, elabora el concepto de “pánico moral”<sup>86</sup>.

Ahora bien, el “pánico moral” definido en ese sentido –de estar presente– actuaría en una dimensión mucho más global, social, y sería muy difícil de rastrear más allá de ciertos acercamientos a través de medios de comunicación. Lo que nosotros nos propusimos fue acercarnos a los valores morales de los policías y desde allí rastrear construcciones discursivas que nos permitiesen ver posibles representaciones, ya no necesariamente de un enemigo, sino más bien de un *choro*, un *otro*, estigma que –según pudimos observar a lo largo de la investigación– se puede extender en forma expansiva a todos aquellos que habitan en “territorios conflictivos” donde “9 de cada 10 son choros”.

---

<sup>86</sup> En el mismo discurso oficial, esta tensión puede llegar a trascender inclusive las fronteras de la *guerra a la delincuencia*. Ángel Baltuzzi, el Ministro de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia de Santa Fe previo al período analizado declaró: “una sociedad funciona con normas que tienen que ser cumplidas por todo el mundo, y el que se sale de esas pautas, pasa a ser un enemigo de la sociedad, un marginal, y la sociedad tiene que defenderse” (Diario El Litoral, 17/01/00, citado en Sozzo et. al. 2008: 5).

Profundizando en esta línea, Manero (2003) observa cómo en la sociedad actual la relación *humano– no humano* es la base desde la que se construye una representación del *nosotros* y el *otro* sobre una relación esencializada. El *otro*, en tanto que *no humano*, es barbarizado y presentado como *otro* radicalmente diferente por naturaleza. En este caso, la problemática de los procesos de estigmatización -que ha sido largamente tratada como una reflexión sobre las diferentes formas y discursos en que la peligrosidad del *otro* que es excluido, irreductible, a quien se ubica en el terreno de la animalidad- puede constituirse en fundamento de su eliminación a través de su deshumanización<sup>87</sup>.

Este discurso es puesto de manifiesto en la representación de las víctimas de prácticas policiales violentas. Numerosos relatos presentes en la crónica policial del diario La Capital dan cuenta de este tipo de operaciones: *“mi hijo era un ser humano y nada habilitaba a los policías a matarlo como un perro”* expresa la madre de un menor que contaba con antecedentes y fue abatido en un supuesto enfrentamiento en un barrio de vivienda pública” (30/04/06). Un amigo manifestó que *“después de balearlo lo patearon en el piso y lo tiraron arriba de la chata como a un perro”* (30/06/04)<sup>88</sup>. A su vez, las mismas relaciones de animalización y esencialización son percibidas tanto en el trato cotidiano con detenidos en las comisarías como al momento de realización de visitas al penal. Distintos relatos de funcionarios policiales relativos a diferentes situaciones de la dinámica laboral en la policía así lo ejemplifican:

***“El 90 por ciento de los detenidos no tiene recupero por más que la política dice que sí, que hay que reinsertarlo, nació así, va a seguir así y va a morir así”*** (E. n° 8).

*“cuando vienen las visitas... así... que esto, que lo otro y bueno, lamentablemente los detenidos son los que están ahí adentro y la gente que está ahí afuera son familia y por más que a vos no te guste, entendés, tenés que estar requisándola, que es lo que yo siempre les digo, en invierno y ahora que vienen, que vienen... abrigadas, que vienen mucha ropa... ‘báñense, porque yo no tengo por qué*

---

<sup>87</sup> En una visión cercana, Alejandra Vallespir, llama “proceso autoritario de objetivación” al complejo mecanismo por el cual el victimario le resta a la víctima la condición de sujeto, estableciendo con ello “una relación sujeto-objeto, en donde el victimario se percibe a sí mismo como sujeto y a su víctima como un objeto, culpabilizando por ello a la víctima” (2002, 170)

<sup>88</sup> Esta metáfora también aparece en nuestras entrevistas con familiares de las víctimas: “Aparte el chico ya venía de, de, de herir a un gendarme y venían (...) al chico, viste; que no justifica que lo mataran como lo mataron tampoco, pobrecito. Lo mataron como a un *perro*”.

*sentirles el olor a mugre de ustedes, creo que no es necesario decírselo pero se los recuerdo’. Siempre tratándolas bien y así... ¿me entendés? todo... Eh... por eso te digo, entendés, yo en la X tenía muchas... aparte de tener los detenidos, teníamos muchas familias que eran... eh... pura (...) ‘cacas’ nosotros les decimos” (E. n° 24).*

En definitiva, el concepto de *cacas* se inscribe en el marco de diferentes construcciones que problematizan la noción de ciudadanía sobre la base de una relación de alteridad -ya se trate de expresiones específicas del espacio policial o resignificaciones de estereotipos contruidos socialmente que son reproducidos en el mismo, tal como proponen Frederic (2009) y Galvani (2007)- que van más allá de la imagen del *delincuente*: “otros” (Anitua, 2004), “enemigos convenientes” (Wacquant, 2001), “nuevos enemigos” (Ganón, 2008), “indeseables” (Chevigny, 2002).

Esteban Krotz (2004) ha demostrado con claridad que las distinciones que implican los procesos de construcción de alteridad no se limitan a una enunciación de las diferencias: “alteridad” u “otredad” no serían en este caso sinónimos de una simple y sencilla diferenciación. La idea de extrañeza, como bien nos recuerda Krotz, puede referirse a paisajes y clima, plantas y animales, formas y colores, olores y sonidos, pero por el contrario, “alteridad” remite a cualquier clase de lo ajeno, porque no se refiere de modo general y mucho menos abstracto a “algo diferente”, sino en forma indefectible siempre a “otros”.

En este caso afirmamos que trasciende la mera figura del *delincuente* porque **son la pobreza del “otro social” (Manero, 2003) y el territorio en que habitan los que constituyen, desde nuestro punto de vista, los elementos que van delimitando las nuevas fronteras urbanas y la forma de las interacciones policiales, antes que la oposición delincuente/ no delincuente.**

Sin embargo, encontramos también -sobre todo entre los viejos policías- que aparece un trasfondo de códigos en donde la dinámica *ladrón y policía* es asociada a una situación de *juego* en la que una vez que se produce un vencedor, dicha disputa se da por concluida. En este sentido, un suboficial nos planteaba las situaciones que se le presentaban cuando él estaba en el Comando. Cuando detenían un *choro* le daba una paliza bárbara, pero una vez que ya estaba en el móvil lo trataba bien, “*porque una*

**vez que perdió, perdió...** para que le vas a pegar si ya está esposado" (E. n° 25). En el mismo sentido, un viejo comisario afirmaba:

*"dentro de... del plano de los delincuentes yo tengo mucho respeto porque, gracias a dios, siempre... eh... **he ganado y he perdido**. He perdido cuando he sabido que vos has robado pero yo no he encontrado nada y me vine con las manos vacías. Y he ganado cuando, de tonto, vos dejaste cosas o indicios que me han traído a que... como estos chicos que ahora van a estar, andá a saber por cuanto tiempo, adentro" (E. n° 8).*

Para agregar más adelante:

*"lo que yo siempre digo... están acá... listo vos estás en la calle, yo estoy acá adentro, cuando estás acá adentro, bueno, tenemos que convivir, cuando estás afuera vos tenés que ser más vivo que yo para que yo no te atrape y yo tengo que ser más vivo que vos para atraparte. **Cuando te atrapé se terminó el juego**. Ya está. No tenés que remar contra eso. Ya te agarré. Suficiente. Y si vos... de... me esquivaste, eh, robaste y no te agarré, vos tenés que estar festejando que yo no te agarré y, bueno, cuando yo te agarre, tengo que festejar yo, pero ahí terminó, basta, con el lado tuyo y con el lado del mío" (E. n° 8).*

La presencia de este tipo de distinciones ha llevado a muchos investigadores a reproducir en sus planteos la lógica de "guerra entre bandos". Por ejemplo, es en este sentido que Alejandro Isla elabora una hipótesis consistente en sostener que durante los años noventa estas relaciones generaron un entrecruzamiento de prácticas y concepciones entre *delincuentes* y policías. En este contexto utiliza el concepto de "formaciones de violencia", en oposición al uso del concepto de "subcultura delincencial", ya que para este autor no existirían los ritos de pasaje y pertenencia que implica este último concepto, pero sí una definición precisa de un "otro" enemigo -también conformado como cuerpo- sobre el que se ejerce esa violencia. En este sentido, el mismo concepto de "formaciones de violencia" implica, además de la socialización y transmisión generacional de una cultura de la violencia, la existencia de grupos enfrentados en una violencia permanente (Isla, 2002), encontrando el autor la ejemplificación evidente de este concepto en el discurso de ciertos sectores juveniles de *guerra a los rati*. El riesgo que podemos correr siguiendo esta hipótesis consiste en la posibilidad de naturalizar el discurso policial y terminar asumiendo una mirada de las prácticas policiales acotada a su interacción con *delincuentes*. La idea de "formación" remite a grupos conformados e interrelacionados, donde cada

componente es iluminado a partir de la relación con los demás. Fue pensada, como el autor aclara, para el contexto irlandés con una fuerte presencia política y cultural del IRA, siendo según entendemos, forzada su traspolación al caso argentino, en el que la policía en el marco de esta supuesta “formación de violencia” no lidia con grupos constituidos -tal como pretenden identificar el autor tomando el caso de la “delincuencia”- sino, más bien, con una diversidad de situaciones en donde es aplicable la fuerza y otras en las que no.

De acuerdo a los resultados de nuestra investigación, entendemos que en el caso de la policía rosarina no necesariamente se ubica al “otro” en el terreno del enemigo, sino que simplemente se lo puede concebir, en un plano de mayor generalidad, como ajeno a la **condición policial**. Ese punto quedaba claro al momento de observar e indagar en las distintas interacciones cotidianas de la policía, en todas sus dependencias. Ahora, lo que queremos destacar es que dentro de esas interacciones, encontramos una dimensión de las construcciones de alteridad que se relaciona directamente con el uso de la fuerza –expresada en última instancia en la focalización de la letalidad sobre poblaciones determinados (ver cuadro n° 4)- y que al mismo tiempo constituye una base para la delimitación de fronteras que afectan la circulación de determinadas poblaciones.

El “otro” para la policía no necesariamente es un enemigo, en tanto rémora de pasadas concepciones militares. Tampoco se reduce a la imagen del *delincuente*. Sin embargo, las construcciones de alteridad asociadas a poblaciones específicas (jóvenes marginales, “anormales”, etc.) tienen una relación muy estrecha con las posibilidades en el uso de la fuerza y con los grados de control que a ella se asocian: “no es una criatura, es un asesino”, “mataron a un choro y punto”. Este uso de la fuerza no puede ser concebido en abstracto (de acuerdo a situaciones ejemplares que lo requieran) ya que el mismo aparece siempre situado, tanto en relación con los eventuales interlocutores como con el contexto.

Justamente, la conjunción de los datos analizados aquí, junto con la realización de numerosas entrevistas a funcionarios policiales, nos hablan de que, como señalamos en los puntos de partida teóricos, el empleo de la fuerza es siempre



situacional y es situacional en tanto se ejerce prioritariamente en determinados contextos, con mayor frecuencia al interior de estas *fronteras* y es situacional<sup>89</sup> además porque no se ejerce en abstracto, sino que casi siempre es ejercida sobre determinados sujetos que responden a características precisas<sup>90</sup>.

Por esta razón, cuando el contexto que otorga racionalidad a un hecho determinado aparece problematizado, se produce un escenario ininteligible para el marco de significaciones propio de los actores policiales que lo protagonizan:

*“El sumariante de una seccional de zona noroeste nos señala como un hecho significativo la denuncia por malos tratos y abuso que hizo el grupo de estudiantes que trabaja en la zona pertenecientes a la agrupación Giros<sup>91</sup>. El hecho desde su perspectiva se dio de la siguiente manera: los chicos se encontraban en una zona de ‘villas’, bien metidos (lo muestra en el mapa). Ellos recibieron una denuncia de vecinos que los veían sospechosos. Entonces acudieron al lugar (‘que era un lugar donde se sabe que se vende droga, todos lo saben...’) y procedieron como lo hacen siempre. Detuvieron a los 10 chicos, los llevaron a la dependencia. Los desnudaron para la requisa (‘porque pueden ocultar el arma en cualquier lado, nunca se sabe...’, nos muestra su ingle donde según él hay ‘choros’ que transportan allí su arma) y los alojaron en la jaula del patio sin contacto con los presos comunes. A raíz de la denuncia posterior fueron pasados a disponibilidad tres agentes. Él no llega a comprender los motivos, ya que el modo de proceder fue el normal en la policía” (O. n° 15).*

---

<sup>89</sup> Esta característica ya había sido señalada por Birlbeck y Gabaldón en su estudio sobre la disposición de los policías a utilizar la fuerza contra los ciudadanos. Allí se enfatiza que la misma adquiere un carácter situacional fundamentalmente a partir de comprobar que “la disposición de actuar es influida significativamente por el comportamiento que manifiesta el ciudadano en el encuentro con la policía. Frente a la agresión o resistencia, es mucho más probable que el agente de policía responda con fuerza” (2002, 239). Sin descartar esta variable que seguramente se presenta también en nuestro contexto, creemos que los hallazgos realizados en la presente tesis permiten, por lo menos, definir ese carácter situacional del uso de la fuerza a partir del contexto y de la caracterización que se hace del actor que interviene en ese marco relacional.

<sup>90</sup> Foucault, en el marco de indagar sobre el despliegue de tecnologías de poder que tienen por objeto la vida misma, se pregunta acerca de qué es el racismo. Llega a la conclusión de que el racismo representa el “medio de introducir por fin un corte en el ámbito de la vida que el poder tomó a su cargo: el corte entre lo que debe vivir y lo que debe morir” (2000: 230). Lejos de la sociedad de normalización en la que Foucault indaga, esta distinción “supervive” (casi en un sentido tyloriano, sin que esta idea implique que en su contexto de origen hubiera tenido un sentido racional cuyos fundamentos ya no encontramos, sino en relación con el hecho de que surge en un contexto determinado y hoy observamos derivaciones por demás de diversas) manifestándose en una serie de diferencias ya no entre lo que debe vivir y lo que debe morir, sino en sutiles marcaciones simbólicas que establecen y definen aquello que de ninguna manera puede ser muerto, con aquello que ante determinadas circunstancias, pueden ser objeto de un uso de la fuerza tal que culmine con su vida. El racismo aparece como la condición de posibilidad para que estas muertes no tengan efectos disruptores sobre el funcionamiento de la institución. El racismo naturaliza estas prácticas. El racismo le da sentido a estas prácticas.

<sup>91</sup> Agrupación de base estudiantil que desarrolla un importante trabajo barrial en las zonas norte, noroeste y oeste de la ciudad.

El procedimiento era el rutinario, lo que había cambiado eran los interlocutores. Ese nuevo contexto, para un *policía barrero* como el entrevistado, no tenía una explicación razonable. La comisaría de zona noroeste siempre intervenía del mismo modo. Este ejemplo indirecto da cuenta de dónde y sobre quién es posible utilizar la fuerza. Con él finalizamos un apartado dónde buscamos observar cómo – tanto desde comisarías como del CRE- los tipos de intervención policial diferían de acuerdo al contexto y al eventual interlocutor. En el próximo apartado indagaremos específicamente qué reparticiones intervienen mayormente en los hechos concretos de uso letal de la fuerza por parte de la policía.

#### IV. 4: El uso de la fuerza y las reparticiones policiales. Calle, autonomía y militarización.

A pesar de que los discursos que construyen distintos tipos de alteridades atraviesan a todas las dependencias de la policía cristalizando en formas diferenciales de intervención, de acuerdo a nuestro relevamiento **el actor que generalmente se vio involucrado en los hechos de utilización letal de la fuerza fue el Comando**. Si bien la repartición a la que pertenece el funcionario involucrado se trata de un dato que no siempre figura en las crónicas policiales de los medios de comunicación gráficos, cabe destacarse de todos modos que en el 30 % de los casos la repartición participante durante el período 2002- 2010 es identificada como el CRE, cifra que cobra mayor importancia si tenemos en cuenta que en el 29 % de las noticias relevadas no se informa cuál fue la repartición actuante o de pertenencia, sobre todo en el caso de policías en retiro o de franco. En concordancia con estos datos, un informe de la sección de Criminología del CEIDH (CELS, 2002) determinó que para el año 2001 en el 60% de los casos de ejecuciones sumarias o uso ilegal de la fuerza letal por parte de la policía provincial en la ciudad de Rosario, los victimarios fueron miembros del CRE.

En la búsqueda de una explicación plausible para este hecho nos fuimos encontrando con aspectos específicos del trabajo en el CRE que, de algún modo u otro, representaban elementos explicativos (o al menos brindaban la “condición de posibilidad”) para el desarrollo de este tipo de hecho. Así, entraban en juego, en principio, tres dimensiones estructurantes del trabajo en Comando: la *calle*, la autonomía y el desarrollo de perspectivas militaristas.

En primer lugar, como ya vimos, el Comando aparece como la *fuerza de choque* de la policía, su *punta de lanza*. Es la policía en **la calle**. Allí radica, para una parte significativa del discurso policial, una posible explicación de su mayor presencia en este tipo de hechos. El CRE es la repartición policial que patrulla, que está constantemente en la calle, por tanto no sería de extrañar que sea la que participe mayormente en casos considerados de violencia policial.

Pero esta especificidad no debe hacer que perdamos de vista otra característica organizacional que, entendemos, concurre en la explicación buscada: **el**

**funcionamiento autónomo de sus dotaciones.** El modo en que se conforman autónomamente las patrullas del CRE genera las condiciones para que se sucedan los hechos de violencia, ya que la mayor parte de sus acciones (en campo, no en forma posterior) están sometidas a controles muy laxos (la mayoría de ellos cuantitativos, sobre todo cantidad y tipos de procedimientos fundamentalmente, como pudimos observar anteriormente).

En principio, entonces, se trata de acciones –sobre la base de constituirse en la “punta de lanza” de la policía, en su “personal de choque”- en donde se administra el uso de la fuerza en base a decisiones que son tomadas mayormente por la propia dotación. Las mismas son procesadas por la institución una vez que el hecho ya está consumado, cuando la unidad da lugar a los procedimientos administrativos de rigor, pero en el terreno, los grados posibles de control sobre el proceso de trabajo de cada dotación, que elabora la policía como institución, son muy pocos. Esto fue remarcado constantemente por los miembros del Comando a lo largo del trabajo de campo, quienes fueron acentuando que el proceso de decisión es propio y que ese proceso de decisión nunca se desarrolla bajo las mejores condiciones:

*“Y sí, nervios. Nervios tenemos todo el mundo. El tipo que te dice que es frío, es mentira. Nervios tenemos. Tenés la adrenalina a full y tenés muchos nervios, porque también vos sabés que te pueden tirar” (E. n° 2).*

*“O sea... tenés que trabajar muchas cosas con pinzas, y es un segundo. Lo mismo que en un robo, **vos sacás el arma y no sabés si le estás tirando a un policía, si le estás tirando a un ladrón, si le estás tirando al dueño, si es de juguete, si no es de juguete.** Bueno, todo eso lo tenés que pensar en un segundo. Y, y te equivocás. A veces te equivocás” (E. n° 22).*

En situaciones como la presentada en el último relato, la portación y uso del arma por parte del *delincuente* -clave para habilitar, de acuerdo a principios internacionales<sup>92</sup>, la utilización del arma reglamentaria- muy pocas veces puede ser

---

<sup>92</sup> La adrenalina, la dinámica propia de una intervención de este tipo, funciona como justificativo del hecho de que los principios que orientan la utilización del arma por parte de la policía sean secundarizados. Estos principios originalmente contemplaban: “en primer lugar, el *principio de oportunidad* por medio del cual se determina *cuándo* la policía debe intervenir a los efectos de evitar una amenaza o un hecho cercenatorio concreto (...). En segundo término, el *principio de congruencia* por el cual se establece el necesario equilibrio que debe existir entre la situación objetiva de peligro que origina la intervención policial y el tipo de intervención a llevar a cabo, así como los medios empleados en ella. Y, en tercer lugar, el *principio de proporcionalidad*, por medio del cual se determina la intensidad de la

visualizada en forma clara. De hecho, cuando preguntamos si era posible saber con certeza que el supuesto *delincuente* está armado, un joven agente del CRE respondía: “*yo no sé si te das cuenta, no te podes dar cuenta nunca*” (D. C. n° 16).

Como vemos, el Comando actúa en forma autónoma respondiendo, en gran medida, a sus propias directrices y sus propias motivaciones sobre situaciones de las cuales, en muchas oportunidades, desconoce su realidad. A la vez, el hecho de estar en *la calle* los dota de esa autonomía en la organización de su propio trabajo, lo cual sumado a la peligrosidad y riesgos propios de la tarea, reviste en muchos casos su práctica de una aureola casi mítica que la envuelve: “***en la calle sos vos y tu compañero***”, se repite insistentemente. Hecho que evidencia su autonomía organizacional al tiempo que sirve para teñir la actividad de cierto halo de heroicidad y belicosidad.

Esta segunda característica nos lleva a la tercera, ya que los principios de autonomía que caracterizan el proceso de trabajo en el Comando sirven de base y refuerzan la **posibilidad de desarrollo de perspectivas de base militarista en su interior**. De hecho, entendemos que la *calle*, los grados de autonomía y la posibilidad de desplegar una visión militarista de la función policial representan tres niveles íntimamente vinculados entre sí.

Desde una perspectiva histórica, podemos observar que tanto la normativa como las prácticas han estructurado a las distintas agencias policiales de nuestro país como cuerpos con esquema de autoridad militar, con jerarquías rígidas, con sistemas de control interno corporativos y poco transparentes (Oliveira y Tiscornia, 1997). En

---

intervención policial y, particularmente, del uso de los medios empleados de acuerdo con la magnitud o gravedad de la situación objetiva de peligro que originó la intervención” (Sain 2002a: 32).

Lo mismo ocurre con los “principios” que caracterizan al Estado de Derecho y que surgen como derivación de los límites trazados al poder punitivo del aparato estatal (Corti, 1998: 63):

“Principio de Instrumentalidad: la utilización de la fuerza física nunca puede suponer un fin en sí mismo, debe ser un instrumento excepcionalísimo para salvaguardar determinados valores de mayor jerarquía” (Corti, 1998: 63).

Principio de Mínima Intervención: Este principio habilitaría solo la utilización de la fuerza física policial como un recurso excepcional o de última ratio, lo cual implicaría el agotamiento de todos los medios al alcance previo a la utilización de la coacción física” (Corti, 1998: 63, 64).

“Principio de Superioridad del Bien Jurídico a Salvaguardar: implica llevar a cabo en el escenario concreto, una ponderación de los bienes jurídicos en juego, de tal forma que el ejercicio de la fuerza física nunca puede suponer la afectación de un bien jurídico, de mayor entidad del que se pretende salvaguardar” (Corti, 1998: 64).

este contexto, distintos autores han contribuido a la idea de que la estructura militarizada de la policía tiene una relación directa con el desarrollo de ciertas prácticas consideradas ilegales<sup>93</sup> (Daroqui, 2009; Sain, 2008; Sozzo, 2005; Kaminsky 2005; Manero, 2004; Gayol y Kessler, 2002; Sozzo et. al, 2000; Oliveira y Tiscornia, 1997). Por ejemplo, Máximo Sozzo (Sozzo: 2005, Sozzo et. al: 2000) identifica a la militarización y a la gestación de una gramática del “enemigo político” como una de las vías fundamentales de penetración de la “gubernamentalidad autoritaria” en la configuración de la actividad policial. Esta militarización, que en sus comienzos estuvo acompañada de una focalización en el “enemigo político” (movimiento obrero, anarquistas, etc.) y asociada a gobiernos autoritarios, ha definido, según estos planteos, durante todo el siglo XX a la policía como un agente central de control político y, podríamos agregar, ha sido constitutiva de las instituciones policiales, más allá de las experiencias de gobiernos militares (Oliveira y Tiscornia, 1997).

El énfasis puesto por este grupo de trabajos en el carácter militarizado de las fuerzas policiales en Argentina podría conducirnos a entender los casos de violencia policial como resabios del modelo tradicional de policía que los sucesivos intentos de reforma institucional no han logrado desterrar. Modelo tradicional que, en estos enfoques, es concebido articulado alrededor de:

“... una *perspectiva belicista* muy corriente en el interior de la institución, en cuyo marco la labor conjurativa de la policía ante el delito ha sido sistemáticamente concebida como un combate o lucha contra el enemigo delincuente, al que se debe eliminar o exterminar. La seguridad pública ha girado en torno de una **guerra entre policías y delincuentes**, que se desarrolló en un espacio social alterado o desestabilizado por el accionar delictivo sobre el que la policía debió reaccionar y que, en verdad, constituyó un verdadero ‘campo de batalla’<sup>94</sup>, cuyos contendientes excluyentes han sido, justamente, los delincuentes y la policía” (Sain, 2008: 139).

---

<sup>93</sup> Vinculado a este aspecto, Sabina Frederic señala que uno de los argumentos más fuertes, convertido ya en parte del sentido común, se desarrolló en torno a la idea de que el legado de los tiempos autoritarios - especialmente del último gobierno militar- militarizó las prácticas destinadas a hacer efectivo el cumplimiento de la ley. Como ejemplo menciona el informe conjunto del CELS y HRW (1998).

<sup>94</sup> En la crónica policial encontramos diversas expresiones que hablan de esta supuesta “batalla”: “En un asalto a una fábrica de pastas interviene un vecino policía que le efectúa un disparo en la cabeza cuando el ladrón intentaba escapar con una balanza “Mataron a un choro, hay uno menos”, festejaban en la vereda del comercio vecinos y policías de civil con acceso a la zona restringida” (diario La Capital, 15/08/03).

En esta visión los policías y los delincuentes aparecen formando bandos contrarios, sobre la base de un sentido de pertenencia definido por oposición y determinado por las características que va asumiendo esta lucha. En esta línea, resulta significativo lo planteado por un oficial:

*“¿sabés lo que pasa en el momento actual? Es, es mi opinión personal, eh, ¿cuántos policías muertos? decime cuántos detenidos hay en consecuencia de eso si es al revés y vos matas a una persona que está cometiendo un delito, ¿no? no importa lo que estaba haciendo, vos lo mataste, ¿está? Vas preso, te quedas sin pensión, sin nada, tu familia va a pasar mucha necesidad...”* (E. n° 15).

Se trata de una polaridad que, sin dudas, está presente en muchas de las percepciones policiales, tal como lo ejemplifica el relato recién citado. En esa línea, uno de los primeros ejes que nos quiso plantear el jefe de una de las seccionales céntricas seleccionadas consistía en presentar esta polaridad:

*“¿Cuántos monumentos a policías viste? Ninguno. Se murió... bah... lo mataron, Kostecki que esto que lo otro, hicieron un monumento, le cambiaron hasta el nombre a una calle”* (E. n° 8).

La erección de un monumento recordando a una víctima de violencia policial es leída, en este caso, siguiendo una lógica de bandos coherente con las perspectivas belicistas propias del modelo tradicional de policía. Es, precisamente, en la persistencia de un modelo tradicional de policía asentado sobre una lógica militarista que se explica, según Sain (2008), las formas abusivas de la violencia policial, ya sea como expresión de acciones ilegales o por la propia impericia policial, en el marco de prácticas abusivas que en el interior de la institución habrían sido naturalizadas y reproducidas por este mismo modelo.

Permaneciendo durante una larga estancia realizando trabajo de campo en la policía santafesina de la ciudad de Rosario resulta innegable que tanto la metáfora de la guerra como el modelo castrense subsisten en amplios sectores. Así, por ejemplo, en las reiteradas visitas a una comisaría de la zona noroeste, enclavada en un tradicionalmente conflictivo barrio, es usual escuchar tanto de parte del comisario como del personal subalterno, que “esto es zona de guerra”:

*“‘Esto es Saigón’, enfatiza constantemente el comisario. Siguiendo una línea de pensamiento bélico, afirma que no solo la tierra de las calles y la decrepitud de los edificios nos hablarían de que nos encontramos en ‘zona de guerra’. Lo mismo ocurre con respecto de la jurisdicción. La extensión es ya un problema. Pero el hecho de que en ese radio haya ocho villas y un FONAVI, constituye para el comisario una situación sumamente problemática. ‘Esto es la guerra’ repite para referirse a las actividades cotidianas de la comisaría” (O. n° 15).*

Otros autores en cambio- como el recién citado Edgardo Manero- entienden que esta lógica es tributaria de la guerra fría, manifestándose en un contexto donde asistimos al tránsito de la construcción de un enemigo ideológico a uno social: “la lutte contre la criminalité est tributaire de la conception ami-ennemi, hégémonique dans la politique argentine pendant la guerre froide. Son combat apparaît sous un discours militarisé, basé sur une logique de guerre ou l’ennemi idéologique est remplacé par l’ennemi social (2004: 61).

Tributarias de la “guerra fría” o del modelo de policía impuesto por la última dictadura militar, lo que resulta indiscutible es que tanto el discurso como las prácticas militarizadas no han sido desterradas por completo de la cotidianeidad policial en Rosario. Ahora bien, asumir literalmente algunos relatos de los policías acerca de esta realidad posicionaría a la vigencia de estos principios en un nivel de determinación que no es tal. Lo que queremos señalar es que si bien persiste en amplios sectores de la policía un discurso y prácticas que podemos definir como de carácter militarizado, la mirada etnográfica -al menos para el caso de la policía de la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario- nos muestra que las posibilidades de desarrollo de esta concepción son relativas y cuando lo están, aparecen muy resignificadas. **Hay ámbitos permeables al discurso militarizado y ámbitos que, claramente, no.**

Esta ambivalencia atraviesa a todas las dependencias policiales. Por ejemplo, la realidad de esta militarización en las *comisarías del centro* de la ciudad y las *comisarías barriales* -las denominadas *comisarías de trabajo*- es diferencial, y lo mismo ocurre a su vez con respecto al CRE.

Un elemento que compone la visión militarizada del accionar policial es, sin dudas, la importancia que se le asigna al respeto por las jerarquías y la disciplina. En *comisarías del centro*, de acuerdo al relato de los funcionarios policiales que allí



trabajan, se “siente la jerarquía”. Así se veía reflejada la jerarquía en la entrevista mantenida con el comisario de una de las seccionales más importantes:

*“Así como está la puerta cerrada, yo no comparto juegos con ellos (el personal de la comisaría), pero tampoco soy un ogro. Eso es lo que me hace mantener la distancia con ellos, para que, para ser autori... para, para tener una autoridad, porque sino... yo vivo todo... ah, con el jefe anterior había un montón de sumariantes que estaban reunidos acá, fumaban acá. En mi oficina no fumás, ni ellos, ni el jefe que venga, no va a fumar. Porque a mí no me gusta que venga alguien y que tengan el olor a cigarrillo ¿me entendés? (...) **Así los fui educando** ¿me entendés? Eso no quiere decir que hay una distancia, que yo soy superior a ellos. No, yo estoy a la... yo siempre se los digo... yo estoy a la misma altura de ellos, que ustedes, con la diferencia que **yo tengo que ordenar** y tengo que a ustedes encauzarlos, **yo soy el pastor** que los tiene que llevar a ustedes a un buen destino (...). **Yo voy a seguir manejando esto con autoridad y con una escala vertical. Yo soy el jefe, él es el subjefe.** Y yo lo voy a seguir sosteniendo. Te vuelvo a decir, dentro de los canales de la ley, de lo que dice la ley” (E. n° 26).*

La jerarquía que se manifiesta en el vínculo cotidiano de una comisaría céntrica (“yo tengo que ordenar”, “yo tengo que encauzarlos”), se expresa también en los signos del uniforme:

*“El comisario nos hace pasar a su despacho. Acostumbrados a la realidad de las ‘comisarías barriales’, esta dependencia nos hace sentir que nos movemos en un espacio radicalmente diferente. La comisaría cuenta con calefacción central y la oficina del comisario es amplia y confortable. Está viendo el mundial de fútbol (una constante en todas las comisarías) y en su escritorio tiene una notebook. Por otro parte, la distancia que quizás podamos sentir se ve reforzada porque tanto él como su subjefe y demás empleados visten con suma formalidad y expresando a través del uniforme la jerarquía (elemento que en algunas comisarías barriales – estoy pensando en una puntual de la zona sudoeste- se pierde completamente). **Todos los empleados de esta comisaría están identificados** con el prendedor donde consta su grado y su nombre. Eso no se repite en casi ninguna otra comisaría de las seleccionadas” (O. n° 6).*

Al mismo tiempo, esta imagen parece corresponderse con la organización del espacio, donde cada función está claramente diferenciada: “atención al público”, “guardia”, “oficina de sumarios”, “disponible”, “cabo cuarto”, todos ocupan un espacio delimitado. El “pastor ordena su rebaño” en ámbitos claramente diferenciados y a partir de lugares sociales definidos. En cambio, en *comisarías barriales*, todo parece trastocarse. El espacio no permite divisiones tajantes. Los uniformes no lucen ya impecables y es usual encontrarse con el comisario trabajando

en sumarios, el *cabo cuarto* en la guardia, con el comisario y su personal de confianza hablando sobre cuestiones laborales en la puerta de la comisaría... todas marcas que reproducen, de algún modo y en otro orden, el patrón de habitabilidad de los sectores populares.

De este modo, podríamos afirmar, a partir de las observaciones realizadas, que en comisarías de barrio las situaciones son muy distintas. Ese universo que delimitaba lugares sociales bien diferenciados se vuelve permeable, difuso. Ante la pregunta acerca de qué casos ameritaban recurrir a la “jerarquía”, el jefe de una de las comisarías más marginales de la ciudad nos decía:

*“no, no, no, no lo hago yo, lo hacen todos, si no allá arriba estaría el rey y el resto... somos todos iguales acá...”* (E. nº 33).

“Somos todos iguales acá”. Son muchos los comisarios de seccionales barriales que adhieren a este modelo, el que -siguiendo el planteo de Monjardet (2010)- podríamos definir como de “primus inter pares”, por oposición al “burocrático militar” que en gran medida reproducirían las comisarías más céntricas. En el modelo “primus inter pares” se minimiza la función de autoridad en beneficio de la solidaridad del grupo. En *comisarías barriales* fue posible observarlo en funcionamiento durante la realización de nuestro trabajo de campo:

*“Al parecer no existen jerarquías en la recepción y tratamiento de denuncias. Incluso, vemos después que una denuncia que viene a hacer una pareja por el robo de un celular es tomada directamente por el comisario, el que ocasionalmente pasaba por ahí. El comisario los manda a hacer unas fotocopias. Cuando al rato vuelven el empleado de la guardia los deriva al sumariante pero este se ataja ‘ya les está tomando la denuncia el jefe’. No hay un criterio que determine una jerarquía en la recepción y atención de la denuncia. Las cosas se dan según las circunstancias. El que se encuentra cerca lo atiende. Lo mismo pasa con el teléfono. Suena unas 4 o 5 veces mientras estamos en la comisaría (casi siempre son llamadas que hacen al funcionamiento interno de la policía, nunca llamaron vecinos para preguntar o denunciar algo. El teléfono lo atiende el que ocasionalmente pasa por el lugar. Incluso el comisario. Al parecer no hay nadie encargado de hacerlo”* (O. nº 7).

El trato al interior de un grupo de pares se estructura sobre principios de legitimidad que lo oponen diametralmente del trato asentado sobre una lógica

jerárquica. Esa distancia se vio reflejada varias observaciones realizadas en *comisarías barriales*:

*“En ese lapso no pasó mucho más. Por lo menos, nos divertimos escuchando las comunicaciones por el equipo de radio. Hablan de cuestiones personales y el tono es sumamente informal ‘¿qué pasa guachín? ¿qué onda?’ y cosas así” (O. n° 5).*

*“El empleado que está haciendo el arreglo escucha constantemente cumbia en su celular, va de acá para allá, baila, molesta al resto, escucha Macaferri y asociados (sí! Macaferri y asociados). En un momento alguien se lo apaga y empieza a quejarse. Más adelante, nos pregunta si en nuestros registros ponemos que en esa comisaría se baila y se canta” (O. n° 11).*

*“El trato entre ellos es sumamente cordial y hasta podría decirse que afectivo. Con roces (la oficial le revisa la oreja al sumariante y le dice que se bañe), chistes, insinuaciones (como estábamos ocupando dos sillas, la oficial le dice al sumariante que se va a sentar sobre sus piernas). Todo muy lejos de lo reglamentario” (O. n° 7).*

En el relato de los funcionarios también aparece esta distinción al momento de pensar el vínculo cotidiano. Retomamos uno en particular, de un suboficial de zona sur, que grafica claramente las grandes diferencias existentes en la conformación de los diferentes ámbitos laborales:

*“En una comisaría de acá, donde estamos constantemente ocupados, constantemente (...), constantemente en laburo, es otra cosa. **Acá el jefe es un policía más.** O sea, acá es Ariel, a lo mejor en una comisaría de centro le dirías ‘señor’. Y bueno... las ‘comisarías de trabajo’ lo que tienen es eso, se labura mucho pero, a nivel laboral, a nivel, digamos, grupo humano de trabajo es totalmente distinto en lo que son las... las relaciones. O sea... un jefe de una ‘comisaría de centro’ no se va a venir a sentar a comer acá con vos un guiso o algo... se va a ir a un restaurant o...” (E. n° 25).*

Si en las *comisarías barriales* el jefe “es un policía más”, el lugar propio del vínculo jerárquico establecido por el grado debe ser ocupado por otro tipo de legitimidad. En algunos casos, la misma consiste en la “antigüedad” en el puesto.

*“Yo cuando ingresé, yo creo que me encontré sí con la ideología de lo que yo tenía de la policía. A mí... yo tenía esa idea de la policía... militarizada, digamos, rí... y una estructura rígida, donde se respetaba no solamente la jerarquía, porque la, porque en realidad en la policía no se respeta mucho la jerarquía, se respeta más la antigüedad” (E. n° 15).*

En la visión de los policías de *comisarías barriales*, en donde la estructura -a partir de las carencias pero también de la autonomía que gozan por situarse en sitios considerados marginales en los cuales “el jefe come el mismo guiso que el resto de los empleados”- parece relativizarse, subsiste la imagen de la militarización pero la misma aparece como un momento ya superado (añorado o no) dentro de la historia de la institución. Los relatos son numerosos en ese sentido. Entre ellos, los siguientes fragmentos tomados de la entrevista grupal con dos *disponibles* nos parecieron de los más significativos:

*“... era un sistema muy cerrado, no se nos permitía hablar tampoco y yo tampoco podía hablar sin que ella me lo autorizaba, y dirigirme por ejemplo, ella es mi jefe inmediata ¿verdad? Si yo quiero hablar con el jefe y voy como (...) y le digo ah qué tal mire, necesito hablar una cosa (...), si yo hacía eso ella me sanciona porque yo la pasé por encima, o sea, le falté el respeto, porque no pedí la venia que se llamaba en ese entonces, una nota escrita y firmada por mí, dirigida ella, para solicitarle que me da la venia para entrevistar al titular (...) por cuestiones personales, pero, todo un trámite, ni hablar si querés hablar con el jefe policial, olvidate...”* (E. n° 21).

*“...aparte de los trámites burocráticos, las (...) que eran inhumanas, o sea, no solamente se vivió de afuera lo que es, lo que fue la época de la dictadura y todo eso, no solamente se vivió de afuera, sino también adentro, pero a veces la gente no entiende que hoy no es la misma policía...”* (E. n° 21).

La pérdida del contenido militarizado puesta de manifiesto por las *disponibles* suele asociarse, tal como vimos anteriormente, con los cambios en la formación. En coincidencias con ellas, el comisario -que había sido instructor- lo planteaba de la siguiente manera durante la entrevista:

*“Se ha bajado el nivel de la enseñanza, el policía no te digo que tiene que ser Rambo pero la institución tiene que ser dura, la instrucción tiene que ser un poquito dura, un poquito militarizada, como nosotros, guardia, desfiles, baile, porque después el trabajo es así”* (E. n° 8).

Es común entonces, entonces, que se observe entre los policías de *comisarías barriales* una especie de desguace histórico de la lógica jerárquica:

*“La policía es verticalista viste... si bien está muy flexibilizada hoy por hoy a como era en, previo a mi ingreso y demás, la policía era aún más estructurada, donde había, qué sé yo, había otros parámetros, hoy por hoy, si bien existe el respeto*

*entre un... me entendés... un superior y un subalterno, pero está más flexibilizado... hoy estimo como que la policía se ha humanizado” (E. n° 17).*

“La policía se ha humanizado”. Esa transformación es enunciada recurrentemente. No obstante, algunos rasgos de aquella estructura rígida continúan expresándose resignificados en las relaciones cotidianas, aún en *comisarías barriales*, a pesar de que en ellas prevalezca el principio legitimador de la antigüedad por sobre el de la jerarquía. Tomemos como ejemplo el siguiente extracto de nuestro registro de observaciones:

*“Constantemente otro motivo de conflicto o tensión se daba cuando los circunstanciales policías que transitaban la guardia<sup>95</sup> y nos veían ahí, se preguntaban e incluso le preguntaban a los empleados de la guardia (delante nuestro): ‘¿quiénes son estos señores?’ Lo llamativo es que nunca se dirigían directamente a nosotros para preguntarnos quiénes éramos o qué hacíamos ahí, sino que le preguntaban a la guardia -que por otra parte es a la persona que corresponde preguntar porque era la responsable siguiendo a rajatabla los canales institucionales- quiénes éramos y qué hacíamos ahí. En ese sentido, se evidenciaba la jerarquía ya que los que preguntaban con tono arrogante eran oficiales y los de la guardia eran suboficiales, pero significativamente lo hacían en un tono de broma. A lo largo de la observación pudimos dar cuenta de esto. Por ejemplo, un oficial estaba buscando en el libro el día en que había ingresado un detenido y como tardaban, el chiste era, por parte de este oficial... ‘que mal sargento Gómez... ¡cuánta demora! ¿Así trabajan ustedes<sup>96</sup>?’ y ella respondía ‘que mal usted oficial... no conoce el día en que ingresó este detenido, no maneja con precisión sus datos, que mal ejemplo oficial’” (O. n° 11).*

En este fragmento, se puede observar cómo la jerarquía parece subsistir casi como una “supervivencia”, en el sentido empleado por Edward Tylor (1977), en donde su existencia no reviste una funcionalidad determinada sino que aparece, en esta nueva instancia de organización policial, como un atributo al cual se puede hacer referencia en determinadas circunstancias, por ejemplo lúdicas, pero de las cuales no se conoce muy bien cuál ha sido o es su utilidad.

De allí que nos fueran surgiendo los siguientes interrogantes ¿qué pasó entonces con las jerarquías? ¿son sólo reliquias? ¿qué quedó de aquella institución sumamente vertical? El avance en nuestro trabajo de campo nos iría indicando que quedaban dos instancias donde las jerarquías subsistían resignificadas positivamente

<sup>95</sup> Eran muchos porque se trataba de una comisaría grande.

<sup>96</sup> Remarco la distinción *ustedes* y *nosotros* entre oficiales y suboficiales.

aunque en un nuevo contexto. En primer lugar, quedaba claro que en la policía existían órdenes últimas que tenían que ser cumplidas. Con esto quiero decir, existe un margen para establecer un sistema de transacciones que usualmente se da sobre cuestiones secundarias tales como francos, funciones, servicios, etc. pero cuando se apela a una orden, la misma se cumple invariablemente. En segundo lugar, en un contexto que ya no se fundaba en forma determinista sobre las jerarquías, emergían sin embargo ciertas tensiones directamente asociadas a su impronta y que cuestionaban los alcances del principio de la “antigüedad”. Las mismas solían aflorar, por ejemplo, en los reiterados conflictos que se daban en el encuentro en la misma dependencia entre oficiales jóvenes y nuevos con suboficiales ya experimentados:

*“...relacionás con gente que a lo mejor tiene treinta años de servicio, y viene un pibito nuevo y te dice ‘che, mandalo al sargento que vaya a tal cosa’, y vos le decís al sargento, ‘mirá que me dice el jefe que vos’, te dice, ‘tomatela pibe, qué me venís a decir a mí’...” (E. n° 27).*

En este caso, la actitud del *pibito* que con poca experiencia da órdenes a un empleado subordinado en rango pero con mucha más antigüedad en la dependencia, es entendida como un acto en el que se “aplicó la jerarquía” o donde el oficial “se puso la jerarquía”. Al “ponerse” o “aplicar la jerarquía” nos encontramos muy lejos de una utilización lúdica del recurso de la jerarquía. La jerarquía no había desaparecido. La jerarquía –tal cual una “supervivencia”- estaba ahí, latente. La jerarquía operaba en este nuevo contexto como un recurso, como un valor, al que se podía apelar para resolver algunos de los conflictos que surgían en el trabajo policial cotidiano. Lo mismo podríamos decir que ocurría con la militarización. La estructura militar, al igual que la jerarquía, subsistía como un valor al que podía recurrirse en determinados momentos y lugares. En este sentido, la no militarización a la que estamos haciendo referencia, no trata de una situación absoluta, sino que podría representar una particularidad de algunas comisarías. Es decir, la no militarización convive con la militarización en determinadas seccionales de Rosario, mientras que en otros lugares puede ocurrir o bien que se trate directamente de una estructura militarizada o bien que la militarización -como valor al que se podría apelar- directamente no exista.

En términos generales, la desjerarquización que en principio parece asociada exclusivamente al personal administrativo de determinadas comisarías, tiene su expresión también en el Comando, aunque con particularidades. En el Comando resulta poco frecuente observar situaciones de indisciplina en el trato entre sus integrantes o de incumplimiento de tareas cuando éstas son explícitamente formuladas. Sin embargo es posible afirmar que la no preeminencia de la jerarquía también se expresa en esta dependencia pero lo hace principalmente en las representaciones que elaboran los miembros del CRE acerca de su propia actividad – de cuya significación ya hablamos anteriormente- en la que esta tarea vinculada a nociones de *arrojo* es escenificada en un espacio horizontal: *la calle*. Este espacio –de acuerdo a expresiones recurrentes entre el personal de distintas jerarquías y antigüedad- resulta claramente igualador:

*“no en la calle somos todos iguales estando en comando no hay (jerarquía) de nada, más que tenemos un respeto por **el superior me va a salvar a mí él siendo agente o un oficial...** acá somos todos iguales, todos pisamos barro...”* (E. n° 22).

*“es como comerse la (caca) a todos les cae igual”* (D. C. n° 16).

*“acá es muy raro un oficial que ande ‘con la jerarquía puesta’ si no está así por algo, si son tropas como nosotros es muy raro que estén con la jerarquía puesta, somos todos igual es muy raro que andemos con la jerarquía puesta (...) somos todos iguales, él tiene la pistola igual que la mía y... me ha salvado, yo lo he salvado a él”* (E. n° 18).

*“sí, nosotros tres por eso, nosotros tres cuando estamos en la calle no hay jerarquía, por ejemplo, ¿me entendés? **Somos todos compañeros y hay que tratar de cuidarse** porque un día no sabés que... eh, no hay jerarquía, a por, a pesar de que cada uno sabe que función tiene, qué jerarquía tiene...”* (E. n° 18).

Muy probablemente el efecto igualador del “en la calle somos todos iguales” nazca –como vimos anteriormente- de concebir la tarea del Comando como *fuerza de choque*. Así, si bien la policía es una estructura jerárquica, una vez que se está en el *barro*, en la *calle*, las jerarquías pasan a un segundo plano ante el conflicto que este escenario presenta. Conflictos en los que, muchas veces, se termina nuevamente apelando a una solidaridad que va más allá de la regla y que es construida alrededor de la experiencia de trabajo en la policía, en torno a su “condición policial”. En las

entrevistas mantenidas, el personal del Comando brindaba claros ejemplos de este tipo de situaciones:

*“Por ahí... por ahí... algún enfrentamiento que tiene una unidad, suponete, yo estoy acá en zona sur, en zona oeste una unidad compañera mía de mi tercio tiene un enfrentamiento, yo pido autorización, me dicen que no, yo voy igual” (E. n° 23).*

*“Por ahí nos retan... el mismo jefe de tercio nos reta pero, a la vez, sabe que estamos haciendo bien. Que está mal el hecho de dejar una zona, donde estamos nosotros, descubierta para ir a auxiliar a nuestro compañero pero doy prioridad a mis compañeros. **Yo doy prioridad a mis compañeros** en el sentido de que yo no los voy a dejar a gamba. De alguna manera yo voy a llegar, sea como sea, voy a llegar, primero, segundo o último pero yo voy a llegar” (E. n° 22).*

En este tipo de hechos relatados por miembros del CRE se desvanecen las jerarquías, prima la lógica corporativa y sobre todo, lazos informales aparecen con contundencia. Los mismos consolidan una “condición policial” que no necesariamente se corresponde con el orden reglamentario y que va a servir de base para el desarrollo de nuevos tipos de legitimidades.

Con esta metaforización de sus funciones, en la que el *barro* los vuelve iguales (al mismo tiempo que crea vínculos distintos a los previstos institucionalmente) se genera una dimensión del *hacer policial* en donde el carácter militar resulta ambivalente y paradójico. Por un lado, “somos todos iguales” niega la jerarquía, la estructura rígida, pero al mismo tiempo el “somos todos iguales, nos salvamos unos a los otros” vuelve a situar su propia actividad en el marco de una representación de tipo castrense, de *combate*. Es allí donde –como intentaremos demostrar– se reflataría el vínculo existente entre el carácter militarizado de ciertas prácticas del CRE, posibilitado por el alto grado de autonomía de sus dotaciones, con las formas en que se puede utilizar el recurso de la fuerza. A este respecto resultan elocuentes los siguientes fragmentos de entrevistas:

*“El arma le sirve primero para defender su vida, después la de su compañero y por último la de posibles terceros” (D. C. n° 16).*

*“... los pudimos ubicar, sí pero nos seguían tiroteando, que a mí en el segundo tiro se me trabó el arma, así que te podés imaginar, pude seguir disparando... se destraba... pero creo que ahí qué sé yo, son los segundos más importantes de tu vida, **es el otro o sos vos...**” (E. n° 22).*



La idea de que es el Comando el que participa activamente y quien se sumerge en este escenario de *combate*, nos presenta algo del orden de lo militar que significativamente enraíza también con las tradiciones y experiencias que porta parte su personal, las cuales encuentran en el CRE una estructura organizativa que les permite desarrollarse. Estas características hacen que quienes sientan inclinaciones por el aspecto militar de la policía generalmente escojan al Comando como *destino*, como el ámbito propicio donde desempeñar sus funciones, encontrando allí un terreno fértil para sus aspiraciones.

*“... Me gusta. Yo... soy salido del ejército, eh... estuve en Infantería en el ejército. O sea que son más o menos similares (). Entonces seguí, como quién diría, en el rubro seguí”* (D. C. n° 16).

Esta posibilidad se da además por la institucionalización que se brindó, sobre fines de la década del noventa, a la incorporación de miembros del Ejército a la Policía. En nuestros registros encontramos fragmentos de entrevistas con integrantes del CRE que dan cuenta de este proceso:

*“Los dos agentes, sí. Los dos salidos del Ejército”. “... hay unos 200, 300 que son mis compañeros. Después hay de distintas promociones, de distintos lugares pero **somos muchísimos salidos del Ejército**”* (D. C. n° 16).

*“Porque era un convenio que hizo el Ejército cuando sacaron el servicio militar obligatorio y por voluntarios () a la mayoría de edad, a los 18 años no podés estar”. “Bueno, ahí salió un convenio del Estado con provincia que los salidos del Ejército podían entrar a la policía, aprobando un curso por supuesto”* (E. n° 23).

Ya sea a través de vínculos institucionalizados o no, a partir de lo analizado en este capítulo se desprende que los grados de militarización en la policía perviven de un modo complejo. Ambiguos y con diferentes manifestaciones de acuerdo a la dependencia que se trate. Si en *comisarías del centro* rige una férrea disciplina, la misma obedece en gran medida a una organización del trabajo casi en clave taylorista y diseñada por los funcionarios jerárquicos. En cambio, el espíritu *militar y combativo* en el caso del Comando es un espíritu vivo en muchos de sus funcionarios que encuentra un terreno pródigo en su organización del trabajo: *“el comando es una agrupación que va al frente”* (D. C. n° 16).

Dichas características podrían habernos conducido a recuperar la hipótesis que sostiene que la impronta militarizada de determinadas prácticas policiales representa el factor explicativo de la alta tasa de participación del personal del CRE –en este caso- en los casos de violencia policial, explicación a la que un importante número tanto de académicos como de militantes de derechos humanos han adherido por oposición a la que elaboran los propios policías que buscan fundamentar este hecho a partir de que se trata del personal con mayor grado de exposición y riesgo.

Tanto una como la otra son en parte convincentes y tienen un cierto grado de plausibilidad pero lo que –a partir de nuestro trabajo de campo- podemos resaltar es que no se trata de una “militarización” en abstracto ni una herencia directa del último gobierno militar –cuyos vínculos con la policía actual, al menos en la perspectiva de los funcionarios más jóvenes, es, como vimos anteriormente, cuanto menos ambiguo- sino que se trata del desarrollo de perspectivas militarizadas que, al menos en el caso del Comando, van de la mano con ciertas particularidades de su organización del trabajo. Muy posiblemente allí encontremos gran parte de esta explicación, ya que un elemento clave en relación con el hecho de que sea el CRE la fuerza que actúa principalmente en este tipo de hechos tiene que ver también con que cada dotación goza de una autonomía de trabajo que otro personal policial no tiene, en donde a cada una se le asigna una jurisdicción y la relación con el jefe inmediato queda sumamente distante en sus rutinas cotidianas, lo que permite que concepciones militaristas o de *combate* se reproduzcan en su interior sin mayores problematizaciones.

Todas las policías gozan de esta distancia, ninguna es un mero instrumento del poder estatal y en tanto están conformadas por hombres y mujeres, sus prácticas tienen un alto grado de agencia. No obstante, al conformarse el Comando en base a dotaciones de dos funcionarios, la autonomía característica que adquieren en su dinámica de trabajo se ve, de ese modo, potenciada:

*“como yo siempre le digo a él, nosotros agarramos el patrullero y acá somos jefe y subjefe... del patrullero a la comisaría y nosotros somos jefe y subjefe no dependemos de nadie al margen que dependemos del Jefe de Comando*

*¿entendés? La [producción] que tenemos nosotros depende de nosotros dos” (E. n° 22).*

*“para mí en la calle estas con tu compañero... nadie más...” (D. C. n° 16).*

Las reiteradas oportunidades en que escuchamos por parte de miembros del CRE la afirmación “en la calle sos vos y tu compañero” aparece ahora como expresión no solo del riesgo asumido en este *destino*, sino también de los grados de autonomía en la organización del propio trabajo que se gozan. Dos tramos no grabados de conversaciones mantenidas con agentes del Comando son representativos de este aspecto:

*“Le gusta patrullar por sobre todas las cosas. **Sobre todo porque no hay jefe.** En la calle son dos, que manejan un móvil, y entre ellos se conocen. En cambio, en una comisaría son muchos y uno no sabe con quien comparte su función, además de que el jefe está todo el tiempo ahí” (D. C. n° 16).*

*“Señala que lo que más le atrae es la calle, que si bien el trabajo es el mismo, uno se siente más libre, tanto por estar en la calle y no encerrado en la guardia, como por estar **sin la presencia del jefe y compañeros delatores**” (E. n° 22).*

La “ausencia de jefes” –en el marco de una institución que en principio se nos representaba como estrictamente jerárquica y vertical- representa el elemento clave que define, sostiene y posibilita la autonomía de una dotación. Marcelo Sain (2002a, 2008) también ha llamado la atención sobre la autonomía del accionar policial como un elemento explicativo de los casos de *gatillo fácil*, pero lo hace como parte de una tradición de estudios que se preocupan por pensar la autonomía policial respecto del poder político como expresión del desgobierno político sobre la seguridad pública. Este hecho le sirve para fundamentar su tesis que concibe la acción policial como reguladora del delito antes que como preventora o investigadora, a partir de un acuerdo explícito con el poder político, que a cambio de estándares aceptables de delincuencia, aceptaría que las mismas instituciones policiales toleren y hasta sean parte en algunos casos, de redes delictivas que se despliegan bajo su amparo. No obstante lo consistente de estos planteos, el punto que aquí tenemos en común ronda fundamentalmente esta tesis: cuanto mayor es la autonomía, mayores las

posibilidades de utilizar la fuerza<sup>97</sup> (y también la de participar en redes de ilegalidad por supuesto, aunque esta es una línea de trabajo en la cual no hemos focalizado durante nuestro trabajo de campo).

Calle, militarización y autonomía representan conceptos que se complementan y expresan en un equilibrio inestable dentro de la dinámica de trabajo propia del CRE. Ahora, ¿en qué medida esta estructura posibilita, promueve o facilita el ejercicio de la violencia? Las particularidades de cada seccional, los grados diferenciales de militarización e incluso las trayectorias particulares de cada agente vuelven una tarea estéril responder en forma general a esta cuestión. Los mismos elementos que conforman la actividad policial se conjugan de forma diferente en diferentes tiempos, espacios y marcos relacionales; y de hecho es de la conjunción de todos estos factores que podemos desprender que el policía no usa la fuerza indiscriminadamente ante cualquier situación, sino que su empleo es siempre situacional. Si algún efecto tiene sobre las posibilidades de utilización de la fuerza el hecho de que la organización del trabajo en Comando se asiente sobre altos grados de autonomía, éste consiste en brindar el escenario propicio para que la misma se efectivice sin mayores controles. Ahora, la utilización de la fuerza obedece, sin dudas, al marco de relaciones en el que la misma se despliega. Cada situación implica un marco de opciones particular. Los relatos policiales relevados en distintas instancias del trabajo de campo lo grafican del siguiente modo:

*“Porque es la verdad, vos en algunos casos no les podés decir ‘mirá por favor, tirate al piso, ponete la manito atrás’, **hay gente con la que tenés que aplicar un poquitito más de rudeza que con otras.** A vos, por ejemplo, gente de bien, te paro en la calle y qué se yo, no se... te doy una orden y vos la vas a tratar de acatar pero a éstos no les importa nada, éstos sí te pueden escupir la cara te la van a escupir y yo como... ni como policía, como persona, yo no lo permito, entonces viste vos por ahí aplicás un poquito más de dureza con uno que con otros” (E. n° 16).*

*“Hay detenciones que, a lo mejor, vos al tipo lo encañonás o lo achicaste, le pegaste el grito y se frena. Hay tipos que no, que son como 10 o 15 vigilantes y no lo podés parar. Y el juzgado no entiende de que son 15 tipos para reducir a un solo tipo. Un tipo que te viene con un cuchillo vos no le podés pegar un tiro, pero*

---

<sup>97</sup> Una tesis cercana fue sostenida por Isla y Míguez, quienes pusieron el foco sobre el desgobierno político de la policía en el marco de la política de *laissez-faire* propia del neoliberalismo del gobierno argentino durante los años '90 (Isla y Míguez, 2003).

*nosotros (...) y **¿qué hacés? ¿le tiro o no le tiro?** O sea, lo que te pasa en la cabeza no es el procedimiento en sí, sino digo ¿me como las lesiones? ¿voy preso o no voy preso? ¿qué hago?*” (E. n° 22).

*“Hay muchas cosas que vos acá vas a ver, acá vas a ver muertos o asesinados y un montón de cosas que no las entendés. El otro día fuimos a buscar un... a un muchacho que había violado a una criatura de un año y la había matado. Y vos decís **‘¿qué hago? ¿saco la pistola y le meto un tiro?’**, y ¿a quién le contás? Tu casa no podés llegar y decir (...) (risas). Y... viste, bueno, eso tampoco tenemos, estamos muy... muy así, a la que te criaste. Y por eso charlamos entre nosotros y, bueno, lo primero que te sale es **‘yo saco la pistola y lo mato’ y ‘yo saco la pistola y lo mato’ y ‘yo saco la pistola y lo mato’** y llega un momento en que sacás la pistola y lo matás...”*

De lo que dan cuenta los tres relatos citados es que la utilización de la fuerza, tal como proponíamos en nuestros puntos de partida conceptuales, se va configurando en forma situacional y sujeta a una serie de elecciones que el policía realiza en relación estrecha con el *objeto* del uso de la fuerza: “¿Le tiro o no le tiro?”; “¿saco la pistola y le meto un tiro?”. Si algunas dimensiones de la ciudadanía son –a través de estos interrogantes- puestas en cuestión, es evidente que no se trata de una noción de ciudadanía universal sino de una condición que afecta a poblaciones determinadas. En última instancia, con lo que nos encontrábamos era con un saber policial –a partir del cual se articulaban rutinas y quehaceres policiales- que era definido localmente (Geertz, 1992). De hecho, las formas en que se manifestaba el saber policial volvían necesario -al momento de analizar su relación con el problema de la ciudadanía y las posibilidades en el uso de la fuerza- indagar con mayor detenimiento en las relaciones locales que contextualizaban y brindaban un marco a la actividad policial cotidiana. Relaciones locales que, a su vez, tendrán gran influencia sobre el devenir puntual de cada caso de violencia policial. Sobre las mismas, a partir del seguimiento de casos puntuales, nos detendremos en el próximo apartado.

## Capítulo V. Usos policiales de la fuerza: versiones y corolarios.

### Los usos de la fuerza y la cotidianeidad policial

El trabajo cotidiano de la policía, tal como fuimos viendo a lo largo de varios capítulos, asume vinculaciones ocasionales (cuando las tiene) con el uso de la fuerza (o al menos con el uso letal de la fuerza) concentrándose en tareas administrativas o de patrullaje rutinario, lo cual nos llevó a considerarlos en determinados pasajes de la tesis como **empleados estatales de baja calificación**. Sin embargo, lo que los hallazgos del capítulo previo nos indican es que no debemos soslayar que se trata de empleados estatales armados; que esos meros trámites disponen la libertad o no de una persona; que en el fondo de estas oficinas públicas hay personas encerradas; que, siempre de acuerdo a las leyes por supuesto, el personal policial dispone de estos cuerpos y que, tanto en su patrullaje como en su articulación burocrática cotidiana, los policías trabajan sobre poblaciones con la potencialidad de la violencia como respaldo.

Todas las prácticas de la policía –en tanto personal armado– son potencialmente violentas. Lo que está permanentemente cambiando es el objeto. No es que la policía sea violenta cuando reprime el delito y deje de serlo cuando atiende a los vecinos. Siempre puede ser violenta, lo que ocurre es que, como intentamos demostrar a lo largo de esta tesis, el Estado permite que esta agencia administre problemáticas que no tienen necesariamente que ver con situaciones tradicionalmente consideradas como policiales, con lo cual resulta cotidiano observar cómo la policía se inscribe en formaciones de violencia de muy diferente modo. Así esta agencia administradora de violencia se puede ocupar de temas que usualmente caían dentro de la esfera social del Estado (problemas sociales, familiares, etc.), pero lo hace sin perder el origen de su reconocimiento como institución que radica, justamente, en la facultad que posee de administrar la violencia.

Recordemos que esta característica había llevado a autores como Egon Bittner (2003) a plantear precisamente que lo que le da homogeneidad a esta serie de actividades dispares es el hecho de que su solución necesite, o pueda necesitar, el uso de la fuerza. En estos casos, la resolución del conflicto no requiere imperativamente el

uso de la fuerza, pero sí resulta un dato invariable, en cambio, que para resolver problemas tan variados, los policías se valen de la potencialidad del recurso de la fuerza. Se va configurando, como intentamos demostrar, un campo de acción policial que es definido por su intervención en relaciones cotidianas que se presume requieren del uso, real o potencial, de la fuerza; intervención que es regular, rutinaria y considerada indefectiblemente como natural, tal como queda demostrado en el desconcierto con que los policías de una comisaría de la zona noroeste nos relataban el caso de “Giros”, en el que son denunciados por malos tratos a partir de situaciones que ellos consideraban como formas normales de proceder.

Con lo cual no resulta extraño, entonces, que los casos de violencia policial -si bien se presentan como rupturas que cuestionan este orden natural- representen acontecimientos que al mismo tiempo se desprenden de la lógica de funcionamiento de esta “estructura”. Como bien señalaba Lukács, en la realidad misma las “catástrofes repentinas” se están preparando desde mucho antes. No están en un contraste exclusivo con el desarrollo tranquilo de la superficie, conduce a ellas una evolución, complicada e irregular (1966: 182). Todas las referencias previas a una estructura cotidiana, realizadas en la primera mitad de la tesis, no representan un orden diferente al de este tipo de hechos; los mismos rompen la cotidianeidad pero son emergentes de la misma. Emergen (y sintetizan) todas las facetas de esa cotidianeidad, casi como un “hecho social total” (Mauss, 2009) encarnado en la experiencia concreta de una sociedad, que pone en juego a buena parte de sus instituciones. Del mismo modo, nos encontramos ante diferentes tipos de hechos que van a afectar el orden policial en todas sus expresiones. Sobre estas expresiones –y sus derivaciones- nos centraremos en el presente capítulo.

Nos encontramos, llegados a este punto, frente a cierto tipo de fenómenos que ocurren dentro de esta “estructura estable” pero que son experimentados como rupturas de este orden regular. Si bien comparten esta característica con otros de muy diverso tipo (casos de resonancia pública, enfrentamientos, conflictos en el penal, homicidios en general), los casos en que la policía utiliza en forma letal la fuerza activan una serie de dispositivos que altera las rutinas de trabajo policial, trascendiendo la agrupación implicada.

Se trata de situaciones donde los policías, en funciones o no, accionan su arma, acción que como acto casi reflejo indefectiblemente es leída (construida) en clave de “enfrentamiento”. Los mismos a la vez que alteran la dinámica institucional burocrática, activan inmediatamente **relaciones de lealtad internas**. Desde un punto de vista externo, la solidaridad que implica la pertenencia a la institución se ve graficada en el relato que hace la madre de una víctima de “violencia policial” al narrar las circunstancias de su velorio en relación con la asistencia de una parte de la familia que formaba parte de la policía:

*“Te digo más, mirá vos cómo serán una ‘gran familia’ ni este primo lejano mío estuvo en el velorio de mi hijo en ese momento, ni la tía de mi hijo, que es policía, estuvo en el velorio en ese momento. Así que, ahí me di cuenta hasta qué grado llega la, la, la unión que tienen como fuerza, como policías, digamos, que te tocan un familiar por más que sea lejano, ninguno de los dos estuvo en el velorio de mi hijo” (E. n° 3).*

En la misma sintonía, a lo largo de nuestro trabajo de campo, pudimos observar que al interior del personal policial, **los enfrentamientos refuerzan en gran medida el sentido de la solidaridad** y profundizan los lazos existentes producto de la misma actividad policial, los cuales claramente pueden ir más allá de la regla.

*“Llegamos a la comisaría 12 después de un tiempo prudencial ya que significativamente el jefe de la dependencia (que, en apariencias representaba la faz más dura dentro de la policía) fue herido durante los incidentes que se provocaron en el estadio de Rosario Central después de su descenso al Nacional B.*

*8 días después de ese hecho pensamos que sería prudente retomar el contacto con el comisario, pero cuando llegamos hablamos con la policía de la guardia (la única que estaba presente en ese momento en la entrada de la comisaría) pero **nos dice que no era un buen día, ya que se encontraban todos reunidos por un hecho en el que se vio involucrado un cabo de la comisaría**. En el relato de la policía aparecían elementos tales como: ‘lo asaltaron en la casa, le hirieron al padre y el reaccionó y baleó a los ‘cacos’. Uno terminó en el hospital’. Nos hace este relato señalando el fondo de la comisaría, donde parece haber gente reunida, pero con el hermetismo que en otras oportunidades no encontramos. Laura opina ‘**estaban acuartelados**’. Estén acuartelados o no, lo significativo era que el hecho había sucedido en otra jurisdicción. La única ligazón para tal despliegue era que el efectivo pertenecía a esa comisaría. Según el diario La Capital: ‘el hecho sucedió en una casa de barrio C., alrededor de las 21, cuando 3 sujetos armados ingresaron a la casa aparentemente con fines de robo. El dueño de casa, Carlos Alberto C., se habría resistido y recibió dos impactos de arma de fuego. Su hijo,*



*que es policía y se encontraba en otra habitación, al escuchar los tiros intervino, produciéndose un intercambio de disparos’ (O. n° 3).*

Las ocasiones en que los policías se ven envueltos en enfrentamientos actúan claramente como momentos de ruptura de la cotidianeidad. En el relato anterior el *acuartelamiento* resultaba evidente: puertas cerradas, hermetismo y quietud. Por el contrario, en el siguiente registro, observaremos que un hecho semejante rompe la cotidianeidad de una comisaría pero lo hace, esta vez, generando un movimiento y tensión constante:

*“Esta semana fue una semana cargada de particularidades. Y, podríamos decir, fue una semana con un trasfondo de violencia que por primera vez empezamos a notar en nuestro contacto con la policía. Desde la movilización de los hinchas de Central que genera toda una inquietud en las filas de la policía hasta el hecho en el que el policía en circunstancias dudosas hiere a un delincuente en su propia casa, hay una sensación palpable de intranquilidad.*

*La llegada a una comisaría de la zona sur no fue la excepción. Esta comisaría cuya jurisdicción se caracteriza por ser una de las más violentas, llamativamente había sido una de las más predispuestas para realizar trabajo de campo.*

*Sin embargo, en esta oportunidad un dato rompía la cotidianeidad. En la puerta de la comisaría se encontraban estacionados dos móviles del Comando Radioeléctrico, una chata de la Patrulla Urbana y dos motos de motorizada.*

*La razón la desconocemos. La empleada de la guardia solamente nos dice que el día está muy movido. El motivo que intuimos generaba tal movimiento parece haber sido la persecución y enfrentamiento en la que fueron detenidos dos delincuentes (uno de ellos herido de dos balazos). En el interior de la dependencia, muy posiblemente a raíz de este hecho, personal del CRE entraba y salía de oficinas y hablaba con personal de la comisaría inquietamente” (O. n° 5).*

En los dos casos, ya sea “cerrándose” a discutir el caso o “abriendo” las puertas de las oficinas a personal de otras reparticiones y dinamizando la usual pasividad administrativa de una comisaría, nos encontramos ante situaciones propias de la “condición policial” ya que lo que se activa de esos diferentes modos es justamente otra de las facetas que la conforman: la **solidaridad**. Como bien señala Monjardet (2010) el efecto negativo de la condición policial en el riesgo característico de este trabajo va de la mano con el efecto positivo de la solidaridad. Una solidaridad que, según Monjardet, se erige sobre una identidad -construida fundamentalmente en torno a la condición policial- que sobrevaloriza la diferencia. Se vuelve necesario

actuar, reunirse, porque uno de los que comparte y experimenta la “condición policial” (no importa en este caso que se trate de personal de comisaría o de Comando) se vio involucrado en un acontecimiento letal enfrentando “extraños”, personas que no forman parte esta comunidad. En este sentido vale volver a retomar a Monjardet cuando señala que:

“a falta de un contenido sustancial en términos de saberes y técnicas, la identidad policial se experimenta en la diferencia con el otro, el no-policía, y esta diferencia es afirmada como radical” (2010: 224).

Así, en los dos acontecimientos narrados más arriba, con lo que nos encontramos es con reuniones secretas, aisladas. Debates que se daba el personal policial “para adentro”. Lo que en otro momento eran comisarías de puertas abiertas, inclusive para el acceso al penal, en los momentos posteriores a enfrentamientos se mostraban como lugares cerrados, herméticos. Se trataba de rupturas que, paradójicamente, tenían un efecto cohesivo sobre la institución. Una institución que aparecía heterogénea, atravesada por múltiples miradas, ante un hecho de este tipo tendía a cohesionarse y desarrollar vínculos directos entre sus miembros. En este caso, este sentido de “corporación” no emerge necesariamente de una serie de valores morales comunes o principios abstractos vinculados con lo que significa la actuación policial; la “corporación” emerge de las relaciones concretas y de los intereses reales que se ponen en juego en la actividad policial, siendo el involucramiento en un enfrentamiento uno de los hechos más significativos que activan el sentido de formar parte de la policía. El peso de estos intereses hace que, al menos en los dos casos narrados, las posibles diferencias y tensiones entre personal de comisaría y personal del CRE pasen a un segundo plano, apelando a una solidaridad construida sobre la base una experiencia común representada por este tránsito en la policía, que las trasciende.

Con el fin de indagar, entonces, en el recorrido que se inicia una vez producido un hecho de violencia policial, fue que nos propusimos analizar en profundidad tres casos. Los mismos fueron elegidos aleatoriamente, siendo seleccionados tres a partir de la posibilidad que tuvimos de acceder al expediente judicial correspondiente, en

tanto el mismo representaba, para este punto de la investigación, una fuente de datos privilegiada.

Tomamos el análisis de tres casos de violencia policial reasumiendo el enfoque relacional, ya que el recorrido de los mismos es estudiado con el foco puesto (también) sobre las distintas respuestas brindadas por los familiares de las víctimas a los mismos como un modo de contemplar las tensiones asociadas a este tipo de hechos y al otro gran actor significativo que interviene en la trayectoria que analizamos en esta parte de la tesis.

Haber puesto el eje sobre el estudio de casos nos permitió, por otra parte, superar tanto el mero relevamiento de datos como las limitaciones impuestas por trabajar exclusivamente en el terreno del discurso, ya sea de los propios policías o bien de los familiares de las víctimas. Así, producto de las tensiones que fueron emergiendo de este campo, aparecieron temas no previstos inicialmente en nuestro plan de trabajo -entre ellos fundamentalmente prácticas novedosas de resistencias y lucha por la ciudadanía negada- al mismo tiempo que se pudo observar, a partir de lo situacional, cómo operan los criterios de legalidad/ ilegalidad imperantes ante hechos puntuales.

La primera instancia que interviene ante este tipo de hechos es la comisaría como unidad administrativa y auxiliar de la Justicia: ¿cómo trabajan las comisarías a partir, entonces, de que el Comando (respondiendo a un patrón general que, igualmente, se refleja en los casos escogidos para el análisis) actúa matando a un ciudadano? Una vez que comienza este trayecto, que el hecho ya pasó ¿cómo reacciona la policía en general? ¿Se manifiestan tensiones en el accionar de las distintas agencias del Estado? Si es así, ¿alrededor de qué aspectos?

#### Armar la trama: la construcción de la versión policial.

Con la primera versión que nos encontramos, una vez acontecido el hecho, es con lo plasmado por los policías intervinientes en el *acta de procedimiento*. En su rol

de auxiliares de la justicia, los funcionarios policiales tienen -en el marco de sus atribuciones- la posibilidad de proyectar una primera versión de los hechos a partir de la elaboración de este documento público, el cual da origen (y orienta) la investigación. Esta situación se da en todos los casos que llegan a la órbita policial, incluso los que involucran a personal de la propia fuerza. Así, ya en el mismo lugar del hecho, se comienza a elaborar una determinada verdad que, tal como veremos más adelante, indefectiblemente va a ir respondiendo al “deber ser” de la actuación policial.

En efecto, se trata de una primera versión que, de acuerdo a lo observado durante nuestro trabajo de campo, busca naturalizar el uso de la fuerza y sacarle justamente su contenido de violencia. Siguiendo nuevamente el modelo de Riches (1988), nos encontramos con que ya desde el primer documento que refleja el caso, quien perpetra el acto busca definir el hecho policial de un modo que no sea visualizado como violencia ilegítima.

Su importancia con respecto al devenir de los hechos radica en que, tal como señala Lucía Eilbaum, “la información producida por la policía, en la etapa preliminar del proceso, es el principal paso de clasificación e interpretación de los hechos para su producción como fenómeno jurídico” (2005: 146).

En los tres casos<sup>98</sup> que nos propusimos analizar, el acta de procedimiento sigue una narrativa lineal:

#### Caso I.

En el primer caso analizado y siempre de acuerdo al *acta*, un móvil del Comando recepciona una comunicación radial mediante la cual el operador de turno de la central operativa del cuerpo lo comisiona a la intersección de las calles Oroño y Biedma (zona sur de la ciudad), donde un llamado telefónico habría alertado que en el lugar se encontraría una persona herida de arma de fuego. Allí, el personal policial se

---

<sup>98</sup> No comenzamos este apartado con una descripción de los casos de acuerdo a una versión pretendidamente fiel a los hechos basándonos en que, de acuerdo a nuestra forma de concebir la etnografía como un cruce de significaciones e interesados en las disputas que se desarrollan en torno a fenómenos que pueden ser considerados como violentos, optamos por ofrecer directamente la versión que construyen cada uno de los actores involucrados en el mismo.

encuentra con un hombre y una mujer, ambos heridos, que manifiestan haber sido agredidos por dos sujetos, un hombre y una mujer también, ambos provistos de armas de fuego. La víctima reconoce al agresor y con los datos aportados, el oficial actuante organiza el procedimiento, dirigiéndose a las inmediaciones buscando el arresto de los supuestos agresores. Llegan, así, dos unidades a una **zona de pasillos** ubicada en las proximidades y al bajar de los móviles escuchan varias detonaciones de armas de fuego que provienen del asentamiento precario ubicado en el lugar. El oficial que firma el *acta* manifiesta disponer un patrullaje a través de los *pasillos*, quedando un solo agente al cuidado de los móviles. En esos instantes, ya sumergido en el mundo de los pasillos, el oficial observa que tres personas se dan a la fuga, por lo que imparte la **voz de alto**, pero los mismos hacen caso omiso y continúan escapando. Al lograr acercarse, el oficial observa que los sujetos aminoraron su marcha y uno de ellos se recuesta sobre una pared esgrimiendo un arma de fuego, razón por la cual el oficial saca su arma reglamentaria y efectúa un disparo al suelo buscando un efecto disuasivo. En esas circunstancias los sujetos lo agreden con disparos de armas de fuego que obligan al oficial a **repeler la agresión**, efectuando disparos hacia estas personas, cayendo uno de los agresores al piso y los otros dos dándose a la fuga. El oficial se aboca a la asistencia de la persona caída, registrando sus heridas y la portación de un arma de pequeño calibre con una cápsula servida. Asimismo, en el *acta* se registra que, con posterioridad, una vecina del lugar informa que en su patio apareció un arma de fuego y que en este rastrillaje los policías encuentran vainas servidas calibres 9 y 22 milímetros. Por último, se resalta que los efectos secuestrados no pudieron ser ratificados por testigos por una supuesta hostilidad de los habitantes de la *villa de emergencia* para con la policía.

## Caso II.

Los hechos según el *acta* se sucedieron de la siguiente manera: la central del Comando comisiona dos unidades al barrio Santa Lucía, a partir de un llamado que hace el vigilador de una escuela de la zona que manifiesta haber visto a seis hombres en tres motos, armados y efectuando disparos. Minutos después uno de estos móviles se topa con una persona que dice estar herida de arma de fuego a raíz de haber sido agredida por tres hombres que se transportaban en dos motos. Momentos después, la

otra unidad solicita apoyo por radio por encontrarse en enfrentamiento armado con dos *masculinos* que se encuentran a bordo de una moto. Producto de ese enfrentamiento resulta herido un personal policial y dos *delincuentes* muertos. El enfrentamiento se había iniciado cuando el personal policial al ver que las características de quienes se trasladaban en una moto coincidía con la de los sospechosos, les indicó que detengan su marcha para su identificación, los que ante esta situación imprimieron mayor velocidad al vehículo para darse a la fuga. De acuerdo a la versión policial, ambos masculinos esgrimían entre sus ropas armas de fuego con las cuales apuntaban hacia el personal policial uniformado, y realizaban gran cantidad de disparos hacia los mismos. Es en esas circunstancias que **los policías repelen la agresión** utilizando sus armas reglamentarias, cayendo los dos masculinos de la moto, uno ya muerto (con su arma encontrada a un lado) y el otro dándose a la fuga. Este último, al parecer, cubre su fuga con disparos y mantiene un enfrentamiento con policías de dos unidades, cayendo herido luego de lesionar a un suboficial. Posteriormente, fallece en el Hospital de Emergencias con 16 impactos de armas de fuego en su cuerpo.

### Caso III.

Por último, en el *acta policial* del tercer caso, la policía elabora la siguiente versión. A partir de la activación de una alarma en un domicilio particular situado en el barrio Ludueña, el Comando Radioeléctrico recibe una comunicación radial y un móvil con dos oficiales acude inmediatamente. El dueño de casa dice a los policías que vio a *masculinos* entrar en el terreno baldío lindero a su patio, motivo por el cual uno de los oficiales ingresa al fondo de la casa con el objetivo de divisarlos. El propietario coloca una escalera y la sostiene para que el policía suba al muro. En ese momento el oficial asoma la cabeza y es “agredido con una arma de fuego desde el interior del descampado”. Esto es seguido de “**una rápida reacción de repeler la agresión con disparo de arma de fuego**”. Inmediatamente observó que personas masculinas salían del baldío y bajando de la escalera se dirigió hacia afuera de la casa. Allí él y su compañero dieron la *voz de alto*, pero los masculinos hicieron caso omiso. Uno de ellos se detuvo y pudo ser arrestado. Al lugar acuden miembros de la comisaría de la zona, quienes proceden a realizar un rastrillaje por las cercanías en procura de los

otros masculinos con resultado negativo. A continuación, reciben una comunicación radial en la que se informa que existiría un masculino herido en el terreno baldío y seguidamente uno de los oficiales es entrevistado por O. R. quien comunica al oficial que su hijo estaría herido en el descampado. Se procede a verificar el interior del terreno en compañía de O. R., siendo éste quien localiza a un joven indicando que era su hijo. Al lado de éste se encuentra una sogá tipo alpinista. Inmediatamente llaman a una ambulancia y el joven es trasladado al Hospital de Emergencias. La policía efectúa “un nuevo rastrillaje en el terreno baldío, lugar este donde se encontraba el masculino herido, en procura de algún otro elemento útil para la causa, arrojando como resultado el secuestro de un arma de fuego tipo revólver”. Por último, el personal de la comisaría a cargo procede al secuestro de la sogá, el revólver y las armas de los policías para realizar pericias. Con esta medida, termina el *acta policial* del procedimiento firmada por el comisario a cargo de la comisaría de la zona.

Tomando la narración de estos tres casos nos preguntamos: ¿Qué elementos aparecen como inherentes a la construcción de una primera versión de los hechos propia de la policía? Si bien los tres casos expresan variaciones, no se puede soslayar el hecho –ya planteado a inicios de este capítulo- de que de que el acta es construida de acuerdo a un “deber” ser de la actuación policial, razón por la cual la misma contiene y respeta todos los protocolos de actuación. Ello se termina expresando, como puede observarse en los casos analizados, en afirmaciones como “dar la voz de alto” o en tecnicismos tales como “repeler la agresión”.

No obstante, un elemento nuevo, fundante del *acta* y presente en todos los casos -en algunos en el mismo momento y en otros casos en ocasión de un segundo o tercer rastrillaje- está representado por la aparición de armas de fuego en manos de la supuesta persona agresora. En ninguno de los tres la víctima estaba desprovista de armamento, lo que contribuye a ratificar el perfil amenazante de la misma que la policía busca instalar y transmitir desde la elaboración misma del *acta*.

Con esos elementos, el accionar policial es secuenciado en actos siempre presentes: parte de la *voz de alto*, continúa con una agresión del delincuente que esgrime su arma de fuego y efectúa disparos contra el personal policial –donde

significativamente muchas de esas veces falla y no se efectivizan los disparos dada la condición vetusta del armamento- y finaliza con el acto de *repeler la agresión* por parte del personal policial; lo que termina implicando la muerte del delincuente. La recurrencia de esta escenificación nos está hablando de un **modo**, por lo menos, **estandarizado de construcción del *acta de procedimiento***, el que invariablemente responde a los distintos momentos del “deber ser” de un enfrentamiento.

Una vez que se da cuenta del hecho a través de la elaboración del *acta*, la misma debe formalizarse administrativamente a través de su ingreso en la comisaría correspondiente de acuerdo a la jurisdicción en donde el hecho aconteció. Allí el primer paso consiste en dejarlo asentado en el *libro de guardia*. De hecho, todo lo que ocurre en una comisaría debe quedar administrativamente asentado allí (incluso nuestros nombres al momento de realizar trabajo de campo). Este procedimiento quedó plasmado –a través de las observaciones realizadas en comisarías- en nuestros registros de campo:

*“La oficial guardia se sigue atrasando: ‘**Todo lo que pasa va al libro de guardia**’, afirma. Muestra cómo lo va armando, en una columna se pone la hora, y en otra una descripción breve del hecho. Le pregunto si esa descripción es bien técnica (lo pregunto porque era la otra oficial, la de mayor antigüedad, la que reiteradamente le dictaba lo que debía poner en un discurso técnico estandarizado) a lo que responde que sí. Afirma además que está cansada, mientras que la otra la presiona para que se ponga al día así entrega el libro cuando termina su turno sin mayores inconvenientes” (O. n° 14).*

*“Nos quedamos hablando con la gente de la guardia y en ese contexto nos dicen que hay un libro principal, que es el ‘libro de guardia’ y que es el documento fundamental que registra todo lo que pasa en la comisaría y que ellos tienen que ser muy cuidadosos con lo que van asentando en ese libro. Eso aparece, en su discurso, como un **justificativo del hecho de que primero vayan haciendo el libro en borrador**. El cuidado de este libro principal obedece, según ellos, al hecho de que cualquier juzgado puede solicitar vista en cualquier momento” (O. n° 7).*

Las dos situaciones narradas nos están mostrando principalmente dos cosas: por un lado, la importancia asignada a este documento por supuesto; pero, por el otro, el modo particular en que el mismo es elaborado en esas dos comisarías rosarinas. Ya Sofía Tiscornia (2005) había dado cuenta oportunamente de este mismo modo particular de “llevar el libro”. En nuestro caso, reiteradamente observamos que, en la práctica cotidiana, el libro es constantemente manipulado y que esa



manipulación es posible a partir de la lógica particular con que se confecciona este documento público, transmitida como un saber entre los mismos policías. Con el transcurrir de las horas –y ante nuestra mirada atenta acerca de todo lo que ella hacía- la *empleada de la guardia* recién citada nos irá aclarando su metodología de trabajo:

*“La ‘empleada de la guardia’ nos muestra el ‘libro de guardia’ correspondiente al mes pasado. Cada libro (se trata de los típicos libros de actas) se consume, podríamos decir, en un mes. La metodología para asentar los datos consiste en: **primero, ir anotando todo en un papelito en borrador y después ir asentándolo formalmente en el libro.** Esa metodología se justifica, supuestamente, por la necesidad de prolijidad en el libro pero los mismos policías dejan entrever que puede servir también para acomodar las actividades de la comisaría ante algún hecho que podría ser ilícito. Puede servir para justificar determinadas cosas a partir del hecho de que se asienten las actividades del personal de la comisaría con un retraso de, aproximadamente, unas 5 o 6 horas (este hecho desvirtúa el espíritu y el valor legal del libro en tanto documento). La empleada de la guardia nos dice que su deber es ir asentando todas y cada una de las actividades que acontecen, quién entra, quién sale, si se requisa a los detenidos, si se toma declaración a fulanito de tal, etc., etc. etc.” (O. n° 14).*

Se trata de dos momentos claramente diferenciados: por un lado tenemos la instancia de “anotar todo en un papelito borrador” y por el otro la forma de transcribir toda esa información en el *libro de actas*. Esta manipulación del libro sostenida en el desfasaje entre los acontecimientos y su escritura, brinda a los policías la posibilidad de diseñar instancias de encubrimiento. Significativamente, una joven oficial de guardia al momento de enfatizar la importancia de su rol, hacía esto explícito al decirnos:

*“Y aparte... te cubrís vos... porque si acá no te cubrís vos no te cubre nadie, yo tengo que cuidar a mi tercio, siempre hay algún quilombo, tenés que tratar de cubrirlo y escribiendo...” (O. n° 7).*

No solo se cubre (o *salva*) al compañero con armas o chalecos. Se puede cubrir al compañero “escribiendo”. Y esta escritura resulta estratégica desde el momento en que el libro de guardia es el documento que da cuenta de todo movimiento producido administrativamente al interior de la comisaría. Se trata, de ese modo, de un documento clave para las investigaciones judiciales, las cuales le suelen otorgar una

validez objetiva. En el siguiente fragmento de la entrevista con un cabo cuarto, ello queda claramente expuesto:

*“todo pasa por el ‘libro de guardia’, el ‘libro de guardia’ es el que te deja preso o te da la libertad, eso sé el juzgado lo primero que hace es ver el ‘libro de guardia’” (E. n° 34).*

La importancia que el “juzgado” le otorga al *libro de guardia* puede resultar problemática ya que, por lo visto, esta valoración se asienta en gran medida sobre una ficción (que en algunos casos ni siquiera llega a ser verosímil). Las investigaciones judiciales no suelen tomar en consideración la forma particular de elaboración del *libro de guardia*, la cual nunca puede asumir esa representación empírica y descriptiva de lo que está aconteciendo, sino que, en todo caso, lo asentado en **el libro va a reflejar múltiples negociaciones** (“te cubrís vos”, “tengo que cuidar a mi tercio”, “escribiendo”) que se entablan entre los actores significativos que interactúan en una comisaría determinada.

Se trata de múltiples negociaciones que se sostienen sobre un alto grado de informalidad. Esta informalidad brinda el sustento (y la posibilidad) para desarrollar determinados grados de solidaridad nacida de experiencias comunes. Una solidaridad, o más bien una “complicidad”, que, volviendo a Monjardet (2010), puede tener su origen en valores ideológicos comunes pero que en la práctica obedece fundamentalmente a su unicidad organizacional. Puede haber muchos matices entre el policía del Comando y el de comisarías pero ante determinados hechos, la misma institución los posiciona en idéntico lugar.

Así, si bien las investigaciones judiciales cuando requieren el *libro de guardia* lo consideran como un libro objetivo, como un documento autónomo cuya elaboración se hace más allá del propio contexto, el *libro de guardias* en realidad está expresando lo que efectivamente pasa en la comisaría, pero lo hace no como un ingenuo reflejo de lo real sino sintetizando las relaciones que allí se entablan, expresando el vínculo de poder y los intereses puestos en juego por los distintos actores ante determinados hechos.

Una vez ingresado en el *libro de guardia* de acuerdo a las seguras negociaciones que esta instancia prevé, está dado el escenario para iniciar la construcción de la **segunda versión policial de los hechos**. La segunda versión es realizada, ya directamente en comisaría, por el sumariante en lo que se denomina *parte preventivo*. Llegados a este punto nos encontramos con otra particularidad: el *parte preventivo* en los tres casos estudiados -realizado posteriormente en dependencia policial- expresa y reproduce en términos exactos el contenido del *acta de procedimiento* antes mencionada. Esta misma versión, entonces, empieza a estar presente en los distintos momentos de la investigación: *acta* -que da cuenta de los hechos- y *parte* -a través del cual se inicia la investigación y se da comunicación al Juzgado-. Así se va constituyendo en el primer elemento orientado a ratificar y consolidar la versión policial sobre la base de una *instrucción sumarial* que suele asumir sin cuestionamientos la versión inicial dada por los policías implicados (Barrera et. al, 2010). Podría pensarse esta acción como un primer paso para transformar la versión policial en verdad jurídica<sup>99</sup>, la cual se hace sin aparentes tensiones entre las distintas dependencias policiales más allá de las marcadas diferencias existentes entre ellas, tal como estuvimos viendo a lo largo de la tesis.

Como puede apreciarse, la elaboración consensuada del *acta* y *parte preventivo* implica un proceso complejo en el que están involucradas múltiples dimensiones del trabajo policial. En los hechos suelen hacerse apresuradamente por actores con poca instrucción en la materia y, lo que es fundamental, sujetas también a múltiples procesos de negociación en la misma sede policial con el asesoramiento, la consulta y coordinación entre el personal del Comando involucrado (el que es generalmente involucrado en prácticas de este tipo) y el personal de la comisaría correspondiente a la jurisdicción donde aconteció el hecho en cuestión.

---

<sup>99</sup> Foucault hablará de una “verdad jurídica” para referirse a aquellas prácticas sociales que fundan un saber, un modo de conocer, un sujeto de conocimiento y con ello una determinada subjetividad. Esta verdad no se vincula con aquella proveniente de la historia de las ciencias (historia interna de la verdad) sino que se forma en otros ámbitos/espacios sociales “donde se definen un cierto número de reglas de juego, a partir de las cuales vemos nacer ciertas formas de subjetividad, dominios de objeto, tipos de saber y por consiguiente, podemos hacer a partir de ello una historia externa, exterior, de la verdad” (2003: 4). Ciertamente lo que este concepto pone de relieve es su construcción -y con ello hablamos de arbitrariedad e historicidad- a partir de ciertos mecanismos, prácticas y lenguajes; esto es, la construcción de “verdad jurídica” a través de ciertos dispositivos más o menos sistemáticos, como en este caso los representados por las versiones que brinda la policía sobre un determinado hecho (Barrera et. al: 2010).

Parafraseando a Sofía Tiscornia (2004) podríamos decir que en ese vínculo establecido entre el personal de comisaría y los miembros del Comando o Cuerpos en general, tejido sobre la base de la **condición policial**, asistimos a un centro opaco a la mirada que fundamenta y legitima (y canaliza) determinados procederes y prácticas policiales, hecho que es posible observar cristalizado en la lógica de construcción del *parte*. Podríamos afirmar, entonces, que existe un modelo, una convergencia en la fundamentación, que orienta el modo en que se debe elaborar esta primera verdad policial. Una primera verdad que, en los casos de utilización letal de la fuerza, aparece celosamente custodiada, y lo que es fundamental, consensuada.

Así, las formas de proceder de la policía brindan la oportunidad para que la secuencia que escenifica los momentos del enfrentamiento y que culmina indefectiblemente en la construcción de una versión de la “legítima defensa”, se repita en dichos documentos más allá de las características particulares de cada uno. Esta lógica de construcción de la verdad policial se estructura en la cotidianeidad de la práctica. Así, de los tres casos<sup>100</sup> se puede inferir claramente que el *acta de procedimiento* fue elaborada en el mismo momento que el *parte preventivo*; es decir en el propio ámbito de la dependencia policial, contradiciendo el reglamento que estipula que debe hacerse en forma inmediatamente posterior a la intervención policial y en el mismo lugar del hecho. Esta dinámica de trabajo policial, como mostramos en los ejemplos citados más arriba, fue posible de observar en distintas situaciones de campo cuando se evidenciaba, en el contexto de las comisarías, cómo ante determinados hechos -desde accidentes de tránsito, detenciones, extravío de personas hasta enfrentamientos<sup>101</sup>- se reúne personal, que no necesariamente cumple funciones en la comisaría, y pasan largo tiempo consensuando y elaborando el *acta* junto con los sumariantes de la misma. En este sentido, puede decirse que los casos de violencia policial, más allá de su eventual excepcionalidad, son reinscritos dentro de una trama rutinizada de prácticas que es sostenida por relaciones de solidaridad y reciprocidad que se despliegan entre los policías ante hechos de muy diferente tipo.

---

<sup>100</sup> Inclusive, en el segundo caso, esta práctica aparece registrada tanto en el *acta* como en el *parte*, donde se aclara que “se hace constar que la presente Acta se labra en sub-comisaría X por razones de comodidad y espacio” (ffs 3).

<sup>101</sup> Kant de Lima (1995) habla de un *continuum* en las prácticas punitivas que va desde golpes –con fines de investigación o castigo– hasta la ejecución de sospechosos y criminales.

Así, el *parte preventivo* que inicia la investigación y que realiza la comunicación al juzgado, es elaborado por los sumariantes con la referencia directa, inmediata y presencial del *acta de procedimiento*, aún en los casos en que podría haber policías implicados en hechos ilícitos. Al igual que lo que ocurría con los datos asentados en los *libros de guardia*, la comisaría termina reproduciendo, a pesar de sus diferencias organizacionales, laborales, de trayectorias, etc., la versión que el Comando da de los hechos.

De aquí que se pueda leer que estas dos primeras versiones de los hechos obedecen a una lectura institucional de los mismos realizada por la policía. Por institucional no queremos decir que se trate de una lectura sujeta a derecho sino – antes que eso- enfatizar que obedece al marco de concepciones y significaciones que le indican a la policía cómo actuar ante una determinada realidad.

Con esa orientación, lo importante de destacar del *acta* y *parte* en los casos estudiados es que en los tres, por distintas vías, se ordena en un discurso legitimador distintos modos de prácticas ilegales de la policía que, en estos casos puntualmente, culminan con la muerte de las víctimas, siendo todas prácticas y saberes adquiridos, usuales y cotidianos: el uso de la fuerza cuando no hay necesidad de repeler agresión alguna o se trata de un bien jurídico menor, el ocultamiento de pruebas, los modos particulares de confeccionamiento del *acta*, etc, etc.<sup>102</sup>.

No obstante, se trata de hechos que tienen un impacto considerable en la opinión pública, lo cual requiere que se desplieguen estrategias de legitimación complementarias que ratifiquen la versión dada por la policía. Las mismas circulan principalmente a través de los medios de comunicación gráficos: las crónicas policiales de los diarios.

---

<sup>102</sup> La sección de criminología del CEIDH (Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos) identificó –para la provincia de Santa Fe- patrones recurrentes en la investigación de las prácticas policiales violentas entre los que se destacan: la construcción de una versión falsa de los acontecimientos, el ocultamiento, destrucción o fabricación de pruebas para desvincular a los policías involucrados y el amedrentamiento a testigos y familiares.

“Repeler la agresión”: un modelo de elaboración de la noticia.

“Los diarios publican dos balas  
son diez o son mil  
mil ojos que miran  
mil ojos que miran  
desde el cantegril”

(Daniel Viglietti “El Chueco Maciel”)

Los hechos llegan a la prensa, los diarios locales se hacen eco de las muertes. Lo hacen siguiendo un modelo interpretativo de la realidad social que no siempre figura de manera explícita (Vasilachis de Gialdino, 2005). De hecho, en el marco de un análisis que toma como objeto específico la crónica policial, Stella Martini observa una naturalización de los discursos hegemónicos sobre la que “se produce la representación de los que son colocados en el campo de la ilegalidad, los ‘otros’, delinquentes, marginales, ‘los sospechosos de siempre’ (pobres, jóvenes y villeros)” (2002: 88). En este contexto es donde la autora identifica que la noticia policial muestra dos mundos en conflicto, el de los ciudadanos comunes y el de la delincuencia. Allí,

“la estigmatización de los delinquentes traduce las sensaciones de miedo y repudio de la sociedad afectada. Los individuos que portan el estigma del crimen (o aquellos que portan al menos la sospecha) pasan por sobre los derechos individuales y a la vez pierden sus propios derechos” (2002: 100).

En nuestro relevamiento del diario La Capital no hemos encontrado desarrollados este tipo de categorizaciones, aunque sí pudimos observar un modelo implícito que, en forma subyacente a los meros datos, da cuenta de la existencia de patrones de prácticas policiales violentas. El mismo se manifiesta no solo en una reiteración del contexto de los hechos sino también en una construcción de peligrosidad asociada a la condición armada de los “delinquentes abatidos”. En las noticias que refieren a funcionarios policiales accionando su arma reglamentaria, la mayor parte los “delinquentes” se encontraba provistos de armas de fuego: diario La Capital: 18/03/02, 01/04/02, 04/08/02, 10/08/02, 29/12/02, 02/02/03, 04/02/03, 23/02/03, 03/03/03, 27/03/03, 28/03/03, 15/08/03, 07/02/04, 03/03/04, 19/04/04,

12/06/04, 02/07/04, 15/01/04, 23/07/04, 24/10/04, 24/11/04, 02/03/05, 25/03/05, 06/9/05, 31/10/05, 13/11/05, 19/11/05, 27/11/05, 15/01/06, 25/01/06, 24/04/06, 05/05/06, 12/06/06, 19/06/06, 26/06/06, 26/08/06, 08/09/06, 13/11/06, 26/11/06, 05/01/08, 14/01/08, 03/03/08, 28/07/08, 19/10/08, 30/01/09, 22/06/09, 05/10/09, 14/10/09, 02/11/09, 04/02/10, 14/09/10, 28/10/10, 03/12/10.

Muy posiblemente este hecho obedezca a la práctica de *plantar armas* a supuestos “delincuentes” abatidos. La acción de ***plantar armas*** consiste en una fabricación de prueba por parte de la policía dada, fundamentalmente, por la colocación de un arma a la víctima con posterioridad a los hechos con el objetivo de desvincular a los policías comprometidos en el caso. Por ejemplo, en el caso III, de acuerdo al relato de la madre de la víctima, esta práctica se presenta:

*“Mi hija y una amiga fueron como a las doce y media de la noche y, claro, había policías y todo, y nunca nadie en ningún momento pensó, sino después, yo ya te hablo un año y medio después, que lo que estaban haciendo a esa altura era armando la escena. No era que estaban investigando, **ya estaban armando todo**”* (E. n° 2).

En ese marco, **las expresiones de la crónica policial suelen ratificar, consolidar y legitimar socialmente las versiones policiales** sobre la base de reproducir fundamentalmente los partes de prensa sin problematizaciones algunas.

Las formas que suelen asumir las crónicas policiales ya habían sido señaladas magistralmente por Rodolfo Walsh:

*“...Así como hay apenas media docena de chistes básicos que admiten infinitas variaciones, la crónica policial bonaerense registra media docena de historias que pueden tomarse de modelo. Una de ellas es la siguiente: en horas de la noche de ayer, una comisión de la comisaría primera de tal lugar observó a varias personas en actitud sospechosa. Al acercarse e interrogarlos fueron recibidos por una descarga cerrada, generalizándose un tiroteo a cuyo término encontraron heridos de muerte a N. N., con antecedentes por robo, y X. X., cuya identidad se procura establecer. Junto al cadáver de uno de los malhechores se halló un revólver 38 con dos cápsulas servidas”* (“Obra periodística 1953-1977” en Tiscornia, 1999:32).

Del mismo modo, la siempre presente secuencia del accionar policial que parte de la **voz de alto**, continúa con una **agresión del delincuente** que esgrime su arma de fuego y efectúa disparos contra el personal policial y finaliza con el acto ineludible de

**repeler la agresión** por parte del personal policial, implicando esa necesidad de *repeler la agresión*, la muerte del delincuente; nos habla (al igual de lo que ocurría con el *acta y parte preventivo*) de **un modo estandarizado de construcción de la crónica policial**. Esta secuencia que escenifica los momentos del enfrentamiento y culmina indefectiblemente en la construcción de una versión de la legítima defensa, se repite en innumerables noticias donde se reproducen partes policiales que relatan enfrentamientos con delincuentes.

Diario La Capital: 04/08/02: "... se identificó como policía, lo que desencadenó la respuesta armada de los maleantes. Los asaltantes dispararon sin herirlo y se produjo un intercambio de disparos en el cual el agente hirió de bala a los maleantes"; 16/04/03: "...los maleantes cubrieron su fuga a tiros, lo que obligó al agente a **responder la agresión con su arma reglamentaria**"; 23/06/03: "...los sospechosos **respondieron con disparos de armas de fuego a la voz de alto policial** y eso ocasionó un intenso tiroteo..."; 15/08/03: "...llegó un policía que vio una actitud sospechosa, se identificó, tiró al aire, un ladrón le disparó al policía y él **repelió la agresión** con el resultado de uno de los ladrones muertos"; 26/09/03: "la patrulla localizó a los ciclistas denunciados y **tras darles la voz de alto**, uno de ellos intentó fugar cubriendo su retirada a tiros y murió en el enfrentamiento..."; 20/12/05: "... el menor abrió fuego y los uniformados respondieron. NN fue perforado de un balazo que le atravesó la espalda..."; 23/04/06: "Un móvil policial llegó al lugar cerca de las 4.40 de la mañana, y en efecto comprobó la presencia de tres sujetos sospechosos, quienes al ver el vehículo, comenzaron a efectuar disparos de arma de fuego contra los efectivos de la policía, quienes a su vez **repelieron el ataque..**"; "Un delincuente resultó muerto esta madrugada en la zona noroeste de la ciudad luego de intentar asaltar junto a un cómplice a una pareja y posteriormente resistirse y agredir al personal policial que intentó detenerlo" (05/01/08); "El pasado sábado, A. B. huyó en un Fiat Uno cuando personal de la Patrulla Urbana quiso identificarlo en un operativo de rutina. En la persecución hubo intercambio de disparos, hasta que un balazo dio en la espalda del joven y otro impactó en su cráneo, tras lo cual perdió el control del vehículo, que terminó estrellado contra una columna en Calvo y Gallardo (19/10/08); "Los dos hombres se encontraron a pocas cuadras de donde actuó el arrebatador produjo el robo. A la voz de alto, el asaltante, según consignó un oficial jefe de la Unidad Regional II, abrió fuego dos veces contra el policía, quien respondió con dos disparos ascendentes mientras el asaltante trepaba a una reja en Deán Funes al 1700" (30/01/09); "uno de los delincuentes le puso el arma en la cabeza al policía y que al advertir que estaba armado le disparo rozándole la cabeza. El policía logró entonces sacar su arma y **al repeler la agresión mató a V. con un balazo en el tórax**" (04/02/10), "la calle estaba desierta cuando un flamante camión Ford estacionó ayer a la mañana frente a un local de venta de huevos de San Francisquito. En la calma de un barrio que dormía, los empleados comenzaron a descargar mercadería. Pero la quietud del feriado se quebró de repente: dos hombres que llegaron en moto encañonaron a tres personas, robaron del local



unos mil pesos y todo terminó de la peor manera. Un policía de civil que estaba entre las víctimas se tiroteó con los ladrones y mató a uno de ellos de un tiro en el pecho” (28/10/10).

Podría afirmarse, entonces, que al reproducir fundamentalmente el parte policial, la crónica expresa una **“convergencia discursiva”**<sup>103</sup> con el discurso de la agencia policial, basada en categorizaciones comunes y repetidas entre ambos, donde se reproduce un modelo interpretativo de la realidad social que solamente parece ser puesto en cuestión cuando -mediante movilizaciones, presentaciones ante los Tribunales o mismo los medios de comunicación- familiares y amigos de las víctimas irrumpen en la escena pública. Entre los casos analizados, eso solo ocurrió en el tercero, donde luego de una publicación estandarizada de la noticia, la movilización de los familiares motivó una profundización en el análisis periodístico por parte de La Capital, el que culminó constituyéndose en una parte importante del proceso de lucha y debate público. Así relataba este proceso, en el marco de nuestro trabajo de campo, la madre de la víctima:

*“Claro, que no había muerto como dijeron la primera vez ‘murió un delincuente’, lo que para mí era... buscar la verdad y nada más, viste. Encima que te lo arrebatan de tu vida, ensuciar el nombre, no sé”* (E. n° 3).

*“Sí, sí... yo siempre le dije, en ese tiempo estaba Jorge S. en Policiales. Cuando yo no... la nota, la hace Paula, una chica. Y a la semana volvió, vino, investigó, se metió en el predio, cómo era, registró todo. Y bueno La Capital, para que te dé bolilla La Capital. Y después con el tiempo lo fueron siguiendo todos, no se perdieron nada del expediente. Por eso fueron tan importantes”* (E. n° 3).

El presente capítulo comenzó narrando tres casos similares: hechos de violencia que culminaron con la muerte de la víctima, actos de negación radical de ciudadanía para las víctimas. La policía, naturalmente, buscaba encuadrar tales actos en las reglamentaciones y protocolos vigentes, tanto a través de procedimientos administrativos como públicamente a través de los medios de prensa. Sin embargo, en el tercero de los casos analizados, el camino se empezaba a bifurcar. Este contacto con la prensa ya estaba indicando que la resolución del caso no iba a ser lineal. En los otros

---

<sup>103</sup> Vasilachis de Gialdino (2005) cuando utiliza el concepto de “convergencia discursiva” alude a aquellos textos que construyen objetos, que proponen modelos de interpretación y de legitimación que poseen características similares y que pertenecen a la misma formación discursiva. Por su parte, Stella Martini (2002) también observa cómo el discurso periodístico se pega al policial, mientras que de los delincuentes o sospechados de serlo, se ignora casi todo excepto su carrera criminal.

dos, en cambio, los diarios poco cuestionan la versión policial y podríamos decir que la terminan legitimando al reproducir casi textualmente los partes de prensa que elabora la policía. Es en este punto del trayecto -donde los caminos claramente se separan- cuando empieza a intervenir otro actor significativo: el Poder Judicial.

#### Procurando una “verdad”: la construcción de la versión judicial

*“Se presenta entonces evidente que el obrar del policía fue en consecuencia inmediata y directa de un accionar armado, peligroso e ilegítimo de X y de sus acompañantes, y que empleó para hacer cesar el ataque, el arma de servicio que portaba, dispuesta por las reglamentaciones para que los efectivos cumplan sus obligaciones y desempeñen sus tareas, ya que están facultados al uso de la fuerza y aún obligados a su empleo para asegurar la defensa de su persona o de terceros (art. 11 inc. “b” y “c” de la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Santa Fe Nº 7395/75), luciendo por lo demás racional el medio empleado, toda vez que respondió el injusto ataque con armas de fuego de los tres desconocidos, usando la pistola reglamentaria que portaba, la que además disparó en forma disuasoria.*

*Por todo lo expuesto podemos entonces concluir que obra plenamente acreditado que el intercambio de disparos se produjo en un solo acto, que obran íntimamente vinculados entre sí por ser unos consecuencia de otros y que el accionar del encartado estuvo únicamente orientado a evitar que los agresores continuaran efectuando disparos contra su persona, **luciendo racional el medio empleado para repeler una agresión armada claramente injusta, empleado para ello el arma y las municiones reglamentarias y provistas por la repartición para tales casos, correspondiendo entonces disponer el sobreseimiento definitivo del sub comisario Y** en la muerte de Z, por haber actuado amparado en la causa de justificación prevista en el art. 34 inc. 6to. Del Código Penal” (extracto de la sentencia del caso I).*

*“Respecto del procedimiento policial no se observa motivo alguno que imponga proseguir con las actuaciones, toda vez que surge que ha habido un enfrentamiento con personas armadas, resultando coherentes los relatos policiales (habiendo personal herido de consideración) y habiendo sido corroborados por los efectuados por los particulares tanto en sede policial como judicial, archívese” (Extracto de la sentencia caso II).*

*“No existen pruebas fehacientes del posible enfrentamiento, no se probó que A disparara, no se encontraron proyectiles –ninguno- en el tapial, B si es como declara no debió volverse a subir y disparar a hacer impacto, pues dice que tiró al fogonazo, es decir a matar.*

*La Defensa solicita exceso en la legítima defensa, pero resulta que para existir exceso previamente debe tipificarse la legítima defensa, no está probada la agresión ilegítima. Terminar con una muerte ante una tentativa de hurto calificado, resulta insostenible para cualquier ser que se mida una escala de valores, aún debió dejarlo escapar si no existía otra salida, menos gravosa como es la vida humana.*

*Con relación a B, recordemos que el medio empleado –arma de fuego, pero en funciones oficiales- la extensión del daño –una vida- y el peligro causado, son referencias al grado del injusto, por lo que constituyen el punto de partida para la graduación; hemos dicho que vemos la existencia de un hecho doloso.*

*Entendemos que considerando sus características desde la perspectiva de la sensibilidad de la pena, relativa a la diferente afectación según la situación personal del que la sufra, su falta de antecedentes, nos lleva a la convicción concreta de revocar la pena impuesta por el A-quo y **disponer el mínimo legal previsto** en los Arts. 79, 41 bis, 40, 41 y 45 todos del Código represivo, entonces la fijamos en **Diez Años y Ocho Meses de Prisión, accesorias legales y costas**” (Extracto de la sentencia caso III).*

Tres sentencias. Un mismo período, 2002/2010. Una misma ciudad, Rosario. Tres documentos que sintetizan un largo proceso. No necesariamente un largo proceso judicial, pero sí una larga trayectoria donde convergen procesos políticos e institucionales. Tres procesos judiciales que comienzan con hechos que parecen salirse de la rutina de trabajo policial, en la que un miembro de la institución utiliza la fuerza sobre un *civil* dándole muerte. Un corte abrupto en una cadena de situaciones cotidianas que da origen a la intervención del Poder Judicial. Diferentes resoluciones que dan cuenta del complejo entramado de relaciones que orienta la investigación judicial. Esa investigación que partía de una ruptura, un momento puntual en el que el arma reglamentaria es disparada y asesina a un *civil*, un “delincuente” para algunos, un “ciudadano” para otros. Una disputa de sentido que en gran medida irá dando cuenta de estos devenires diferenciales. Tres hechos, tres episodios que, en realidad, esconden detrás una multiplicidad de actos rutinarios. Tres acontecimientos que liminarmente aparentan salirse de una estructura de prácticas sumamente rutinizadas. Los expedientes judiciales, las sentencias, el efectivo cumplimiento de la pena o la falta de mérito cierran –en los tres casos y de diferente manera- un ciclo ritual que recompone y ratifica la armonía de la estructura.

En este apartado analizaremos precisamente este largo recorrido, contradictorio, confuso, en ocasiones opaco, que culmina en la letra fría del expediente disponiendo la libertad o no del cuerpo de los policías implicados.

Los vínculos desarrollados entre el Poder Judicial y la policía son complejos. En primer lugar hay que destacar que el Poder Judicial incide sobre las formas que asumen las prácticas policiales cotidianas fundamentalmente a partir de la caracterización que hacen los mismos policías de la situación relativa del Poder Judicial. Este tipo de valoraciones es recurrente en las apreciaciones que los agentes del CRE hacen acerca de la forma que asume su jornada laboral de patrullaje:

*“Hay secretarios de juzgado que tienen un temperamento particular y otros otro, y la policía se tiene que ir amoldando” (E. n° 23).*

*“Vos sabes en particular los juzgados como quieren que trabajemos...” (E. n° 18).*

Lo mismo afirmaba en el siguiente fragmento no grabado uno de los sumariantes entrevistados -que había tenido una larga trayectoria en el CRE- dando cuenta de las tensiones que pueden existir entre las diferentes agencias del estado:

***“Cuando él trabajaba en la calle primero preguntaba ¿qué juez está de turno esta semana? Dependiendo de la respuesta trabajaba o no. Si era un juez que ante la duda te “dejaba preso”, él se dedicaba a tomar mates y comer facturas. Si era un juez que respaldaba el accionar de la policía, entonces él cumplía con su trabajo” (E. n° 16).***

Como se desprende de los registros citados, el Poder Judicial no interviene exclusivamente cuando el hecho ya ocurrió. La representación de la situación relativa del Poder Judicial, actuante o permisivo, estructura indirectamente una definición de las circunstancias en que se puede hacer uso de la fuerza. Esta tensión, esta ambivalencia del Poder Judicial que en ocasiones “deja trabajar” y en otras juzga “contra la policía” atraviesa el análisis de los tres casos propuestos para el análisis, y puede observarse cristalizada en los expedientes judiciales, los cuales aparecen en esta instancia como el documento que mejor expresa y sintetiza estos conflictos y tensiones.

El expediente judicial asume esta cualidad a partir de presentársenos como la expresión material de las formas particulares en que el sistema penal administra

conflictos. Podría suponerse entonces que, con su raíz en un conflicto, el expediente sintetiza y evidencia distintas versiones de un mismo hecho. Sin embargo, como intentaremos demostrar a lo largo de este apartado, la lógica de configuración de la verdad jurídica en el proceso judicial puede recorrer caminos diversos: en determinados casos ratifica solamente una de las versiones (la policial), mientras que en otros, las distintas perspectivas afloran (Barrera et. al., 2010).

**En el primer caso analizado**, donde es abatido el “delincuente” en los *pasillos* del asentamiento precario, inmediatamente se pone en conocimiento del hecho tanto al Juez de Instrucción como al Fiscal de turno. El juez se constituyó en el lugar de los hechos e interiorizado de los pormenores del mismo ordenó que se le efectúen pericias al arma utilizada por el policía implicado y que la misma le sea reintegrada de inmediato, caratulando el hecho como “resistencia a la autoridad y homicidio”.

Paralelamente, la *inspección ocular*<sup>104</sup> -que, como parte del sumario, es realizada por el mismo sumariante y subcomisario que habían realizado el *parte preventivo*- ratifica lo expuesto en el *acta de procedimiento*. De este modo podemos observar cómo progresivamente lo que era una versión más comienza a objetivarse en una verdad.

En este caso, la investigación judicial se asienta sobre las declaraciones testimoniales tomadas a testigos en la misma sede policial. En primer lugar, la mujer víctima de la primera agresión. Luego, el hombre también víctima de esta primera agresión y en tercer lugar, el policía que participó del enfrentamiento. Este último ratifica lo expuesto en el acta, resaltando algunos elementos como “le doy la voz de alto, hacen caso omiso...” (fojas 42) “me efectúan varios disparos y repelo la agresión contra estos últimos con dos disparos más, los que también fueron efectuados en forma baja” (fjs 43). Los otros policías que participaron del procedimiento también ratificaron lo expuesto por el oficial en el acta.

---

<sup>104</sup> Procedimiento contemplado en el código procesal penal como parte de la investigación sumaria y como medio de prueba a fin de lograr una observación detallada del lugar de los hechos que permita así establecer el modo en que se sucedió el delito (Barrera et. al., 2010).

Hasta aquí podríamos decir que tenemos un hecho policial que sigue un curso lineal siguiendo una narrativa que no presenta altibajos. Sin embargo, aparece prestando declaración testimonial la hermana del “delincuente” muerto, quien por otra parte es también hermana de la víctima de la primera agresión. De acuerdo a su testimonio, ella acompañó a su hermana hasta el hospital porque había sido víctima de la agresión de dos personas, hecho que denunciaron ante un móvil del CRE. Ahora, también avisó a su hermano, el que fue hasta su casa para “ver qué estaba pasando” pero nunca habría llegado a destino. Con posterioridad, se encuentran con el cuerpo de su hermano tirado en el piso del pasillo.

Más adelante el expediente registra que el arma que supuestamente poseía la víctima fue peritada arrojando como resultado la existencia de restos de pólvora deflagrada<sup>105</sup> pero no pudiendo determinar su data.

A los ocho días –y dentro de los plazos legales previstos- el sumariante eleva al juzgado el sumario completo. Pasa entonces, el Poder Judicial a tomar las *declaraciones testimoniales*. Las versiones no policiales, en sede judicial, continúan complejizándose: la madre del supuesto delincuente muerto afirma que escuchó tres tiros solamente y que los tres parecían provenir de una misma arma, resaltando que su hijo no podía correr porque tenía dos clavos en la pierna y una más corta que la otra. Otra vecina reafirma la versión de que fueron solo tres disparos, uno detrás de otro “y de un arma grande” (fjs 105) y que “lo que le llamó la atención es que no escuchó ninguna voz diciendo ‘alto policía’ o algo así” (fjs 106). Todo se complejiza aún más cuando la vecina que tenía el arma en su patio -que según lo expresado por la policía en el *acta*, los había llamado para indicarles esta situación- declara que:

“cuando estaba golpeando la puerta la policía, que estaba afuera del patio de la casa de su amiga, le dijo que había un arma tirada detrás de ella. Quiere aclarar que ella en ningún momento antes de que la policía le dijera eso la había visto” (fjs 111).

Otra vecina afirma que escuchó los tres disparos y que -contrastando la versión policial asentada en el *acta* que indicaba hostilidad de los vecinos a participar como

---

<sup>105</sup> Expresión técnica proveniente de la balística que indica la presencia de residuos de pólvora producidos por la detonación de una bala (Barrera et. al. 2010).

testigos- cuando quiso salir a ver qué pasaba, la misma policía fue la que le impedía el paso.

Ahora bien, una actitud en contrario asume el policía implicado en sede judicial. El mismo es citado para efectuar declaración indagatoria, pero en esa instancia no agrega ningún elemento a los ya existentes. Ante el nuevo escenario, la “primera verdad” igualmente es sostenida, asumiendo un modo de proceder que, como veremos más adelante, es rutinario en la policía.

Hasta este momento la fiscal no había realizado ninguna intervención en el caso, permitiendo que la investigación sea realizada exclusivamente por la policía. En su primera acción judicial, solicitaba que se determine la distancia y trayectoria del disparo, tras lo cual los peritos informaron que la bala que había impactado en el cráneo del joven había modificado su trayectoria inicial (impactando previamente en el piso) antes que ocurra este hecho por efecto del rebote.

Esta posición del fiscal en el caso posibilitó que se construyera una versión acorde a los relatos de los policías, lo cual es resaltado por el juez en su sentencia, organizando de esta manera una versión lo más sólida y consistente posible para la lógica judicial<sup>106</sup>.

Con estos elementos, unos días antes que se cumpla el año del hecho, el juez dicta la sentencia que, asumiendo el relato y la secuencia de los hechos tal cual figuran en *acta de procedimiento y parte preventivo* y sin considerar las otras versiones, estipula que:

“se presenta como evidente que el obrar del policía fue consecuencia inmediata y directa de un accionar armado, peligroso e ilegítimo de X (la víctima fatal) y de sus acompañantes, y que empleó para hacer cesar el ataque, el arma de servicio que portaba (... ) luciendo por lo demás racional el medio empleado, toda vez que respondió el injusto ataque con armas de fuego de los tres desconocidos, usando la pistola reglamentaria que portaba, la que además disparó en forma disuasoria”

Dictando por tanto el sobreseimiento definitivo del policía implicado. Es decir, desvinculando al oficial de cualquier responsabilidad penal sobre lo ocurrido. Así, a

---

<sup>106</sup> Como veremos más adelante, se le otorga mucha importancia al grado de consistencia del relato de los policías al mismo tiempo que se le dan todas las posibilidades para la elaboración de un relato coherente.

pesar de la aparición de distintas versiones, la versión policial en este caso es validada judicialmente.

En el **segundo caso**, donde son abatidos dos “delincuentes” que se trasladaban en una moto, la causa se caratuló como “resistencia a la autoridad calificada, seguida de muertes y lesiones graves”. Las primeras declaraciones, igual que en el caso I, se realizaron en sede policial. Allí declaró el primer herido que había cruzado el móvil, un vecino que afirmó haber visto el intercambio de disparos entre los que se trasladaban en la moto y los miembros del Comando. Como hecho destacable, las declaraciones de los policías ratificaron en su totalidad, al igual que en el caso I, lo expuesto en el *acta de procedimiento*, es decir que en ninguno de los dos casos se quiebra ese “fuerte corporativismo policial”, cuyos límites observa Eilbaum analizando las prácticas de investigación y producción de pruebas en la policía de la provincia de Buenos Aires (Eilbaum, 2009). Lo mismo sucede en sede judicial, donde todos los policías vuelven a ratificar su declaración. Estas primeras versiones elaboradas en forma posterior a los hechos son generalmente mantenidas por los funcionarios policiales implicados una vez en sede judicial, ratificando lo expuesto en el *acta* cada vez que son citados a declarar (siendo ahora legitimados además judicialmente, como ocurre en los casos I y II), excepto un eventual quiebre en el entramado de relaciones que sustenta esta construcción (Eilbaum, 2009), cosa que en ninguno de los casos propuestos para el análisis ocurre.

En general todo el procedimiento judicial tiende a la legitimación del *acta* sobre la base de las ratificaciones de lo actuado que hacen los policías en sede judicial. De acuerdo a los relatos de policías relevados a lo largo de nuestro trabajo de campo, estas ratificaciones son vistas como un mero trámite de la rutina de trabajo:

*“no, por ahí te llaman, en el juzgado para lo único que te llaman es para rati, eh, ratificar ‘acta’, para ver si la firma esa que está en el ‘acta’ es tuya, para otra cosa no, no te molestan...”* (E. n° 18).

*“no porque se supone que lo que vos pusiste en el ‘acta’ es todo lo que pasó, me entendés, tratan de no preguntarte porque aparte si vos vas decís ‘no... eso es lo que pasó’, no hay más nada para decir, porque vos a lo mejor quisiste aclarar y oscurecés un montón, me entendés...”* (E. n° 22).



*“el ‘acta’ con los ladrones, igual casi siempre que quedan presos, siempre, casi siempre te llaman a rectificar el ‘acta’, una ‘declaración testimonial’ que dice ‘sí me ratifico’, ‘me ratifico de lo que dice acta de procedimiento número tanto, fecha tanto, y que la firma que figura al pie de la misma es la mía...’” (E. n° 23).*

Cumplida la rutina administrativa para los policías, en este caso la investigación -a diferencia de lo que ocurrió en el caso I- siguió un curso lineal, sin aparecer voces disonantes que cuestionen la versión presentada por la policía. Luego de las pericias técnicas a las armas de los policías y de informes correspondientes a posibles grados de alcoholización, dos meses y medio después de acontecido el hecho, el juez resuelve que respecto “al procedimiento policial no se observa motivo alguno que imponga proseguir con las actuaciones, toda vez que surge que ha habido un enfrentamiento con personas armadas, resultando coherentes los relatos policiales (habiendo personal herido de consideración) y habiendo sido corroborados por los efectuados por los particulares tanto en sede policial como judicial”, archivando, así, la causa respecto de las actuaciones del personal policial (fjs 197).

Por su parte, en el **tercer caso**, al igual que en los dos anteriores, la primera clasificación penal del hecho se realizó con base en la acusación de los jóvenes muertos y la supuesta inocencia de la policía. Así, la primera carátula consideraba como acusado al joven tendido en el baldío, bajo el delito de “resistencia a la autoridad seguida de muerte e intento de robo calificado”. El juez a cargo de la investigación, avanzó sobre la causa siempre basándose en la investigación policial previa. Tomó declaración como testigos al vecino que había activado la alarma, a dos personas que se encontraban en el baldío y a otra vecina del barrio. También fueron escuchados los relatos del padre y la abuela del joven y de un amigo que se encontraba esa noche con él. Sin embargo, los datos aportados por ellos cuestionando el acta policial no fueron investigados por el juez en cuestión (Barrera et. al, 2010).

A su vez, tanto el fiscal como el abogado de la familia del joven pidieron que se indagara a los policías responsables del operativo y que se realizara la reconstrucción del hecho, pero el juez no consideró que ello fuese pertinente para esclarecer lo ocurrido. De hecho, cada una de las medidas solicitadas por ellos fueron rechazadas en forma sistemática por el juez.

De este modo, casi un año después de la muerte del joven, se dictó sentencia sin siquiera interrogar al policía, considerando que los elementos relevados en la causa no eran suficientes para llamarlo a declarar ni, mucho menos, para considerarlo responsable de lo ocurrido.

Tres días después de esta decisión, el fiscal y el abogado de la familia del joven apelaron la resolución judicial y la Cámara de Apelaciones terminó indicando al juez de primera instancia que debía investigar el caso con mayor rigurosidad. Éste argumentó que ya había investigado todo lo que se tenía que investigar, ante lo cual sus superiores decidieron derivar el caso a otro juzgado (Barrera, et. al, 2010).

En este punto es dónde la investigación judicial toma un rumbo diferente. Ante este cambio de orientación, la pregunta de investigación que surgía era ¿cuáles fueron las condiciones para que el devenir rutinario de un caso de violencia policial más tome un rumbo que podríamos definir al menos como “no burocrático”? Una característica distintiva del tercer caso y que, en nuestro trabajo de campo le fuimos otorgando un alto valor explicativo en ese sentido, tenía que ver con la irrupción de familiares y amigos en la escena pública reclamando por el reconocimiento pleno de la ciudadanía para la víctima. Sobre la base de esa hipótesis, analizaremos lo ocurrido en el tercer caso en el próximo capítulo.

## Capítulo VI. Los familiares y la lucha por el reconocimiento de la ciudadanía.

### El conflicto

Preguntarnos acerca del problema de la ciudadanía en el marco de las prácticas policiales siguiendo un enfoque relacional contemplaba una arista que, más allá de la diversidad de vínculos cotidianos establecidos entre policías y ciudadanos, situaba la discusión en el terreno del “conflicto”. El acento puesto en el “conflicto” retoma, de algún modo y en otro nivel de análisis, la distinción que establecía Eric Wolf entre “teorías del orden” y “teorías del conflicto”<sup>107</sup>, distinción posible de rastrear a lo largo de todo el siglo XIX a partir del desarrollo del positivismo y el marxismo.

Así, en tanto modo de pensar la realidad social no en términos de armónica integración social sino asentada sobre una lógica conflictual, fue que fueron apareciendo en nuestra investigación también “los otros”, quienes cuestionaban este orden aparente de cosas. Aparición de la cual daremos cuenta en este último capítulo en tanto –según entendemos– representa uno de los principales elementos explicativos de un devenir judicial “no lineal” o “no rutinario” en causas relacionadas con hechos de violencia policial.

Con esta irrupción quedaba claro que la policía, la prensa y los tribunales – las tres instancias en las que analizamos anteriormente las repercusiones que tienen los casos en los que la policía usa la fuerza en forma letal– no eran entidades que podían ser pensadas en forma aislada de la sociedad. Dicha perspectiva había sido ya planteada desde nuestras primeras consideraciones teóricas, cuando afirmábamos que tanto el derecho como el poder judicial –al igual que la formación estatal en su totalidad– se nos mostraban atravesados por contradicciones y conflictos sociales y que sus mismas dinámicas no eran lineales ni autónomas. En ese sentido, nos encontrábamos, en esta nueva etapa del trabajo de campo, con que sus propias

---

<sup>107</sup> Por ejemplo, el jurista argentino Alberto Binder (2009) plantea esta distinción para pensar el gobierno de la seguridad y la plantea como un debate entre paradigmas diferentes. Así, distingue entre la idea de orden que funda una determinada comprensión del fenómeno criminal y se termina expresando en políticas de orden y conceptos como “orden interior”, “orden público”, de las que parten del paradigma de gestión de la conflictividad. Estas últimas forman parte de una teoría general de la sociedad en donde el conflicto no es visto como una anomalía sino como una característica universal presente en cualquier sociedad.

resoluciones –y en última instancia su misma orientación- se convertían ahora en objeto de disputa para distintos actores. La resolución judicial que se le daba al hecho violento estaba expresando, en última instancia, la disputa que se había originado entre todos aquellos que se vieron involucrados en su definición, disputa que en el caso III se volvía explícita a partir de la aparición, tanto pública como judicial, de los familiares de la víctima, mientras que en los dos primeros apenas llegaba a manifestarse en algunas declaraciones judiciales aisladas, tal como pudimos observarlo más arriba.

### Derivaciones judiciales diferenciales

Como ya expusimos en el capítulo anterior, los dos primeros casos tuvieron una resolución burocrática, rutinaria, naturalizadora del accionar policial y legitimadora de su versión de los hechos. Leyendo sus sentencias, encontramos que, en ellos, la palabra del juez aparece inapelable:

“Se presenta entonces evidente que **el obrar del policía fue en consecuencia inmediata y directa de un accionar armado, peligroso e ilegítimo**”

“luciendo por lo demás **racional el medio empleado**, toda vez que respondió el injusto ataque con armas de fuego de los tres desconocidos, usando la pistola reglamentaria que portaba, la que además disparó en forma disuasoria”.

“obra plenamente acreditado que el intercambio de disparos se produjo en un solo acto, que obran íntimamente vinculados entre sí por ser unos consecuencia de otros y que el accionar del encartado estuvo únicamente orientado a evitar que los agresores continuaran efectuando disparos contra su persona, **luciendo racional el medio empleado para repeler una agresión armada claramente injusta**, empleando para ello el arma y las municiones reglamentarias y provistas por la repartición para tales casos”.

El discurso judicial no deja lugar a dudas: el obrar de los policías fue “legítimo” y “racional”. El mismo tipo de certezas se planteaban en el caso III hasta que comenzó a ser investigado en un segundo juzgado de instrucción, como ya se adelantó previamente.

Cuando repasamos qué elementos distinguen a cada uno de los casos, nos encontramos con que éste último, ya en esas primeras instancias, tuvo como rasgo saliente el seguimiento continuo de los familiares en la investigación judicial. Así fue que desde que el tercer caso llega a tribunales, sus familiares se constituyeron como “actores civiles” en la causa con el objetivo de poder acceder al expediente y conocer qué medidas judiciales se estaban realizando<sup>108</sup>. Además, si bien hasta ese momento la posibilidad de participación de la víctima en el Código de Procedimiento Penal de Santa Fe era casi o directamente nula, éste grupo de familiares utilizó diferentes estrategias de visibilización tanto al interior de los Tribunales como en las calles de la ciudad que fueron posibilitando su reconocimiento como tales por los funcionarios judiciales (Fernández y Patallo, 2008).

De hecho, durante todo el transcurso de la investigación judicial realizaron numerosas marchas, actos públicos, se contactaron con funcionarios del gobierno municipal, provincial y nacional, colocaron una carpa blanca en frente a Tribunales para exigir ser recibidos por el juez de la causa y se acercaron permanentemente a la mesa de entradas del juzgado solicitando información sobre el curso de la investigación; estrategias sobre las que volveremos en los siguientes apartados.

Significativamente -a diferencia de los primeros dos casos analizados- el segundo juez a cargo de la investigación cuestiona la versión policial para luego modificar radicalmente el curso de la misma tomando como víctima al joven y como acusado al policía. La figura jurídica de la “legítima defensa” se reconfiguró de ese modo en la de “homicidio”. El supuesto “delincuente agresor” que en un primer momento era investigado ya sea por robo o resistencia a la autoridad, es ahora calificado como “víctima de homicidio”. En ese marco, éste último juez investigó en profundidad lo sucedido, indagó al policía, ordenó la reconstrucción del hecho y, finalmente, procesó al policía que había disparado (Barrera et. al., 2010). Ese mes, el cartel que anunciada la marcha numero 20 realizada por los familiares rezaba: “En 66

---

<sup>108</sup> Recordemos que en el procedimiento penal vigente en ese momento en la Provincia de Santa Fe, de cuño fuertemente inquisitorial –el que actualmente está siendo sustituido por un procedimiento en el cual se incluye el juicio oral- el proceso representaba una suma de pasos, cuya etapa central era el sumario escrito y secreto, siendo lo característico de este sistema que durante el proceso no se incorpore a la víctima.

días el Dr. J (segundo juez) investigó, en 452 días, C (primer juez) no lo hizo” (Fernández y Patallo, 2008). Con ello, la linealidad burocrática y rutinaria que marcaba la investigación de la gran mayoría de los casos de violencia policial, se vio alterada. La víctima pasó así a tener un nombre y la versión policial a convertirse en una versión más entre otras.

Este cambio radical está expresando claramente trayectorias judiciales diferenciales. En los dos primeros casos, donde las víctimas respondían claramente a la imagen de lo que en el mundo policial/judicial es un “delincuente” -en tanto poseían antecedentes penales además de ser jóvenes y habitantes de barrios pobres de la ciudad- y en donde sus familiares no consiguieron, aún por fuera del ámbito judicial, “perforar” la versión policial, la investigación se orientó claramente a la ratificación de la versión inicial dada por la policía. De manera inversa, en el tercer caso, donde -teniendo o no características que respondían al estereotipo del “delincuente”- la familia de la víctima logra trazar relaciones sociales que problematizan el accionar de la policía, se produce un rompimiento de la lógica que estructura las investigaciones judiciales, que ya no se orienta hacia una ratificación o naturalización de la versión policial, sino que se ve obligada a contrastar la misma con la aparición de nuevos actores, testigos, peritos, etc., que en los otros casos directamente no aparecen<sup>109</sup>.

Distintas investigaciones han abonado al enfoque que estamos asumiendo aquí. Particularmente los informes de organismos de derechos humanos, principalmente del CELS, advierten la relevancia que tiene la presencia activa de familiares y víctimas en los procesos judiciales a partir de que muchas veces la actuación judicial resulta obstructiva a la investigación y por ende funcional a las versiones policiales. En la misma línea se inscriben planteos provenientes del campo académico. Tal es el caso de la investigación desarrollada por Sofía Tiscornia (2008) en torno a la muerte de Walter Bulacio. En dicho texto la autora, examina los complejos

---

<sup>109</sup> Algunos autores han intentado interpretar estas resoluciones diferenciales a partir de su condición de clase. Por ejemplo, Mercedes Calzado y Nicolás Maggio (2009) toman en consideración la pertenencia “por lo menos” a la clase media como condición para una investigación rigurosa. En este trabajo consideramos que, en lugar de la clase como determinante, importan más las posibilidades de tejer relaciones sociales que tienen sus familiares, lo cual puede estar delimitado por la condición de clase, pero no necesariamente.

caminos que un caso judicial puede atravesar, sobre todo cuando en él se están discutiendo los *umbrales* del poder violento de la policía. Su enfoque trasciende el análisis normativo y toma en consideración también los movimientos sociales que cuestionan la articulación entre la policía y el Poder Judicial. Se trata de movimientos sociales que se constituyen como un actor político y que hacen visible ese poder, con lo cual la mera discusión jurídica pasa a desdibujarse y el conflicto es planteado en otro nivel. De este modo, la autora da forma a la tesis de su trabajo que plantea que en determinadas circunstancias histórico políticas el activismo en derechos humanos tiene posibilidades de limitar el poder de policía a través de estrategias tanto políticas como jurídicas. Profundizando el análisis de este tipo de intervenciones en los llamados casos de *gatillo fácil*, María Pita (2010) ha estudiado cómo las acciones colectivas de los familiares se constituyen en formas particulares de intervención política, trascendiendo así la esfera judicial. En el contexto local, Fernández y Patallo (2009, 2008) aborda el proceso de demanda de justicia de familiares de víctimas de violencia policial, analizando particularmente cómo las prácticas de los familiares del joven Carlos Gauna y la relación de éstas con la investigación policial/judicial, incidieron en la construcción de la verdad judicial. A partir del trabajo de campo realizado da cuenta de cómo a lo largo de la investigación judicial las diferentes estrategias adoptadas por familiares en el espacio público, la construcción de una red de relaciones con organizaciones sociales y políticas, hicieron posible instalar su propia versión de lo ocurrido.

En línea con los resultados proporcionados por estas investigaciones, podríamos decir que la nueva configuración de relaciones sociales promovida por los familiares en el tercer caso, va construyendo un escenario donde el accionar de los jueces se ve interpelado. Los familiares, a partir de la utilización de diferentes estrategias (marchas, actos públicos, presencia en tribunales), se vuelven visibles ante los jueces, los cuales toman decisiones y realizan determinadas medidas que indican que el desarrollo de la investigación se da por canales no rutinarios, lo cual puede llegar hasta desarmar la versión policial y construir una nueva. En este tercer caso en particular, una versión en la cual se fundamenta que el policía disparó a un joven desarmado y que por lo tanto no existió ningún tipo de enfrentamiento. Así lo relataba

la madre de la víctima durante una entrevista realizada en el marco de nuestro trabajo de campo:

*“Eh.... yo creo que, que, que sirvió en, en los dos, en los otros casos que también, donde vos notás que también hubo investigación, que el haber hecho actos, marchas, ir a golpear puertas, ir a gobernación, pedir audiencia con, con los fiscales, los camaristas, con la Corte Suprema. **Todo eso hizo que el expediente realmente se moviera** y bueno, y quien tomara el caso, eh... hiciera medidas como para investigar la verdad. Por eso de alguna manera, sí, estoy de acuerdo en que se hizo presión. Ahora, que presionamos directamente a los jueces no. Yo creo que la presión fue para que investiguen. No, no, no pedíamos tampoco un fallo a favor. Se dio porque **se supo la verdad** y nada más” (E. n° 3).*

En este tercer caso, logra imponerse –después de “actos”, “marchas”, “golpear puertas”- una versión en la cual se fundamenta que el policía disparó a un joven desarmado y que por lo tanto no existió ningún tipo de “enfrentamiento”, lo que en la perspectiva de la madre representa “la verdad”, una “nueva verdad” al menos distinta de la que originalmente ofrecía la policía. No obstante, ello no implica inferir una nueva orientación en el Poder Judicial (lo cual queda evidenciado por el simple hecho de que los casos que analizamos son contemporáneos entre sí) pero sí puede implicar distintas resoluciones para casos particulares a partir de un nuevo elemento: la aparición de los familiares, que luchan por el reconocimiento de la ciudadanía de las víctimas, como un actor visible del proceso.

### La ciudadanía

Los casos que se propusieron para el análisis partieron en su totalidad de tareas claramente estipuladas y reglamentadas por el ordenamiento jurídico (Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe y Ley Orgánica de Policía), el cual indica claramente cómo actuar ante situaciones de este tipo (ver capítulo IV). Sin embargo, en su desarrollo, fueron traspasando de diferentes maneras y reiteradamente la débil frontera entre lo legal y lo ilegal, saliéndose de las reglas del derecho que las *organizan y delimitan*. Así, en el primero de los casos se hace uso del arma contra un ciudadano que estaría desarmado, en el segundo se usa la fuerza letal para terminar una persecución, mientras que el tercero de los casos estudiados comienza con la



activación de una alarma de pánico por parte de un vecino, pero inmediatamente se suceden notorias irregularidades, como por ejemplo, el uso del arma de fuego por parte del funcionario policial sin dar la *voz de alto* previamente, la fabricación de pruebas, etc. La recurrencia de este tipo de prácticas fundamenta el hecho de que podamos hablar de un **derecho de policía** (Benjamin, 1996) que tiene como fuente no solo a la normativa sino también rutinas, valores, representaciones y modos estandarizados de actuación policial que orientan las formas que debe asumir un procedimiento: la *picardía policial*, el *caminar bien derecho* sin bandearse exageradamente hacia legalismos o ilegalismos absolutos, el *olfato policial*, entre otros.

Los efectos del ejercicio de este derecho de policía, así como su ambigüedad, pueden observarse en el hecho de que cuando los familiares se deciden a reclamar<sup>110</sup>, tal como ocurrió en el tercero de los casos analizados, su reclamo se relacione directamente con un reconocimiento de su ciudadanía. Los momentos en que lo hacen son momentos precisos que responden a circunstancias activadas por hechos particulares. En este sentido traigo valoraciones de una de las madres entrevistadas que relata este proceso:

*“Mi primera reacción fue estar firme. Yo cuando dejo a mi hijo en el cementerio y llego a mi casa... eh.... me desperté y dije ‘no, yo tengo que hacer algo, a mí no me pueden venir a arrebatar un hijo así porque sí y quedar en... en la nada’. Y es ahí cuando empiezo... a la semana hago la primera marcha a... a Jefatura” (E. n° 1).*

“Yo tengo que hacer algo, a mí no me pueden venir a arrebatar un hijo así porque sí y quedar en... en la nada”. Una percepción, un saber que supone que hay determinados hechos que no pueden ocurrir porque sí, arbitrarios, sin sentido, aparece con contundencia en el relato de la madre que acaba de perder a su hijo. Un sentido que reconoce la portación de determinados derechos y que, más allá de su aparente espontaneidad, constituye un concepto de gran profundidad histórica

---

<sup>110</sup> El análisis de las formas de construcción y resignificación de la ciudadanía se hace en torno al tercer caso, tomando también otros ejemplos (entrevistas) proporcionados por familiares que conforman la agrupación Padres del Dolor.

relacionado, ya sea directa o indirectamente, con el desarrollo de la noción de ciudadanía.

Ahora bien, no obstante la densidad histórica de este concepto, es en las últimas décadas cuando se ha revitalizado su apelación a partir de los impactos recesivos que han tenido sobre todo las políticas neoliberales y los programas de ajuste sobre las condiciones de ciudadanía en amplios sectores de la sociedad argentina.

Si bien las alusiones más inmediatas remiten al estatus jurídico y a la pertenencia a una comunidad política (a derechos y obligaciones proyectados como “universales”), relatos como el que reproducimos presuponen una noción de ciudadanía en tanto experiencia multidimensional que involucra, además de las dimensiones señaladas, un conjunto amplio de identificaciones, acciones e ideas que se construyen en la vida cotidiana y que posicionan a los sujetos sociales frente a sí mismos, frente a otros y de cara al Estado (Bloj, 2008): “no, yo tengo que hacer algo”, “no me pueden arrebatar a un hijo porque sí”, “a la semana hago la primera marcha”.

En este sentido, en sociedades complejas y diversificadas como la argentina, donde los principios de igualdad ante la ley conviven con relaciones fuertemente jerarquizadas<sup>111</sup>, las prácticas de ciudadanía en tanto conjunto de identificaciones, acciones y representaciones, expresan procesos de disputa en torno a su misma definición y sus diferentes modos de legitimación.

En nuestro caso, las múltiples significaciones que expresan las distintas apelaciones a la ciudadanía surgen de un campo de estudio delimitado por la emergencia de prácticas policiales violentas que culminan con la muerte de la víctima. En el mismo, se manifiestan las tensiones propias de un escenario donde nos encontramos con modos estandarizados del accionar policial que fundamentan la utilización de la fuerza en forma discrecional negando condiciones de ciudadanía para poblaciones territorialmente localizadas, al mismo tiempo que con el surgimiento de sujetos, movimientos y organizaciones que reclaman justicia ante este tipo de hechos,

---

<sup>111</sup> Ver Da Matta (1979) y O’ Donnell (1997).

en tanto experiencias articuladas alrededor de la búsqueda de construcción de ciudadanía y que se van conformando como tales en un largo proceso de aprendizaje. Así lo refleja una de las madres en una entrevista realizada para una publicación de una organización no gubernamental: *“para llegar a algo tuvimos que caminar mucho, en estos dos años, **aprendimos que tenemos nuestros derechos**. Aprendimos a ponernos firmes”*<sup>112</sup>.

A partir de esta última cita podemos observar que el concepto y las condiciones de ciudadanía no constituyen una propiedad o un estatus definido, tratan en todo caso de un proceso, una construcción y un aprendizaje. En tanto proceso y construcción, la ciudadanía ha sido objeto de diferentes reflexiones de las cuales el campo de las ciencias sociales no ha sido ajeno. No obstante, pensar esta problemática desde la antropología en particular presenta dificultades específicas ya que se trata de un campo que no forma parte del objeto de estudio tradicional de nuestra disciplina. La ciudadanía:

“en tanto categoría intrínsecamente ligada a la constitución del Estado moderno es posible agruparla junto con otras macro-categorías que han caído fuera de los intereses clásicos de la disciplina (las sociedades “sin estado”); también por la escala que excedería las posibilidades metodológicas. Los primeros acercamientos explícitos se producen luego de la Segunda Guerra Mundial y alrededor de cuestiones como la identidad nacional, la nación y nacionalismos; fenómenos que habían sido desplazados hasta ese momento por sus evocaciones al fascismo” (Bloj 2008: 34).

Entre las formas en que históricamente fue pensada la ciudadanía resulta ineludible la referencia a la tipología elaborada por T. H. Marshall. En “Ciudadanía y Clase Social” (2004), preocupado fundamentalmente por los contenidos de los derechos ciudadanos y su expansión histórica (Jelin 2003), Marshall establece una división de la ciudadanía en tres partes: la civil, la política y la social. Los componentes civiles estarían conformados por los derechos necesarios para la libertad individual de las personas, la libertad de palabra, pensamiento y credo, el derecho a la propiedad y a la justicia. Los elementos que componen la ciudadanía política estarían representados por el derecho a participar en el ejercicio del poder político, en tanto miembro de un organismo dotado de autoridad política o como elector de sus

---

<sup>112</sup> Enredando.org, con fecha del 29/07/05. Consultado el 13/09/2009.

miembros. Mientras que dentro de los componentes sociales de la ciudadanía, Marshall incluye toda la variedad contenida en el espectro que va desde el derecho a una medida de seguridad y bienestar económico hasta el derecho a compartir la herencia social. Marshall encuentra una relación evolutiva y cronológica entre los tres que, aunque flexible, se expresaría, siguiendo el modelo inglés, en el desarrollo de los derechos civiles en el SXVIII, los políticos en el SXIX y los sociales en el XX.

Esta clasificación dio lugar a pensar los derechos humanos en términos de derechos de primera, segunda y tercera generación. Los derechos civiles y políticos, consagrados en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, representarían los derechos humanos de primera generación y estarían destinados a la protección del ser humano individualmente considerado contra cualquier agresión del Estado. Por su parte, los derechos económicos, sociales y culturales, que refieren al derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la protección y asistencia de niños, niñas y adolescentes, a la familia y a la vivienda, requiriendo de la actuación del Estado garantizando que todos puedan tener acceso a estos derechos, representarían los derechos humanos de segunda generación. Y por último, a estas dos generaciones de derechos, ya previstas en la clasificación de Marshall, se agregaría una tercera que refiere a los derechos de los pueblos: derecho al desarrollo, a la libre determinación, al medio ambiente, a la paz (Di Marco et. al. 2005).

Ya ha sido suficientemente cuestionada -desde una perspectiva latinoamericana que denuncia el eurocentrismo del modelo social de Marshall- la linealidad de esta progresión, fundamentalmente a partir de encontrarnos con situaciones y procesos históricos donde estos campos se entrecruzan. Entre estos cuestionamientos, se destaca el trabajo de Elizabeth Jelin (1996, 2003) quien ha demostrado, por ejemplo, cómo en el contexto latinoamericano del siglo XX la expansión de derechos sociales no siempre fue acompañada por una expansión de los derechos civiles y políticos, y mucho menos fue su consecuencia.

La no linealidad de este desarrollo en el caso latinoamericano se termina expresando en un hecho que resulta paradójico: el reconocimiento de gran parte de estos derechos se da en un contexto de políticas neoliberales que genera

paralelamente un fuerte proceso de exclusión, el cual limita claramente los posibles alcances de la ciudadanía. En este sentido es que Manuel Garretón (2006) señala que en Latinoamérica:

“... el fenómeno de expansión de la aspiración ciudadana es cruzado y redefinido por la exclusión de vastos sectores que pueden llegar a dos tercios de una sociedad. Los tipos y formas de exclusión son muy diversos y están referidos tanto a los ámbitos clásicos de la ciudadanía, como sobre todo a los nuevos ya mencionados y que definen los modelos de modernidad” (2006: 53).

Se trata de una paradoja que, aunque irresoluble, expone la complejidad del fenómeno. La misma cristaliza en un proceso que al mismo tiempo que reconoce y amplía derechos puede también negarlos. Ahora bien, tal paradoja puede resultar fútil en el campo del que partimos para nuestro análisis, donde la letalidad en la utilización de la fuerza por parte de la policía aparenta negarla de raíz. En esos casos, los diferentes grados de desarrollo de la ciudadanía, sus logros, sus avances y sus retrocesos, se esfuman en un solo acto. Allí, lo que era un sujeto de derechos trasmuta en un objeto; en nombres que, entre los más afortunados, pasan a titular voluminosos expedientes.

No obstante lo cual, la paradoja no desaparece completamente. El mismo contexto que puede negar condiciones de ciudadanía, se constituye en una oportunidad para que aquellos que se consideran víctimas de estos procesos, vuelvan visible su posición. En este sentido es que algunos autores han resaltado que el escenario representado por el neoliberalismo ha servido también para cuestionar la idea abstracta de ciudadanía universal que considera al ciudadano como un individuo libre, sujeto de derechos y obligaciones, para dar lugar a plantear formas particulares de derechos universales como, por ejemplo, las “ciudadanías diferenciadas” (Di Marco et.al. 2005) que, partiendo de las diferencias socioculturales, enfatiza el derecho de determinados grupos poblacionales (mujeres, niños, indígenas, por ejemplo) a ser reconocidos por su propia identidad. Y si bien las prácticas de quienes cuestionan la violencia policial no pueden englobarse bajo las formas de recrear ciudadanía propia de estos “nuevos grupos identitarios”, comparten al menos una misma problematización de los principios abstractos de igualdad contenidos en la idea de ciudadanía, a la vez que propugnan, al mismo tiempo, una reconfiguración de los

sujetos que claman (“que aprenden a ponerse firmes”) por sus condiciones de ciudadanía.

### La ciudadanía y los casos de “violencia policial”

“Yo cuando dejo a mi hijo en el cementerio y llego a mi casa... eh.... me desperté y dije ‘no, yo tengo que hacer algo, a mí no me pueden venir a arrebatarse un hijo así porque sí y quedar en... en la nada’”. Las formas de construcción de ciudadanía que estamos analizando emergen todas de una ruptura. Un corte abrupto en una cadena de situaciones cotidianas propias de la actividad policial. Un momento puntual en el que el arma reglamentaria es disparada y asesina a un *civil*, un *delincuente* para la policía, un *ciudadano* como intentarían demostrar sus familiares y amigos. Se trata – como dijimos- de una disputa de sentido que esconde detrás un ciclo que se abre no en el acto de empuñar el arma, no en la decisión brutal de utilización de la fuerza, sino en un cúmulo de prácticas rutinizadas, de valores y representaciones naturalizados, de formas de sentir y vivir el ser policía que se expresan, transitan, se contradicen, se niegan, en el marco de las prácticas policiales. Una ruptura que sintetiza, reactualiza y exterioriza a las prácticas policiales violentas en tanto procesos de negación de la ciudadanía.

El contexto de uso discrecional de la fuerza, en forma conjunta con la focalización de la violencia sobre los grupos poblacionales que habitan las zonas consideradas críticas que ella implica, constituyen elementos que problematizan la concepciones tradicionales de ciudadanía, sobre todo la propia de la tradición liberal<sup>113</sup> que la entiende ajena a atravesamientos sociales y culturales.

En esta línea, Roberto Kant de Lima (2004) cuestiona estas nociones de ciudadanía al pensar las prácticas policiales violentas no como autoritarias sino como

---

<sup>113</sup> Si bien es indudable que el liberalismo “contribuyó a la formulación de la idea de una ciudadanía universal basada en la afirmación de que todos los individuos son libres e iguales por nacimiento, también es indudable que redujo la ciudadanía a un mero estatus legal que establece los derechos que el individuo tiene frente al Estado” (Mouffe 1999: 92). Igualmente, la focalización de los usos de la fuerza por parte de la policía sobre determinadas poblaciones problematiza inclusive los limitados alcances de esta definición, evidenciando la formalidad de dicho estatus para ciertos sectores ciudadanos.

jerárquicas, por tratarse de prácticas que obedecen a preceptos de sociedades que ya están estructuradas desigualmente. En igual sentido, Evelina Dagnino (2004) habla de “autoritarismo social” para referirse a una matriz cultural vigente en Brasil (y en la mayoría de los países latinoamericanos) que preside la organización jerárquica de las relaciones sociales tanto en el ámbito público como en el privado. Dicha matriz se basa en diferencias de clase, raza y género, estableciendo categorías de personas jerárquicamente dispuestas en sus respectivos “lugares sociales”.

Por estas razones no puede resultar extraño que gran parte del reclamo de los familiares de las víctimas de violencia policial busque resaltar su condición de ciudadano en tanto estrategia que denuncia el peso de las diferencias sociales en el uso de la fuerza por parte de la policía. De aquí que nos interesó observar con detenimiento cuáles fueron las principales manifestaciones de este posicionamiento, sus alcances, su contenido y qué noción de ciudadanía nos estaban planteando en ese sentido.

“Para llegar a algo tuvimos que caminar mucho, en estos dos años, aprendimos que tenemos nuestros derechos. Aprendimos a ponernos firmes”. La ciudadanía implica para estos movimientos, en primer lugar, un posicionamiento, una trayectoria, un devenir. Un proceso de construcción que se desarrolla más allá de las condiciones en que surge. En nuestra experiencia de campo observamos –hecho que nos ocupará esta última parte de la tesis- cómo este contexto de uso discrecional de la fuerza y empobrecimiento de derechos, no representa un obstáculo para la emergencia de colectivos que, articulados alrededor de demandas por “justicia” y “esclarecimiento de los hechos” plantean, con un sentido performativo, prácticas novedosas que resignifican las formas de ejercicio de la ciudadanía.

En ese marco, como intentaremos demostrar, la noción de ciudadanía se nos va a aparecer reformulada a partir de una reconceptualización de la posición social de la víctima asociada a su propia condición de ciudadano, en lo que Elizabeth Jelin (1996) denominaría como un proceso de construcción de “ciudadanía desde abajo”. Procesos de construcción de ciudadanía que contemplan las maneras en que quienes son definidos formalmente como ciudadanos llevan adelante las prácticas que

corresponden a dicha condición, intentando superar la brecha existente entre la formalidad de la ley y la realidad de su aplicación.

En los primeros acercamientos a este campo ya nos topamos con la constitución de los familiares de las víctimas como un sujeto que pretende defender sus propios derechos a partir de conformarse como actor social del proceso. La cristalización más acabada de este proceso se dio con la constitución de la ONG “Padres del Dolor”<sup>114</sup>. Esta agrupación, conformada sobre finales del año 2003, nuclea principalmente a familiares de víctimas de violencia policial<sup>115</sup> de la zona del Gran Rosario.

Entrevistar a este grupo de madres implicaba un recorrido simbólico de difícil tránsito. Si antes observábamos la compleja situación que representaba entrevistar a policías armados (portación de arma mediante que desestructuraba de algún modo las relaciones de poder tal como fueron pensadas clásicamente en la entrevista etnográfica), ahora nos sumergíamos en un territorio donde los familiares -en espacios cargados de símbolos que recuerdan a sus parientes víctimas de la violencia policial- también nos estaban enfrentando a una relación de poder o a una relación tensa aunque, ya no con el arma, sino a través de otro tipo de signos ¿qué hacemos con nuestros estudios? ¿a dónde van estas palabras? ¿para qué sirven? Los retratos, afiches, recuerdos de infancia, nos interpelaban en igual sentido. Subir al colectivo, transitar hacia zonas periféricas de la ciudad, se convertía en un tránsito al mundo simbólico en el que la víctima pasa a tener un rostro. Las entrevistas estaban marcadas por esa tensión, por el reparo de saber que los objetivos de la investigación eran meramente académicos, con nulo impacto en el avance de las causas, pero que aún así, con la angustia entre dientes, este grupo de madres mostraba toda su predisposición al diálogo y a la realización del trabajo de campo.

Desde un comienzo, esta agrupación conformada por familiares sin ninguna experiencia previa en el campo de la lucha por los derechos humanos, inscribe sus

---

<sup>114</sup> Para una historización más detallada del proceso de conformación de esta agrupación, ver Fernández y Patallo, 2008.

<sup>115</sup> Se trata de los casos comúnmente conocidos como *gatillo fácil*. Los mismos representan solo una parte de los casos relevados en nuestro registro, comprendiendo solamente las ejecuciones extrajudiciales o sumarias en las que están involucrados policías en actividad.



reivindicaciones en una continuidad histórica que la liga con el movimiento de derechos humanos que surge a partir de la última dictadura militar. Así lo reflejaba una de las madres entrevistadas:

*“Ojalá dios quiera que todo esto que, que pasó con nuestros hijos sirva para el futuro para que se vayan cambiando algunas cosas. **Y las Madres de Plaza de Mayo tuvieron que pasar treinta años para que las escucharan**, para que... bueno, hoy por hoy, encontraran algunos nietos y supieran donde ir a prenderle una velita a sus hijos. **Treinta años sufriendo y nosotros bueno... creo que también va a ser... pero al final creo que se ve la lucecita**” (E. n° 1)*

La identificación con las “madres de plaza de mayo” implica -además de mostrar lazos con respecto al movimiento de derechos humanos- un primer reconocimiento: no se trata de un hecho aislado que requiere de una resolución jurídica acorde, sino de una problemática con continuidad histórica que atravesaba a muchas otras madres por igual:

*“Y en la primera semana, cuando fue el primer jueves que se cumplió la fecha, hicimos una primera marcha. Ahí conocí a Gladis y después ya me integré al, al, al grupito que en ese momento se estaba formando y bueno, después nos hicimos, lamentablemente, **después se fueron sumando, sumando, sumando**. Cuando nos quisimos dar cuenta teníamos... no sé... más de, de cien casos, digamos, de alrededores, muchísimos” (E. n° 1)*

Desde un primer momento, tal como se desprende de este fragmento de entrevista, la conformación de la agrupación se situó en un lugar desde el que se buscaba articular los casos particulares con estrategias de protestas que los trascendían:

*“Ojalá dios quiera que todo esto que, que pasó con nuestros hijos sirva para el futuro para que se vayan cambiando algunas cosas” (E. n° 5).*

Así fue que a través de “marchas” y “sumando casos”, la trayectoria de la agrupación se fue haciendo cada vez más visible llegando incluso a instalar durante semanas una carpa frente a los Tribunales Provinciales de esta ciudad en reclamo de “justicia”. Con posterioridad, la agrupación incorporará a familiares de víctimas de violencia no institucional, lo cual terminará generando tensiones en su seno.

*“Cuando nos quisimos dar cuenta teníamos... no sé... más de, de cien casos, digamos, de alrededores, muchísimos. De todo tipo de violencia, no solo de*

*policías. Pero bueno, la agrupación en ese momento a toda, toda madre que estuviera en la pelea, se unía a la agrupación nuestra” (E. n° 1)*

Todas eran madres, todas tenían un hijo muerto, pero las condiciones que estructuraban esa situación eran percibidas como diametralmente diferentes. La ruptura que ello implicó terminó por delinear un carácter definido a la agrupación:

*“Después eso se fue dividiendo, **se fue dividiendo, bueno, por el tema de que se le daba un poco más de, de difusión a los “gatillo fácil”** ¿viste? y a los que eran más resonantes, y bueno... y eso por ahí... y algunas mamás que no soportaron la presión. Después se fue decayendo, pero bueno, las que quedamos seguimos peleando, seguimos de pie, hasta el día de hoy en que la agrupación sigue operando. Más a... más quieta pero sigue operando” (E. n° 2).*

Así, en la actualidad, la agrupación pervive y lo hace con un marcado carácter local. Este carácter fue sostenido por sus miembros a pesar – de acuerdo al relato de una de sus referentes entrevistada en los registros n° 1 y n° 4- de los distintos intentos de regionalizar su organización, ya sea a través de organismos estatales provinciales y nacionales o de otros movimientos sociales afines en la problemática pero de carácter nacional, que buscaban redefinir las formas de su acción colectiva.

Los enfoques clásicos elaborados alrededor de la “teoría de la acción colectiva” han procurado brindar distintas explicaciones en torno a los fundamentos (o los elementos fundantes) de las formas de la acción colectiva: Charles Tilly (2000), por ejemplo, se concentró en los procesos políticos particulares, las motivaciones individuales, las oportunidades, los intereses y el repertorio propio de los actos de protesta, mientras que Sidney Tarrow (1997) puso el foco sobre las oportunidades políticas que se le presentan a colectivos que comparten objetivos comunes. En dichos enfoques, siguiendo en esto a Virginia Manzano,

*“el desarrollo de una mirada exclusivamente centrada en la acción no introdujo al actor sino que produjo la escisión de la acción respecto de los actores y de sus contextos históricos y cotidianos de vida” (2007: 13).*

Por el contrario, lo que nuestro análisis de casos busca poner en evidencia, al recuperar el contexto cotidiano de vida asociado a la constitución de los actores - donde son agrupados principalmente padres y madres- son las formas de legitimidad puestas en juego a partir de que el reclamo se funda en lazos de sangre. La centralidad

que asume la categoría de familiar y los vínculos de parentesco en este tipo de movimientos ya ha sido señalada por Pita (2010) y Fernández y Patallo (2008) y se repetía en nuestros registros: el “a mi no me pueden arrebatarse a mi hijo así porque sí” reforzaba el vínculo madre e hijo y le brindaba un marco de legitimidad al reclamo. Asumiendo esta centralidad, pudimos observar que los familiares no reaccionaban al modo pensado por los clásicos de la teoría de la acción colectiva, respondiendo a procesos políticos, repertorios, motivaciones, intereses u oportunidades; sino que lo hacían casi como una “gens” (Morgan, 1993) o “clan” (Radcliffe-Brown, 1986) que denunciaba y hacía público que uno de sus miembros había sido vulnerado en sus derechos.

*“Mi hijo tenía tantos derechos como él, a defenderse, mi hijo tenía derechos a la justicia” (E. n° 1).*

La metáfora consistente en pensar esta reacción como propia de gentes o clanes apunta a resaltar que la forma que asume la acción colectiva se articula principalmente alrededor de la pertenencia de la víctima a una comunidad de parentesco, donde son destacados justamente los derechos que se tiene en tanto forma parte de una comunidad y se exige por esta misma razón el correspondiente reconocimiento de su ciudadanía. Así fue que las primeras apelaciones a la ciudadanía se iban cimentar sobre su núcleo de identificaciones familiares y cotidianas. En este sentido, en el relato de las madres que conformaron esta agrupación pudimos observar un claro planteo orientado a recuperar su condición de ciudadanía ligada en forma íntima con la experiencia sufrida<sup>116</sup>:

*“No era parte. No era querellante, digamos, para participar. Y ¿por qué yo tengo que hacer un juicio al estado, más allá de eso, vamos a suponer, por qué yo tengo que ser parte querellante a través de un juicio, este... eh... a la provincia, para saber y meterme en el expediente? Si yo quiero saber cómo, cómo va a pagar este desgraciado que me arrebató a mi hijo. Yo no estoy pidiendo que me den un arma e ir yo y pegarle un tiro en la cabeza. No. Yo estoy pidiendo que me digan cómo va a pagar este sujeto por lo que hizo, nada más. Yo creo que tengo, **es mi derecho como madre y como ciudadana también**” (E. n° 1).*

---

<sup>116</sup> En este sentido, Pita (2010) muestra claramente cómo las formas de vivir el hecho de violencia policial adquieren para los familiares -a diferencia ya sea de la mirada policial o bien de la mirada militante- un registro principalmente emocional y afectivo.

El lugar desde el que se habla es el de “la madre” que ha sufrido una pérdida pero también se empieza a incorporar el de la “ciudadana” que ha sido vulnerada en sus derechos. “Madre” y “ciudadana” se van conformando como dos polos de un mismo sistema de legitimidad que se va construyendo en forma progresiva. “Hay que trabajar también mucho sobre la conciencia de los derechos” dirá en un párrafo posterior la misma madre. Se va conformando de ese modo un vínculo estrecho entre la experiencia sufrida, las posibilidades de recuperación de su ciudadanía y su conformación como un actor social, lo cual pone en evidencia la imposibilidad de pensar el desarrollo de la ciudadanía en forma aislada o escindida del actor y las acciones y experiencias que la sostienen:

*“Se fueron, fueron cambiando ellos también muchas cosas. Entonces, nosotros llegamos a la, a la Corte Suprema con, con, con la agrupación. Y en la Corte Suprema fue donde empezaron a bajar líneas y si no... ‘denles respuestas a esta gente porque no se van... estos están decididos a quedarse’. Ahí fue donde empezaron a cambiar un poco la, la... hoy por hoy vamos... somos de la agrupación y... ‘¿qué expediente quieren ver?’” (E. n° 1)*

El lugar desde el que empieza a plantear el problema de la ciudadanía es el de un sujeto lesionado en sus derechos, en disputa con un “otro” —en determinados momentos la policía y en otros el Poder Judicial— que los habría conculcado. Ahora, como podemos empezar a observar en este último fragmento de entrevista, es desde la relación asimétrica con el sujeto que vulnera derechos que la constitución como actor social va a ir decantando en una relación, de carácter mucho más general, con las instituciones del Estado. En este sentido, otra madre planteaba:

*“... no conocía ninguna, lo que era, lo que era Tribunales. Digamos, de ir a enfrentarme a un juez, a un fiscal. No, no sabía. No, no... no tenía ni idea a dónde tenía que ir. **Y fui aprendiendo.** No sé, con ayuda de los docentes del colegio donde concurría mi hijo” (E. n° 3).*

El desarrollo de la ciudadanía y su constitución como un actor social —dos facetas inescindibles de un mismo proceso— son comprendidas en una escala de desarrollo en la que progresivamente se van incorporando más herramientas. Con igual lógica este mismo proceso era planteado por la otra madre entrevistada durante la realización de nuestro trabajo de campo:

*“Yo digo que, **desgraciadamente, aprendimos mucho**. Aprendimos mucho a nivel judicial cómo manifestarnos o con quién hablar y por ahí te sirve para, para aconsejar a otros papás que empiezan en esto” (E. n° 4).*

Las últimas citas ejemplifican la progresiva inscripción de la agrupación en un marco de relaciones cada vez más amplio y dan cuenta de su desarrollo y constitución como una referencia clara en el ámbito local, lo que pone en juego un concepto de ciudadanía que trasciende la enumeración estática de los derechos y obligaciones que tendrían aquellos que serían definidos como ciudadanos (enfoque que nos llevaría a la única conclusión del desfasaje entre la norma y los hechos) para ser pensada como una “práctica” (Bresser Pereira 1999) que inclusive presupone un tipo de saber que puede a su vez ser transmitido. Una práctica que, al igual que los movimientos sociales caracterizados por Dagnino (2004) para el caso de Brasil, plantea una concepción de ciudadanía que no se limita al acceso a derechos ya definidos sino que puede implicar la creación de nuevos a partir de acciones concretas de sujetos sociales activos que luchan por su concreción.

En tanto práctica, las formas de construcción de ciudadanía se expresan en múltiples dimensiones articuladas sobre la base de un conjunto de representaciones e identificaciones que, en los casos que estamos analizando en particular, buscan centralmente problematizar los fundamentos del uso discrecional de la fuerza por parte de la policía. De esta manera, si los usos discrecionales de la fuerza por parte de la policía provincial asentados sobre ciertas nociones de territorio y de peligrosidad/normalidad, constituyen prácticas que niegan la ciudadanía a determinadas poblaciones, estas respuestas nos están hablando de que la misma ciudadanía ahora se ha convertido en *objeto de disputa*. Un concepto pertinente que permita dimensionar estas prácticas muy posiblemente lo hallemos en lo que Mouffe (1999) entiende como una “ciudadanía democrática radical”, en la que el ciudadano no aparece simplemente como el receptor pasivo de derechos específicos y que goza de la protección de la ley. Ya no se trata de un mero status legal sino de la construcción de una identidad política que nace de la identificación con la *respublica*. Contempla, de este modo, un tránsito de lo privado a lo público que funda los procesos de construcción de ciudadanía, lo cual ciertamente tiene una relevancia

sumamente considerable en las experiencias que estamos analizando<sup>117</sup>. Por más que este proceso pueda tener muchos altibajos, tal como queda demostrado en el siguiente fragmento de entrevista, en todos los casos nos encontramos con un posicionamiento que se elabora desde el lugar de lo *público*:

*“Por motivos personales porque han.... te explico cómo es esto: esto, **de entrada, vos sentís la fuerza**, tenés la fuerza para... porque te invade ese... ese... odio que decís ‘no... yo tengo que pelear y tengo...’ pero... llega un momento en que te cae la ficha y empezás a hacer el duelo. Empezás a hacer el duelo de decir ‘me falta, me falta mi ser querido, yo estoy peleando, estoy peleando pero no lo voy a ver nunca más’. Entonces hay mamás que decayeron y decayeron mal viste” (E. n° 1).*

La visibilización que presupone el tránsito del ámbito privado a lo público – ambigua e intermitente- resulta central para la estrategias de las madres ya que logra, en primer lugar, exponer lo que permanecía oculto y, a través de este movimiento, adjudicar “nombre” y “apellido” a los casos, en un corrimiento que interpela la legitimidad de los quehaceres policiales y judiciales. En ese marco, en la conformación de la Asociación se llega a contemplar la importancia de cambiar la denominación de determinadas plazas o lugares públicos, realizando una reconceptualización al respecto ligada tanto a la memoria de las víctimas de violencia policial como al respeto y defensa de los derechos humanos.

Norbert Elias en “El Proceso de la Civilización” señalaba que la amenaza que implica la violencia para las relaciones cotidianas de los hombres hace que éste se someta a una regulación estricta y calculable gracias a la constitución de los monopolios de la violencia física. Así a partir de la expurgación de la violencia bajo la égida del Estado,

*“la vida cotidiana se libera de sobresaltos que se manifiestan de modo repentino. La violencia física se recluye en los cuarteles y no afecta al individuo más que en los casos extremos, en épocas de guerra o de subversión social. Por regla general, esta violencia queda reducida a un monopolio de un grupo de especialistas y desaparece de la vida de los demás” (1987: 456).*

---

<sup>117</sup> Pita (2005) también observa esta salida desde el mundo de lo doméstico hacia la arena pública en el caso de las demandas de justicia frente a casos de violencia institucional; salida que es acompañada, igual que en el caso rosarino, por diferentes estrategias de denuncia y visibilización.

Ahora, ¿qué pasa en aquellos momentos que no responden a la imagen de la guerra o de la subversión y donde son aquellos mismos especialistas quienes ejercen formas de la violencia sobre el individuo? La paz, el contrato, el acuerdo, la estructura se rompe. El individuo sale a la calle. Ese acuerdo tácito se desvanece.

José Nun (2009) se plantea este mismo dilema retomando a Hegel. En 1802 Hegel critica la idea kantiana de moral por tratarse de la idea de un *deber ser*. Se trata del ideal de comportamiento para que nuestras acciones constituyan acciones morales. Para Hegel, Kant no tiene en cuenta lo que la sociedad es y, por tanto, la existencia de una ética objetiva. En ese contexto, las instituciones van a representar ideas, valores puestos en acto. Entonces -prosigue Nun con su relato- Hegel se pregunta ¿qué es una sociedad donde prima una ética objetiva? La pregunta de Hegel apunta a qué es, no a lo que debe ser esa sociedad. Y su respuesta consiste en que se trata de una sociedad donde las instituciones responden a las ideas para las cuales fueron creadas. La escuela educa, los hospitales curan, la policía protege al ciudadano. Ahora, se pregunta Hegel ¿qué pasa cuando las instituciones no responden a los ideales para los cuales fueron creadas? Ahí, continúa Nun, es cuando Hegel introduce la noción de alienación, el individuo se repliega, desconfía, tanto de las instituciones como de su prójimo. ¿Qué pasa cuando la policía, tradicionalmente definida como la institución del Estado encargada de la protección de los derechos de las personas frente a eventos o actos que suponen su vulneración (Sain 2002a), es quien vulnera esos mismos derechos?

Los estudios antropológicos tradicionalmente han reflexionado –y muy probablemente allí encuentren uno de sus principales rasgos distintivos- sobre lo que efectivamente *es*, no sobre el *deber ser*. La antropología, en este sentido, ha sabido deconstruir el discurso normativo (del orden del *deber ser*) para adentrarse en abordajes del funcionamiento concreto de las instituciones. En nuestro caso, no partir del *deber ser* permitió visualizar las fisuras, y, sobre todo, las muy diferentes resoluciones que obtienen problemas semejantes.

En nuestro objeto de estudio, esa “disfuncionalidad”, esa “anomia” de las instituciones, generaba en algunos casos la instancia de alienación prevista por Hegel.

Los familiares de las víctimas no activan las causas, asumen la concepción de su familiar como *delincuente* y su muerte como natural, pero en otros casos, lejos de esa alienación, los individuos “salen a la calle”, “pelean” por el reconocimiento de su ciudadanía. Si en principio esa alineación se manifestaba como la asunción de una concepción extraña sobre sí mismos, ahora veíamos que costosamente y de muy diferentes modos, algunos familiares intentaban reconstruir su propia concepción de sujetos, desalienarse, verse como ellos quieren y pueden verse a sí mismos. Y para que este proceso sea completo lo tienen que hacer a la vista de todos, a la vista del barrio, en la calle, en las plazas.

Los lugares (las plazas) escogidos para recordar a las víctimas de prácticas policiales violentas son, al mismo tiempo, aquellos sitios donde dichos jóvenes pasaban gran parte de su tiempo. De este modo, era posible observar cómo nuevos significados se superponen e intentan validarse en el territorio. Este tipo de valoraciones encontramos en el registro de la entrevista con la segunda madre:

*“En el caso de D. fue porque él pertenecía al grupo de... al grupo de jóvenes que le llamábamos en el barrio que surgió a través de... de las maestras del colegio y de mamás y papás de ahí del barrio, de juntar a los chicos, para limpiar esos terrenos baldíos. Bueno, después entre los docentes y los chicos y algunos papás hicimos un proyecto de la plaza. La plaza, el nombre iba a ser “Plaza de la Amistad” y se lo llevó al Concejo. Bueno, la Municipalidad nos hizo, nos hizo el playón para la cancha de... básquet... y los chicos hicieron la, la parte de la cancha, la parte de la placita para los más chiquititos y... bueno después surgió lo de la muerte de D. y los, los compañeros, los amigos del barrio, los docentes... volvieron a... a... hacer otro proyecto para, no para cambiarle el nombre, sino para ponerle... hacerla en memoria de D. la plaza” (E. n° 1).*

Un dato a resaltar de este tramo de entrevista es la relevancia que asume el hecho de que el lugar marcado y señalado sea el mismo en que se trabajaba, esparcía, donde se pasaba el tiempo libre, etc. No se trata de cualquier lugar, como un mojón de memoria arbitrario, sino de una resignificación de los sitios representativos de su cotidianidad interrumpida. En el otro caso, lo mismo sucede:

*“Y hablando con los amigos, siempre se juntaba G. en lo que llamaban antes la plaza de la juventud que era... ahí... y bueno de ahí salió el tema de la plaza, pero todas las cosas públicas que hemos hecho esa era la intención, la idea, de que conocieran el caso, que la gente pregunte, de que se supiera realmente cómo había sido” (E. n° 2).*



Como vemos, el territorio como un espacio que expresa sentidos y la consecuente disputa por la apropiación simbólica del mismo, pasa a ocupar un lugar central en estas formas de lucha por la ciudadanía, en tanto brinda la posibilidad de que el hecho se conozca y de “que se supiera realmente cómo había sido”. Así, si bien las prácticas policiales violentas se focalizaban sobre determinadas áreas consideradas “peligrosas”, ahora asistimos, por oposición, a una reconceptualización del espacio público –una forma particular de “desalienación”- que aparece ligado a su ocupación por los pobladores del barrio tanto como a la memoria colectiva y la escenificación de un concepto de “justicia”.

Puntualmente, en los fundamentos de uno de los proyectos de ordenanza municipal impulsados por la agrupación aparece la necesidad de que los espacios públicos “deben tender a cumplir un rol tanto de recreación y esparcimiento como así también educativo<sup>118</sup> y de recordación” y “que es suficientemente conocida la importancia de mantener viva esta memoria colectiva para impedir que hechos violatorios de los derechos humanos vuelvan a repetirse” (ordenanza 7850, Municipalidad de Rosario); mientras que en otro se destaca que la iniciativa obedece a que un:

“grupo de adolescentes, al cual se unieron padres y demás vecinos interesados en participar, comenzaron a trabajar incansablemente por un objetivo en común: convertir el inmenso basural en un espacio apto para el encuentro, la recreación, las actividades culturales, deportivas y de esparcimiento” (ordenanza 7856, Municipalidad de Rosario).

Mediante estas inscripciones y señalizaciones el **territorio también es convertido en “factor de disputa** y de relaciones de poder entre grupos, no sólo en términos de recursos escasos y preciados por los que se compite sino también como construcción simbólica” (Barabas, 2005: 258), en un contexto donde la noción de ciudadanía aparece claramente tensionada. Más precisamente, el territorio se

---

<sup>118</sup> De hecho, durante la entrevista con una de las madres, plantea que lo que a ella en última instancia son los “derechos”: “...tenemos un montón de derechos pero vos ponete a hablar con los pibes, yo tengo eh... ahí este... tengo una cartilla de... de los derechos digamos de cuando te detiene la policía, cómo tenés que actuar... que... hasta dónde puede llegar la policía a, a, a pararte en la calle, por qué y todo, vos le preguntás a los pibes y te dicen ‘no, no sabía esto’. No, no saben” (E. n° 3), lo cual se agravaría desde su perspectiva aún más –y en este punto se visualiza claramente la importancia que le asignan a estas intervenciones en el espacio público- ya que: “igual tampoco tienen el poder como para... como para hacerlos respetar a esos derechos” (E. n° 3).

constituye en uno de los principales tópicos escogidos para librar esta batalla por la ciudadanía. Ahora bien, de la mano de la estrategia de la visibilización, la demanda de los familiares no se limita a la exigencia del cumplimiento formal de la normativa, ni a la recuperación de un sujeto de derechos. Sus demandas (y sus inscripciones en el espacio público) están planteando una recuperación de su propia identidad -en gran parte negada justamente a partir de la clasificación del territorio y sus poblaciones que cotidianamente hacen los policías- como parte indisociable de su condición de ciudadano. Así es que en las dos plazas que en la ciudad de Rosario recuerdan a víctimas de “violencia policial”, un lugar central es ocupado ya sea por murales que vuelven visible el rostro mismo de la víctima o bien inscripciones que lo recuerdan (O. n° 2).

Todos los casos habían comenzado con signos claramente “otrificadores”. En el caso III, los amigos de la víctima manifestaron a la prensa que escucharon cuando el agente que disparó le gritó a su compañero “Ya tengo a uno, andá que se escapan dos” (La Capital, 16/08/02). En el procesamiento al agente implicado, el juez determinó que el mismo empuñó el arma, apuntó y abrió fuego. Incluso afirma que “tal vez hizo puntería” (La Capital, 17/03/04). En el caso del enfrentamiento en los *pasillos*, una amiga de la víctima manifiesta en su declaración testimonial en sede judicial, que uno de los agentes policiales intervinientes le manifestaron, cuando ella se acerca al lugar del hecho, “que le pregunten a X (su hermano), que lo están comiendo los gusanos porque le di un tiro en la nuca dándole la ‘voz de alto’”, lo cual generó un altercado y el jefe a cargo hizo retirar a este policía, mientras que el policía que permaneció en el lugar le espetó “que podés hacer con esto si tu hermano era un ‘caco’, ‘negra sucia piojosa’”. A través de estos relatos se nos presenta una nueva instancia donde las concepciones y representaciones generales sobre distintas poblaciones trabajadas y analizadas en capítulos precedentes se hacen carne y fundamentan prácticas violentas concretas.

Pero lo significativo es que ahora esta última faceta –la que finalmente se nos termina mostrando como un aspecto central de la lucha por la ciudadanía- aparece claramente problematizada en nuestra revisión de las crónicas policiales de los periódicos locales: en La Capital, encontramos expresiones de familiares de las

víctimas como las siguientes: “queremos que limpien el nombre de G. Él no usaba armas, era un chico trabajador” (11/08/02). Misma actitud es reflejada por la crónica de Rosario/12: “Para la familia, es imposible que G. hubiese intentado robar nada, ya que era un ‘joven estudioso y trabajador’ (10/08/02). Ante el periódico El Eslabón la madre de una de las víctimas manifestaba:

*“Yo siempre digo que desperté de esa pesadilla recién el día 11. Después **vi las noticias que decían que había muerto un delincuente en un enfrentamiento**<sup>119</sup>. Ahí tuve mucha bronca, porque **encima de que me lo arrancaban de mi vida, lo ensucian de esa forma**. Así que empecé a querer hacer algo para aclarar la situación, para que se supiera la verdad (...). **Para mí lo importante siempre fue limpiar el nombre de mi hijo**. Me alcanza con el hecho de que se supo la verdad y de que, de alguna manera, en esta provincia algo no quedó impune” (23/11/06).*

En este sentido, se instala una lucha que va ligada a una recuperación de la posición social de la víctima que resulta evidente en la constante apelación a su nombre<sup>120</sup>, la cual se articula sobre un **concepto de ciudadanía** que no es concebido como mero estatus, ni como un conjunto cerrado de derechos, sino como un proceso, como un aprendizaje, una práctica y una lucha, **donde la centralidad pasa por identificaciones que reafirman su condición de sujeto y que procuran, por sobre todas las cosas, volverlo visible.**

En este sentido, entendemos que un aporte significativo para pensar estos procesos consiste en retomar la noción de ciudadanía en el sentido propuesto por Luis Cardoso de Oliveira en “Honor, dignidad y reciprocidad” (2004), donde el autor en el marco de analizar el proceso de institucionalización de la ciudadanía desde demandas por derechos a demandas por reconocimiento de identidades; plantea que un reconocimiento pleno de ciudadanía debe contemplar la indignación experimentada por el actor que ve su identidad negada. Por este motivo, L. Cardoso de Oliveira recurre al análisis del “don” para ejemplificar estos reclamos, en el que, tanto en las

<sup>119</sup> Distintas investigaciones han dado cuenta cómo este tipo de discursos, si bien reinstalan la figura de la víctima, al mismo tiempo reproducen las valoraciones sociales y policiales en torno al tratamiento del *delincuente*. Ver: Calzado (s/f.).

<sup>120</sup> Pita ha observado, con un sentido semejante, que entre los familiares de las víctimas de violencia policial se produce un intento por restituir humanidad a las víctimas, las que en principio habían sido vistas de acuerdo a las circunstancias de su muerte como “seres matables” (Pita, 2010:26). Esta operación se hace sobre la base de una resignificación de sus muertes pero también de sus vidas, a través de una multiplicidad de prácticas de denuncia y conmemorativas, tanto individuales como colectivas, que buscan impugnar la forma en que fueron muertos sus familiares.

lecturas de Mauss como de Malinowski, el cumplimiento de la obligación moral involucrada en esos actos no se agota en la satisfacción de los intereses de las partes, ni en la afirmación de un derecho, sino que implica el reconocimiento del valor por parte del receptor del “don”. De la misma manera, en los casos que analizamos los actores no solo están preocupados por el reconocimiento del derecho de las víctimas o por el resarcimiento económico correspondiente sino también por reconstruir la identidad de la víctima, “limpiar su nombre”. Se podría concluir a partir del análisis de estas experiencias -retomando a L. Cardoso de Oliveira- en la importancia de que cuestiones tales como lazo social, identidad y reciprocidad fuesen asociados también a la preocupación por los derechos y la ciudadanía.

Se constituyen, de ese modo, en prácticas de resistencias que, articuladas alrededor de demandas de justicia, cuestionan ya no la racionalidad que sostiene una determinada institución (tal como pensaría Foucault lo sustancial de una práctica de resistencia<sup>121</sup>) sino, antes que eso, a los diferentes procesos de “otricación” que orientan algunas de sus prácticas. Y, en el mismo movimiento, plantean una recuperación de su identidad en forma posterior a ser ingresados en la maquinaria burocrática judicial y periodística como un “simple delincuente”. En este último caso esta recuperación resulta evidente en la constante y recurrente apelación al nombre de la víctima y su posición social: “G. había terminado la secundaria...”.

A lo largo de esta última parte de la tesis buscamos exponer, en forma relacional, aquellos aspectos vinculados con el problema de la ciudadanía que son interpelados a partir de hechos de violencia policial, observando no solo cómo se definen discrecionalmente las posibilidades en la utilización de la fuerza por parte de la policía provincial sino también las distintas estrategias de construcción y resignificación de la ciudadanía expresadas por los familiares de las víctimas que reaccionan ante este tipo de hechos.

Estos recorridos, estas experiencias particulares de construcción de ciudadanía, no representan el devenir de todos los casos de violencia policial. En la comparación

---

<sup>121</sup> Foucault planteaba que los que resisten “contra una forma de poder no pueden satisfacerse con denunciar la violencia o criticar una institución. No basta con denunciar la razón en general. Lo que hace falta volver a poner en tela de juicio es la forma de racionalidad” (1990: 140)

de los tres casos -donde en solamente uno de ellos los familiares de la víctima se agruparon en Padres del Dolor, mientras que en los otros dos no- el dato predominante que pudimos observar es que tuvieron resoluciones judiciales diferenciales. En dos (los que no participaron activamente) concluyeron en una resolución burocrática, rutinaria, prácticamente sin investigación, mientras que en el otro el proceso fue mucho más complejo. Evidentemente, en los casos donde las víctimas responden claramente a la imagen de lo que en el mundo policial/judicial es un *delincuente*<sup>122</sup> y sus familiares o amigos no logran problematizar esa categorización, la investigación se orienta sin sobresaltos a la ratificación de la versión inicial dada por la policía.

Un caso particular de la estigmatización que reproducen en algunos momentos los Tribunales es el de un adolescente asesinado por la policía en barrio San Francisquito, quien:

“tenía apenas 15 años. El 28 de Agosto de 2003, el policía Esteban Demarco le disparó un tiro en la cintura porque lo habría confundido con un ladrón que hacía minutos había protagonizado un asalto en el barrio Nuevo Mangrullo. Eran las tres y media de la tarde y Diego caminaba junto a su amigo Ariel Rubén Segovia por Castellanos y Aurora cuando el paso apurado y nervioso de un presunto delincuente inquietó a ambos jóvenes. Detrás, venían dos efectivos del Comando Radioeléctrico. Diego y su amigo se asustaron y se metieron en la casa de un vecino. Uno de los policías entró en la vivienda. Primero esposó a Ariel y lo sacó de la casa y, después, corrió a Diego y le disparó por atrás. El balazo atravesó la espalda, ingresó en el tórax y perforó los intestinos de Diego” (Calderaro, 131, 132: 2008).

El *acta* en este caso reproduce la misma lógica que analizamos con anterioridad:

“se informa que los agentes K y D, informan que al ser comisionados al lugar de mención, ingresando por calle CM, al sur observan a varios masculinos, quienes al advertir la presencia policial, algunos se dan a la fuga, ingresando a la finca, pero previamente uno de ellos extraer un arma de fuego, siendo D. quien inicia la persecución, ingresando a la vivienda, donde el actuante advierte que cuatro sujetos se dispersan por el patio, por lo que el mismo da la voz de alto, empuñando su arma reglamentaria y procurando no perder de vista al sujeto armado, a quien acercándose se le reitera la voz de alto. Al llegar a él según

---

<sup>122</sup> En estos dos casos, las víctimas poseían numerosos antecedentes por amenazas, abuso, robo, homicidio.

manifiesta D., los sujetos restantes se le abalanzan, tratando de arrebatarse el arma, trabándose en lucha con ellos, algunos le tomaron la muñeca de la mano con la que portaba el arma, le propinaban golpes de todo tipo por lo que solicitaba a viva voz el auxilio de su compañero, circunstancias en las que se escuchan dos detonaciones de arma de fuego y los sujetos deponen su agresividad hacia el personal policial, logrando D. retener a uno, observando que el resto sube al tapial que rodea la casa en cuestión y se dan a la fuga por las fincas linderas hacia el oeste, procediendo a trasladar al retenido hacia la casa, apareciendo en ese momento el agente K, al oír los gritos de auxilio proferidos por D. colocándole a dicho sujeto las esposas de seguridad, y llevándolo al móvil policial en tanto DM se dirige hacia el tapial, por donde saltaron los demás masculinos, constatando que detrás del mismo estaba uno de los sujetos precitados, quien manifestó estar herido”.

En este caso en particular, la sentencia judicial en materia civil, no penal, reproduce explícitamente la estigmatización que encontramos como característica en ciertas prácticas policiales. Lo hace al momento de fijar el resarcimiento económico donde los jueces intervinientes tomaron en consideración que no habría sido demostrado por los representantes de la familia el hecho de que el adolescente de 15 años al momento de su asesinato, fuera a cursar “estudios especiales, que permitieran prever una segura y notoria superación de las condiciones económicas de su familia” y que por tanto como estudiante no estaría percibiendo remuneración alguna, no habiendo entonces base indemnizatoria pertinente. Este proceso nos fue relatado también por su madre:

*“Y después, bueno, con el tema de lo Civil, ni te cuento mirá, te tendría que dar una fotocopia de lo que tengo yo para que veas cómo, de qué forma discriminaron a mi hijo. De que, porque **fue terrorífico**. Ellos alegan de que, un ejemplo, de que en lo civil, creo que es algo, te dan algo de... para ellos mi hijo valía alrededor de cincuenta mil pesos, algo de eso. Y bueno, como mi hijo venía de una familia humilde, estaba cursando, no trabaja, estaba cursando el... estaba estudiando, y **con eso ellos no tenían noción de que mi hijo el día de mañana hubiera sido... hubiera podido este... ser alguien en la vida, digamos. Para ellos no iba a salir de ahí, del barrio. Iba a ser un negrito más del barrio**” (E. n° 4).*

Más adelante, durante la entrevista, la madre intenta posicionarse en la lógica de los jueces y se pregunta “¿este negrito cuánto puede valer?”. En estas circunstancias nos encontramos con que aquellas concepciones que entendían que “siempre vuelven”, “siempre son los mismos” y que eran suscriptas por policías de distintos *destinos* son, de este modo, reactualizadas en las resoluciones del Poder

Judicial. Las mismas cierran un modo particular de tratamiento de los casos de “violencia policial” también por parte del Poder Judicial.

En cambio, en los casos donde –a pesar de que puedan manifestarse procesos de estigmatización semejantes- la familia de la víctima logra tejer relaciones sociales que problematizan el accionar de la policía y resignifican el lugar y nombre de la víctima, se produce un rompimiento de la lógica rutinaria que guía las investigaciones judiciales que impide ese tipo de cierres tan prematuros.

Esta última referencia al hecho de que determinados actores luchen por la afirmación de su ciudadanía, mientras que otros opten no hacerlo –o directamente, según sus circunstancias, no puedan hacerlo- representa un elemento más que ejemplifica la imposibilidad de tratar el problema de la ciudadanía en abstracto, tal como ocurría al momento de pensar en las posibilidades en el uso de la fuerza. Por estas razones, entendimos necesario volver la mirada sobre los procesos concretos y observar cómo, situacionalmente, se van construyendo distintas identificaciones que van cargando de diferentes significados la noción de ciudadanía.

## Conclusiones

El **objetivo general de la tesis** consistía en analizar las prácticas policiales en la ciudad de Rosario considerando las nociones de ciudadanía puestas en juego en un marco de relaciones delineado particularmente por el modo en que en el espacio policial se construyen representaciones y significados relativos al uso de la fuerza y su rol como elemento fundante de la función policial. Con esta perspectiva general fue que entrevistamos a dos familiares de víctimas de violencia policial, ocho comisarios, tres subcomisarios, cinco oficiales y dieciocho agentes, y que permanecemos durante casi dos años realizando observaciones en siete comisarías de la ciudad de Rosario y en la sede del Comando Radioeléctrico, lo cual se termina viendo expresado en el producto final de la investigación que refleja un estudio de carácter etnográfico acerca de las posibilidades de utilización de la fuerza por parte de la policía y su vinculación con el problema de la ciudadanía.

Estudiar las dinámicas estatales a partir de indagar en la articulación existente entre campos tan complejos como el desarrollo de las prácticas policiales - considerando particularmente las posibilidades en la utilización de la fuerza- y la ciudadanía, suponía una serie de **desafíos tanto teóricos y metodológicos**, así como en relación con cuestiones básicas tales como el acceso al campo; sobre todo en un campo que tradicionalmente había sido considerado como “opaco” y de muy difícil acceso para la mirada externa.

De hecho, lograr acceder al campo y tener la posibilidad de desarrollar un trabajo etnográfico al interior de la policía posibilitó que esta articulación entre prácticas policiales y ciudadanía, que en principio se nos aparecía sumamente abstracta y general, empezase a tomar cuerpo en una variedad de situaciones cotidianas y rutinarias propias de la actividad policial. Principalmente aquellas que se iban erigiendo en forma diaria sobre la base de la amplitud de posibilidades regulatorias que le son otorgadas a la policía, las cuales iban definiendo y dando forma a diferentes tipos y niveles de vínculos entre policías y ciudadanos. En la provincia de Santa Fe, este tipo de vínculo -fundado sobre la diversidad de intervenciones policiales- se canaliza a través de formas institucionales diferenciales, en nuestro



trabajo representadas principalmente por los matices que expresan el Comando y las comisarías como los principales destinos de actividad policial, los cuales a su vez presuponen para los policías trayectorias laborales claramente diferenciadas.

Al mismo tiempo que la etnografía aparecía como una herramienta fundamental que posibilitaba profundizar el análisis de esas formas particulares (y en algunos casos marginales) de recrear las dinámicas estatales y, de ese modo, constituir una base desde donde concebir el campo del Estado en toda su complejidad, se nos mostraba también el rol que cumplen tanto los que son considerados legalismos como los que no, en la estructuración de las prácticas policiales. En numerosas situaciones de campo vislumbramos que no era incongruente apelar ante determinadas circunstancias a recursos provistos por el orden normativo mientras que en otros momentos eso no debía ser necesariamente así. En ese margen estaba la capacidad del policía de saber caminar bien derecho y su picardía.

Así fue cómo a través del **trabajo etnográfico** –que, como afirman Das y Poole (2008), ofrece una perspectiva única del tipo de prácticas que parecen deshacer al Estado en sus márgenes territoriales y conceptuales- íbamos profundizando nuestra mirada sobre un contexto en el que se volvían visibles una variedad de formas, muchas veces contradictorias entre sí, que a pesar de ello no perdían su unicidad en tanto expresaban a la misma policía, incluso en los casos en que la actividad policial diaria se representaba muy distante de los que eran considerados como los fundamentos tradicionales de la institución, principalmente relacionados con la tarea preventiva y represiva.

A lo largo de la investigación fuimos significando cómo, en los márgenes del Estado, **la policía se volvía central no sólo en su aspecto represivo**, tal como ya había sido enunciado por innumerables investigaciones, sino también por su rol articulador de relaciones sociales y de instancias estatales, por las cuales transitaban nuevos significados de la función policial, que no necesariamente tenían que ver con lo previsto por protocolos y reglamentos ni con los que eran considerados los pilares tradicionales de su función. De este modo nos encontramos con una policía que intervenía sobre innumerables trámites administrativos, demandas sociales,

familiares, etc. y lo hacía de muy diferentes modos, resignificando el sentido negativo (en términos de represión del delito) que la modernidad le había asignado a la institución.

Con ese sentido fue que, en comisarías, registramos recurrentemente significados que resaltaban **nuevas facetas del “quehacer policial”**: “la policía es un agente de asistencia social”, “una herramienta del Estado para ayudar a la gente”, “nosotros no entramos para reprimir a la gente”. Entendimos que, en ese contexto, las comisarías buscaban situarse en situación predominante por sobre posiciones que ocupaban otras agencias del Estado y con las cuales compartían algunos aspectos de su práctica, a la vez que se fundamentaba la existencia de una agencia cuyas prácticas distaban grandemente de las expectativas sociales en torno a la misma.

También fue posible observar que, si bien ante este nuevo contexto la policía intervenía ante una diversidad de situaciones que trascendían por mucho la mera aplicación de la ley penal, en la gran mayoría de los casos lo hacía apelando a herramientas que eran propias del sistema penal. La policía operaba, ante esas situaciones, con recursos que eran característicos de su pertenencia estatal, a partir de lo cual **si bien se trabajaban nuevas problemáticas en la búsqueda de legitimación de su pertenencia al Estado, las mismas son incorporadas apelando a las prácticas y saberes ya conocidos**. El ejemplo más representativo de ello lo encontramos en el tratamiento que la policía hacía de las personas perdidas y en los recursos de que se valía, por ejemplo, para intermediar en una discusión menor entre vecinos.

En ese sentido, entendimos que la vehiculización de demandas sociales (y conflictos por supuesto) a partir de la policía, en forma conjunta con el alto carácter administrativo (y penitenciario) de los funcionarios con destino en comisarías – en el que el carácter de la función terminaba identificando en gran medida a este conjunto de policías como una parte más del aparato burocrático sin vinculación directa con las especificidades de la agencia policial ya que las funciones administrativas pasaban a representar el horizonte de expectativas laborales para una gran cantidad de policías que se negaban expresamente a la posibilidad de “salir a la patrullar”-, operaban como elementos que al mismo tiempo que iban en detrimento de las funciones de

seguridad, configuraban nuevos fundamentos que daban sentido a la actividad para las policías de comisarías.

Todo ello implicaba una primera y extendida noción de ciudadanía. La policía articulaba cotidianamente con distintos sectores de la población, de muy diferentes modos y constituyendo, a través de esos modos, a esos mismos sectores como ciudadanos. Vecinos, comerciantes y familias entraban dentro de esta categoría global de ciudadanos que trascendía por mucho a las víctimas de delitos y representaba un vínculo cotidiano y constante, principalmente en comisarías aunque el CRE tampoco era ajeno al mismo.

Lo realmente significativo fue comprender que **para la policía todos los ciudadanos, de alguna u otra manera, constituían “otros”**. La categoría de “otros” abarcaba por igual a todos aquellos que no habían tenido la experiencia de ser policías. El origen de esta visión pudimos rastrearlo hasta una primaria y extendida conceptualización de la propia labor policial que invariablemente era pensada en forma escindida de la sociedad. Policía y sociedad representaban, de acuerdo a las percepciones recogidas en las entrevistas hechas durante nuestro trabajo de campo, cosas diferentes. De hecho, la misma inserción de la policía en el Estado era también pensada como una escisión en la cual la policía operaría desde un lugar de exterioridad y en donde su vínculo con el resto de las agencias estatales era visto de igual forma siguiendo una lógica de exterioridad. Dada esta escisión fundante, no nos podía resultar extraño que la relación con los ciudadanos sea representada igualmente como una relación con “otros”.

Ahora bien, a lo largo de la investigación fuimos comprendiendo también que **esos “otros” podían ser territorialmente localizados**. En efecto, cada uno de los distintos “otros” tenían, de acuerdo a las representaciones policiales relevadas, un espacio que les era característico, a partir de lo cual el territorio se convertía en un tópico central en la definición de la forma que asumían las prácticas policiales. Así fue que empezamos a barajar la imposibilidad de pensar el vínculo policía /ciudadanía en abstracto, por fuera del marco que imponía el contexto y terminamos arribando a un concepto de la actuación policial que la consideraba como territorialmente situada.

En efecto, la clasificación general de una jurisdicción como céntrica o bien como “de trabajo” -marcada por la presencia de villas fundamentalmente- sobre la base de representaciones sociales y también en algún punto de miradas institucionales, trasciende las pertenencias organizacionales que caracterizan a la policía en la provincia de Santa Fe, conformando de ese modo un núcleo de sentido que implica y fundamenta formas diferenciales del hacer en el trabajo policial en general.

En el sentido precedente, nos concentramos en analizar cómo este tipo de conceptualizaciones se estructuraba de acuerdo a una lectura de la peligrosidad que discriminaba entre lugares seguros e inseguros, atravesando de diferentes modos los límites establecidos por las demarcaciones jurisdiccionales preestablecidas. Se trataba, en este sentido, de una peligrosidad que asumía una base fuertemente social al construirse genéricamente a partir de la presencia o ausencia de “villas” o FONAVIs, las cuales daban lógica y terminaban delineando el mismo accionar policial. Para trabajar en el “barro” hacían falta policías “barreros”. La estrechez del vínculo entre el territorio y el modo de actuación policial se volvía cada vez más evidente.

Asimismo, fue posible reconocer distintas formas a través de las cuales dichas distinciones se hacían extensivas a las poblaciones que habitan cada una de las jurisdicciones, implicando **formas diferenciales del hacer policial** de acuerdo a los vínculos eventuales con estos otros actores. De ese modo fue que nos encontramos con que, dentro del gran universo de “otros” representado por todos aquellos que no son policías, iban surgiendo distintos niveles y clasificaciones. En todas las dependencias policiales, sin distinción, las conceptualizaciones en torno tanto del territorio como de la población que lo caracterizaba operaban como marco situacional que le imponía al policía un modo de actuar, un modo de actuar que necesariamente debía corresponderse con el marco de relaciones en el que su práctica se estaba desplegando.

El grado de determinación que implicaba el territorio progresivamente hizo que incorporásemos, dentro de la clasificación de los “otros”, la recurrente distinción entre “normales” y “anormales”. En ese marco, y cruzando los datos provenientes de

las entrevistas con policías con los obtenidos del relevamiento cuantitativo de casos letales de violencia policial publicados en fuentes periodísticas, fuimos significando que dentro de los “anormales” había algunos que resultaban “matables” -recuperando el concepto de M. Pita- en determinadas circunstancias y lugares. Todo ello contribuía a evidenciar una visión del accionar policial sumamente discrecional en la cual la posibilidad de recurrir a la utilización de la fuerza era mayor en el vínculo con determinadas poblaciones –sobre todo jóvenes y pobres- y en determinados lugares –abrumadoramente barrios marginales y villas de emergencia.

Se trata de una selectividad que (re)produce sentidos que atraviesan toda la estructura institucional, expresándose en cada pequeña decisión que asume diariamente cada agente en particular. De este modo, una de las conclusiones de nuestra investigación remite a señalar cómo en el margen que queda abierto entre la generalidad de la ley y el hecho de su aplicación (y particularmente en referencia a la delimitación de las posibilidades de utilización de la fuerza) **los parámetros de elección de posibilidades de acción que el policía construye está atravesados principalmente por la conceptualización del territorio y por el proceso de estigmatización que sufren determinadas poblaciones claramente identificables.**

En ese contexto, la insistencia en una descripción etnográfica del entramado de prácticas y rutinas policiales permitía revelar que **los usos de la fuerza, potencialidad fundante de la misma institución, aparecían mediados por el conjunto de vínculos locales y particulares que cada dependencia e inclusive que cada agente desarrollaba en su contexto de trabajo.**

Dentro de esos vínculos fuimos observando también los grados diferenciales de participación, en hechos de utilización letal de la fuerza, por parte de cada uno de los destinos que conforman la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad de Rosario. En ellos nos encontramos con que era el CRE la dependencia que participaba en la gran mayoría de los casos, hecho que buscamos interpretarlo a partir de lo que consideramos como un conjunto de factores explicativos, entre los que destacábamos que se trata de una dependencia cuyas dotaciones actúan con altos grados de

autonomía y que, producto, de su dinámica particular de trabajo, era también permeable al desarrollo de perspectivas militaristas en su seno.

Ahora bien, a pesar de que el CRE era la dependencia involucrada, hechos de este tipo afectaban a la policía en su totalidad. Así, en acontecimientos semejantes, con lo que nos encontramos fue con reuniones secretas, aisladas, aún en el marco de comisarías. Las que en otros momentos eran comisarías de puertas abiertas, inclusive para el acceso al penal, en las horas posteriores a enfrentamientos se mostraban como lugares cerrados, herméticos, infranqueables. Se trataba evidentemente de rupturas que, paradójicamente, tenían un efecto cohesivo sobre la institución. Una institución en principio heterogénea, ante un hecho de este tipo tendía a cohesionarse y desarrollar vínculos estrechos entre sus miembros. En este caso, entendimos que este sentido de “corporación” no emergía de una serie de valores morales comunes o principios abstractos vinculados con lo que significaba ser policía; la “corporación” emergía de las relaciones concretas y de los intereses reales que eran puestos en juego en la actividad policial, siendo el involucramiento en un enfrentamiento uno de los hechos más significativos que activaban el sentido de formar parte de la policía. El peso de estos intereses hacía que las posibles diferencias y tensiones entre personal de comisaría y personal del CRE pasasen a un segundo plano, apelando a una solidaridad construida sobre la base una experiencia común representada por este tránsito en la policía. La convergencia discursiva encontrada entre la elaboración de actas y sumarios ante este tipo de hechos expresa esa íntima solidaridad. En las mismas, encontramos que **los casos de violencia policial, más allá de su eventual excepcionalidad, son reinscriptos dentro de una trama rutinizada de prácticas que es sostenida por sólidas relaciones de solidaridad y reciprocidad.**

El hecho de que, en determinadas circunstancias, algunos resultaban “matables” reactualizaba la discusión en torno a la ciudadanía. ¿De qué ciudadanía hablábamos allí? La muerte parecía poner fin a esa potencial discusión. Sin embargo, asumiendo los lineamientos del enfoque relacional incorporamos también el análisis de las prácticas de aquellos actores significativos que intentaban cuestionar este orden de cosas, lo cual presuponía **revisitar la noción de ciudadanía desde un nuevo lugar.** Así fue que pusimos el foco sobre las distintas estrategias relacionadas con la

recuperación de condiciones de ciudadanía que eran puestas en juego por los familiares de las víctimas que reaccionaban ante este tipo de hechos.

En este marco, nuestra reflexión fue otorgándole a la disputa por el espacio un sitio privilegiado. Así fue que de considerar, en un principio, el papel del territorio en la delimitación de las posibilidades de utilización de la fuerza por parte de la policía pasamos luego a observar cómo el mismo territorio pasa a ser considerado un lugar central en la lucha de los familiares en torno a su condición de ciudadanía en tanto volvía visible a la víctima.

La visibilización que suponía el tránsito del ámbito privado a lo público – ambigua e intermitente- resultaba central para la estrategias de las madres de las víctimas ya que lograba, antes que nada, exponer lo que permanecía oculto y, a través de ese mismo movimiento, adjudicar “nombre” y “apellido” a los casos, en un corrimiento que interpelaba directamente la legitimidad de las formas de intervención policial y judicial.

En ese contexto fue que pudimos entrever que **detrás esta disputa por la ciudadanía y la apropiación simbólica del territorio, se hallaban presente tensiones referidas a la posición social de la víctima**. Una posición social que para determinadas prácticas policiales se ubicaba en torno a la posibilidad de dar muerte pero que, en el discurso de los familiares era reposicionada bajo el concepto de la ciudadanía y la noción de sujeto, “mi hijo tenía tantos derechos como él...”, y lo hacía abiertamente, en la forma más visible posible a través de “marchas” y “murales” en plazas principalmente.

Las resoluciones judiciales ante este nuevo escenario –en el que determinados grupos de familiares y amigos de las víctimas buscaban reafirmar su ciudadanía y otros no- fueron diferenciales. En algunos casos se resolvió en forma condenatoria para los policías implicados mientras que en otros no. En este sentido, **la hipótesis** que sostuvimos estaba estrechamente relacionada con el problema de la ciudadanía y consistía en pensar que **cuando se produce una intervención activa de familiares de las víctimas se crea un escenario donde puede llegar a generarse un quiebre de la**

**lógica lineal y rutinaria que suele estructurar las investigaciones judiciales de los casos de “violencia policial”.**

Ahora bien, no obstante la visibilización que adquirieron de ese modo algunos casos, en ese mismo contexto los hechos de violencia se siguieron sucediendo cotidianamente (algunos letales, otros no), lo cual se expresaba en los datos cuantitativos elaborados que daban cuenta de una sostenida permanencia, a raíz de la cual surgía una pregunta inevitable ¿se rompe, en determinados momentos, este círculo?

Se trata de una pregunta que no tiene respuesta definitiva en este trabajo, conjuntamente con otros aspectos significativos de las prácticas policiales en general y de la Policía de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Rosario en particular que no fueron incluidos en la presente investigación. Dichos aspectos representan posibles líneas futuras de investigación y contemplan: rasgos gremiales como los intentos de sindicalización policial, económicos como la participación de la policía en economías delictivas, relativos al lugar que ocupa la policía en el Estado y en el territorio a partir del "desembarco" de la gendarmería en la ciudad para el desarrollo de tareas de prevención, “desembarco” a partir del cual –cabe destacar- se da una superposición de quehaceres con la policía que, cuanto menos, representa un cuestionamiento de la policía como agencia del estado.

Por lo pronto, en esta instancia de la investigación sabemos que una trayectoria que se va volviendo exasperadamente circular continúa marcando la dinámica de las prácticas policiales absorbiendo distintas sentencias, largos procesos judiciales y policiales. Se trata de un ciclo que se había abierto no en el acto de empuñar el arma, no en la decisión brutal de utilización de la fuerza, sino en un cúmulo de prácticas rutinizadas, de valores y representaciones naturalizados, de formas de sentir y vivir el ser policía que se expresan, transitan, se contradicen, se niegan y fundamentalmente -tal como intentamos revelar o reflexionar a lo largo de la investigación- se reproducen en el marco de las prácticas policiales. La presente tesis estuvo orientada a comprender algunos de sus rasgos y expresiones.



## Bibliografía

- ACHILLI, E. (2005): "Un enfoque antropológico relacional. Algunos núcleos identificatorios" en Documentos de Trabajo, Rosario.
- AGUIRRE, O. (2006): "Notas en un diario". Editorial Municipal de Rosario, Rosario.
- ALES, C.; FERNÁNDEZ, G; PEREYRA, S.; ROSSO, L. y P. SOKOL (2011): "Propuestas para la regulación y el control del uso policial de la coerción y la fuerza en Argentina", en C. Ales, et. al. "Regulación y control del uso policial de la coerción y la fuerza en Argentina". Ministerio de Seguridad de la Nación. Buenos Aires.
- ANDERSEN, M. (2002): "La policía: pasado, presente y propuestas para el futuro". Editorial Sudamericana. Buenos Aires.
- ANITUA, G. I. (2004): "Seguridad insegura: el concepto jurídico de seguridad humana contra el discurso bélico", en Revista Brasileira de Ciencias Criminais, nº 47, Editora Revista dos Tribunais, Sao Paulo.
- ARMAS, G.; FERNÁNDEZ, G. y L. ROSSO (2011): "Mecanismos de control político de la Policía de la provincia de Santa Fe", en Ales, C. et. al. "Regulación y control del uso policial de la coerción y la fuerza en Argentina". Ministerio de Seguridad de la Nación. Buenos Aires.
- BARABAS, A. (2005): "Territorialidad simbólica, santuarios y peregrinaciones" en Actas 1er. Congreso Latinoamericano de Antropología, Fac. de Humanidades y Artes, UNR.
- BARRERA, N. (2013): "Usos de la fuerza y territorialidad: el problema de la violencia policial en la ciudad de Rosario" en S. Frederic, J. Garriga Zucal, B. Renoldi y M. Galvani (compiladores) ""De armas llevar. Estudios socioantropológicos sobre los quehaceres de policías y de las fuerzas de seguridad". Ediciones de Periodismo y comunicación. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.
- (2008): "La 'crónica policial' como fuente: reflexiones a partir de una experiencia de campo" en Revista de la Escuela de Antropología, vol XIV, H y A ediciones. Rosario.
- BARRERA, N. BIANCIOTTO, Ma. L., FERNÁNDEZ Y PATALLO, M. (2010): "Disputas alrededor de la verdad jurídica: análisis de las lógicas de su configuración a partir de tres casos de violencia policial" en VII Congreso Relaju, 02 al 06 Agosto, Lima, Perú.
- BARTOLOMÉ, M. (2004): "En defensa de la etnografía. Aspectos contemporáneos de la investigación intercultural" en Revista Avá nº 5, Misiones.
- BENJAMIN, W. (1996): "Para una crítica de la violencia y otros ensayos". Taurus Humanidades. Madrid.

- BIANCIOTTO, M. (2012): "Práctica profesional en Rosario: abordaje de sus interrelaciones y atravesamientos en dependencias de la ciudad de Rosario". Tesis doctoral. Facultad de Humanidades y Artes, UNR. Mimeo.

(2011a): "Prácticas policiales en Rosario: pensando sus relaciones y atravesamientos" en "Actas X Congreso Argentino de Antropología Social", Fac. de Filosofía y Letras, UBA. Bs. As.

(2011b): "La comisaría y 'la calle'. A propósito de las prácticas policiales en Rosario". En: 11as Jornadas Rosarinas de Antropología sociocultural. 29 y 30 de septiembre. Facultad de Humanidades y Artes, UNR. Rosario.

(2008): "'A propósito del concepto de (sub) cultura policial. Primeros elementos para un posible debate" CD IX Congreso Argentino de Antropología Social "Fronteras de la Antropología", Depto. De Antropología Social, Programa de Posgrado en Antropología Social, Fac. de Hum. y Cs. Soc, UNAM.

(2006): "Garantes del orden: análisis del proceso de estructuración de la profesión policial en la Escuela de Cadetes de Rosario. Tesina de Licenciatura en Antropología, UNR. Mimeo.

- BINDER, A. (2009): "El control de la criminalidad en una sociedad democrática. Ideas para una discusión conceptual". En: G. Kessler (coord.) "Seguridad y ciudadanía. Nuevos paradigmas y políticas públicas", Edhasa, Buenos Aires.

- BIRKBECK, C.; GABALDON, L. (2002): "La disposición de agentes policiales a usar fuerza contra el ciudadano" en R. Briceño-León (comp.) "Violencia, Sociedad y Justicia en América Latina". CLACSO, Buenos Aires.

- BITTNER, E. (2003): "Aspectos do trabalho policial". Editora da Universidade de Sao Paulo. Sao Paulo.

- BLOJ, C. (2008): "Ciudadanía, experiencias deliberativas y nuevas subjetividades políticas en la Argentina post crisis del 2001: Asambleas Barriales y Presupuesto Participativo". Tesis de Doctorado. Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset, Madrid. Mimeo.

-BOURDIEU, P (1999): "La miseria del mundo". Akal, Madrid.

(1996): "Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático", en Revista Sociedad Número 8, Facultad de Ciencias sociales, UBA.

- BOURDIEU, P.; WACQUANT, L. (2005): "Una invitación a la sociología reflexiva". Siglo XXI, Bs. As.

- BRESSER PEREIRA, L. (1999): "Ciudadanía y res pública. La emergencia de los derechos republicanos" en Revista Nueva Sociedad nº 159, Caracas.

- BRODEUR, J. P. (1994): "Police et coercition", en Revue Française de Sociologie, XXXV.

- CALDERARO, R. (2008): "No callarás. Historias de gatillo fácil". Vei Libros. Buenos Aires.
- CALZADO, M: (s/f.): "Elementos para el análisis del tratamiento mediático del caso Blumberg", en "Documento de Trabajo nº 5," Programa de Antropología Social y Política. Flacso
- CALZADO, M. y N. MAGGIO (2009): "Medios de comunicación: 'a veces pasa como su uno dijera llueve'. La naturalización mediática de la muerte de delincuentes en enfrentamientos con la policía" en A. Daroqui (comp.) "Muertes silenciadas: las eliminación de los 'delincuentes'. Una mirada sobre las prácticas y los discursos de los medios de comunicación, la policía y la justicia". Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Buenos Aires.
- CARDOSO de OLIVEIRA, L. (2004): "Honor, dignidad y reciprocidad", en Revista Cuadernos de Antropología Social nº 20, Buenos Aires.
- CASTEL, R. (2004): "La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?". Ediciones Manantial. Buenos Aires.
- CELS (2010): "Derechos Humanos en Argentina. Informe 2010". Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires.
- (2009): "Derechos Humanos en Argentina. Informe 2009". Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires
- (2005): "Derechos Humanos en Argentina, Informe 2005". Siglo XXI editores, Buenos Aires.
- (2004): "Derechos Humanos en Argentina: Informe 2004". Siglo XXI, Buenos Aires.
- (2003): "Derechos Humanos en Argentina, 2002-2003". Siglo XXI, Buenos Aires.
- (2002): "Derechos Humanos en Argentina, Informe Anual 2002, CELS, Siglo XXI de Argentina, Catálogos Editora, Buenos Aires.
- CHEVIGNY, P. (2002): "Definiendo el Rol de la Policía en América Latina" en J. E. Méndez, G. O' Donnell y P. S. Pinheiro (comps.) "La (In)Efectividad de la Ley y la Exclusión en América Latina". Paidós. Buenos Aires.
- COHEN, S. (2003): "Folk devils and moral panics". Routledge. Londres.
- CORTI, L. (1998): "Violencia policial, dimensión penal y normas. Una difícil determinación" en M. Sozzo (comp.) "Seguridad Urbana. Nuevos problemas, nuevas perspectivas. Pensar alternativas teóricas y políticas sobre la cuestión criminal". Centro de Publicaciones. Universidad Nacional del Litoral.
- COZZI, E. (2012): "Fisuras, tensiones y conflictos en el campo del gobierno de la seguridad. Las prácticas policiales de detención por averiguación de identidad y las

estrategias de reducción de violencia con jóvenes en la provincia de Santa Fe, Argentina” en Actas III Congreso Latinoamericano de Antropología “Antropologías en Movimiento, Ideas desde un sur contemporáneo”, Santiago de Chile.

- CUENCA, D. y P. SOKOL (2011): “La Policía de la provincia de Santa Fe”. En Ales, C. et. al. “Regulación y control del uso policial de la coerción y la fuerza en Argentina”. Ministerio de Seguridad de la Nación. Buenos Aires.

- DAGNINO, E. (2004): “Sociedad Civil, participação e cidadania: de que estamos falando?”, en D. Mato (coord.) “Políticas de Ciudadanía y Sociedad Civil en tiempos de globalización”. Caracas, Universidad Central de Venezuela.

- DAICH, D; PITA, M y SIRIMARCO, M (2007): “Configuración de territorios de violencia y control policial: corporalidades, emociones y relaciones sociales” en Rev. Cuadernos de Antropología Social n° 25, Sección Antropología Social, Fac. de Filosofía y Letras, UBA.

- DA MATTA, R. (2004) “El oficio de etnólogo o cómo tener “Anthropological Blues” en M. Boivin, A. Rosato y V. Arribas (comps.) “Constructores de otredad. Una introducción a la Antropología Social y Cultural”. Editorial Antropofagia. Buenos Aires.

(1979): ¿Você sabe con quem está falando? Um ensaio sobre a Distinção entre Indivíduo e Pessoa no Brasil”, en Carnavais, Malandros e Heróis. Zahar. Rio de Janeiro.

- DAROQUI, A. (comp.) (2009): “Muertes silenciadas: la eliminación de los ‘delincuentes’. Una mirada sobre las prácticas y los discursos de los medios de comunicación, la policía y la justicia”. Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Buenos Aires.

- DAS, V. y D. POOLE (2008): “El estado en sus márgenes. Etnografías comparadas”, en Revista “Cuadernos de Antropología Social” n° 27, Sección Antropología Social, Fac. de Filosofía y Letras, UBA.

- DE SOUSA SANTOS, B. (1999): “El Estado, el derecho y la cuestión urbana” en M. R. Neufeld y otros (comp.) “Antropología Social y Política. Hegemonía y poder: el mundo en movimiento”, Eudeba, Buenos Aires.

- DÍAZ POLANCO, H. (1999): “La antropología social en perspectiva”, en González Casanova (coord.) “Ciencias Sociales: algunos conceptos básicos”. Siglo XXI. México.

- DI MARCO, BRENER, LLOBET, MÉNDEZ (2005): “Democratización, Ciudadanía y Derechos Humanos. Teoría Y Práctica”. Baudino Ediciones. UNSAM. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Buenos Aires.

-EILBAUM, L.: (2009): “De prácticas de investigación y producción de pruebas. Haciendo y deshaciendo versiones, en la policía de la provincia de Buenos Aires”. Ponencia presentada en la Reunión de Antropología del Mercosur, Universidad de San Martín, Bs. As. Mimeo.

(2005): "La transformación de los hechos en los procesos judiciales: el caso de los "procedimientos policiales fraguados" en S. Tiscornia y M. Pita (editoras) "Derechos humanos, tribunales y policías en Argentina y Brasil. Estudios de antropología jurídica" Editorial Antropofagia. Buenos Aires.

(2000): "Feos, sucios y malos": el saber policial sobre los marginales", en Actas del VI Congreso Argentino de Antropología Social, Mar del Plata.

- ELBERT, C. A. (1998): "Ideología, corrupción y excesos policiales" en Rev. Policía y Sociedad Democrática. Pena y Estado. Editores del Puerto s.r.l. Buenos Aires.

- ELIAS, N. (1987): "El proceso de la civilización". Fondo de Cultura Económica. Madrid.

-EVANS- PRITCHARD, E. (1992): "Los Nuer". Editorial Anagrama, Barcelona.

- FERNANDEZ Y PATALLO, M.: (2009) "'Um fato, algumas verdades'. Análise da producao de verdade judicial no caso Carlos Gauna". Actas RAM 2009, UBA, Bs As.

(2008): "Familiares, jueces y policías en la ciudad de Rosario. Análisis del proceso de demanda de justicia de familiares de víctimas de violencia policial". Tesis de Licenciatura en Antropología. Universidad Nacional de Rosario. Mimeo.

- FIRTH, R. (1983): "We, The Tikopia. A sociological study of kinship in Primitive Polinesia", Stanford University Press, USA.

-FONT, E. (1999): "Transformación en el gobierno de la seguridad: análisis exploratorio de conceptos y tendencias. Su relevancia en Argentina" en M. Sozzo (comp.) "Seguridad urbana. Nuevos problemas, nuevas perspectivas". Centro de Publicaciones, UNL.

- FOUCAULT, M. (2006): "Seguridad, territorio, población", Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

(2003): "La verdad y las formas jurídicas". Editorial Gedisa. Bs. As.

(2000) "Defender la sociedad", Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

(1996): "Genealogía del racismo". Colección Caronte Ensayos. Buenos Aires.

(1990): "Tecnologías del yo". Paidós. Barcelona.

-FREDERIC, S. (2009a): "En torno a la vocación policial y el uso de la fuerza pública: identidad y profesionalización en la policía de la provincia de Buenos Aires", en Bohoslavsky, E., Caimari, L. y Schettini, C. (org.), "La policía en perspectiva histórica. Argentina y Brasil (del siglo XIX a la actualidad)", CD-Rom, Buenos Aires.

(2009b): "Comentario a 'La dinámica del delito-policía en los procesos de reforma policial'", en: G. Kessler (coord.): "Seguridad y ciudadanía. Nuevos paradigmas y políticas públicas". Edhasa. Buenos Aires.

(2008): "Los usos de la fuerza pública. Debates sobre militares y policías en las ciencias sociales de la democracia". UNGS, Biblioteca Nacional. Buenos Aires.

- FREDERIC, S. y M. SAIN (2008): "Profesionalización y Reforma Policial: concepciones sobre las prácticas de la policía de la provincia de Buenos Aires" En: Álvarez A. (comp.) "Estado, Democracia y Seguridad Ciudadana. Aportes para el debate". Programa PNUD.

- FREDERIC, S.; GALVANI, M.; GARRIGA ZUCAL, J. Y B. RENOLDI (2013): "De armas llevar. Estudios socioantropológicos sobre los quehaceres de policías y de las fuerzas de seguridad". Ediciones de Periodismo y comunicación. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.

- GABALDÓN, L. (2002): "Tendencias y respuestas hacia la violencia delictiva en Latinoamérica" en Roberto Briceño-León (comp.) "Violencia, sociedad y Justicia en América Latina", CLACSO. Buenos Aires.

- GALVANI, M. (2007): "La marca de la gorra: un análisis de la Policía Federal". Capital Intelectual, Buenos Aires.

- GANÓN, G. (2008): "¿La Mac Donalización del Sistema de Justicia Criminal? Nuevo Orden o Nuevo Derecho en la globalidad de la sociedad excluyente" en Revista Pensamiento Penal n° 60. Viedma, Río Negro.

(1999): "La Reforma de la Policía: Cambio Estructural u Organizacional? Apartamiento del enfoque ortodoxo para una lectura crítica de la subcultura policial que obstaculiza su democratización" en M. Sozzo (comp.) "Seguridad Urbana: Nuevos Problemas, Nuevos Enfoques", Editorial UNL, Santa Fe.

-GARCÍA CANCLINI, N. (1997): "Culturas urbanas de fin de siglo: la mirada antropológica", en Revista Internacional de Ciencias Sociales n° 153, Antropología, Temas y Perspectivas, UNESCO, n° 154.

-GARLAND, D. (2005): "La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea". Gedisa. Barcelona.

- GARRETÓN, M. (2006): "Sociedad Civil y Ciudadanía en la problemática latinoamericana actual", en I. Cheresky (comp.), "Ciudadanía, Sociedad Civil y Participación Política". Miño y Dávila Editores. Buenos Aires.

-GARRIGA ZUCAL, J. (2012): "Un té de Pirelli". Los sentidos de la violencia para la policía de la provincia de Buenos Aires" en Revista Question, vol. 1, n° 33. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP

(2010) “‘Se lo merecen’. Definiciones morales del uso de la fuerza física entre los miembros de la policía bonaerense” en Cuadernos de Antropología Social nº 32, Sección Antropología Social, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

(2008) “Violencia: un concepto difícil de asir”. Quintas jornadas de investigación en antropología social. Sección de Antropología Social, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Buenos Aires, 19, 20 y 21 de Noviembre de 2008.

- GARRIGA ZUCAL, J. y NOEL, G. (2010): "Notas para una definición antropológica de la violencia: un debate en curso". Revista Publicar en Antropología y en Ciencias Sociales, Nro. IX. Buenos Aires.

- GAYOL, S. y G. KESSLER (2002): “Violencias, delitos y justicias en la Argentina”. Ediciones Manantial. Universidad Nacional de General Sarmiento. Buenos Aires.

- GEERTZ, C. (1992): “La interpretación de las culturas”, Ed. Gedisa, Madrid.

- GOFFMAN, E. (2008): “Estigma. La identidad deteriorada”. Amorrortu editores. Buenos Aires.

- GÓMEZ, H. (1996): “Las noticias policiales en relación a la legitimación de prácticas y discursos institucionales. La “producción” de las noticias y la configuración de discursos hegemónicos” en LEVIS: Laboratório de Estudos das Violências, CFH, UFSC.

- GUBER, Rosana (1991): “El Salvaje Metropolitano”, Ed. Legasa, Buenos Aires.

- HAMMERSLEY, M. y P. ATKINSON (1994): “Etnografía. Métodos de investigación”. Ediciones Paidós, Barcelona.

-HERNÁNDEZ, T. (2002): “Des-cubriendo la violencia” en Roberto Briceño-León (comp.) “Violencia, sociedad y Justicia en América Latina”, CLACSO. Buenos Aires.

-ISLA, A. (2002): “Los malvivientes” en S. Gayol y G. Kessler (comp.) “Violencias, delitos y justicias en la Argentina”, Ediciones Manantial, UNGS, Buenos Aires.

-ISLA, A. y MIGUEZ, D. (coord.) (2003): “Heridas Urbanas. Violencia delictiva y transformaciones sociales en los noventa”. Editorial de las Ciencias, FLACSO, Buenos Aires.

- ITURRALDE, D. (2008): “Utilidades de la antropología jurídica en el campo de los derechos humanos: experiencias recientes” en Revista Pueblos y Fronteras digital, Número 5, Junio Noviembre de 2008. México.

- JELÍN, E. (2003) “Los derechos humanos y la memoria de la violencia política y la represión: la construcción de un campo nuevo en las ciencias sociales”. Cuadernos del IDES, Nº2, octubre, 2003, IDES, Buenos Aires.

(1996): “La construcción de la ciudadanía: entre la solidaridad y la responsabilidad” en Jelín, E. y E. Hershberg (coord.): “Construir la democracia:

derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina". Editorial Nueva Sociedad, Venezuela.

- KALMANOWIECKI, L. (1998): "Soldados, ou Missionários Domésticos? Ideologias e Autoconcepções da Polícia Argentina", en Rev "Estudos Históricos" vol. 12, n. 22. Rio de Janeiro.

- KAMINSKY, G. (2005): "Territorios inseguros, estigmas ciudadanos" en G. Kaminsky (dir.) "Tiempos inclementes. Culturas policiales y seguridad urbana". Ediciones de la Universidad Nacional de Lanús. Remedios de Escalada. Argentina.

- KANT DE LIMA, R. (2005): "Policía, justicia y sociedad en el Brasil: un abordaje comparativo de los modelos de administración de conflictos en el espacio público". En: S. Tiscornia y M.V. Pita. (eds.) "Derechos humanos, tribunales y policía en Argentina y Brasil". Antropofagia. Buenos Aires.

(2004): "Direitos Civis e Direitos Humanos", en Revista Sao Paulo em Perspectiva nº 18, San Pablo, Brasil.

-KESSLER, G. (2009): "El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito". Siglo Veintiuno editores. Buenos Aires.

- KROTZ, E. (2004) "Alteridad y pregunta antropológica" en M. Boivin, A. Rosato y V. Arribas (comps.) "Constructores de otredad. Una introducción a la Antropología Social y Cultural". Editorial Antropofagia. Buenos Aires.

- LACARRIEU, M. (2007): "La 'insostenible levedad' de lo urbano" en Revista Eure, vol. XXXIII, nº 99, Santiago de Chile.

-L'HEUILLET, H. (2011): "Genealogía de la policía" en G. Kaminsky y D. Galeano (coords.) "Mirada (de) uniforme: Historia y crítica de la razón policial". Editorial Teseo. Buenos Aires.

- LUKÁCS, G. (1966): "¿Narrar o describir?" en "Problemas del realismo", Fondo de Cultura Económica, México.

- MALINOWSKI, B. (1975): "Los argonautas del pacífico occidental", Ed. Península, Barcelona.

- MANERO, E. (2004): "Succincte introduction aux transformations stratégiques de l'après-guerre froide. L'Amérique latine dans le désordre global" *L'Ordinaire latino-américain* janvier-mars, N° 195, IPEALT Université de Toulouse II.

(2003): "Insécurité et violence dans l'Argentine néo-libérale. La gestion politique de la peur", *L'Ordinaire Latinoaméricain*, N° 190, IPEALT Université de Toulouse II.

- MANZANO, V. (2007), *'De La Matanza Obrera a Capital Nacional del Piquete': Etnografía de procesos políticos y cotidianos en contextos de transformación social*, Tesis de Doctorado, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Mimeo.



- MARRERO GUILLAMÓN, I. (2008): "La producción del espacio público. Fundamentos teóricos y metodológicos para una etnografía de lo urbano", en (Con)textos Revista D'Antropologia i Investigació Social. Barcelona.

- MARSHALL, T. H. y T. BOTTOMORE (2004): "Ciudadanía y clase social". Losada. Buenos Aires.

- MARTEAU, J. F. (2002): "Azul casi negro: la gestión policial en Buenos Aires. Notas para una política policial democrática" en Briceño-Leon, R. (comp.) "Violencia, Sociedad y Justicia en América Latina". CLACSO. Buenos Aires.

- MARTINEZ, J. (2002) "Las burocracias penales y su violencia naturalizada" en S. Gayol y G. Kessler (comp.) "Violencias, delitos y justicias en la Argentina". Ediciones Manantial, Universidad Nacional de General Sarmiento. Buenos Aires.

(1999) "Prácticas Violentas y Configuración de Verdades en el Sistema Penal de Argentina" en "Revista de Sociología e Política" nº 13, UFPR, Curitiba, Brasil.

-MARTÍNEZ, J. y EILBAUM, L. (1999): "La violencia policial en Argentina. Un debate sobre las visiones del problema y las políticas posibles", en Proyecto Policía y Sociedad Democrática. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Argentina), Viva Río-ISER (Brasil) y el Instituto de Defensa Legal (Perú), coordinados por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED, Chile).

- MARTINI, S. (2002): "Agendas policiales de los medios en la Argentina: la exclusión como un hecho natural" en Gayol, Sandra y Gabriel Kessler (comps.) "Violencias, delitos y justicias en la Argentina". Ediciones Manantial. Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires.

- MAUSS, M. (2009): "Ensayo sobre el Don. Forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas". Katz Editores. Buenos Aires.

- MELOTTO, M. (2012): "Orden cerrado y buenas costumbres. Un análisis del régimen disciplinario de convivencia de las Escuelas de formación básica de la Policía Federal Argentina" en Actas III Congreso Latinoamericano de Antropología "Antropologías en Movimiento, Ideas desde un sur contemporáneo", Santiago de Chile.

- MENÉNDEZ, E. (2010): "La parte negada de la cultura. Relativismo, diferencias y racismo". Prohistoria Ediciones. Rosario.

(2002): "El malestar actual de la antropología o de la casi imposibilidad de pensar lo ideológico". Revista de Antropología Social nº 11, CIESAS. México.

(1981): "Poder, estratificación y salud. Análisis de las condiciones sociales y económicas de la enfermedad en Yucatán". Ediciones de la Casa Chata, México.

- MISSE, M. (2005): "Sobre la construcción social del delito en Brasil. Esbozos de una interpretación" en S. Tiscornia y M. Pita (editoras) "Derechos humanos, tribunales y policías en Argentina y Brasil. Estudios de antropología jurídica" Editorial Antropofagia. Buenos Aires.
- MONJARDET, D. (2010): "Lo que hace la policía. Sociología de la fuerza pública". Prometeo Libros, Buenos Aires.
- MORGAN, L. (1993): "La Sociedad Antigua". Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México.
- MOTTO, C. (2009): "Enfoque metodológico" en A. Daroqui (comp.) "Muertes silenciadas: las eliminación de los 'delincuentes'. Una mirada sobre las prácticas y los discursos de los medios de comunicación, la policía y la justicia". Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Buenos Aires.
- MOUFFE, C. (1999): "El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical". Paidós. España.
- NARCISO, L. (2011): "Reflexiones a partir de la experiencia. Sociabilidad de los jóvenes en barrios periféricos de Santa Fe", en "Gestión de políticas públicas en seguridad". Edición Ministerio de Seguridad de la Nación/PNUD. Buenos Aires.
- NEOCLEUS, M. (2011): "Liberalismo, policía, seguridad" en G. Kaminsky y D. Galeano (coords.) "Mirada (de) uniforme: Historia y crítica de la razón policial". Editorial Teseo. Buenos Aires.
- NEUMAN, E. (1985): "Las víctimas del sistema penal". Ed. Marcos Lerner. Córdoba.
- NUN, J. (2009): "Palabras de apertura", en: G. Kessler (coord.) "Seguridad y ciudadanía. Nuevos paradigmas y políticas públicas". Edhasa. Buenos Aires.
- O' DONNELL, G. (1997): "¿Y a mí qué mierda me importa? Notas sobre sociabilidad y política en la Argentina y Brasil", en: "Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización". Paidós. Buenos Aires.
- (1990): "Apuntes para una teoría del Estado" en Oszlack, Oscar (comp.), "Teoría de la burocracia estatal: enfoques críticos", editorial Paidós, España.
- OLIVEIRA, A.; TISCORNIA, S. (1997): "Estructura y prácticas de las policías en la Argentina. Las redes de la ilegalidad en Seminario Control Democrático de los Organismos de Seguridad Interior en la República Argentina", Documentos de Trabajo, Centro de Estudios Legales y Sociales, Buenos Aires.
- PALMIERI, G. y F. WAGMAISTER (2009): "La dinámica de delito-policía en los procesos de reforma policial" En: G. Kessler (coord.) "Seguridad y ciudadanía. Nuevos paradigmas y políticas públicas", Edhasa, Buenos Aires.
- PALMIERI, G.; MARTÍNEZ, J.; SOZZO, M. y H. THOMAS (2001): "Mecanismos de Control Interno e Iniciativas de Reforma en las Institucionales Policiales Argentinas.

Los Casos de la Policía Federal Argentina, la Policía de la Provincia de Santa Fe y la Policía de la Provincia de Buenos Aires". En Fruhling, H y Candina, A (ed.) "Policía, Sociedad y Estado: Modernización y Reforma Policial en América del Sur". Centro de Estudios para el Desarrollo. Santiago de Chile.

- PAVARINI, M. (1988): "Control y dominación. Teorías criminológicas burguesas y proyecto hegemónico". Siglo Veintiuno Editores, México.

- PEGORARO, J. (2001): "Derecha Criminológica, Neoliberalismo y Política Penal" en Revista Delito y Sociedad Nº 14/15, Buenos Aires.

- PINHEIRO, P. (2002): "La efectividad de la ley y los desfavorecidos en América Latina", en Méndez, J.; G. O' Donnell y P. Pinheiro (comp.) "La (in)efectividad de la ley y la exclusión en América Latina". Paidós. Buenos Aires.

-PITA, M. V. (2010): "Formas de morir y formas de vivir: el activismo contra la violencia policial". Editores del puerto y CELS, Buenos Aires.

- POULANTZAS, N. (1987): "Las clases sociales en el capitalismo actual". Siglo Veintiuno editores, México d. f.

- RADCLIFFE-BROWN, A. R. (1949): "Prefacio" en Fortes y Evans-Pritchard "Sistemas políticos africanos", International African Institute by the Oxford University Press, Londres. Traducción de la cátedra de Antropología Sistemática I, Organización social y política, cátedra A, Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

(1986): "Estructura y función en la sociedad primitiva". Planeta Agostini. Barcelona.

-REGUILLO, Rossana (2008): "Sociabilidad, inseguridad y miedos. Una trilogía para pensar la ciudad contemporánea", en Rev. Alteridades, año 18, nº 36. México.

(2006): "Los miedos: sus laberintos, sus monstruos, sus conjuros. Una lectura socioantropológica", en Rev. Etnografías Contemporáneas, año 2. Universidad Nacional de San Martín.

- RICHES (1988): "El fenómeno de la violencia". Pirámide ediciones. España.

- ROCKWELL, E. (1980). "Historia y Antropología: los acercamientos posibles". El Colegio de San Luis, Universidad Pedagógica Nacional. México.

- SAIN, M. (2008). "El leviatán azul". Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires.

(2004): "Política, policía y delito. La red bonaerense". Capital Intelectual. Buenos Aires.

(2002a) Seguridad, democracia y reforma del sistema policial en la Argentina. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.

(2002b) "Política, policía y delito. La red bonaerense". Capital Intelectual. Buenos Aires.

- SCHEPER- HUGHES, N. (1997): "La muerte sin llanto. Violencia y vida cotidiana en Brasil" Editorial Ariel. Barcelona.
- SCOTT, J. (1992): "Experiencie" en J. Butler y J. Scott "Feminists Theorize the Political". Routledge (Trad. Gabriela Dalla Corte. Material de Circulación Interna Maestría Interdisciplinaria sobre la problemática del género. Seminario Mujer y Trabajo).
- SEGATO, R. (2007): "La Nación y sus Otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas de la Identidad". Prometeo libros. Buenos Aires.
- SIERRA, M. y V. CHENAUT (2002): "Los debates recientes y actuales en la Antropología Jurídica: las corrientes anglosajonas" en Krotz, Esteban (ed.) "Antropología Jurídica: perspectivas socioculturales en el estudio del derecho". Editorial Anthropos, Barcelona y Universidad Autónoma Metropolitana, México.
- SIGNORELLI, A. (1999): "La antropología urbana: recorridos teóricos" en Signorelli, A. "Antropología Urbana". Editorial Anthropos, México.
- SIRIMARCO, M. (2009): "De civil a policía. Una etnografía del proceso de incorporación a la institución policial". Editorial Teseo. Buenos Aires.
- SOZZO, M. (dir.) (2005): "Policía, violencia, democracia. Ensayos sociológicos". UNL, Santa Fe.
- SOZZO, M.; GONZÁLEZ, G. y A. MONTERO (2010), "¿Reformar la policía? Representaciones y opiniones de los policías en la Provincia de Santa Fe", en M. Sozzo (comp.) "Por una sociología crítica del control social. Ensayos en honor a Juan S. Pegoraro", Editores del Puerto. Buenos Aires.
- SOZZO, M.; GONZALEZ, G.; CORTI, L.; TAVELLA, R.; AIMAR, R; MONTERO, A.; TALEB, G., FERRECCIO, V. (2000): "¿Más allá de la disciplina policial? Transformaciones de los mecanismos de control interno de la actividad policial en la Provincia de Santa Fe?" en Revista Delito y Sociedad nº 14, año nº 9, Santa Fe, 2000.
- TARROW. S. (1997): "El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política". Alianza. Madrid.
- TAUSSIG, M. (1995): "Un gigante en convulsiones". Gedisa, Barcelona.
- TILLY, C. (2000): "Acción colectiva" en Apuntes de investigación del CECYP, año IV, nº 6, Buenos Aires.
- TISCORNIA, S. (2009): "Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales. El caso Walter Bulacio". Editores del Puerto, Buenos Aires.
- (2005): "Límites al poder policía. El activismo del derecho internacional de los derechos humanos y el caso Walter Bulacio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos" en S. Tiscornia y M. Pita (editoras) "Derechos humanos,

tribunales y policías en Argentina y Brasil. Estudios de antropología jurídica". Editorial Antropofagia. Buenos Aires.

(2000): "Violencia policial, derechos humanos y reformas policiales" en Rev. Delito y Sociedad nº 14, año 9, Santa Fe.

(1999): "Violencia policial en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Cuestiones metodológicas y análisis de datos" en M. Sozzo (comp.) "Seguridad urbana. Nuevos problemas, nuevas perspectivas" Centro de Publicaciones, UNL, 1999.

-TISCORNIA, S. (comp.) (2004) "Burocracias y violencia. Estudios de antropología jurídica". Editorial Antropofagia, Buenos Aires.

- TISCORNIA, S. y M. V. PITA (2005): "Derechos Humanos, tribunales y policías en Argentina y Brasil. Estudios de antropología jurídica". Editorial Antropofagia, Buenos Aires.

- TODOROV, T. (1996): "La conquista de América. El problema del otro". Siglo Veintiuno editores. México.

- TYLOR, E. (1977): "Cultura primitiva". Ayuso. Madrid.

- VALLESPER, A. (2002): "La Policía que supimos conseguir". Planeta. Buenos Aires.

- VASILACHIS de GIALDINO, I. (2005): "Mundo del trabajo/ Mundo de la vida" en 7º Congreso Nacional de estudios del trabajo, 10 al 12 de Agosto de 2005, ASET, Buenos Aires.

- UGOLINI, A. (2012): "La policía no es una fábrica: El tiempo del trabajo entre los policías de la Provincia de Buenos Aires". Editorial académica española.

(2011): "Transformaciones recientes de la formación policial en la provincia de Santa Fe" en C. Ales, et. al. "Regulación y control del uso policial de la coerción y la fuerza en Argentina". Ministerio de Seguridad de la Nación. Buenos Aires.

- WACQUANT, L. (2001): "Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio". Editorial Manantial, Buenos Aires.

(2000): "Las cárceles de la miseria", Ediciones Manantial, Buenos Aires.

- WEBER, M. (1984): "Economía y Sociedad". Fondo de Cultura Económica, México.

-WESTLEY, W. (1970): "Violence and the police: a sociological study of law, custom and morality". The MIT Press. Cambridge.

- WILLIS, P. (1985). "Notas sobre método" en Cuadernos de Formación nº 2, Red Latinoamericana de Investigaciones Cualitativas de la Realidad Escolar, Santiago, Chile.

- WOLF, E. (1993): "Europa y la gente sin historia". Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- WRIGHT MILLS, C. (1994): "La imaginación Sociológica". Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.

## Fuentes

- Consejo Económico y Social (ONU). 1989: “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, Ginebra, Suiza.
- LA JUSTICIA ES UN DERECHO. PADRES DEL DOLOR [en línea] <[http://www.enredando.org.ar/noticias\\_desarrollo.shtml?x=23826](http://www.enredando.org.ar/noticias_desarrollo.shtml?x=23826)>
- Ley Orgánica de Policía de la provincia de Santa Fe.
- Ley 12.333, promulgada en el 2004, de creación del Instituto de Seguridad Pública Provincia.
- Ley del Personal Policial nº 12.521.
- Plan de Acción 2010-2011. Ministerio de Seguridad. Secretaria de Seguridad Pública. Gobierno de Santa Fe.
- PROGRAMA DELITO y SOCIEDAD: (2008) “Experiencias, representaciones y opiniones de los policías de la Provincia de Santa Fe Primer Informe de la Encuesta Policial 2007”  
(s/r) “Violencia Policial en la Provincia de Santa Fe – 1998/2006. Informe General, Universidad Nacional del Litoral.
- Periódicos: La Capital, El Eslabón.

## Anexo I: Acrónimos

CRE: Comando Radioeléctrico.

DC: Diario de campo.

E: Entrevista.

ISEP: Instituto de Seguridad Pública.

LOP: Ley Orgánica de Policía.

O: Observación.

OP: Orden Público.

PD: Padres del Dolor.



## Anexo II: Registros de campo

### Diarios de campo:

D. C n° 1 – 18/10/2004: visita a carpa instalada frente a los Tribunales Provinciales de Rosario por parte de un grupo de madres de víctimas de “gatillo fácil”.

D. C. n° 2- 21/04/2010: registro de situaciones de campo derivadas de las visitas a tres comisarías, una de la zona sur, otra de la zona oeste de la ciudad y una última del centro.

D. C. n° 3- 26/04/2010: registro de situaciones derivadas de la realización de entrevistas y observaciones en una comisaría de la zona sur de la ciudad, cuyo rasgo distintivo es el gran número de homicidios que ocurren en su jurisdicción.

D. C. n° 4- 13/05/2010: visita a comisaría de la zona noroeste con frustrada cita prevista con el comisario. Notas sobre el vínculo con el público que acude a la guardia.

D. C. n° 5- 02/06/2010: registro de situaciones derivadas de la realización de entrevistas y observaciones en una comisaría de la zona sur de la ciudad.

D. C. n° 6- 13/08/2010: observación de operativo, con motivo de una charla que dictaba un dirigente político nacional que corría el riesgo de ser “escrachado”, montado por una seccional céntrica e invitados por su jefe.

D. C. n° 7- 20/08/2010: apuntes derivados de situaciones de campo surgidas paralelamente a la observación realizada en una comisaría de la zona sur.

D. C. n° 8- 21/08/2010: visita a distintas comisarías en donde no podemos encontrar a sus jefes. Apuntes sobre la gran concurrencia de público a las mismas.

D. C. n° 9- 27/08/2010: reconstrucción de visitas a comisarías de zona norte y noroeste.

D. C. n° 10- 29/08/2010: apuntes sobre denuncias realizadas por vecinos -a través de llamados telefónicos a radios locales- a la actividad de comisarías en donde estábamos haciendo trabajo de campo.

D. C. n° 11- 01/09/2010: notas tomadas en dos citas frustradas con jefes de una comisaría de la zona sudoeste y otra del noroeste. Ambas entrevistas no se frustraron por imprevistos propios de la actividad policial sino simplemente porque, según informaron los empleados de la guardia, los comisarios ya se habían retirado.

D. C. n° 12- 19/10/2010: apuntes sobre la visita a las instalaciones del 911 en la sede del Comando Radioeléctrico. Un año después esta sede es trasladada al edificio de la Gobernación en la ciudad de Rosario.

D. C. n° 13- 21/01/2011: apuntes sobre la visita a la sección de Estadística del C. R. E.

D. C. n° 14- 21/01/2011: notas sobre la visita al Casino de Oficiales del C. R. E.

D. C. n° 15- 01/02/2011: recorrido por distintas comisarías sin posibilidad de realizar entrevistas a raíz de que en ninguna de ellas se encontraban presentes los comisarios.

D. C. n° 16- 01/02/2011: desgrabación de entrevista a dos miembros del C. R. E -ambos de alrededor de 40 años y con antecedentes en el Ejército- que se negaron a ser grabados.

### **Entrevistas Grabadas:**

E. n° 1- 05/02/2009: primera entrevista a madre cuyo hijo menor de edad fue víctima de “gatillo fácil” en un barrio de la zona sudoeste de la ciudad.

E. n° 2- 11/02/2009: primera entrevista a la madre de una víctima de “gatillo fácil”, agrupada en la organización Padres del Dolor, cuyo hijo fue asesinado por un policía en un barrio de la zona noroeste de la ciudad.

E. n° 3- 25/09/2009: segunda entrevista a la segunda madre.

E. n° 4- 01/10/2009: segunda entrevista a la primera madre.

E. n° 5- 15/10/2009: tercera entrevista a la segunda madre.

E. n° 6- 23/04/2010: entrevista al jefe de una comisaría de la zona sur, oficial con antigüedad cercana al retiro.

E. n° 7- 28/04/2010: entrevista al jefe de una comisaría de la zona sur, un oficial de unos 40 años de edad, que aún no había alcanzado el grado de comisario pero que había debido hacerse cargo de la comisaría ante el corrimiento del jefe anterior. Se trata de una de las jurisdicciones con mayor índice de homicidios de la ciudad a la que hacemos referencia en DC n° 3.

E. n° 8- 04/05/2010: entrevista al jefe de una comisaría de la zona céntrica, oficial de 20 años de antigüedad y con trayectoria como jefe de distintas seccionales.

E. n° 9- 02/06/2010: entrevista con el subjefe de la misma comisaría de zona sur en donde ya habíamos entrevistado al jefe en la Entrevista n° 7, oficial con 15 años de antigüedad que había realizado su trayectoria laboral principalmente en Cuerpos.

E. n° 10- 18/06/2010: primera entrevista con el jefe del CRE, oficial de unos 50 años cuya trayectoria incluye tanto destinos de Cuerpos como de Orden Público. Con posterioridad a la finalización del trabajo de campo, pasa a cumplir funciones como Inspector de Zona.

E. n° 11- 19/06/2010: entrevista con empleado del CRE que nos relata el circuito institucional por el cual transita una denuncia recibida a través del 911 o un hecho procesado por alguna dotación de calle.

E. n° 12- 04/08/2010: entrevista a operador del CRE, un oficial con 20 años de antigüedad y trayectoria completa en Cuerpos y a telefonista del 911, una joven suboficial con menos de 5 años de antigüedad.

E. n° 13- 12/08/2010: primera entrevista a jefe de comisaría de la zona sudoeste, de 50 años y con trayectoria principalmente en comisarías barriales.

E. n° 14- 20/08/2010: entrevista a suboficial mujer que desempeña tareas como disponible en una comisaría de la zona noroeste de la ciudad. Desde que ingresó a la policía, hacía unos 8 años aproximadamente al momento de la entrevista, cumplió tareas similares.

E. n° 15- 26/08/2010: entrevista a joven oficial de comisaría de la zona noroeste que en principio nos fue presentado como el “secretario del comisario” pero que durante la entrevista nos dirá que cumple funciones como integrante de “la brigada”.

E. n° 16- 01/09/2010: entrevista a sumariante de comisaría de la zona noroeste, oficial de 15 años de antigüedad, y con trayectoria también en Cuerpos. Las entrevistas número 14, 15 y 16 pertenecen a personal de la misma comisaría. Una comisaría importante en tanto su jurisdicción abarca uno de los barrios populares más extensos y tradicionales de la ciudad.

E. n° 17- 08/09/2010: entrevista con sumariante de comisaría céntrica, con 10 años de antigüedad, de los cuales 9 cumplió funciones como sumariante.

E. n° 18- 13/09/2010: entrevista a dos agentes del CRE en el “casino de oficiales” ubicado en la sede del mismo. Los agentes se desempeñaban en dotaciones diferentes y tenían alrededor de 10 años de antigüedad.

E. n° 19- 22/09/2010: entrevista con el cabo 4° de una comisaría de la zona sur. Se trata de un suboficial a punto del retiro que desde hace años se limita a cumplir esta misma función.

E. n° 20- 25/09/2010: entrevista a sumariante de comisaría céntrica, oficial de menos de 40 años, que siempre había cumplido funciones en ese destino y que se definía a sí mismo como una persona con sólida formación en derecho.

E. n° 21- 03/11/2010: entrevista a dos empleadas de una comisaría céntrica que cumplían funciones en la oficina de Disponible. Las dos tienen más de 20 años de antigüedad en la policía aunque no siempre cumpliendo la misma función ya que, recién egresadas de la Escuela, también cumplieron funciones de calle.

E. n° 22- 11/11/2010: entrevista grupal con dos miembros del CRE, personal de calle perteneciente a la misma dotación, uno con 12 años de antigüedad y el otro con 5.

E. n° 23- 16/11/2010: entrevista individual con integrante del CRE con 10 años de antigüedad y trayectoria siempre en Cuerpos.

E. n° 24- 07/12/2010: entrevista con la Disponible de una comisaría de la zona sur. Suboficial con más de 10 años de antigüedad que resalta de su función el hecho de poder cumplir con horarios de oficina. Esta entrevista se realiza en la oficina de disponible (ubicada detrás del mostrador de atención al público y con salida al patio trasero de la comisaría) a pesar de que en el mismo momento había conflictos en el penal (ubicado en el patio trasero de la dependencia), situación que parecía no afectar el trabajo administrativo de la disponible.

E. n° 25- 09/12/2010: Entrevista con suboficial de comisaría de la zona sur que al momento de la entrevista cumplía funciones como cabo cuarto por más que el resto de sus compañeros no pudo identificar con precisión qué funciones cumplía él en la comisaría. En estos dos últimos casos, se trata de la misma comisaría a la que hacemos referencia en Diario de Campo n° 3 y Entrevistas n° 7 y 9.

E. n° 26- 16/12/2010: Entrevista al jefe de una comisaría del centro, un oficial de unos 60 años que concibe su puesto como un reconocimiento a su trayectoria en tanto entiende que se trata de la principal seccional de la provincia y una de las más importantes del país.

E. n° 27- 19/12/2010: entrevista a sumariante de comisaría de la zona sur, con 12 años de antigüedad en la policía.

E. n° 28- 12/01/2011: entrevista con empleada de la guardia de una comisaría de la zona sur recién egresada del Instituto de Seguridad Pública.

E. n° 29- 20/01/2011: entrevista con comisario de la zona noroeste, oficial a punto del retiro y con destino siempre en comisarías barriales. Se trata de la misma comisaría a la que hacemos referencia en Entrevista n° 16.

E. n° 30- 21/01/2011: entrevista al jefe de una comisaría de la zona sur, un oficial ya cercano al retiro. Se trata del jefe de la comisaría en donde habíamos entrevistado a un sumariante en Entrevista n° 27

E. n° 31- 26/01/2011: segunda entrevista al Jefe del C. R. E.

E. n° 32- 06/02/2011: entrevista con suboficial que cumplía funciones en destacamento de la zona sur. Se trata de un pequeño destacamento que tiene un solo personal por turno y que, por tanto, termina afectado a tareas administrativas en su interior. Paradójicamente se encuentra situado en un barrio muy conflictivo de la ciudad.

E. n° 33- 24/05/2011: segunda entrevista al jefe de una comisaría de la zona sudoeste, al que hacemos referencia en la Entrevista n° 13.

E. n° 34- 06/10/2011: entrevista a cabo cuarto de comisaría de la zona sur (misma Entrevistas 27 y 30) de la ciudad, suboficial con mucha antigüedad y muchos años de servicio en la misma comisaría.

### **Observaciones:**

O. n° 1- 09/08/2009: Observación de marcha en reclamo de justicia por un joven víctima de “gatillo fácil” en la zona oeste de la ciudad de Rosario.

O. n° 2- 01/10/2009: recorrido por las dos plazas de la ciudad en donde se recuerda a víctimas de “gatillo fácil”.

O. n° 3- 23/04/2010: Observación en comisarías de la zona sudoeste, oeste y norte.

O. n° 4- 28/04/ 2010: Observación en dos comisarías céntricas.

O. n° 5- 19/05/2010: Observación en comisaría de la zona sur.

O. n° 6- 23/06/2010: Observación en comisaría céntrica.

O. n° 7- 21/01/2011: Observación en comisaría de la zona sudoeste de la ciudad.

O. n° 8- 25/01/2011: Observación en comisaría del centro de la ciudad.

O. n° 9- 26/01/2011: Observación nocturna en comisaría de la zona céntrica.

O. n° 10- 27/01/2011: Observación de operativo de calle montada por una comisaría de la zona céntrica en coordinación con Tránsito de la Municipalidad de Rosario y la Agrupación Cuerpos.

O. n° 11- 28/01/2011: Observación en comisaría de la zona sur.

O. n° 12- 01/02/2011: Observación en dos comisarías de la zona sur, una de la zona norte y una céntrica.

O. n° 13- 05/02/2011: Observación en destacamento policial de la zona sur.

O. n° 14- 05/10/2011: Observación nocturna en una comisaría de la zona sudoeste.

O. n° 15- 11/10/2012: Observación en comisaría de la zona noroeste.

### Anexo III: poesía policial.

#### Oración a dios de un uniformado

Señor Dios, muchas veces me sentí abandonado por mis superiores, y atacado sin fundamentos y motivos por la gente, muchas veces, sentí deseos de no seguir, pero cuando veo por la calle a los niños desamparados, dejados sin importarles a los mayores ni a los padres su seguridad y futuro, me hace bullir la sangre y mi alma se enciende a punto de explotar.

Toda esa fuerza mi Señor, me hace seguir adelante y pedir un round más. Solamente nosotros quienes llevamos uniforme, sabemos qué dejamos de lado, por el Bien Común. Nos sacrificamos reventándonos con adicionales todos los días para poder llegar a fin de mes y no ceder a caer en las tentaciones.

Solo nosotros conocemos el terrible dolor que nos produce ver crecer a nuestros hijos en "forma horizontal", porque los vemos muchas veces, solo de noche cuando están durmiendo. Solamente nosotros sabemos y podemos absorber, para adentro, lo que nos produce mirar a los ojos de nuestros seres amados, cuando nos vamos de casa para cumplir con los servicios, tratando de entregar nuestra mejor sonrisa y brindarles un poco de tranquilidad.

Por todo esto mi Señor te pido que no me dejes claudicar y que mi rodilla sea vencida, que no dejes que pierda mi verdadero horizonte, "LA SONRISA Y FELICIDAD DE LOS NIÑOS NACIDOS Y POR NACER".

Si he de caer no tengo problemas, caeré como muchos de mis camaradas, pero será altivo, sin renunciar a la lucha contra las fuerzas del mal y con tu nombre en mis labios, mi Dios, la Bandera de mi Patria cubriéndome y mi testimonio será el legado a mis hijos.  
Gracias mi Señor por permitirme ser alguien con uniforme.-

-.-

#### ¿De qué están hechos los policías?

Un policía es una mezcla de lo que son todos los hombres

Mezcla de santo y pecador, de barro y divinidad

Menos de la mitad del uno por ciento de los policías

No hacen honor a su uniforme

Entre todos los hombres él es, a la vez, el más requerido y el más rechazado

Tiene que ser tan diplomático como para zanjar diferencias entre individuos

De tal modo que cada uno de ellos sienta que ha resultado favorecido

Pero si un policía es amable, es un picaflor

Si no lo es, es guaso

Tiene que saber hacer respiración artificial, detener hemorragias, entablillar fracturas

Y, sobre todo, ingeniárselas para que la víctima vuelva a casa sin renguear

O prepararse para recibir una demanda judicial

Debe conocer todas las armas, disparar en plena carrera y dar donde no dañe

Tiene que ser capaz de batirse con dos hombres, el doble de su talla y de la mitad de su edad, sin arruinar su uniforme y sin ser brutal

¿Usted le pega? Él es un cobarde

¿Si él le pega a usted? Él es un matón

Tiene que saber dónde se oculta todo el delito y no participar

Debe perseguir hasta el fin a bandas de vagos

Perder diez noches para echarle el guante a un testigo que sabe lo que pasó pero se niega a recordar

El policía debe ser un sacerdote, un asistente social, un diplomático, un muchacho de buenos puños y un gentleman

Y, por supuesto, tiene que ser un genio porque tiene que alimentar y vestir a la familia con el sueldo de un policía

(poema en afiche colgado en hall de una comisaría del macrocentro)

.-

Porque soy policía??

Porque he aprendido a mirar a las personas de otra manera...

Porque tengo un plus por responsable...

Porque soy masoquista, y me gusta que la gente me falte el respeto...

Porque me gusta desayunar cuando los demás comen, comer cuando cenan y cenar mientras duermen...

Porque cuando la gente disfruta en un partido de fútbol, nosotros estamos formados al sol con 20 kg. de equipo anti tumulto en nuestras espaldas 5 horas antes de que empiece el evento y 3 horas después de que termine...



Porque en un recital estamos parados 9 horas y nos pagan 4; porque la mayoría de los cánticos de ese recital son en nuestra contra; cuando la gente disfruta de las vacaciones en las sierras o en la costa, es cuando se intensifican los operativos de control de ruta, para protegerlos de ellos mismos, cosa que paradójicamente los irrita...

Porque puedo comer lo incomible y no me hará daño...

Porque necesitaba saber cuánto café puedo soportar, cuánto tiempo puedo aguantar sin comer, dormir, tomar agua, evacuar y orinar...

Porque me encanta que el único domingo del mes que tengo franco en compañía de los míos, los demás me hagan cargo de todas sus quejas, que los coimearon por pasarse una luz roja (claro, y en vez de denunciar ellos pusieron la plata...), o cuándo les puedo tramitar el pasaporte a él, la mujer, los cinco hijos, la tía y la abuela, acordándose una semana antes de viajar por un mes al exterior...

Porque nadie entenderá nunca en qué cuarto trabajas, rotativos de seis horas, y mucho menos podrás explicar que es el quinto móvil...

Porque es interesante ir de vacaciones cuando nadie más puede. Y es más interesante estar trabajando cuando todos los demás están de vacaciones...

Porque tus ojos brillarán de una forma diferente cuando veas a tus amigos y pienses: anoche vi su mujer con otro, o vi a su hijo drogándose, o a su hermana borracha en un auto con tres tipos...

Porque la sensación de sacar a alguien de un auto destrozado, o un ciclista de entre las ruedas de un camión, o un bebé de un tacho de basura, o rescatar a una mujer de un marido borracho que la golpea, o sentir que te disparan y no sabes de donde vienen las balas, tiene más adrenalina que el BUNGGE-JUMPING...

Porque he visto todas las películas policiales filmadas y sé que la realidad supera a toda ficción...

Porque frente a la víctima desesperada tuve que mentir y contener diciéndole que le das una solución, que los ahorros de toda la vida que le acaban de robar, se los vas a encontrar con una simple denuncia, o que el sistema judicial le va a devolver la honra a su hija violada...

Porque la gente me agradecerá ALGUNAS VECES, pero siempre me sentiré satisfecho, aunque esporádicamente alguien recordará nuestros nombres...

Porque la dependencia = comisaría, es mejor que un Big Brother, una aventura en África, una granja de famosos...

Porque me encanta cenar cuando veo amanecer...

Porque es todo un reto tratar de que tu compañero, que hace unos días salió de la escuela de policía, sepa cuándo hablar, y cuándo quedarse callado, en qué

momento sacar el arma y cuándo disparar o no, pero algo que él no sabe y que sí aprenderá al lado mío es que mi chaleco parará las balas que vayan dirigidas a él...

Porque la falta de recursos para ejercer mi profesión aumenta mi creatividad...

Porque quieres experimentar por ti mismo qué se siente al tener un móvil a cargo, con escaso mantenimiento, sin luces, cubiertas sin dibujo, sin seguro, a 120 km. por hora en una persecución, un arma en la cintura, y muchas veces tus problemas familiares y los de tu compañero...

Porque cuando te despedís de los tuyos para tomar servicio nunca sabrás si los volverás a ver...

Porque si te matan en un enfrentamiento armado la gran "preocupación administrativa institucional" será tratar de NO encuadrarlo "caído en cumplimiento del deber" para no darte las jerarquías "post mortem" y no indemnizar a tu familia...

Porque en las cientos de ceremonias de CAÍDOS a las que asistí en Chacarita nunca vi a los "organismos de D.D.H.H." acompañándonos (CELS, APDH, CORREPI, MADRES, ABUELAS)...

Porque para quienes creemos en un Ser Superior, tenemos el privilegio que EL ha podido guiar tus manos en algún momento difícil, verte directamente a los ojos cuando atendiste tu primer emergencia, donde no sabías que hacer o decir, tu primer parto, o apagamos incendios, o rescatamos personas de un río, o descolgamos suicidas...

Porque vi el milagro de la vida, o acompañé a alguien en sus últimos instantes antes de la muerte...

Porque la mejor paga no está en tu sueldo, sino en la esperanza de que algún día alguien te lo reconozca...

Porque no sabes lo que es tener vida social y... no importa, tu vida social está dentro de una dependencia donde conoces amigos diferentes en cada servicio y por qué no, al amor de tu vida quizás.... la dependencia...

Porque las horas que les deberás toda la vida a tu esposa e hijos y amigos no las recuperarás jamás...

Porque para ti los días buenos y malos han cambiado: un día bueno es cuando no mataron un policía, has podido hacer varias detenciones, mucha prevención, sin que te denuncien o salgas herido, vos o tu compañero...

PORQUE VALEMOS MUCHO MAS DE LO QUE PIENSAN Y HACEMOS MUCHO MAS DE LO QUE IMAGINAN.....

POR ESO ELEGIMOS EL CAMINO AZUL!!!!!!!!!!

POR TODO ESO Y MUCHO MAS SOY POLICÍA!!!!!!!!!!

## Anexo IV: lista de casos de violencia policial leta relevados

I  
 Nos matará el café,  
 nos matará la droga,  
 nos matará, tal vez,  
 un hombre bueno con pistola  
 (Kiko Veneno)

### 2002

- Rodrigo González.
- Nicolás Ayala.
- Héctor Verón.
- Guillermo Darío Peralta.
- Claudio Morales.
- Carlos Gauna.

### 2003

- Dante Ariel Rodríguez.
- Eusebio Miño.
- Rodolfo Monzón.
- Teófilo Manuel Flores.
- Diego Fernández.
- Juan José Machuca.
- Oscar Daposo.

### 2004

- Fabio Lunardelli.
- Juan Carlos Rueda.
- Cristian Damián Santillan.
- Cristian Manuel Chamorro.
- Emilio Gigena.
- Alberto Ramón Cano.
- Claudio Moreira.
- Ayelén Gómez.

### 2005

- Jorge Toledo.
- Diego Ansaldi.
- Luciano Grondona.
- Alberto Acuña.
- Elbio Chiara.
- Damián Cejas.
- Gonzalo Godoy.
- Gabriel López.

- Marcos Luna.

## 2006

- Marcelino Eduardo Leguizamón.
- Víctor Hugo Oviedo.
- Maximilian Jacinto Eber.
- Daniel Aguirre.
- Jorge Luis Graña.
- Jhonatan Fontana.
- Verónica Soledad Garcilazo.
- Miguel A. Peralta.
- Orlando Sebastián Vargas.
- Hernán Dip.

## 2007

- Sin datos.
- Sergio Montouto.
- Ezequiel Arce.
- Pablo Espíndola.
- Irma Vera.
- Milton Taborda.
- Amadeo Mansara.

## 2008

- Claudio Ogoima.
- Luciano Leiva.
- Leonardo Lazzaro.
- J. J. Moreira.
- Damián Melgarejo.
- Germán Ferreyra.
- Andrés Barón.

## 2009

- Francisco Vallejos.
- Walter Peña.
- David Domínguez.
- Claudio Bucci.
- Carlos Priotti.
- Damián Aguirre.
- Leonel González.

## 2010

- Ariel Ferreti.
- Ricky Villarreal.
- Daniel Rostro.
- Gonzalo Aguirre.
- Héctor Rivero.

- Germán Galván.
- Gustavo Gómez.
- Esteban Candía.
- Dionisio Paredes.